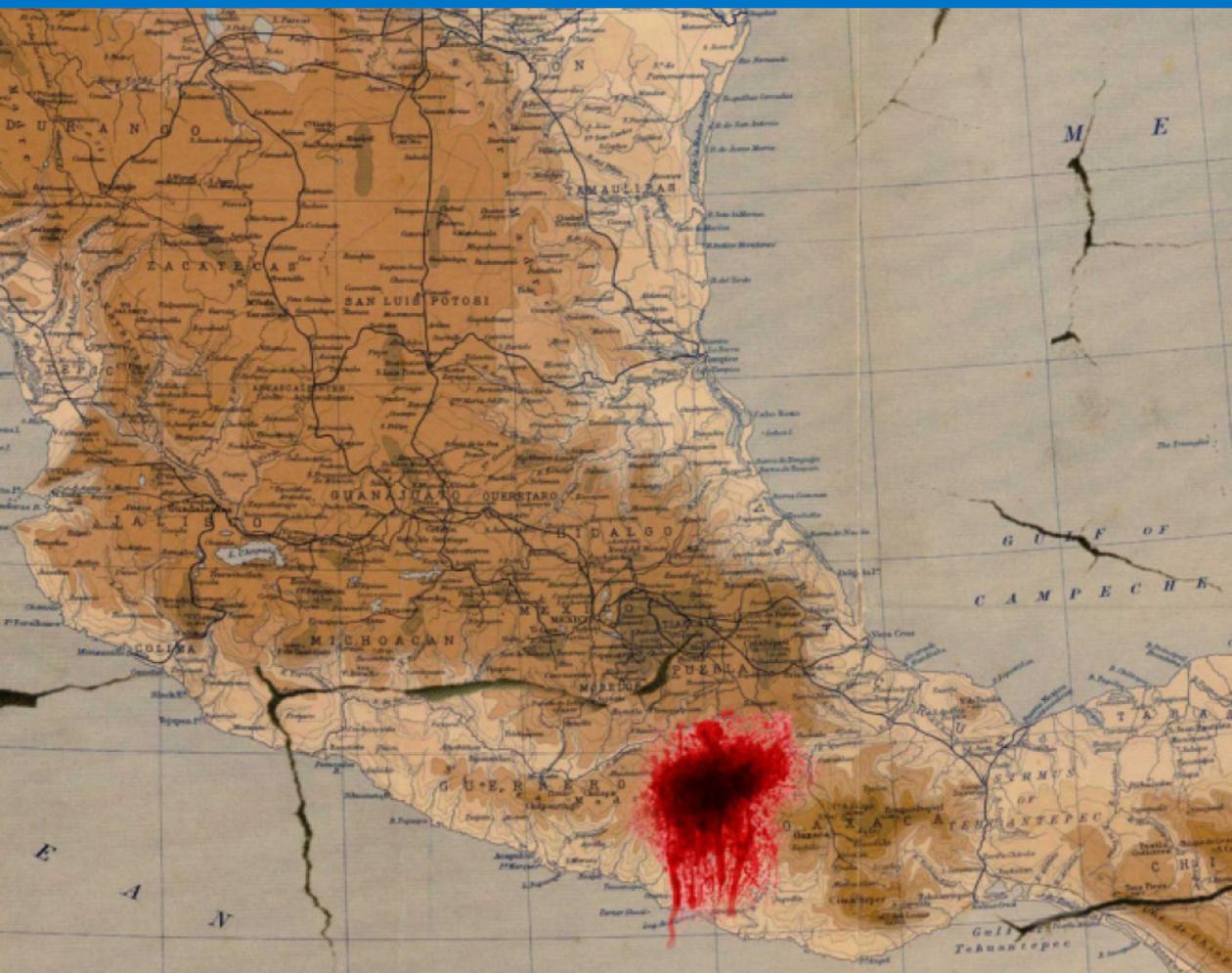


El sur-sureste mexicano: crisis y retos

Julio Moguel
(coordinador)



Armando Bartra • Rosario Cobo • Gisela Espinosa • Lorena Paz Paredes
Manuel Roberto Parra Vázquez • Héctor Manuel Robles Berlanga
Carlos San Juan Victoria

EL SUR-SURESTE MEXICANO:
CRISIS Y RETOS

Julio Moguel
(coordinador)

Armando Bartra • Rosario Cobo
Gisela Espinosa • Lorena Paz Paredes
Manuel Parra • Héctor Robles
Carlos San Juan

EL SUR-SURESTE MEXICANO: CRISIS Y RETOS

Centro de Estudios
CSOP
Sociales y de Opinión Pública



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
CÁMARA DE DIPUTADOS / LXII LEGISLATURA
JUAN PABLOS EDITOR

México, 2013

El sur-sureste mexicano : crisis y retos / Julio César Moguel Viveros, coordinador. -- México : Cámara de Diputados / LXII Legislatura-Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública : Juan Pablos Editor, 2013.

1a edición

243 p. : ilustraciones ; 16.5 x 23 cm.

ISBN: 978-607-7919-55-1

T. 1. Sociología T. 2. Ciencia Política

HJ803 S87

EL SUR-SURESTE MEXICANO: CRISIS Y RETOS

Julio Moguel (coordinador)

Armando Bartra, Rosario Cobo, Gisela Espinosa,

Lorena Paz Paredes, Manuel Parra, Héctor Robles, Carlos San Juan

Primera edición: noviembre de 2013

D.R. © Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Cámara de Diputados / LXII Legislatura

Av. Congreso de la Unión 66, Edificio I, primer piso,

Col. El Parque, México, D.F.

Tel. 5036-0000 ext. 55237

<cesop@congreso.gob.mx>, <<http://diputados.gob.mx/cesop>>

D.R. © Juan Pablos Editor, S.A.

2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19, Col. del Carmen,

Del. Coyoacán, México 04100, D.F.

<juanpabloseditor@gmail.com>

Diseño de portada: Marco Antonio Téllez

ISBN: 978-607-7919-55-1

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza

de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI)

Distribución: TintaRoja <www.tintaroja.com.mx>

ÍNDICE

Presentación <i>Rafael Aréstegui</i>	9
---	---

PRIMERA PARTE

De goznes y campos en el México de nuestros días: la comalización del sur-sureste <i>Julio Moguel</i>	15
---	----

Pensar el sur: ¿cómo reconstruirlo, como región civilizatoria o territorio de la pobreza extrema? <i>Carlos San Juan Victoria</i>	29
---	----

Los caminos posibles en la reconstrucción del sur-sureste <i>Manuel Roberto Parra Vázquez</i>	47
--	----

Los pequeños productores y la política pública <i>Héctor Manuel Robles Berlanga</i>	81
--	----

SEGUNDA PARTE

Sur profundo <i>Armando Bartra</i>	121
---------------------------------------	-----

El proyecto cafetalero de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero <i>Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo</i>	169
--	-----

Mujeres indígenas por una vida sin violencias
en la Costa Chica de Guerrero

Gisela Espinosa Damián

191

PRESENTACIÓN

México vive una circunstancia extrema de desigualdad generada por un modelo de desarrollo que ha polarizado y ha dividido en lugar de sumar y multiplicar.

Una de sus expresiones más dramáticas ha sido la descomposición y el rezago económico en el que hoy está sumergido el sur-sureste del país, espacio geográfico-social desde el que hace 200 años se construyeron los cimientos de nuestra nación.

Algunos actores o estudiosos de los temas económico-sociales del país han llegado a pensar que el sur-sureste ya no tiene futuro si conserva los parámetros o encuadres ideológicos, políticos, económicos y sociales que desde hace por lo menos dos siglos definen su identidad. Crean a pie juntillas que no queda más a los pobladores de estos vastos territorios que volverse peones o sirvientes de los grandes capitales nacionales y de nivel transnacional. Pero la mayor parte de esos pobladores, con la voluntad señera que los identifica, piensa de otra forma. Dicho de manera breve: piensa que otro tipo de desarrollo es posible; que la precariedad o la pobreza no tienen por qué ser males eternos, y que existen oportunidades importantes para desplegar un conjunto de acciones y de políticas públicas que se ciñan al concepto y a las posibilidades marcadas por la idea de lograr un desarrollo con equidad, integral y sustentable.

Estas oportunidades se expresan en la simple y llana constatación de que, parafraseando la consigna de un movimiento rural reciente, “El sur-sureste no aguanta más”. Pensemos esto no como una simple desgracia o como una fatalidad. Pensémoslo como una primera oportunidad, pues este espacio geográfico-social de nuestro país siempre ha sacado fuerzas de flaqueza y ha demostrado tener las capacidades que dan identidad en parte relevante al México profundo. Ello en primer lugar. En segundo, el hecho de que la crisis alimentaria que

vive nuestro país desde finales de la década anterior también pueda ser considerada, para el sur-sureste, como una oportunidad: *a)* porque allí se cuenta con las energías suficientes para remontar parte importante de los déficit productivos de alimentos, acaso en mayor medida que los ya gastados espacios considerados como de “alta rentabilidad”, y *b)* porque ha sido demostrado que las tierras que, por tecnología y métodos de cultivo, son ahora las más rentables, tienen una tendencia fuertemente decreciente en sus capacidades diferenciales de productividad. Por el contrario, las áreas de menor rango productivo que caracterizan a las del sur-sureste tienen, pasado cierto margen o niveles sostenidos de inversión, tendencias crecientes en sus capacidades diferenciales de productividad.

Otra clara oportunidad para invertir de manera prioritaria en el sur-sureste tiene que ver con el cumplimiento cabal de otro gran objetivo de los nuevos tiempos: abatir el hambre y la miseria. Porque el desarrollo productivo en el sur-sureste se liga muy directamente a dicho específico objetivo, en condiciones en que es justamente allí donde se dan las bases socio-regionales necesarias para que cualquier “cruzada contra el hambre” pueda ser desplegada de manera sostenida, articulada e integral.

El hecho de que se viva el inicio de una nueva administración federal, y de que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se ubique al sur-sureste como un campo geográfico-social importante de atención, debe ser considerado también como una importante oportunidad. La convocatoria general a conjuntar esfuerzos para sacar a México del bache en el que se encuentra debe ser aprovechada en esta perspectiva particular.

No es menos importante señalar que esta conjunción necesaria de esfuerzos dirigidos hacia el sur-sureste se liga ahora muy estrechamente a objetivos de seguridad nacional. Blindar regiones enteras de fuerte o de alta marginalidad con políticas públicas positivas, como la Montaña y Costa Chica, ya ha dejado de ser un simple ítem de política económica o de política social para convertirse en materia de soberanía y de estrategia de rearme de nuestra integridad nacional.

No creemos que suene exagerado, en el riel de esta perspectiva, adelantar la consigna de que hoy “Todo México es sur-sureste”.

Con esta y otras perspectivas de aproximación, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados ha abierto un trabajo sostenido del más alto nivel en torno a la problemática del sur-sureste. Este libro conforma parte de este esfuerzo, en un nivel de integración que presenta dos partes claramente distinguibles: la primera, formada por estudios y ponencias presentados por especialistas de diversas instituciones civiles, académicas, gubernamentales y de otro tipo en algunos foros recientemente organizados por el propio CESOP en torno a la problemática referida. La segunda se compone de estudios y aproximaciones que, habiendo sido escritos (la mayor parte publicados) en años anteriores, han sido revisados y presentados aquí bajo nuevas versiones con el fin de enriquecer la discusión actual en torno a algunos de los tópicos más relevantes sobre el tema.

Los ensayos de Julio Moguel, Carlos San Juan Victoria y Manuel Parra fueron presentados en versiones y preliminares en el encuentro “La reconstrucción del Sur-Sureste: desarrollo regional y combate a la pobreza”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y realizado el 9 de octubre de 2013 en el Hotel Emporio de Acapulco.

El trabajo de Héctor Robles Berlanga, habiendo sido conocido por nosotros en los días que siguieron al desastre provocado por los meteoros *Manuel e Ingrid*, fue requerido al autor para su divulgación y publicación en estas páginas, en consideración a la importancia que tiene para iluminar determinados tópicos de la condición estructural del sur-sureste.

Los ensayos de Armando Bartra, Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo constituyen versiones de trabajos ya publicados de ediciones

agotadas hace tiempo. Se inscriben en este libro para dar cuenta o para recordar procesos organizativos o historias de inimitable valor demostrativo o ejemplar de cara a los procesos reconstructivos que hoy se viven en Guerrero.¹

El trabajo de Gisela Espinosa, inédito hasta ahora, fue requerido a su autora para esta publicación dado su enorme valor analítico y documental.

A todos ellos damos aquí nuestro más profundo y sincero agradecimiento.

Rafael Aréstegui Ruiz
Director del Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública

¹ Armando Bartra, “Sur profundo”, en Armando Bartra (comp.), *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero*, México, Ediciones Problemas de México, Era, 2000; Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo, “El proyecto cafetalero de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero”, en Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández Navarro (coords.), *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, México, Siglo XXI, 1992.

PRIMERA PARTE

DE GOZNES Y CAMPOS EN EL MÉXICO DE NUESTROS DÍAS:
LA COMALIZACIÓN DEL SUR-SURESTE

Julio Moguel

1

En la medianía del siglo pasado muchos creyeron que la comalización del agro mexicano era propia de la fantasía literaria de un excéntrico escritor de cuentos y novelas, pero ajena en definitiva a lo que el campo proyectaba en el *boom* ya comandado entonces por el sector industrial. Aunque acaso quedaba el recurso de pensar que ese proceso degradativo de las realidades rurales mexicanas era cosa del pasado, como parte decisiva a recordar de un ciclo rancio y caciquil ya superado por la mano maestra de la siempre echada hacia delante historia nacional.

Hoy la comalización del campo mexicano es ya —casi— una llana realidad, mas no por el peso o la fuerza del señor de los señores de la mítica Comala sino por los efectos devastadores generados por el dominio del capital financiero nacional e internacional; factor que “promueve estancamiento, desempleo y desigualdad”, y que también “intensifica la destrucción ambiental [pues] el medio ambiente es tratado como un activo financiero”.¹ Esa realidad, que se expresa en muy distintos puntos de la geografía nacional, tiene en el sur-sureste su presencia más extensa, más plena, más compacta.

Hoy podemos decir, parafraseando a Hamlet, que los encuadres productivos del país se “han salido de sus goznes”,² en el sentido de que todos los procesos conocidos de autorregulación del capital —los marcantes del ciclo económico, con sus alzas y bajas— han sido dislocados por el fenómeno del dominio financiero en su nuevo impulso

¹ Alejandro Nadal, “Capital financiero: ese amo estúpido”, en *La Jornada*, 19 de junio de 2013.

² Dice Shakespeare (Hamlet): “El Tiempo se ha salido de sus goznes...”.

de bajezas, robo, desperdicio, especulación. Ha quedado así sobredeterminado el espacio económico-social en el que estamos obligados a participar, con derivaciones de hambre sin remedios y complejos procesos degradantes frente a los que el actual “modelo económico de desarrollo” nada o poco tiene que dar para sanar. Los encadenamientos con las crisis de otros niveles y raigambres prácticamente obligan a que, en el encuadre neoliberal, sólo puedan ofrecerse nada y demandas de perdón, descapitalizando a pulso para tener algo en la mano a modo y gusto de los verdaderamente grandes monarcas del gran capital nacional e internacional.

El dislocamiento o los dislocamientos del sistema reproductivo nacional son de tal naturaleza que los nuevos formatos de intervención estatal se ajustan a esa línea de desmoronamiento o de destrucción de capital efectivo —productivo— propio de las actuales modalidades de reproducción, de tal forma que ya no podemos decir que una “mayor” o “menor” intervención estatal establece la diferencia sustantiva entre lo que pasa y lo que debería de pasar. La actual mayor intervención estatal es en México otra palanca del pujante proceso de financiarización,³ en una definida estrategia por convertir a nuestra economía y sociedad en un subsistema menor de la gran máquina manejada por el implacable *big brother* internacional.

En cualquier otro espacio nacional esta combinación de factores del dislocamiento de goznes a los que nos hemos referido tendría un efecto dramático que cualquiera puede imaginar; y también por supuesto un efecto reactivo de carácter social parecido a los que se han registrado recientemente en algunos países de África del norte. Pero existen al menos dos poderosos elementos que impiden —han impedido— que la olla termine por estallar, a saber: la migración a Estados Unidos y el despliegue desinhibido del narcotráfico. Paradoja tremenda de nuestra vapuleada realidad: esos elementos desestructurantes de la realidad económica macro —factores concomitantes

³ La financiarización constituye un término que la economía ha adoptado en épocas recientes para referirse a los procesos —especulativos y sin rienda— de expansión y dominio del capital financiero bajo cualquiera de sus formas.

por lo demás de la mencionada dislocación de los goznes — alivian con cuantiosos recursos algunas de las penas de empleo y de hambre de nuestro ser nacional.

2

Podemos decir, entonces, que la crisis actual del campo mexicano ya no remite a un esquema relacionado simplemente con el “ciclo” o con el “momento del ciclo” económico en el que se mueve o desenvuelve el país. Y no debe ser medido más, en consecuencia, como una crisis típica de la acumulación del capital. El desastre del campo mexicano remite ya claramente a una crisis de reproductibilidad, sujeta a cambios drásticos de desacumulación y de destrucción de activos para su mejor ajuste a las nuevas condiciones de dominio y de expropiación predominantes en el plano mundial.

Vista dentro del proceso global que marcan las tendencias destructivas del modelo hegemónico de reproducción, la crisis del campo mexicano no es más que un eslabón de la Gran Crisis a la que algunos autores han calificado como una real y profunda “crisis de civilización”.⁴

La definición referida no es una simple fórmula retórica dirigida a engalanar discursos de ocasión. Los efectos de arrastre del pro-

⁴ Entre otros teóricos reconocidos, la conceptualización de “crisis civilizatoria” es utilizada por Armando Bartra, en “Diez aproximaciones a la Gran Crisis”, y por Víctor M. Toledo en “Diez tesis sobre la crisis de la modernidad” (*Rojo-amate* núm. 2, noviembre-diciembre de 2010). Nos dice Toledo sobre este punto: “Vivimos una *crisis de la civilización industrial* cuyo rasgo primordial es la de ser multidimensional, pues reúne en una sola trinidad a la crisis ecológica, a la crisis social y a la crisis individual, y dentro de cada una de éstas a toda una gama de (sub)dimensiones. Esto obliga a orquestar diferentes conocimientos y criterios dentro de un solo análisis, y a considerar sus ámbitos visibles e invisibles. Se equivocan quienes piensan que la crisis es solamente económica o tecnológica o ecológica. La crisis de civilización requiere nuevos paradigmas civilizatorios y no solamente de soluciones parciales o sectoriales. Buena parte de los marcos teóricos y de los modelos existentes en las ciencias sociales y políticas están hoy rebasados, incluidos los más críticos”.

ceso de desacumulación y de destrucción acelerada de activos del campo mexicano se muestra o manifiesta en prácticamente todos los niveles, provocando, por ejemplo, procesos de desutilización y de desvalorización de capacidades y saberes formativos de nivel universitario o escolar que tienden a poner en jaque a “la escuela” en su supuesta funcionalidad —proyectiva— de “activos para el desarrollo nacional” (en este caso, para el “sector rural” de la economía). Los flujos esperados del abajo-arriba en el escalamiento social propios de la escolarización —en el esquema tradicional— quedan sujetos a caprichosos movimientos que derivan en descomposición, de tal forma que el enganche de jóvenes con el espacio-chasis de recepción laboral queda sometido a engranajes de ingreso de monta marginal o de procedencia ilícita (léase, destacadamente ahora, del narcotráfico).⁵

Pero ese encadenamiento de la crisis del campo mexicano con la Gran Crisis tiene, por si faltara, sus propias y dramáticas secuencias de caída, muy determinadas por los coletazos de la propia crisis financiera internacional. Es el caso del conocido ciclo de la crisis reciente que, iniciado en su última fase larga por el lado energético con el aumento en los precios de los hidrocarburos en 2003, adquiere fuerza como desequilibrio alimentario desde 2006 para transitar a su fase explosiva como crisis alimentaria en 2008-2009, alcanzando desde este último año una dimensión de escala internacional.⁶

⁵ Conviene realizar un estudio específico de las actuales relaciones entre “la escuela” y el sector económico para determinar cuáles son las nuevas realidades de su engranaje y funcionalidad.

⁶ En la pluma de la economista Blanca Rubio, “La crisis del campo mexicano de nuestro nuevo ciclo”, ya en el nuevo milenio, “Germinó [primero] en el ámbito energético con el aumento en los precios del petróleo en 2003. Posteriormente emergió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en agosto de 2007. Devino en crisis alimentaria con el alza de los precios de los alimentos en mayo-junio de 2008, mientras que, en el mismo año estalló la burbuja financiera [...]. A fines de 2008 se convirtió en crisis productiva con la quiebra de las empresas automotrices en Estados Unidos. A principios de 2009 cobró una dimensión mundial al propagarse no sólo en los países desarrollados sino en los subdesarrollados, mientras que en 2010 empezó a golpear a los polos en disputa por la hegemonía, con la crisis del euro que afectó a los países más frágiles de

3

Los datos duros del asunto pueden ser vistos en un brochazo global: de 117 puntos calculados —por una nueva metodología de la FAO— para 2005 en el índice general de precios para los alimentos, se pasó a 200 puntos en 2008, bajó a 157 puntos en 2009, mas sólo para remontar hasta 228 puntos en 2011: “con la particularidad de que el índice de cereales pasó de 104 puntos en 2005 a 238 en 2008 y hasta 247 en 2011”.⁷

Los alcances macroeconómicos del desequilibrio muestran cuál parecería ser el punto de fusión:

la Unión Europea”. En “Crisis mundial y soberanía alimentaria en América Latina”, documento mimeo, s/f.

⁷ José Luis Calva (coord.), *Análisis estratégico para el desarrollo (Políticas agropecuarias, forestales y pesqueras)*, t. 9, México, Consejo Nacional de Universitarios/Juan Pablos Editor, 2012, p. 11. La fuente citada por Calva: FAO, Food Price Index, online. La referencia, con mayor detalle: “El índice de la FAO para los precios de los alimentos subió durante todo 2010, alcanzando los 236 puntos para febrero de 2011, 2.2 por ciento más que el mes anterior y el nivel más alto en términos reales y nominales respecto a enero de 1990, fecha en que se creó el índice. En ese mes, el precio de todos los alimentos había subido, excepto el azúcar; cereales y lácteos fueron los que mostraron mayor incremento. Análogamente, el índice de precios de los cereales alcanzó un promedio de 254 puntos, un incremento de 3.7 por ciento con respecto al mes anterior y el nivel más alto desde julio de 2008. Para ese mismo mes, el azúcar se ubicó en 428 puntos, abajo del mes anterior, pero 16 por ciento por arriba del año anterior. Los aceites y las grasas se situaron en 279 puntos, ligeramente por debajo del nivel máximo alcanzado en junio de 2008. Los productos lácteos tocaron los 230 puntos en febrero de 2011, cuatro por ciento más que el mes de enero, pero muy por debajo de su nivel máximo en noviembre de 2007. Los precios de la carne alcanzaron los 169 puntos en ese mismo mes, dos por ciento más que en enero pero con una tendencia al estancamiento. Por otro lado, el precio del maíz subió en nueve por ciento en febrero de 2011 y el precio del *yellow US* promedió 287 dólares por tonelada, nivel 77 por ciento arriba del año anterior y un poco más alto que el precio récord alcanzado en 2008. Por su parte, el trigo se incrementó en siete por ciento en el mismo periodo y el precio del *hard red Winter* estadounidense promedió 362 dólares por tonelada, es decir, 25 por ciento más que el año anterior, pero 25 por ciento aún por debajo de su récord de 2008”. Gerardo Reyes Guzmán, Beatriz Martínez Espinosa, Carlos Morales García, “Precios internacionales de los alimentos, demanda futura y crisis alimentaria”, en José Luis Calva (coord.), *op. cit.*, p. 17.

[...] las importaciones de alimentos —nos dice José Luis Calva, con cálculos hechos a partir de fuentes principales— se dispararon de 2755.7 millones de dólares anuales durante el trienio 1980-1982 a 21 490.7 millones de dólares anuales durante el trienio 2008-2010, y ascendieron a 27 066.9 millones de dólares en 2011.⁸

Una línea fina de explicación del vínculo orgánico intercrisis ha sido aportada por Blanca Rubio. Aquí su explicación:

Durante la primera fase de la crisis, en 2008, los precios de los bienes alimentarios se incrementaron como resultado de la migración de los fondos especulativos hacia las *commodities* agrícolas, ante el declive de las ganancias ocurrido en el ámbito hipotecario. El cultivo que comandó el alza de los precios fue el arroz, impulsado por la restricción de las exportaciones en India, Pakistán y Vietnam, como resultado de factores económicos y climatológicos. El precio del arroz alcanzó la cifra récord de 1 009.32 dólares por tonelada en mayo de 2008, cuando en el periodo anterior a la crisis había llegado a costar a lo sumo 338.06 dólares la tonelada en el pico de 1996 [...] Durante esta primera fase de la crisis, los precios de los alimentos básicos para el consumo ascendieron entre un 60 y un 70 por ciento [...], provocando que el número de personas con hambre en el mundo se incrementara en 100 millones.⁹

Lo que algunos analistas de inclinación neoliberal pudieran explicar como un simple desajuste temporal tiene determinantes estructurales que permiten pensar que la crisis de marras forma parte del ya mencionado proceso rural de comalización. Por factores tales como: a) la financiarización del sector alimentario nacional, con procesos especulativos que se extienden ya a todo lo largo y ancho de la ruta y que colocan a los productores campesinos, medianos y pequeños, en la más absoluta indefensión frente al avance y manipu-

⁸ José Luis Calva, “Políticas agropecuarias para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenido con equidad”, en J. L. Calva (coord.), *op. cit.*, pp. 69-70.

⁹ Blanca Rubio Vega, *op. cit.*

lación del poder financiero y de la empresa transnacional; *b*) la producción creciente de biocombustibles, dentro del cuadro proyectado de la crisis energética mundial;¹⁰ *c*) el desastre ambiental generado por los efectos del cambio climático, y *d*) el despliegue de políticas públicas dirigidas a generar supuestas ventajas comparativas que han echado por la borda toda idea relativa a la necesidad de un “crecimiento equilibrado” o a la generación de un modelo de desarrollo basado en la soberanía alimentaria del país.

4

Nos dice Alejandro Nadal que el capital financiero no tiene amigos en el trabajador ni en el capital industrial. Conviene citar las razones de dicha convicción:

[Las] operaciones [del capital financiero] no se rigen por la misma lógica. La variable que mejor explica esto es la tasa de interés. A partir del colapso del sistema de Bretton Woods, el mundo asistió a un proceso inexorable de incrementos en la tasa de interés, por lo menos hasta la década de los años noventa. Eso trajo como consecuencia un desempeño mediocre en materia de crecimiento y empleo a escala mundial. Esto se acompañó de un aumento brutal en la desigualdad. Si había que mantener algo de crecimiento, eso tenía que lograrse a través del endeudamiento y por medio de episodios de burbujas especulativas. Éste es el sistema que le regaló al mundo la crisis global que estalló en 2008. El endeudamiento mantuvo inversiones, empleos y consumidores que no hubieran existido sin la ayuda del sistema financiero [...] Si hoy las tasas de interés en los principales países capitalistas se mantienen deprimidas, eso se debe a las maniobras de emergencia apli-

¹⁰ En 2007 la demanda de maíz para la producción de etanol en Estados Unidos se incrementó de manera notable. De los 40 millones de toneladas que aumentó el consumo de maíz en ese país 30 millones fueron absorbidas para la producción de este biocombustible (citado por Blanca Rubio, *op. cit.*, con datos provenientes de la FAO).

cadavres por los bancos centrales en su afán de contrarrestar la crisis global. Pero el capital financiero sigue fijando las prioridades de la política macroeconómica, como puede observarse en la aplicación de la política de austeridad en Europa y Estados Unidos.¹¹

Pero si la impronta del capital financiero deja huella profunda en tejidos acaso todavía consistentes del capital industrial, su presencia en el campo — particularmente en el sur-sureste — adquiere efectos catastróficos, de marcada brutalidad. Su base: que los precios ya no se determinan por el juego simple de la oferta y la demanda y el peso que en ello imprimen las reservas, sino por factores extrasectoriales. Ello volatiliza activos y esperanzas, pues una sostenida caída de precios provocada por *dumping* o por “maniobras de banca” deja a los productores medianos y pequeños en condiciones de extrema indefensión.¹²

En la “mezcla” de activos y recursos generada por el capital financiero, ligada a sus capacidades específicas para ocultar su identidad — sin rostro, sin mano visible en el mover de la cuna — desaparece, en su accionar, cualquier prurito ético o humanista de operación, de tal forma que el desastre económico y social — ambiental, entre éstos — al que lleva sin ninguna reserva adquiere marca de naturalidad.¹³

El dominio del capital financiero en México — cabeza líder del proceso de neoliberalización — ha contado, decíamos, con una muy

¹¹ Alejandro Nadal, *op. cit.*

¹² La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) ha insistido desde hace tiempo en este específico punto, levantando demanda y exigencia de regulaciones que impidan la catástrofe económica y social que se proyecta. Recomendamos aquí el texto de Víctor Suárez Cadena, “Nueva revolución tecnológica con campesinos y sin transgénicos”, en <victor.suarez@anec.org.mx>.

¹³ Dicho a modo de burla o de parodia, el investigador Jorge Diego Sanjinés nos dice: “Los recursos provenientes de innombrables fuentes y manejos [manejados por el capital financiero] se limpian entonces ante el juicio de Dios, de tal forma que en las épocas modernas alguien puede ser el mejor de los cristianos y formar parte a la vez del Club Internacional de Personalidades por la Depredación y el Aniquilamiento del Planeta”. Jorge Diego Sanjinés, “Por los caminos de Dios. Ensayos sobre el capitalismo indómito”, documento mimeo, 2013.

destacada participación estatal, en una perspectiva en la que los políticos responsabilizados de allanar los caminos económicos respectivos han tenido un significativo éxito a notar. Y, cabe aquí decir, con Calva, que fue el campo en el que concentraron las bases de su fase experimental.

El primer y más significativo paso hacia el proceso de liberalización se dio con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. En una línea de intervención que decidió combinar

[...] la apertura comercial unilateral y abrupta con “una política de peso fuerte que [utilizó] el tipo de cambio como ancla antiinflacionario y [desembocó] en sobrevaluaciones sistemáticas de nuestra moneda” para generar —conjuntamente con la supresión del sistema de precios de garantía o soporte— un abrupto descenso de los precios reales de los productos agropecuarios en los que México [tenía] notorias desventajas competitivas (los cuales pasaron a regirse por los precios internacionales).¹⁴

No es éste el espacio en el que pudiéramos hacer un seguimiento histórico de lo que sigue en el camino a la (neo) liberalización. Pero hemos hablado del TLCAN porque marca el antes y el después de lo que sigue: de manera en extremo resumida, entre otros factores decisivos: la desestructuración del sistema crediticio propio al fomento del sector agrícola tradicional; la caída vertical de la inversión pública en fomento agropecuario; el dismantelamiento jurídico y político de la propiedad colectivo-ejidal.

Derivamos del mismo Calva¹⁵ los cálculos sustantivos:

¹⁴ José Luis Calva, “Políticas agropecuarias para la soberanía alimentaria...”, *op. cit.*, p. 70.

¹⁵ Hemos tomado de Calva los cálculos sustantivos, dado, por un lado, su probada honestidad y profesionalismo en el manejo de las cifras, pero también por el hecho de que contiene cálculos con la información más reciente.

De manera paralela al deterioro de la rentabilidad agrícola, se observó un severo estancamiento del capital de trabajo disponible en forma de crédito. Por una parte, el Banco Nacional de Crédito Rural, que en el trienio 1980-1982 habilitaba 6.6 millones de hectáreas por año, redujo el área habilitada a sólo 1.9 millones de hectáreas por año en el trienio 2000-2002, hasta ser desaparecido en marzo de 2004 por el gobierno de Vicente Fox. Por otra parte, el crédito otorgado por la banca comercial, que en el trienio 1980-1982 ascendía a 82 397 millones de pesos a precios constantes de 2010, se contrajo a 33 532.6 millones de pesos en el trienio 2008-2010, lo que representó una caída de 59.3 por ciento. En conjunto, el crédito canalizado al sector agropecuario por el sistema bancario (comercial y de desarrollo) cayó de 179 723.1 millones de pesos anuales durante el trienio 1980-1982 a 33 967.4 millones de pesos anuales en 2008-2010 (a precios de 2010 en ambos casos), de modo que se redujo 81.1 por ciento durante las casi tres décadas de experimentación neoliberal.

La reforma hacendaria delineada por el actual equipo gobernante en el nivel federal mostró finalmente el sentido referido del proyecto, cuando abrió las puertas a la formación de una nueva institución bancaria dirigida a beneficiar fundamentalmente a los grandes capitales del medio rural.¹⁶

5

Algunas líneas de política económica en curso no prometen nada bueno para el desarrollo del campo mexicano. Una de ellas, referi-

¹⁶ El *Proceso* del 15 de septiembre de 2013 registró la crítica que entonces enfilaron organizaciones del recientemente creado Frente Auténtico Campesino (FAC), quienes “se lanzaron contra la propuesta de crear una nueva institución bancaria que manejaría 200 mil millones de pesos y otorgaría créditos a los productores rurales. En los hechos, dijeron, sólo se beneficiaría a 3 por ciento de ellos, es decir, a las empresas agropecuarias [...] Con un interés máximo de 4.5 por ciento, el gobierno federal pretende dejar en manos de la banca privada más de 200 mil millones de pesos para financiar al campo, con lo cual sólo permitirá que las instituciones crediticias sigan operando como intermediarias, ya que entregarían esos recursos entre los productores a tasas de hasta 40 por ciento”.

da a la reforma financiera —publicitada en mayo pasado (2013) por el gobierno federal—, declaradamente orientada a generar una importante expansión crediticia —“a menor costo y con la mayor eficiencia”—, tiene en realidad el objetivo de “eliminar algunos obstáculos legales para hacer más expedito el proceso de ejecución sobre las garantías en caso de impago por parte de los deudores”.¹⁷

No es menor como noticia negativa para las expectativas rurales de menguar de alguna forma sus extremas carencias el saber que el programa mayor dirigido a paliar los graves problemas “del hambre” se ha precipitado hacia el vacío.¹⁸

La señalada estrategia de imponer lógicas de “ahorro” restrictivo para no dar alas a procesos de inflación que afectaran los encuadres macroeconómicos neoliberales, sumado al desbarajuste político de un gobierno que, como el de Peña Nieto, empezó a moverse sin rumbos positivos dentro de un resonante desorden, quedó finalmente ligada a la terrible noticia de que durante el segundo semestre de 2013 la desaceleración económica se profundizaría.¹⁹ Tema tremendo dentro de un arranque desolador, pues en el primer trimestre de 2013 el PIB creció a una tasa anual de 0.8 por ciento, sólo una sexta parte de lo que impactó durante el mismo ciclo trimestral de 2012 (de 4.9 por ciento).²⁰ Todo ello derivó en un recorte de las expectativas iniciales de crecimiento anual —de 2.9 a 2.5 por ciento en

¹⁷ Alejandro Nadal, “La reforma financiera en México”, en *La Jornada*, 15 de mayo de 2013.

¹⁸ “La Cruzada Nacional contra el Hambre, la inflada ‘estrategia social’ compuesta por 70 programas que se aplicarían en 400 municipios para combatir la pobreza extrema y alimentaria, se halla entrampada en la demagogia, el caos y la parálisis, motivos por los cuales se redujo en su etapa inicial a sólo 80 demarcaciones en 20 estados. La razón oficial: problemas técnicos y de coordinación. La verdadera: sólo concentrándose en un puñado de poblaciones el gobierno federal podrá ofrecer resultados para engrosar el primer informe del presidente Peña Nieto”. Marcela Turati, en *Proceso*, núm. 1911, 16 de junio de 2013.

¹⁹ *La Jornada*, nota de Roberto González Amador, 22 de junio de 2013, p. 22.

²⁰ *Idem*. “Mientras los niveles de desempleo y de ocupación en el sector informal se mantuvieron arriba de los registrados al inicio de la crisis hace cuatro años, consideraron miembros de la junta de gobierno del Banco de México”.

las cuentas recientes del Bank of America Merrill Lynch—, con importantes efectos negativos en los niveles de vida y en los procesos de desarrollo del país.

Un factor relevante —sintomático, sin duda— de este (nuevo) proceso de desaceleración se ubicó en el tremendo subejercicio del gobierno federal, destacadamente en compras relacionadas con el sector de la economía media, productiva y extendida, del denominado sector social de la economía.²¹

La aparente paradoja de tener líneas restrictivas en cuanto al gasto público y un proceso expansivo del crédito (“las importaciones de bienes de consumo y el crédito de la banca a empresas y personas siguió creciendo ‘de manera robusta’” en el lapso considerado) encuentra en el análisis precedente su explicación fundamental. El curso de enganche (“enganches”) al carro de una rápida —y más radical— (neo)liberalización se ubica en la obtención de rápidas ganancias conseguidas dentro de las enormes burbujas consumistas producto en gran medida de la especulación, con ajustes temporales que, como los realizados en la crisis inmobiliaria estadounidense, permitió tener en la masa de los nuevos deudores sin posibilidades de pago una fuente fresca de despatrimonialización.²²

El modelo en su conjunto entra entonces de nuevo en un ciclo de prueba decisivo, con tensiones que podrían llevar a una nueva etapa de grandes explosiones sociales, como en el norte de África o en el actual Brasil. En un proceso envolvente y multiforme capaz de combinar fórmulas armadas de resistencia en los espacios que ahora reivindican concreciones en el cuarto piso del poder estatal (ése que no se quiso reconocer en la Constitución, después de los Acuerdos de San Andrés) con movimientos reivindicativos de todo tipo en

²¹ “El 65 por ciento de las 233 secretarías, organismos y dependencias del gobierno federal que tienen programado un presupuesto para comprar bienes o contratar servicios a las pequeñas y medianas empresas del país (Pymes) se encuentran en ‘semáforo rojo’, debido a que presentan subejercicio”, en *La Jornada*, 22 de junio de 2013.

²² En la línea crítica que lo caracteriza, Jorge Diego Sanjinés define a éste como un proceso de “nueva (y desde ahora) acumulación originaria permanente del capital”, *op. cit.*

los medios sociales de abajo, del medio, e incluso de los tapancos que aún son hábitats posibles para algunos sectores del capital productivo nacional.

6

No parece haber duda sobre el tema: en el marco de la actual crisis el sur-sureste paga la mayor parte de los platos rotos, incluyendo en ellos los que destruyeron *Ingrid* y *Manuel*. Es pues, decíamos, el espacio “líder” en el proceso ya mencionado de comalización.

Los registros estadísticos y datos oficiales a la mano no muestran allí caídas productivas ni tropiezos recurrentes que pudieran ubicarse dentro del esquema de los “ciclos”, sino un profundo y labrado proceso de descapitalización y destrucción de activos que pareciera no tener fin.

Diversos análisis o aproximaciones referidos a las condiciones de vida y desarrollo de diferentes áreas del mencionado sur-sureste muestran hasta dónde se vive allí un tortuoso proceso de degradación.²³ Como en el caso de tres microrregiones del municipio chiapaneco de Oxchuc, con cifras que “nos muestran simultáneamente el minifundismo creciente, la deforestación, la pérdida de importancia de la producción agrícola, una estrategia creciente de venta de fuerza de trabajo, y una mayor dependencia de las transferencias gubernamentales [...]”. O en el caso de grupos minifundistas de Campeche “que no pueden competir con las importaciones de maíz y el aumento del costo de los insumos”, por lo que optan de manera masiva “por la vía asalariada como modo de vida”. O en el de los campesinos de Quintana Roo convertidos en “turisteros”; o en el de...

La enumeración puede ser interminable. Cada espacio campesino del sur-sureste del país cuenta con sus propias tragedias de “reconversión”.

²³ Véase en este mismo libro, el estudio de Manuel Parra.

Más aún en circunstancias como las impuestas por el terrible soplo huracanado de septiembre de 2013, cuyas consecuencias destructivas aún no es posible calcular.

PENSAR EL SUR:
¿CÓMO RECONSTRUIRLO, COMO REGIÓN CIVILIZATORIA
O TERRITORIO DE LA POBREZA EXTREMA?

Carlos San Juan Victoria

[...] pensar es un mecenazgo a favor de la vida futura.

Peter Sloterdijk

Estamos invitados a reflexionar sobre un asunto fundamental para el país: la reconstrucción del sur-sureste en clave de desarrollo y de combate a la pobreza. En esta comunicación sugiero que el punto de arranque es polémico, que hay un modo de desarrollo que “produce” fragilidad social y pobreza, pero que existen experiencias, pensamientos e instituciones que exploran desde hace décadas y a contracorriente otro paradigma centrado en la gente y sus territorios.

En torno a este asunto cabe fijar cuatro puntos.

En primer lugar indico que actualmente hay una convergencia de poder que al parecer se propone, ya veremos si lo logra, impulsar inversiones masivas en esta región y que se orientan por un paradigma de desarrollo que articula al crecer capitalista con la producción de más pobreza.

En segundo lugar planteo que ese modo de desarrollo afecta a la matriz histórica, social y cultural que permitió que el sur-sureste fuese cuna de civilizaciones y productora actual de civilización, anulando o minando posibilidades reales de reconstrucción “alternativa” con vías basadas en los corredores activos de producción mercantil que desarticulan tejidos sociales y naturales.

En tercer lugar nuestro cómo ya existe “otro posible” modo de desarrollar, en debate con el paradigma dominante.

Y cierro con una posibilidad en curso: reconociendo y apuntalando las fuerzas sociales, culturales y políticas capaces de negociar

y modular la tempestad que viene, con temas estratégicos para la construcción de una constelación plural y diversa (saberes, sujetos, instituciones) que pueda empujar un modo de reconstrucción que mantenga la gran tradición civilizatoria del sur-sureste.

EL HURACÁN Y LA TEMPESTAD

Los huracanes afectaron a las costas del Pacífico y de modo particular al sur y a sus franjas más expuestas al riesgo. Con ello se abrió una oportunidad de convergencia social e institucional para atender lo urgente y una necesaria radiografía con posibilidades para diagnosticar la profundidad del mal. ¿Se trata del capricho de una naturaleza desbocada aunque monitoreada, o de un golpe que deja ver sociedades afectadas por procesos históricos y actuales que las construyen con fragilidad y con graves riesgos?

Walter Benjamin, entre otros, decía que el “progreso” era una tempestad que transformaba todo dejando en su camino una estela de destrozos.¹ Y es que al parecer, antes, en su momento y a futuro, el huracán fue precedido y se va a acompañar por la tempestad del progreso.

El compromiso 67 del Pacto por México lo expresa así: “2.9. Aplicar una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste”.

Según el texto, los estados del sur-sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo

¹ “Hay un cuadro de Klee que se llama *Ángelus Novus*. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ése es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. Pero desde el Paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso”. Tesis IX de *El concepto de la historia*, en Michael Löwy. Walter Benjamin, *Aviso de incendio*, México, FCE, 2003, pp. 100-101.

humano; por ello es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global. Lo que conlleva, en la visión del compromiso, a la puesta en marcha de políticas dentro del marco de la *Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste*.

Esta estrategia incluirá diversas acciones como la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sur-sureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión (Compromiso 67).²

Llama la atención, primero, que esta formulación se haga bajo el molde de las que se acostumbra en los espacios de decisión al más alto nivel en el país. Con una “construcción de imagen” donde la región sur-sureste aparece como el espacio del rezago y la carencia. Por ello resulta enigmático el interés de la cúpula empresarial, particularmente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que planteó, en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, y como noveno punto de sus diez prioridades hacia el Pacto: un “Plan Integral de Desarrollo e Inversiones para la Región Sur-Sureste.” ¿Invertiría la Iniciativa Privada en los espacios del rezago y la pobreza?; ¿hay acaso una mutación ética donde se transita del Teletón hacia procesos que permitan compartir los recursos de la riqueza acumulada?

En segundo lugar, y para acentuar el enigma, el gobierno federal anunció una inversión sexenal extraordinaria orientada hacia la infraestructura de la región sur-sureste, de 80 mil millones de pesos de su “Plan de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018”, para 40 proyectos de infraestructura carre-

² *Pacto por México, Acuerdos*. Presidencia de la República, p. 13, en <<http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf>>, consultado el lunes 7 de octubre de 2013.

tera, aeroportuaria, portuaria y de ferrocarriles. Parecería, con esas dimensiones de bolsas de recursos anunciadas, y con la locomotora exitosa de las inversiones privadas y públicas asociadas, que estaríamos hablando de un real y efectivo “combate a la pobreza”.

En la construcción semiótica (de sentido) del desarrollo, éste siempre va acompañado de una promesa de inclusión. A lo largo del siglo XX fueron dosis mínimas pero ciertas de justicia social erizadas muchas veces de corporativismo, y desde el sexenio de Salinas a la fecha se acompaña del combate a la pobreza. En ese momento, el salinista, fundacional de lo que ahora se vive, se creó un discurso de urgencia para combatir la pobreza, articulado a la privatización de los recursos públicos, a la expansión empresarial en medios de propiedad social y al adelgazamiento del Estado obeso y “corrupto”. Y todo ello en la idea de que se generarían recursos y se destrabarían capacidades para tal propósito. Como sabemos, se engrosaron riquezas de grupos oligárquicos, de poderes globales y se incrementó la pobreza. Ahora, la muy esperada y promovida gran oleada global y nacional de inversiones se enmarca en el fin justiciero de la prioridad de integración de estas regiones “al desarrollo”.

Pero a esa “construcción de la imagen” del sur-sureste le hacen falta algunos datos, precisamente los que describen una cornucopia peculiar de mar y tierra. En el mar son 1 338.14 kilómetros de litoral en el Pacífico, y 2 600 en el Golfo y mar Caribe, con recursos turísticos, pesqueros y energéticos. En tierra se trata de nueve estados de la federación (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán) que ocupan en sus jurisdicciones una extensión de 54 568 km², lo que constituye aproximadamente 27.5 por ciento del territorio mexicano, donde vive una población de 31 752 532 y 74 por ciento de la población indígena del país.³ Ahí se concentra más de 70 por ciento de la biodiversidad de América Septentrional, existen ecosistemas ricos y variados como

³ Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste, en <http://www.sursureste.org/es/FIDESUR/Informacion_Region_Sur_Sureste>, consultado el martes 8 de octubre de 2013.

selva tropical y de montaña, bosque mesófilo, humedales y manglares.⁴ Semarnat registra 24 mil especies de plantas vasculares, de las cuales 20 por ciento son endémicas; más de 500 especies de mamíferos; casi 1 200 especies de aves; más de 850 mil hectáreas de manglares y más de 15 millones de hectáreas de bosques.⁵

Cuenta con un recurso estratégico vital: la mayor concentración de agua, sea como afluentes, precipitación o acuíferos. La energía disponible en el país brota del sur. Los grandes desarrollos hidroeléctricos del país (Angostura, Chicoasén, Mal Paso) se encuentran localizados en el sur-sureste, aunque hasta ahora ello no se ha traducido en una mayor disponibilidad del fluido eléctrico para la región o de tarifas bajas. En las estructuras de la cadena plegada y cabalgada de Chiapas-Reforma-Akal, y en las cuencas del sureste, se ubica 89 por ciento de las reservas probadas de petróleo crudo equivalente y 92 por ciento de la producción total de petróleo crudo equivalente del país.

Para el año 2012 Pemex informó lo siguiente:

2012 fue un año muy exitoso en exploración, se realizaron importantes descubrimientos en las cuencas del sureste y aguas profundas del Golfo de México, corroborando el gran potencial de explotación con el que se cuenta en estas regiones. Como resultado, la tasa de restitución de reservas probadas fue por segundo año consecutivo mayor al 100 por ciento.⁶

Recursos maderables, franjas de suelos propicios a la explotación intensiva de productos mercantiles, reservas importantes de yacimientos minerales: todo ello completa esa cornucopia del sur-sureste, ya duramente afectada en sus sistemas humanos y ecológicos

⁴ <<http://www.fao.org/docrep/006/j0606s/j0606s02.htm>>, consultado el lunes 7 de octubre de 2013.

⁵ <http://www.semarnat.gob.mx/temas/internacional/fronterasur/Paginas/DR_AnexoL.aspx>, consultado el lunes 7 de octubre de 2013.

⁶ Informe Anual 2012, Pemex, en <http://www.ri.pemex.com/files/content/2_Lineas%20de%20negocio%20IA12.pdf>.

por varias manchas del progreso encarnado en ciudades, explotación petrolera, en hidroeléctricas, ganadería y explotación maderera.

El supuesto espacio del rezago y la carencia, esa construcción imaginaria y legitimadora que sustenta a la gran oleada de inversiones, se fractura. La riqueza va, como siempre, tras la riqueza. Antes y después del huracán espera, atenta, la tempestad del progreso.

LA BARBARIE EXTRACTIVA EN TERRITORIOS DE CIVILIZACIÓN

¿El tiempo se repite? Entre 1880-1910 México experimentó por vez primera a la locomotora moderna del progreso. Coincidieron inversiones estadounidenses, inglesas y alemanas con gasto público, concesiones y apoyos fiscales, y grupos de poder regionales y de la ciudad de México para impulsar un ciclo expansivo de crecimiento capitalista en las vertientes más modernas de la época. Plantaciones agroexportadoras, minerales estratégicos para el momento, el petróleo, crearon un “modelo extractivo” donde el gobierno impulsaba infraestructuras como la de los ferrocarriles.⁷ Ya en la segunda década del siglo XXI la experiencia de un nuevo PRI vuelto gobierno se propone superar los fracasos de doce años panistas para echar a andar, otra vez, esa fuerza expansiva de inversiones asociadas, públicas y privadas, regionales y globales. En sincronía virtuosa pero no exenta de riesgos se articulan garantías jurídicas, la expectativa de inversiones globales en minería, las energías estratégicas, las agroexportaciones, los recursos maderables, suelos para transgénicos y corredores turísticos, el agua; paquetes de concesiones, gasto público y facilidades fiscales. ¿Pero no es acaso esa palanca de las inversiones imprescindible para un salto de crecimiento? Sin duda, el asunto es la naturaleza de ese salto. Los 800 mil millones de pesos

⁷ “De 1884 a 1911, la inversión extranjera se incrementó por un múltiplo de treinta”, en Juan Carlos Moreno-Bird y Jaime Ros Bosch, *Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana, una perspectiva histórica*, México, FCE, 2010, p. 84.

se deben convertir en 17 carreteras, cinco autopistas, nueve libramientos, un tren de alta velocidad, tres puertos, cuatro terminales especializadas y tres modernizaciones en aeropuertos. Una manía colonizadora de siglos: pasar rápido por las regiones que contienen esas riquezas, tomarlas y llevarlas a otro lado. Una red de accesos, extracciones, almacenamientos y traslados en la lógica de dominio global, rápido y a bajo costo. Y dirigido hacia un no-sur, hacia el norte mexicano y continental. En esa lógica el problema no es aumentar las redes de comunicación interregionales que faciliten producciones e intercambios locales y globales. Lo esencial es crear redes rápidas y de bajo costo para acceder y extraer.

[...] mientras el costo de transportar un contenedor de 20 pies (TEU) de Chile a Los Ángeles es de 1 300 dólares recorriendo una distancia aproximada de poco más de nueve mil kilómetros, el costo de transportar un contenedor similar de la ciudad de Tuxtepec [Oaxaca] a Los Ángeles es de cinco mil dólares, recorriendo una distancia de apenas tres mil kilómetros. Es decir, el costo de transporte por tonelada es aproximadamente de 65 dólares entre Chile y Los Ángeles, mientras que asciende a 250 dólares entre Tuxtepec, Oaxaca y Los Ángeles ⁸

El “modelo extractivo” renace de su pasado porfirista. Se despliega como infraestructuras tecnológicamente avanzadas para cumplir una vieja rutina, acceder y sacar la riqueza potencial y real del sureste, ya bosquejada y frustrada en el Plan Puebla-Panamá del periodo foxista.

No se trata de propiciar e impulsar la producción soberana de alimentos; tampoco las producciones mercantiles de escalas locales y globales, sino las de la gran concentración de poder, tecnologías y recursos del capitalismo en serio. Y con ello se trazan dos grandes circuitos que se alimentarán de esos traslados: el circuito global de grandes conglomerados financiero-industriales y el circuito del norte y el centro-occidente desarrollado mexicano. El primero sugiere

⁸ Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2012.

que el combate mexicano por trazar una senda soberana de desarrollo centrado en sus prioridades internas se deshace en los flujos globales y en los requerimientos geopolíticos y de seguridad energética de la potencia estadounidense. El segundo, que las inercias de “colonización interna” se fortalecen, donde el sur-sureste es condenado a seguir siendo el venero de población utilizable a bajo costo, el surtidor de energía, agua y de materias primas estratégicas, los territorios de la biodiversidad por fin abiertos y a la mano. Un doble proceso de recolonización, global y regional, bajo la fachada de rescate del rezago y la pobreza.

Como ya ocurrió en otros momentos expansivos de este “desarrollo” en los siglos XIX y XX, las redes extractivas se entretajan sobre territorios “ocupados” previamente por la experiencia humana. A esta lógica de desarrollo no le interesa provocar intercambios y mestizajes con esas ocupaciones previas, sino más bien desvalorizarlas como carencia y pobreza, así la voluntad de poder que las empuja pueda reconfigurar territorios enteros. Se trata de una operación con dos movimientos simultáneos. Hay una “desterritorialización” de las ocupaciones previas y, a la vez, una reorganización de los hombres desarraigados y los espacios que quedan; sólo que ahora en clave de uso intenso para los fines de esas redes. Y lo que “ocupa” previamente esos espacios no es menor: son varias capas culturales, algunas antiguas, mesoamericanas, y muchas otras creadas en los mestizajes intensos de dos siglos, donde una matriz civilizatoria crea a la vez al hombre y a un espacio humanizado.

¿Por qué se habla de una matriz civilizatoria conformada por capas culturales diversas? Dicho en una nuez, se trata de ese proceso doble y paradójico donde se forma el “medio ambiente social” separado de la naturaleza, pero sólo para volverse a reintegrar en un movimiento de adaptaciones, aprovechamientos y domesticaciones muy complejas. Se crean a la vez los agrupamientos humanos con sus lenguajes, creencias, habilidades y roles en el muy antiguo arte de “repetir al hombre por el hombre”, de abrirle paso a las nuevas generaciones mediante las transmisiones culturales. Y ello incluye todo el *background* cultural de adaptaciones de la naturaleza y de

recreaciones de vida y del espacio.⁹ Lo humano, incluso en la época de la desterritorialización radical que imaginan los flujos intensos de la globalización actual, y de los puñados de hombres y mujeres que ya viven en aeropuertos y hoteles; es un biotopo, es vida asociada a espacios concretos y a su naturaleza circundante.

En la muy amplia diversidad de la experiencia humana ello ha significado la posibilidad de construir el biotopo, es decir, de comunidades que se territorializan, que crean un campo de experiencia desde el cual juegan con la diversidad humana y de la naturaleza, propician las mezclas, reciben los contagios de otras culturas, para labrar sus sendas renovadas y cambiantes de vida. En el amplio territorio mexicano ésta es una experiencia vivida por las comunidades indígenas pero no sólo por ellas. Las muy plurales sociedades locales y regionales, rurales y urbanas, vivieron el mismo proceso inherente a la sedentarización. Con ello se desnuda la contradicción profunda entre estas oleadas de inversión de capitales y los territorios ocupados: no es una lucha entre el progreso y la barbarie, es un combate entre usos dictados por la acumulación de capitales, la avaricia sin medida, y los muy diversos y plurales modos humanos de reproducirse. En el caso del sur-sureste, esta contradicción es brutal: hablamos de los territorios que aún conservan la mayor biodiversidad del país y de los recursos naturales, en diversos grados de articulación, intercambio y lucha con un “mundo humano”, megacultural, que aún persiste. Ambas son las tareas de toda empresa civilizatoria: recrear lo humano y forjar un mundo inserto en la naturaleza, y esto ¿lo cumple el actual paradigma dominante del desarrollo?

PARADIGMAS EN JUEGO

Decíamos al inicio que hay una construcción de la representación del sur-sureste donde se configura como un problema (el rezago y la

⁹ Véase “Regazos y balsas, esbozos para una paleopolítica”, en Peter Sloterdijk, *En el mismo barco*, Madrid, Siruela, 2002, pp. 22-36.

carencia) y se apunta la solución (el rescate con oleadas de inversiones). Esa “representación construida” es el ejercicio de un paradigma, de un modelo dominante de pensar que diagnostica y apunta la solución. Es el paradigma del “desarrollo” que domina en la mente de las elites políticas, económicas y culturales dispuestas a trabajar por esas oleadas de inversiones para el modelo extractivo: el uso rentable de hombres “baratos” y recursos desvalorizados para la máxima ganancia, donde el cuidado de las culturas y de la naturaleza son “costos” que habrá que reducir o suprimir.

Pero a lo largo del siglo XX se fueron construyendo otros referentes para que las sociedades modifiquen los modos de uso de sus excedentes a fin de cumplir mejor la tarea civilizatoria que la define como humana. Surgieron de diversos afluentes, en el campo de las ideas,¹⁰ pero también en las múltiples experiencias de comunidades y localidades, de modos de producir-distribuir-consumir. También se alimentan de los valores de convivencia que reinsertan al individuo en el esfuerzo común, a su interés individual asociado a las contrapartes solidarias y de reciprocidad, y de modos de construir el medio ambiente humano sin poner en grave riesgo a la naturaleza a secas.

Los engrosan las experiencias descentralizadas de gobiernos, de relaciones entre saberes sociales y conocimientos altamente especializados, y de una conciencia creciente de que vivimos una crisis civilizatoria cierta y de escala global. La tarea de “reproducir al hombre por el hombre” y de cuidar al mundo que nos hospeda se hace cada vez más difícil e, incluso, en ocasiones inviable. No se trata de reducir lo humano al “consumo” y al bienestar material, la vía más segura para autodestruir los mundos humanos y naturales. Sino de recuperar valores y sentidos de dignidad, equilibrio, contención, y de respeto a la vida de los que aún no nacen y a la naturaleza que somos y que nos envuelve. En este paradigma lo esencial son las

¹⁰ Consúltese al respecto Sergio Boisier, *El desarrollo en su lugar (el territorio en la sociedad del conocimiento)*, Santiago de Chile, Instituto de Geografía/Pontificia Universidad Católica de Chile (Serie Geolibros), 2003.

combinatorias territoriales, en esta edad tecnológica y comunicativa, entre la riqueza megacultural y la riqueza de la biodiversidad. Lo fundamental, que no lo exclusivo, es reconstruir el biotopo en sus muchas formas en condiciones de globalidad y de fluidez de todo.

Hay por ello un debate de paradigmas que se puede y se debe expandir hacia todos los ámbitos de esa pregunta que nos convoca: ¿Cómo reconstruir a la región sur-sureste? Este debate ya en curso debe abrirse paso en los ámbitos decisorios y de operación concreta, en los planes y en sus ejecuciones, en las políticas públicas, a diversas escalas de gobiernos y de ámbitos tan diversos como la cultura, la política y la economía. *Grosso modo* éstos serían los ítems del debate para propiciar ampliaciones de espacios, recursos y capacidades de negociación a una modernidad popular:

Tal vez en este abierto debate de paradigmas se reconozca la confrontación directa entre ese progreso y la riqueza del sur-sureste:

[...] hoy la economía está en contra de la diversidad en México debido a: *a)* la falta de una política que conjugue los aspectos económicos con los naturales y culturales; *b)* subvaloración de la biodiversidad, multiculturalidad y pluriétnicidad; *c)* sobrevaluación de la homogeneidad y la especialización, y *d)* gradual reducción, artificial, del espacio de la diversidad natural y cultural del país.¹¹

¿CÓMO RECONSTRUIR EL SUR-SURESTE?

En las actuales condiciones de fluidez de los hombres y de las cosas, en pocas décadas será un privilegio que las sociedades se mantengan en los espacios donde germinaron. Lo que se nombraba como Tercer Mundo se convierte en una diáspora gigantesca. Para la región sur-sureste mexicana se observa lo siguiente:

¹¹ Andrés E. Miguel, “Economía y diversidad, su relación en el sur sureste mexicano”, en *Momento Económico*, núm. 115, mayo-junio de 2011, p. 29.

<i>Paradigma dominante</i>	<i>Paradigma alterno</i>
Globalidad mercantil (extractivos) y nación de oligarquías.	De lo local hacia lo regional, por un Proyecto Nacional Popular.
Especialización en el espacio.	Inventarios y aprovechamientos integrales territoriales.
Concentración en corredores homogéneos articulados en ciudades y poderes regionales.	Corredores de la diversidad y de la cooperación y el intercambio entre pueblos, figuras asociativas rurales y urbanas. Desconcentración territorial y promoción del cuarto piso de gobierno.
Verticalidad de las decisiones. Subordinación operativa regional y local.	Instancias y procesos combinados de horizontalidad-verticalidad en diagnósticos, la planeación y la ejecución de las políticas públicas.
Articulación del núcleo capital-Estado con los conocimientos y la tecnología que hace a las poblaciones mayoritarias consumidoras pasivas de sus ofertas.	Saberes territorializados con bisagras interactivas hacia generación de tecnologías y ciencias apropiadas.
Indicadores de la riqueza mercantil-indicadores de la pobreza.	Indicadores de la potencia de la biodiversidad y lo megacultural.

Esta región se distingue por su reciente incorporación a la migración hacia Estados Unidos, la cual inicia, fundamentalmente, a partir de la década de 1990, con excepción de Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años cuarenta en el contexto del Programa Bracero. Estas dos entidades se distinguen, además, por su constante participación en la migración interna que se dirige a las grandes ciudades del país, y al corredor agrícola del Pacífico. En la región destacan, además de Guerrero y Oaxaca, los estados de Chiapas y Veracruz, los cuales experimentaron un crecimiento migratorio notorio durante la primera década del siglo *xxi*. En 2000, esta región aportó 15 por ciento de los migrantes mexicanos a Estados Unidos y, en 2010, esta cifra aumentó a 20 por ciento, según datos censales.¹²

¹² Conapo, *Regiones de origen y destino de la migración México-Estados Unidos*, en <http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Regiones.pdf>, consultado el 15 de octubre de 2013.

En contraste, Europa y Estados Unidos se afianzan en sus territorios erizados de murallas antiinmigratorias y reconvertidas en enormes bodegas de recursos estratégicos para la sobrevivencia, a la vez que supeditan *hinterlands* regionales de control geopolítico al margen de las fronteras nacionales. La crisis que vivimos lanza a millones al nuevo nomadismo impulsado por el hambre y ataca a fondo la reproducción de los ecosistemas y de los recursos vitales. Es urgente retomar las tareas civilizatorias de una escala humana de la vida, donde el biotopo recupere su centralidad. Así, dos temáticas vitales en el arte de generar excedentes que aseguren el cuidado de lo humano y la naturaleza: el conservar y transformar a la vez, el crecer y regular los excesos, pueden encontrar un punto de equilibrio.

La marea migratoria va en ascenso, pero México tiene condiciones especiales para intentar regular a la modernidad que desterritorializa, sobre todo en el sur-sureste. Hay milenios de nomadismo y sedentarización que crearon fuertes asociaciones entre hombres y naturaleza y que fue consolidando tres grandes características en sus asociaciones. Hablamos de un corredor triple que permite grados diversos de enraizamiento, especies de trincheras defensivas ante las guerras blandas de la modernidad que fragmenta y expulsa.

La primera es una muy larga tradición de posesión de espacios por comunidades humanas, donde su legitimidad y arraigo se convierte en un asunto sagrado. Los colectivos adquieren identidad y sentido por una relación mítica con la tierra, sea en clave sagrada mesoamericana o en sus mixturas con el catolicismo. Su legitimidad más profunda como posesionarias proviene de ahí. Y también valores como el carácter social y colectivo del vínculo con el territorio, más cierta idea de igualdad y de lo justo que anima sus reclamos. No menor es su combinación de usos pragmáticos para la subsistencia con valores que contienen la depredación total, el respeto, el intercambio, los usos alternos.

La segunda característica es la posesión y las diversas formas de propiedad en cuanto condiciones para la experiencia sostenida de intercambios y de elaboración de un mundo humano inserto en la natu-

raleza. Saberes territorializados, domesticaciones de faunas y floras, usos de suelos, aguas y lluvias; tecnologías productivas y organización del espacio. Repetir y mejorar la experiencia del producir requiere de defender y sostener las posesiones y las propiedades. En las culturas indígenas, rurales y urbanas, una larga posesión da derechos. “Primero en tiempo, primero en derecho”, es su refrán sabio. Así, ya en plena modernidad, se colonizaron selvas, se ampliaron las ciudades, se expandieron las fronteras agrícolas. Y de la posesión se puede transitar o empalmar con formas de propiedad diversas, el paso de la posesión a propiedad y al patrimonio familiar ya sea como propiedad social o propiedad privada. Aun ahora, la propiedad social cubre más de la mitad del territorio nacional. En finas interacciones ello dio lugar a una enorme pluralidad de asentamientos y de figuras asociativas (ejidos, empresas comunales, cooperativas, asociaciones para vivienda y para comercializaciones, etc.) que pueblan valles, laderas y sierras de la orografía mexicana.

La tercera característica es difícil de ver y valorar pues la cultura de elite mexicana insiste en que en nuestro país se construyó un Estado fuerte y centralizado, en manos de burocracias federales y estatales que pueden imponer según sus gustos y criterios. La verticalidad total. Y no es que esto sea falso, sino que omite una peculiaridad de la construcción estatal mexicana, esencial para entender cómo surgen y se despliegan capacidades de resistencia y negociación “desde abajo” y “en medio” en un orden autoritario. Veamos.

Desde la Colonia y luego con las Repúblicas, “las personas comunes”, a la vez que sufrieron graves exclusiones y abusos, tuvieron acceso junto con la tierra a la facultad de administrar y hacer justicia en un territorio reclamado como propio. A esa facultad se le nombra como jurisdicción. La tierra y su comunidad asociada, el biotopo pues, se convertía en artificio político, en república de indios primero y luego en ayuntamientos constitucionales donde junto a los tejidos asociativos, horizontales y cooperativos, se levantaban las pequeñas pirámides de los poderes locales arraigados a pueblos y comunidades. Los biotopos se hicieron jurisdicción, es decir, ga-

naron la capacidad legal de autogobierno, que entre otras cosas creó la sana costumbre de discutirle, si era urgente y necesario, al mismísimo presidente y, en ocasiones contadas, echar para atrás decisiones que provenían de la punta de ese Estado poderoso y centralizado. Como Atenco testimonia con la cancelación de un aeropuerto, esa peculiaridad republicana mexicana crea zonas de tensión (apelaciones y resistencias) en su interior que en ocasiones permitió la victoria de los, en apariencia, más débiles.

Las oleadas de inversiones y sus tendencias a la desterritorialización deben tratar desde hace décadas con estos tejidos de brechas, trincheras y facultades legales y míticas de los biotopos que persisten a contracorriente. Su inercia de trato es la corrupción que compra autoridades y dictámenes, el cabildeo de intereses en congresos, el apoyo a trasmano de instancias superiores, el cierre de espacios de interlocución y de negociación. Pero también brotan muy diversas formas de resistencia local y regional que en ocasiones cristalizan aliados y simpatizantes diversos: los tejidos asociativos territoriales, las organizaciones civiles, los colegios profesionales y las universidades, sectores de la prensa y de la opinión pública, instancias de autoridad en congresos y gobiernos. Las negociaciones “desde abajo” aparecen como articulaciones locales de ayuntamientos y organizaciones territoriales y sectoriales de sus ciudadanos. Pero también destacan diversas experiencias donde se ganan capacidades de negociaciones desde “en medio”, es decir, de asociaciones de ayuntamientos, de integración de bloques de diputados afines a escala local y federal e incluso de disposiciones de gobernadores a articularse como bloque regional. En la época de la globalidad estos esfuerzos cuentan con otro circuito de asociación posible: el global, el de agencias, organizaciones civiles, tratados y tribunales internacionales que engrosen su visibilidad y su fuerza transformadora.

En los quehaceres de estos campos de litigio se abren las posibilidades de revertir, regular y negociar las decisiones verticales de poderes superiores en fuerza. Y es en esta tensión ya no sólo de paradigmas sino de fuerzas culturales, políticas y económicas entre-

lazadas que la pregunta central del “¿cómo reconstruir?” se convierte en otra igual de sustantiva: ¿cómo y sobre qué aspectos generar coaliciones en favor de una reconstrucción que reconozca y propicie nuevas y avanzadas bisagras entre las dos riquezas del sur-sureste, la biodiversidad y lo megacultural en clave civilizatoria? La complejidad del asunto invita a sugerir una variedad de franjas de encuentros posibles entre experiencias de pueblos, ayuntamientos y organizaciones con instancias culturales y políticas convergentes a fin de trazar el mapa mayor de las reconstrucciones:

- Control político y cultural de los territorios a través de lo local, con municipios, figuras asociativas de la propiedad social y privada, organizaciones territoriales y sectoriales que se exprese en planeación y ejecución concertada con diversos actores y con diversas instituciones y niveles de gobierno.
- Combinatorias de posesión y regímenes de propiedades que propicien la acción colectiva de diversos sujetos en el territorio compartido en temáticas diversas.
- Inversión federal en infraestructuras a escala local y regional para aprovechamientos territoriales con mezcla de mercados locales y globales.
- Articulaciones de saberes territoriales y de conocimientos científicos, generación de tecnologías mestizas y de sistemas educativos y de capacitación permanente.
- Creación de institucionalidades para el acceso a recursos bancarios, fiscales, de fondos especiales derivados del usufructo de recursos energéticos y naturales de los territorios.

¿Se pretende con esta apuesta hacia las culturas locales y sus territorios un escape regresivo?, ¿una nueva insularidad atrincherada en lo local y en supuestas esencias étnicas y culturales? ¿Se abandona el gran escenario del mundo, el ámbito de sus retroalimentaciones continuas y de las tareas globales de lo humano? Nada más ajeno a la matriz civilizatoria que crece en los contactos, los inter-

cambios y las mezclas. No es el caso. Se trata exactamente de lo contrario: de pugnar por un universalismo que brota en lo local, se apropia de las novedades y se difunde hacia todos lados. Expandirse desde la fuerza propia donde los contemporáneos reinventen su pasado civilizatorio con la novedad del mundo y lo difundan.

Pensamos que ha llegado el momento de construir un nuevo internacionalismo; uno que no se propone la solidaridad transfronteriza con una lucha específica, sino que colabora desde la izquierda en las problemáticas globales, en condiciones de ecología de saberes y sin eurocentrismos.¹³

Y de ese internacionalismo desde lo local es posible que surjan cada vez más noticias globales, en los muy diversos ámbitos del experimentar humano, como la siguiente:

La Selección Indígena de México, formada por niños de la comunidad triqui de Oaxaca, sorprendió, emocionó y arrasó en el IV Festival Mundial de Mini-Baloncesto que se realizó en Córdoba, Argentina [...] La Selección Indígena de México, formada por 25 niños, dominó el Festival realizado del 11 al 14 de octubre en la ciudad de Córdoba, ubicada a 700 kilómetros de Buenos Aires, y en el que participaron ocho mil menores procedentes de ocho países. El equipo triqui ganó los seis partidos que disputó, todos ellos ante rivales argentinos, pero fue tal el afecto que generaron que terminaron siempre ovacionados. Los triunfos fueron contundentes: 86-3 ante Celestes Argentina, 22-6 frente a Universidad de Córdoba, 72-16 contra Central Argentina, 82-18 con Hindú Argentina, 44-12 ante Monteéis y 40-16 contra Regatas de Mendoza.¹⁴

¹³ *Alternativas al capitalismo del siglo XXI*, Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas del Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo, p. 24

¹⁴ *Notimex, El Universal*, miércoles 16 de octubre de 2013.

LOS CAMINOS POSIBLES EN LA RECONSTRUCCIÓN
DEL SUR-SURESTE

Manuel Roberto Parra Vázquez

Este trabajo busca responder la pregunta: ¿Es posible establecer políticas públicas dirigidas a fortalecer las capacidades adaptativas de las comunidades, municipios y regiones para responder rápidamente a los desastres?

Los procesos de reconstrucción de las áreas de desastre son cada vez más frecuentes y costosos. Partimos del reconocimiento de que en los tres niveles de gobierno se ha avanzado en los procesos de prevención y gestión de los desastres naturales. Pero hoy es posible apreciar que, ante fenómenos de gran magnitud como los representados por los huracanes *Ingrid* y *Manuel*, aún se tienen graves deficiencias en la materia.

Para ampliar la perspectiva de análisis que se ha utilizado en el estudio de las causas y efectos de los fenómenos naturales revisamos los enfoques teóricos más utilizados; y proponemos un enfoque alternativo.

Para conocer las condiciones en que vive la población rural en el sur-sureste de México se describen brevemente los medios de vida de la población rural. Estos estudios se realizaron en comunidades de diferentes estados que muestran en común una tendencia al deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo.

Y queremos también tratar de responder a la pregunta: ¿es posible revertir la tendencia al deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos? Para esto se analiza el caso de comunidades tzeltales de la región Altos de Chiapas, que han iniciado un proceso de diversificación productiva.

También analizamos las posibilidades de construir una política pública que permita fortalecer las capacidades de adaptación de las

comunidades rurales a partir de acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno.

MODELOS PARA EL ANÁLISIS

El enfoque del riesgo define a la vulnerabilidad como una “relación entre un peligro externo a un sistema y sus efectos adversos”¹ y se preocupa por predecir el impacto de un evento climático dado. Quienes adoptan este enfoque ven a la gente como vulnerable *a peligros* (véase la figura 1).

En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) considera que la existencia de un riesgo implica la presencia de un *agente perturbador* (fenómeno natural o generado por el hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar *daños* a un *sistema afectable* (asentamientos humanos, infraestructura, planta productiva, etc.) en un grado tal que constituye un *desastre*.

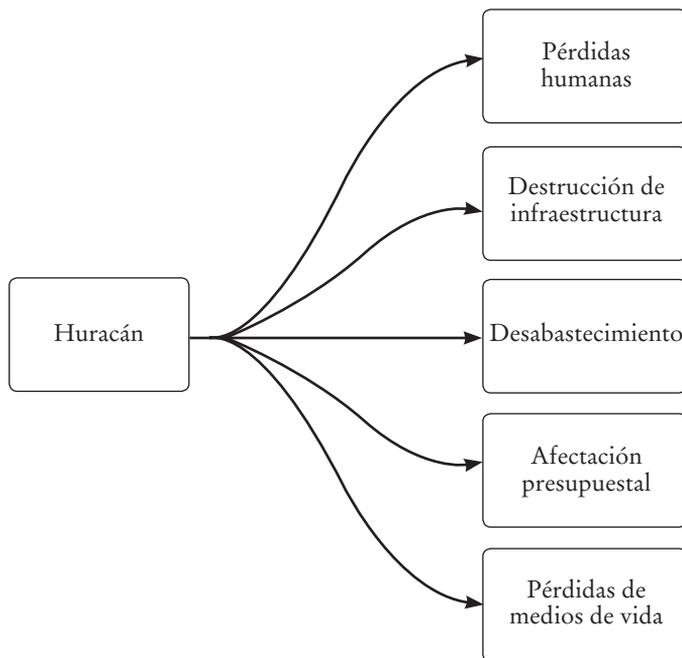
$$\text{Riesgo} = f(\text{Peligro}, \text{Vulnerabilidad}, \text{Exposición})$$

En términos cualitativos, se entiende por *riesgo* la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. La probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región constituye una *amenaza*, entendida como una condición latente de posible generación de eventos perturbadores.²

¹ Hans-Martin Füssel y Richard J. T. Klein, “Climate Change Vulnerability Assessments: An Evolution of Conceptual Thinking”, en *Climatic Change*, vol. 75, núm. 3, 2006, p. 305.

² Enrique Guevara Ortiz, Roberto Quaas Weppen y Georgina Fernández Villagómez, “Lineamientos generales para la elaboración de Atlas de Riesgos”, en Violeta Ramos Radilla (coord.), *Guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos*, México, Cenapred, 2006, p. 15.

FIGURA 1
ANÁLISIS DE IMPACTO



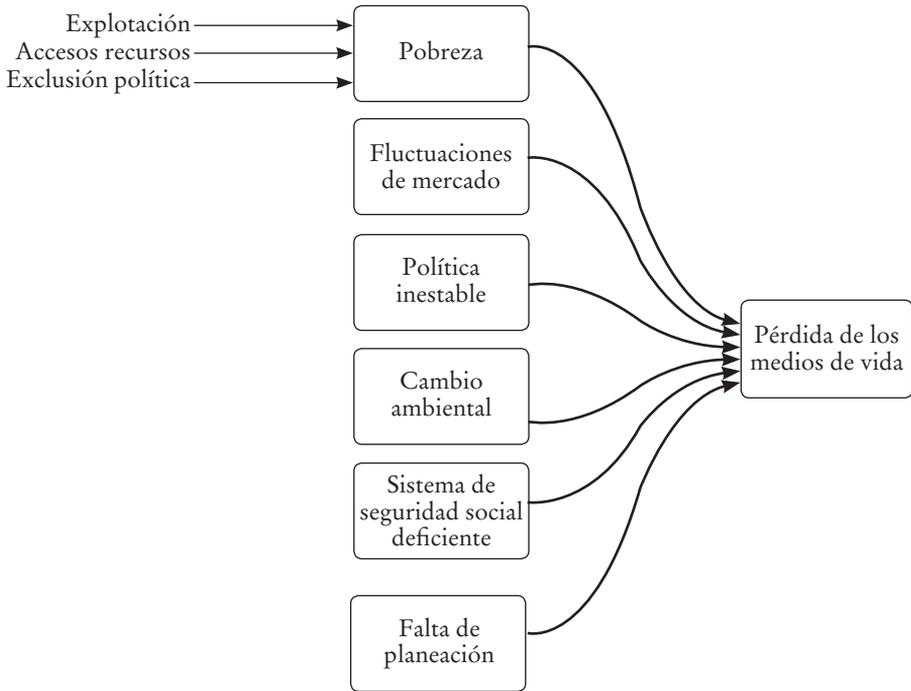
FUENTE: modificada de Ribot, 2010.

A partir de este enfoque se han generado el *Atlas Nacional de Riesgos* y diversos atlas estatales y municipales, que sin duda constituyen importantes instrumentos para la prevención y mitigación de los efectos de los desastres.

Desde otra perspectiva, los constructivistas sociales se preguntan cuáles son las causas de la vulnerabilidad. Ellos consideran que la gente es vulnerable a *resultados indeseables* (véase la figura 2), y se preocupan por las consecuencias de un evento climático. Ven a los fenómenos como algo externo al sistema, y ven al riesgo de desastre y al sufrimiento como algo social. De esta manera ponen la fuerza

de la explicación dentro del propio sistema social,³ posición correcta a nuestro entender.

FIGURA 2
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD



FUENTE: modificada de Ribot, 2010.

Por su parte, Virginia García Acosta identifica otra perspectiva: *la construcción social del riesgo*, que en una de sus acepciones relaciona la vulnerabilidad y la desigualdad con la vulnerabilidad acumulada y diferencial. Desde este enfoque se parte

³ Jesse Ribot, “Vulnerability does not Fall the Sky: Toward Multiscale Pro-Poor Climate Policy”, en Robin Mearns y Andrew Norton (eds.), *Social Dimensions of Climate Change. Equity and Vulnerability in a Warming World*, Washington, The World Bank, 2010.

[...] del reconocimiento de que los desastres son procesos históricamente contruidos, producto de la acumulación de riesgos y de vulnerabilidades relacionados con y derivados del tipo de sociedad y de economía que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, y no de la presencia cada vez mayor en frecuencia y magnitud de amenazas de origen natural.⁴

En este artículo nos adscribimos al enfoque de la construcción social del riesgo, para lo cual adoptamos metodológicamente el enfoque de Modos de Vida Sustentables, que considera a la *vulnerabilidad* como la falta de medios suficientes para que la población pueda protegerse o sostenerse a sí misma de cara a los eventos climáticos.

De esta manera, los estudios se centran en el *grupo doméstico*, entendido como el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo. Estos grupos tienen formas de organización propias que les permiten cumplir con una o más de las siguientes *actividades*: producción, consumo, juntar recursos para el uso en común, la reproducción biológica y social, la coresidencia, y la propiedad compartida.

Las actividades que desarrollan estos grupos domésticos dependen de sus *medios de vida*, entendidos éstos como los recursos utilizados por los grupos domésticos para vivir día a día y alcanzar sus propósitos de futuro. Los medios de vida que ponen en juego las familias pueden ser conocimientos y habilidades individuales (capital humano), tierra y agua (capital natural), ahorros e infraestructura (capital financiero y físico, respectivamente), así como relaciones de colaboración formales o informales que ayudan en los proyectos que se están llevando a cabo (capital social).

Los grupos domésticos combinan los medios de vida a su alcance a través de un entramado de actividades a la que llamamos *estrategia de vida*. Esta estrategia de vida le permite a la unidad doméstica satisfacer (o no) sus necesidades de alimentación, vivienda, educación,

⁴ Virginia García Acosta, “El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos”, en *Desacatos*, núm. 19, septiembre-diciembre, 2005, pp. 11-24.

salud, vestuario, etc. Estas actividades de producción-intercambio-consumo llevan a los grupos domésticos a relacionarse con otros agentes sociales.

En el sur-sureste de México, las relaciones de los campesinos con otros actores sociales son injustas, lo que da lugar a un proceso de deterioro de los medios de vida, las estrategias y las condiciones de vida de los campesinos. Para entender estos procesos y tratar de revertirlos es necesario comprender el *contexto de vulnerabilidad* en el que viven las familias campesinas. Aquí consideramos a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas prevalecientes. Tomamos en cuenta a las diferentes *organizaciones* (actores sociales) presentes en el territorio y a las *instituciones* que rigen la vida cotidiana (reglas del juego). Asimismo, ponderamos el papel que juegan las *políticas gubernamentales*, y consideramos las *tendencias* de los procesos macro que se expresan en plazos largos y los *eventos* que pueden marcar cambios (umbrales) en esas tendencias. En este contexto aparecen oportunidades objetivas y restricciones para la acción de los grupos domésticos.

La estructura económico-social y el grado de desarrollo de la cultura en cada lugar y época histórica se expresan en la actividad humana colectiva como su *modo de vida*, concepto que designa al conjunto de actividades vitales que construyen las comunidades en sus distintos niveles de interacción para la satisfacción de sus necesidades, acordes a su vida espiritual, su cultura, sus valores y sus formas de organización. Los diferentes modos de vida que es posible encontrar en una región son producto de una construcción histórica, resultado de las múltiples interacciones construidas por los actores locales.

Sólo un cambio de estrategia permitirá a los grupos domésticos revertir la tendencia de deterioro que viven actualmente.

Y es en este punto en que el concepto de estrategias aparece efectivamente como nexo entre elecciones individuales y estructuras sociales, en tanto remite más que a acciones racionales guiadas por normas y

valores interiorizados, a opciones posibles [...] Cuando la gente opta lo hace dentro de condiciones sociales que determinan objetivamente las consecuencias de sus actos, por medio de la propia experiencia y conocimiento de las relaciones sociales [...] y desde sus condiciones reales de vida.⁵

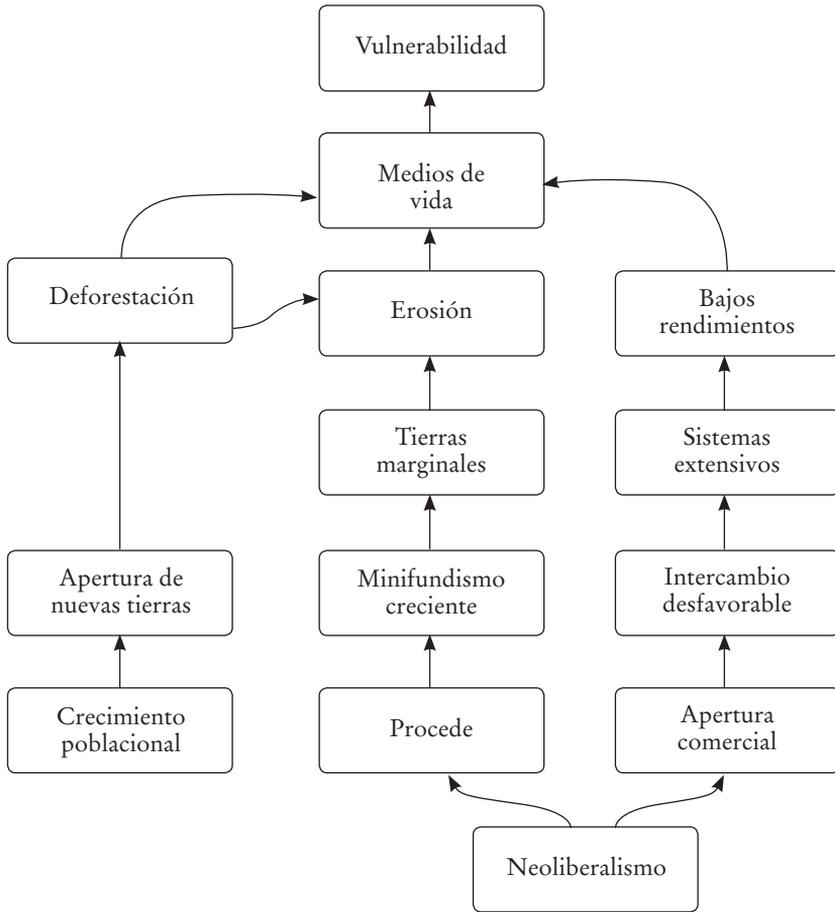
MODOS DE VIDA CAMPESINOS EN EL SUR-SURESTE DE MÉXICO

Aplicando el enfoque de Construcción Social del Riesgo se realizaron varios estudios de caso en el sur-sureste de México, utilizando el marco de *modos de vida*. De manera general encontramos un patrón de fuerzas subyacentes que evolucionan lentamente, pero que en conjunto configuran un proceso de deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades campesinas.

El proceso de deterioro se ha visto acentuado en la medida en que las políticas neoliberales han penetrado la vida nacional. Por un lado, las reformas realizadas al artículo 27 constitucional, conjuntamente con el sostenido crecimiento de la población rural, han configurado un proceso de minifundismo creciente, que lleva a la apertura de tierras de cultivo en tierras marginales, dando lugar a procesos de deforestación y erosión del suelo. Paralelamente, la apertura comercial ha permitido la profundización de términos de intercambio desfavorables para la producción campesina. El alza de los precios de los insumos hace casi imposible que los productores se muevan a sistemas de producción intensivos, por lo que prevalecen sistemas de producción extensivos con bajos rendimientos. De esta manera los campesinos están perdiendo de manera cada vez más acelerada sus *medios de vida*, profundizando así su vulnerabilidad (véase la figura 3). Por otra parte, este mecanismo de denudación de las sierras es el causante, junto con la construcción indebida de infraestructura, de desastres por deslaves en las sierras, y por inundaciones en las planicies costeras.

⁵ Susana Hintze, *Estrategias alimentarias de sobrevivencia (Un estudio de caso en el Gran Buenos Aires)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, vol. 2, 1989.

FIGURA 3
ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO



FUENTE: construcción propia.

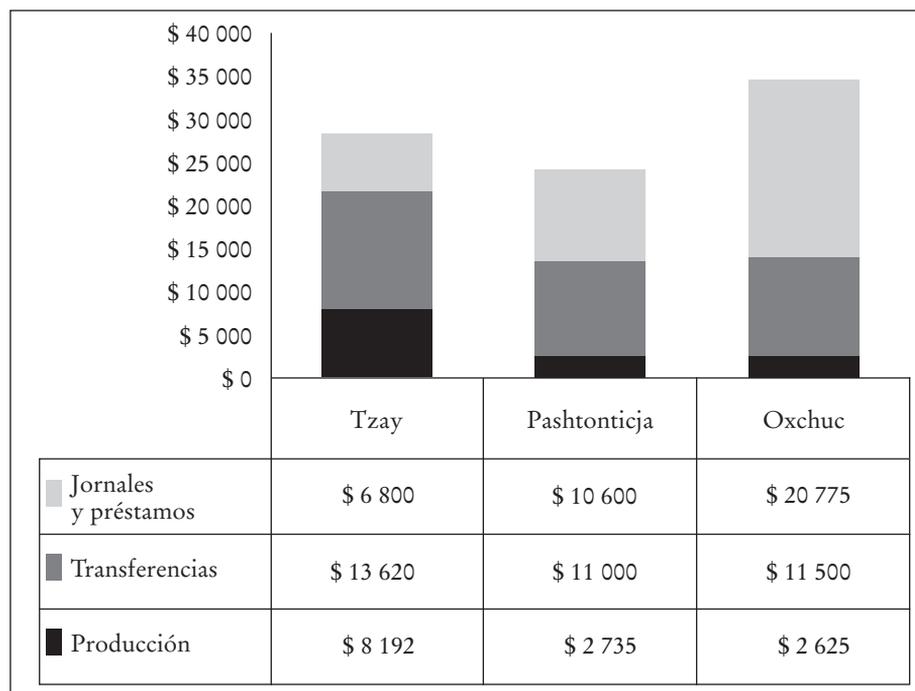
Esta situación se puede ejemplificar mediante el estudio que realizaron Ramos *et al.*⁶ en las tres *microrregiones del municipio de Oxchuc*, Chiapas, con el propósito de comparar de qué manera las

⁶ Pedro Pablo Ramos Pérez, Manuel Roberto Parra Vázquez, Salvador Hernández Daumás, Obeimar Balente Herrera Hernández, José Nahed Toral, “Estrategias de vida, sistemas agrícolas e innovación en el municipio de Oxchuc, Chiapas”, en *Revista de Geografía Agrícola*, núm. 42, 2009.

diferentes formas de uso de los recursos naturales y las distintas estrategias de vida de los productores favorecen o restringen la posible introducción de innovaciones. Oxchuc se caracteriza por su población tzeltal dedicada a la agricultura (milpa, café y frutales) en condiciones ambientales limitantes. En las últimas décadas el crecimiento poblacional ha generado un incremento de la presión sobre la tierra, la reducción de la base de recursos per cápita, la pérdida de la sustentabilidad del sistema milpa, el incremento de la incertidumbre y la diversificación de las estrategias de vida.

La vulnerabilidad de estas comunidades se puede apreciar en la figura 4, que muestra los ingresos familiares anuales en tres comu-

FIGURA 4
ESTRUCTURA DE INGRESOS ANUALES DE
FAMILIAS CAMPESINAS DE OXCHUC, EN 2008



FUENTE: Ramos, Parra, Hernández Herrera y Nahed (2009: 95).

nidades, cuyos montos totales en 2008 fueron: 28 612 pesos para El Tzay, 24 335 pesos para Pashtonticja y 34 900 pesos para Oxchuc, cuando la línea de pobreza alimentaria, según los estándares de Coneval, fue de 46 103 pesos. La gravedad de la situación se aprecia con mayor claridad si consideramos que los valores porcentuales de la producción, con respecto al ingreso total, fueron de 28.6 por ciento, 11.2 por ciento y 7.5 por ciento, en tanto que los valores de las transferencias gubernamentales constituyen 47.6 por ciento, 45.2 por ciento y 32.9 por ciento y los valores por jornales y préstamos son 23.7 por ciento, 43.5 por ciento y 59.5 por ciento. Paralelamente, la cantidad de tierra por campesino cayó de dos hectáreas en 1940 a media hectárea en 2000, en tanto que la superficie cubierta de bosque cayó de 65 por ciento en 1975 a 40 por ciento en 2008. Estas cifras nos muestran simultáneamente el minifundismo creciente, la deforestación, la pérdida de importancia de la producción agrícola, una estrategia creciente de venta de fuerza de trabajo, y una mayor dependencia de las transferencias gubernamentales, todo lo cual genera vulnerabilidad.

Por otro lado, en el estado de Campeche la población maya vive procesos similares a los de los campesinos de los Altos de Chiapas. Sin embargo, la disponibilidad de tierras planas que pueden ser utilizadas mediante técnicas tipo Revolución Verde condujo al gobierno a abrir esas tierras al cultivo mecanizado. Pat *et al.*⁷ analizan las repercusiones de las políticas y los procesos económicos en los modos de vida y su relación con la seguridad alimentaria en cuatro comunidades mayas del estado de Campeche: Xkakoch y Chunhuas, pertenecientes al municipio de Calkini; Nohalal y Santa Cruz, pertenecientes al municipio de Hecelchakan.

⁷ L. A. Pat Fernández, J. Nahed Toral, M. R. Parra Vázquez, D. A. Nazar Beutelspacher, L. García Barrios, E. Bello Baltazar, O. B. Herrera Hernández, “Modos de vida y seguridad alimentaria de los mayas de Campeche”, en *Memoria del Concurso REDSAN 2007*, artículos ganadores, Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, Santiago de Chile, FAO, 2008.

La ampliación de la frontera agrícola mediante la apertura de tierras forestales mecanizables en el Camino Real se inició en 1977. De 1977 a 1986 se incorporaron 23 mil hectáreas mecanizadas en la región del Camino Real y en los municipios de Campeche y Hopelchen. Estas áreas fueron destinadas predominantemente a la producción de maíz de temporal mediante el uso de semillas mejoradas, insumos agrícolas industrializados y maquinaria. También se abrieron pequeñas áreas de riego para los cultivos de tomate, sandía y melón. La apertura de tierras mecanizables condujo a un proceso de diferenciación campesina en la región. Las comunidades ubicadas al oriente son las que cuentan con tierras mecanizadas y las que se incorporaron a un nuevo modo de vida: la agricultura mecanizada con apoyos gubernamentales. Mientras que las localizadas al poniente, sin acceso o con acceso limitado a tierras de buena calidad, continuaron practicando la agricultura tradicional de roza-tumba-quema (RTQ) con escasos apoyos. En 1990 se estimó que sólo 20 por ciento de los grupos domésticos de la región tenía acceso a tierras mecanizadas y se dedicaba a la agricultura mecanizada. La tabla 1

TABLA 1
TENENCIA DE LA TIERRA EN CUATRO COMUNIDADES DE CAMPECHE

<i>Variables</i>	<i>Comunidad</i>			
	<i>Santa Cruz</i>	<i>Xkakoch</i>	<i>Chunhuas</i>	<i>Nobalal</i>
Superficie total del ejido (ha)	1 180	2 550	3 800	4 300
Superficie mecanizada (ha)	100	100	118	1 873
Superficie incluida en la RBLP	0	0	2 780	0
Número de grupos domésticos (GD)	111	23	50	73
Superficie media ejidal por GD (ha)	11	111	20	59
Superficie media mecanizada por GD (ha)	1	4	2	18
GD sin tierra	77	1	4	0

muestra la polarización en la disponibilidad de tierras de las cuatro comunidades estudiadas.

Las reformas estructurales en la tenencia de la tierra de 1992 y la apertura comercial de 1994 están transformando gradualmente la estructura económica y social de la región. La reforma al artículo 27 constitucional provocó el surgimiento del arrendamiento de las tierras mecanizadas y el consecuente abandono de las actividades agrícolas. La apertura comercial a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está empobreciendo a los grupos domésticos minifundistas que no pueden competir con las importaciones de maíz y el aumento del costo de los insumos. Ambas políticas están deteriorando las condiciones de subsistencia de los grupos domésticos de la región, quienes están optando por la vía asalariada como modo de vida.⁸

En otro intento de atender a la población campesina del estado, de 1997 a 2004, en la región del Camino Real, se establecieron seis maquiladoras que dieron empleo directo a 1 385 personas, con el apoyo del Programa de Atracción de Inversiones del Gobierno de Campeche. Pese a su contribución en el empleo y al mayor dinamismo impreso a los servicios locales, el salario percibido por jornada apenas supera el salario mínimo de la zona. La industria maquiladora ha originado un nuevo proceso de diferenciación socioeconómica en la región, ya que un creciente número de grupos domésticos ha elegido el modo de vida asalariado como el medio para escapar de la pobreza. La tabla 2 muestra cómo el acceso a las tierras mecanizadas determina el proceso de diferenciación de las estrategias entre comunidades. Los productores mecanizados de Nohalal tienen mayores ingresos que el resto de los productores. Los productores con poca tierra de baja calidad de Xkakoch y Chunhuas combinan la agricultura de temporal con una mezcla de actividades de servicios. Los productores sin tierra de Santa Cruz sobreviven a partir del trabajo asalariado. En todo caso, el ingreso de los obreros de San-

⁸ *Ibid.*, p. 139.

TABLA 2
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y ESTRATEGIA DE VIDA DE CUATRO
COMUNIDADES DE CAMPECHE

<i>Variables</i>	<i>Comunidad</i>			
	<i>Santa Cruz</i>	<i>Xkakoch</i>	<i>Chunhuas</i>	<i>Nobalal</i>
Ingreso medio (\$/año)	48 143	47 267	40 506	141 718
Ingresos por agricultura y artesanías (%)	9.62	37.98	40.67	64.62
Ingresos por venta de trabajo y transferencias	90.38	62.02	59.33	35.38
<i>Estrategia</i>	Laboral	Mixta	Mixta	Agrícola

ta Cruz es sólo ligeramente superior al de los campesinos de Xkakoch y Cunhuas.

Además de las políticas gubernamentales, existen otros Factores de Vulnerabilidad Regional, entre los que se cuentan el precio internacional del maíz y el costo de los insumos agrícolas. Por los bajos salarios, los grupos domésticos sin acceso o con acceso limitado a tierras ejidales en la región se ven obligados a realizar toda clase de trabajos con tal de sobrevivir y enfrentar *los desastres naturales*: la irregularidad de las lluvias durante el ciclo de cultivo de maíz y los huracanes, ya que durante un periodo de 44 años (1960-2004) 50 huracanes han pasado por la región. Adicionalmente, el crecimiento de la población, la expansión de la ganadería extensiva y el uso creciente de agroquímicos son factores que contribuyen al deterioro de los recursos naturales y a la inseguridad alimentaria. Para mejorar las condiciones de alimentación de los grupos domésticos Pat *et al.* sugieren una política pública diferenciada que considere la dotación desigual de los recursos comunitarios, la participación social y la coordinación interinstitucional.

En la comunidad de Nuevo Progreso, municipio de Chilón, Juárez *et al.*⁹ realizaron una investigación cuyo principal objetivo fue conocer hacia dónde se están orientando las estrategias de reproducción de los jóvenes tzeltales ante los cambios del entorno social, cultural y económico actual. Se trata de una comunidad que vive del cultivo de la milpa y la producción de café. La fluctuación de los precios del café impacta fuertemente la economía familiar, generando así una alta vulnerabilidad. La reproducción económica y social de las familias campesinas está ahora en riesgo ya que la falta de tierras induce la migración de los jóvenes, quienes ya no encuentran en la comunidad los medios de vida necesarios para su sobrevivencia.

Los informantes expresaron que el ser joven en la comunidad está definido por el hecho de no tener hijos ni estar casado, pero asumen la responsabilidad de ayudar a sus padres según los roles tradicionales. Además, se asocia a la de juventud con una etapa de maduración, en la que se enfrentan al hecho de tener que tomar decisiones propias. Una de las decisiones más importantes en la vida de estos jóvenes es la de abrazar o abandonar su cultura ancestral. Por un lado, la cultura juvenil está arraigada en la cultura tzeltal, pero el contexto actual impone cambios que conducen a la renovación de la matriz de dicha cultura. Por ejemplo, los jóvenes ya no quieren ser milperos, pero les gustaría iniciar una producción intensiva utilizando sistemas de agricultura protegida. La alternativa es migrar, abandonando su comunidad y su cultura, para iniciar su vida adulta conforme a una estrategia laboral y pluriactiva.

Las comunidades de pescadores ubicadas en la Reserva de la Biósfera de La Encrucijada, en la costa de Chiapas constituyen un caso contrastante.¹⁰ El área constituye un sistema de humedales, con predominancia del bosque de manglar. En esta zona los habitantes

⁹ Lorena Juárez Bolaños, Manuel Roberto Parra Vázquez, Ramón Mariaca Méndez y Blanca Mayela Díaz Hernández, “Modos de Vida de los jóvenes en un espacio rural e indígena de México”, en *Estudios Sociales*, vol. XIX, núm. 38, 2011.

¹⁰ Josefina Liscovsky, Manuel Roberto Parra Vázquez, Eduardo Bello Baltazar y Ana Minerva Arce Ibarra, “Discurso territorial y práctica sectorial de las políticas socioam-

viven de la pesca, principalmente del camarón, ya que su territorio es principalmente acuático, a diferencia del resto de la región Soconusco, donde las actividades rurales se centran en la agricultura y la ganadería. Con el paso del tiempo la pesca ha decaído, ya que en la parte alta de la cuenca se ha dado un proceso de deforestación, en tanto que en la parte baja se vive un proceso de intensificación agrícola con alto uso de agroquímicos, dando como resultado que los manglares se han azolvado y se han contaminado. Paralelamente han llegado nuevas familias, provocando una mayor competencia por la pesca. Aunque ambas comunidades superan la línea de pobreza alimentaria, un alto porcentaje del ingreso anual proviene de los apoyos gubernamentales: 43 por ciento en La Palma y 58 por ciento en El Castaño. Los proyectos de inversión que se han realizado para impulsar el desarrollo comunitario han fracasado, de manera que los procesos externos siguen moviéndose hacia condiciones de mayor deterioro de los medios de vida de la población. El estudio señala que las políticas gubernamentales se ejercen sectorialmente, sin coordinación entre sí. Asimismo tienen en común el enfocarse en la construcción de obra pública y la adquisición de maquinaria, con poca atención al fortalecimiento del capital humano y social, de manera que las construcciones y maquinaria quedan abandonadas. Otro elemento importante es que al dirigir la inversión a pequeños grupos de la población se generan diferencias económicas, clientelismo y conflictos sociales.

Reconversión productiva en Tabasco. Otro intento para frenar el deterioro de las familias campesinas ha sido el establecimiento de proyectos de reconversión productiva, que les permita pasar de la producción de maíz para el autoconsumo al establecimiento de plantaciones comerciales. Utilizando el enfoque MVS (Modos de Vidas Sostenibles), Aguilar, Galmiche y Domínguez¹¹ realizaron un estudio

bientales: un análisis del ecoturismo”, en *Economía, Sociedad y Territorio*, vol. XII, núm. 39, mayo-agosto, 2012, pp. 359-402.

¹¹ Janeth Aguilar Román, Ángel Galmiche Tejeda y Marivel Domínguez Domínguez, “El contexto de vulnerabilidad de familias productoras de hule (heveacultoras): estu-

en tres comunidades productoras de hule en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Los autores reportan la existencia de una amplia gama de actividades desempeñadas por las familias heveacultoras que les ha permitido reducir su vulnerabilidad económica y social, ya que no dependen estrictamente de los ingresos percibidos por la venta del producto hule. La agricultura de semisubsistencia y la cría de aves de corral garantizan a las familias el sustento alimenticio, mientras que la ganadería se establece como un medio de inversión del que se puede disponer en caso de un choque abrupto como afectaciones en la salud humana o fallecimiento. Asimismo señalan que, de presentarse de manera más aguda los cambios climáticos actuales en la región (sequías extremas y/o lluvias recurrentes), se afectaría drásticamente la sostenibilidad de los medios de vida de las familias heveacultoras. La explotación de las plantaciones de hule, la ganadería y la agricultura quedan a merced de las condiciones climáticas prevalecientes. Las familias con menor acceso a los activos natural y humano son más vulnerables que aquellas que gozan de tierras cultivables y mayor número de miembros que se traducen en mano de obra útil para el sostenimiento del hogar, factores que les permiten recuperarse de los choques, temporalidades y tendencias que afectan la producción de hule, que, al igual que otros cultivos como el cacao y caña de azúcar, por sí sola no es suficiente para garantizar la supervivencia de las familias. Asimismo se señala que el grado de vulnerabilidad depende de la interacción y recurrencia de diversos factores, tales como escasos recursos financieros, un mal manejo de las plantaciones de hule, reducción de la mano de obra por enfermedad o fallecimiento, ciclos de producción con estaciones secas más prolongadas y precipitaciones abundantes que incrementan el riesgo de enfermedades en los cultivos y el ganado. Los mencionados son los factores que inciden negativamente en el capital natural, físico y financiero del que disponen las familias.

dios de caso en el municipio de Huimanguillo, Tabasco”, en *Estudios Sociales*, vol. XX, núm. 39, enero-junio, 2012, pp. 207-233.

De campesinos a “turisteros” en Quintana Roo. El proceso de deterioro de las familias campesinas en Quintana Roo ha conducido a pensar que su vinculación al turismo podría constituir una forma de salir de la pobreza. Sin embargo, Araújo *et al.*¹² señalan que las políticas turísticas se deciden en el ámbito macroeconómico, atendiendo a objetivos impuestos por los organismos internacionales, lo que se refleja en las condiciones en que viven las comunidades aledañas al corredor turístico Cancún-Tulum, tales como la sobreexplotación de los recursos naturales, los procesos de migración no controlada, la formación de asentamientos irregulares, la marginación de la población autóctona, la pérdida de la autonomía política, económica y cultural, delincuencia y prostitución. Las inversiones en proyectos ecoturísticos son realizadas por organizaciones internacionales a través de dependencias gubernamentales nacionales. Sin embargo, los apoyos a estos proyectos, en lugar de fortalecer los procesos de gestión y toma de decisiones por parte de los involucrados, contribuyen a incrementar la dependencia de los subsidios.¹³ La situación subordinada de los “turisteros” mayas se aprecia en la distribución de la derrama económica que deja cada turista que llega a las comunidades estudiadas: 146 dólares quedan a las operadoras turísticas, 150 dólares quedan a los servicios de transporte y 25 dólares van a las cooperativas turísticas, propietarias del patrimonio cultural y ambiental. Un efecto colateral es el divisionismo que se genera en las comunidades, ya que sólo una pequeña parte de la población participa en los proyectos ecoturísticos.

Los estudios de caso presentados muestran que los campesinos del sur-sureste de México viven en su mayoría de un capital natural limitado: tierras abruptas, carencia de agua y con bajo potencial productivo. Su situación se agrava por la carencia de capital físico: privación de infraestructura y herramienta y maquinaria limitadas. Su

¹² Maria Raimunda Araújo Santana, Manuel Roberto Parra Vázquez, Ernesto Benito Salvatierra-Izaba, Ana Minerva Arce Ibarra y Florencia Montagnini, “Políticas turísticas, actores sociales y ecoturismo en la península de Yucatán”, en *Economía, Sociedad y Territorio*, vol. XIII, núm. 43, septiembre-diciembre, 2013, pp. 641-674.

¹³ *Ibid.*, p. 669.

capital humano está limitado por la mala alimentación y salud, y la insuficiente capacitación para la vida. El capital financiero se restringe en su mayoría a la disponibilidad de ganado menor y mayor que puede ser vendido en caso de necesidad. Y el capital social se está deteriorando, ya que las organizaciones tradicionales están perdiendo su fuerza, el ejido ha dejado de ser el instrumento privilegiado de organización, y las asociaciones de productores están debilitadas.

La situación de las comunidades rurales se ha visto agravada por la política gubernamental, fundamentalmente a partir de la modificación al artículo 27 constitucional, de la apertura comercial y del abandono de la política de desarrollo rural para las áreas campesinas, misma que ha sido sustituida por una política social focalizada. Los programas dedicados al manejo de recursos naturales en su mayoría son ineficientes e ineficaces, ya que se orientan a la construcción de infraestructura deficiente y a la distribución de insumos, sin atención al mejoramiento de los capitales de las unidades familiares ni al mejoramiento de sus capacidades.

Estos problemas provocan, y a su vez se ven agravados por, problemas tales como la erosión, la deforestación, la contaminación de suelos y aguas. Todo esto ha resultado en el empobrecimiento de la población campesina, la inseguridad alimentaria, la prevalencia de enfermedades tales como la diabetes, y la migración.

CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS

El impacto negativo de las políticas neoliberales es inocultable, de manera que actualmente el gobierno reconoce la existencia de 7.8 millones de personas en condiciones de hambre, de las cuales una tercera parte son urbanas. Si la situación es tan crítica, ¿por qué no se había dado una movilización social de grandes proporciones? Según Martínez,¹⁴ la Teoría de Movilización de Recursos postula que

¹⁴ Manuel Ignacio Martínez Espinoza, "El movimiento zapatista: un análisis desde la Teoría de Movilización de Recursos", en *Kairos. Revista de Temas Sociales*, año 10, núm. 18, 2006, disponible en <<http://www.revistakairos.org>>.

el descontento social no es en sí mismo factor suficiente para las movilizaciones, sino que participan en ello otros factores como un contexto político favorable, una selección de repertorios de protesta afortunados, una estructura sostén, y/o un manejo discursivo legitimador y creador de consensos. Desde esta lógica se analiza una serie de experiencias de innovación socioambiental realizadas en la Región Altos de Chiapas desde el inicio del nuevo milenio.

La experiencia del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Región II Altos de Chiapas (*El Consejo*) se inició en un contexto político favorable: la elección de Vicente Fox Quezada como presidente de la República y de Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador del estado de Chiapas. Este proceso de alternancia política confluyó con el surgimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la cual establece la obligatoriedad de formar los Consejos de Desarrollo Sustentable en lo federal, estatal y municipal. En las primeras sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable se planteó la conveniencia de impulsar los procesos de participación social en todos los consejos distritales, respetando el espíritu de la LDRS; sin embargo, se acordó que no había experiencia previa para conducir un proceso participativo, por lo que sólo se autorizó correr una experiencia en *El Consejo*.

En la Región Altos de Chiapas existía en ese momento el Consejo Regional de Desarrollo Sustentable del Programa de Zonas Rurales Marginadas (Cordes), el cual se reconfiguró para dar paso al nuevo consejo. *El Consejo* inició sus funciones en 2001. En un ambiente de confrontación, derivado del movimiento zapatista, resultaba difícil conseguir una participación plural. Sin embargo, el coordinador de *El Consejo* se dio a la tarea de atraer al seno del mismo a representantes de diferentes sectores sociales. De esta manera *El Consejo* se constituyó en la estructura de sostén de una movilización de recursos para el desarrollo sustentable.

En su estudio de la experiencia de *El Consejo*, Romero *et al.*¹⁵ identificaron cuatro tipos de actores con intereses en pugna: los *caciques*,

¹⁵ C. Romero Medina, M. R. Parra Vázquez, A. Nazar Beutelspacher y R. Ayús Reyes, "Planear participativamente: institucionalización de la participación social en

grupo de centro-derecha conformado por autoridades locales tradicionales y por funcionarios públicos que rechazaban abiertamente la descentralización. Los *tradicionalistas*, grupo pro-zapatista cuyos miembros validaban su actividad y relaciones con el gobierno por el beneficio aportado mediante su gestión a su base social. El grupo *neoliberal*, cuya fuerza radicaba en los cuantiosos financiamientos captados de organismos multinacionales, lo cual les otorgaba libertad económica y les permitía, a su vez, ser financiadores. Y el grupo *reformista*, que incluía a quienes encabezaban institucionalmente el proceso de planeación regional y a los académicos, quienes contaban con la voz “legítima del conocimiento científico”, amplia capacidad de propuestas metodológicas y técnicas de procesamiento de datos.

Una vez constituido *El Consejo* se inició el proceso de diagnóstico regional, utilizando al máximo la experiencia de todos los consejeros. La memoria y el conocimiento colectivo aportaron información más detallada que las estadísticas y cartografía existentes en ese momento; de esta manera se validó que todos los consejeros tenían un conocimiento experto y podrían participar en un plano de igualdad. A pesar de sus diferentes posiciones ideológicas los cuatro grupos participantes coincidieron en identificar a la pobreza y al deterioro de los recursos naturales como los principales problemas regionales.

Una vez identificados los problemas se pasó a la búsqueda de las alternativas de solución, las cuales fueron discutidas ampliamente hasta alcanzar una definición consensuada de las alternativas productivas. Ya que la función de *El Consejo* era distribuir los magros recursos a su alcance entre los diferentes actores participantes para impulsar procesos de desarrollo sustentable, se llegó al punto medular del proceso: ¿Cómo asignar los recursos entre los proyectos propuestos por los participantes? Para esto se aceptó que cada proyecto fuera evaluado de manera colegiada, utilizando la propuesta de Manejo Sustentable de la Tierra de Julian Dumanski, conforme

el Consejo Distrital de Los Altos de Chiapas”, en T. Trench (coord.), *La dimensión cultural en procesos de desarrollo rural regional: casos del campo mexicano*, México, Universidad Autónoma Chapingo, 2008.

a la cual los consejeros definieron seis criterios de evaluación: viabilidad productiva, viabilidad económica, seguridad social, protección ambiental, aceptación social y aceptación cultural. Estos criterios se desagregaron en 26 subcriterios, mismos que fueron utilizados para evaluar colectivamente los proyectos presentados por los participantes. De esta manera el Manejo Sustentable de la Tierra se constituyó en un discurso legitimador y creador de consensos, tercer elemento de la teoría de la movilización de recursos.

Habiendo identificado las alternativas productivas deseables, se procedió a concluir el Plan de Desarrollo Agropecuario de la Región II Altos, mismo que fue sometido a la consideración del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. El Consejo Estatal puso en tela de juicio el que el proyecto hubiera sido preparado participativamente por *El Consejo*, por lo que pidió una sesión extraordinaria y urgente del mismo. Los representantes del Consejo Estatal se presentaron en sesión plenaria de *El Consejo* para tratar de imponer su propuesta. No obstante, los consejeros defendieron su propuesta, demostrando conocimiento de causa y fuerza social, por lo que finalmente el Consejo Estatal aprobó recursos para *El Consejo*, los cuales, a pesar de corresponder sólo a 10 por ciento de los recursos destinados al desarrollo agropecuario regional, permitieron establecer una serie de parcelas piloto en las que se probaron diferentes vías sociotécnicas para el desarrollo sustentable. Esta confrontación de *El Consejo* constituye un ejemplo del “repertorio de protesta” utilizado.

En su estudio de la experiencia de *El Consejo*, Herrera, Díaz y Puente¹⁶ destacan la importancia de la constitución de un Grupo de Acción Local (GAL), idea que se retomó del proyecto LEADER de la Unión Europea. El GAL se concibe como una organización horizontal donde se agrupan actores públicos y privados, que tienen alguna participación en la economía y el medio ambiente del terri-

¹⁶ Obeimar Balente Herrera, José M. Díaz Puente y Manuel R. Parra Vázquez. “Los determinantes del desarrollo. Un estudio de caso en Chiapas”, en *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, vol. 9, núm. 3, julio-septiembre, 2012, pp. 251-269.

torio. Haciendo uso de sus facultades, *El Consejo* diseñó su propio reglamento y cambió las prácticas ancestrales de comportamiento en estos consejos; un elemento fundamental fue la realización de sesiones mensuales, de manera que de 2001 a 2004 se realizaron más de 40 sesiones, con una participación de unos cuarenta consejeros en cada sesión. El GAL constituyó un núcleo formado por ocho personas, que se encargaron de preparar la información y las condiciones para que en cada sesión *El Consejo* pudiera tomar decisiones plenamente informadas. Y es precisamente esta capacidad de tomar decisiones lo que hace la diferencia con los múltiples consejos que en todo el territorio nacional sólo tienen un carácter consultivo.

El proyecto de diversificación productiva del municipio de Oxchuc. El proceso se condujo siguiendo las pautas de los ciclos de política. A continuación se describe brevemente cada etapa del proceso.

Construcción de la agenda. La propuesta se inició como el trabajo de un ciudadano, a la sazón estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, quien en la coyuntura del cambio de gobierno municipal (2007) logró establecer un acuerdo con el presidente municipal electo, quien buscaba un cambio en su manera de hacer política. El presidente autorizó que el estudiante realizara su tesis de maestría, con la condición de que el trabajo fuera de utilidad para el pueblo. La propuesta del estudiante fue impulsar un proyecto de desarrollo agropecuario, ejecutado directamente por la presidencia municipal.

Diagnóstico. En enero de 2008 tomó posesión el presidente municipal. Con esta base se estableció un convenio de colaboración Presidencia-Ecosur para diseñar un plan de desarrollo agropecuario de manera participativa. Una de las últimas acciones del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Región II Altos fue la realización de un estudio para el desarrollo de la zona cafetalera de la región, mismo que sirvió de base para establecer los lineamientos generales del proyecto. Con base en una zonificación agroecológica, el presidente realizó la selección de las comunidades. A continuación se hicieron tres diagnósticos microrregionales par-

ticipativos, con el enfoque de Medios de Vida Sustentables. El problema principal fue el de los bajos ingresos de los productores, y la variabilidad de los precios del café, por lo que se pensó en establecer un proyecto de diversificación productiva.

Análisis de alternativas. A partir de las ideas del proyecto construidas en los talleres, y la viabilidad agroecológica, económica y organizativa, se definieron posibles cultivos alternativos. Se buscaron posibles experiencias exitosas con esos cultivos en la región. Varios rigidores y miembros de la Dirección de Proyectos Productivos fueron invitados a visitar diversas experiencias en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Teopisca y Zinacantán. Las experiencias que más les llamaron la atención fueron la de producción de durazno diamante y la de producción de aguacate hass. Este punto fue clave para la aprobación de la propuesta por parte del cabildo.

Diseño del plan. Se utilizó como antecedente el análisis de la zona cafetalera de Los Altos, realizado por el Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Región II Altos. Paralelamente se realizó una búsqueda de información documental, y un análisis agroecológico. Con estos materiales se pasó a elaborar la propuesta de desarrollo agropecuario, orientado a impulsar dos sistemas de producción: durazno diamante en la Zona Intermedia y aguacate hass en la Zona Baja del Municipio. El programa fue aprobado por el presidente.

Gestión. La propuesta tenía un costo aproximado de tres millones de pesos, por lo que el presidente propuso que se buscara una mezcla de recursos. Mediante un cabildeo se consiguió el apoyo de la Delegación Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Operativamente se estableció contacto con un PSP acreditado para que se integrara al diseño del plan, en función de los formatos de CDI. Así se aprobó la coinversión municipio/CDI. Respetando las reglas de operación, el municipio abrió una cuenta en la cual depositó su aportación, y CDI depositó la suya. Las responsabilidades quedaron distribuidas de la siguiente manera: *a)* Aportaciones: CDI y Presidencia; *b)* Manejo técnico: Departamento de Desarrollo Agro-

pecuario del Municipio, c) Asesoría técnica y capacitación: Ecosur, y d) Manejo administrativo: administrador del ayuntamiento.

Implantación. Como antecedente se puede señalar que en 2007 Proárbol estableció un proyecto de reforestación con el apoyo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario. En ese caso se compró la planta, se llevó hasta las comunidades, se les pagó a los participantes para que cuidaran las plantas, pero no se realizó ningún monitoreo. La sobrevivencia de las plantas fue prácticamente nula. Lo que sí sobrevivió fue la experiencia, porque en 2008 los productores querían que igualmente se les pagara todo, pero se negaban a realizar sus aportaciones. De aquí nació la convicción de que se tendría que fomentar la corresponsabilidad, la capacitación, y el proceso de planeación participativa. Se procedió a convocar a los representantes comunitarios y se les dio una capacitación para que diseñaran su marco de plantación, excavarán los pozos, rellenarán los pozos con tierra fértil, plantarán los arbolitos y les dieran los cuidados necesarios. Este trabajo corrió a cargo del equipo de Ecosur-Presidencia. Los representantes deberían realizar la demostración de estos procesos a los integrantes de sus grupos de trabajo. Con esta base se preparó la entrega de plantas. Los representantes comunitarios presentaron las siguientes objeciones: a) que se les pagara el transporte de la planta desde la presidencia a sus comunidades; b) que se les pagara para que contrataran a gente que realizara los pozos; c) había problemas para entregar la cantidad de planta pactada, ya que sus tierras eran demasiado pequeñas; d) se mostraron renuentes a la realización del monitoreo, ya que esto es totalmente nuevo para ellos. Se realizó todo un proceso de convencimiento para superar estas objeciones y proceder al establecimiento de las plantaciones.

Monitoreo. Se realizó un primer monitoreo para supervisar que estuvieran preparados los hoyos para recibir las plantas. Este trabajo lo realizó Ecosur con el apoyo de estudiantes del Tecnológico de Comitán y miembros del equipo de la presidencia. A quienes habían preparado sus parcelas se les entregaron las plantas. Luego

se realizó un nuevo monitoreo para evaluar la sobrevivencia de las plantas.

Evaluación. Al concluir el primer año se realizó una reunión para evaluar el trabajo. Se identificó que a lo largo de todo el proceso se dio un proceso de *aprendizaje social*, mediante el cual todos los participantes tuvieron algo que enseñar y algo que aprender. Los productores aprendieron las formas de realizar la planeación participativa y las nuevas técnicas para el manejo de sus plantaciones. El equipo técnico de la presidencia aprendió el diseño y conducción de los procesos de planeación participativa. Los académicos aprendimos que los tiempos comunitarios son lentos, que la estructura de usos y costumbres es complicada y que es necesario conocerla y respetarla, y que en la administración pública persisten problemas de falta de transparencia y corrupción que es necesario superar. Al respecto fue muy importante que en la evaluación se sentaran las bases para la conducción del siguiente ciclo de cultivo, poniendo el acento en superar las deficiencias observadas en el primer año de trabajo.

De 2009 a 2013 se vivió un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los cooperativistas, ya que año con año tenían que aprender nuevos aspectos de la técnica de producción, en condiciones en que se vieron en la necesidad de negociar con los tres sucesivos presidentes municipales (de diferentes partidos políticos) y con CDI los recursos para atender sus plantaciones e introducir mejoras (como la instalación de sistemas de microrriego). Tuvieron también sobre la marcha la oportunidad de viajar a otras regiones de Chiapas y del país para conocer otras experiencias y establecer una red de relaciones técnicas y comerciales. Con todo ello, llegaron finalmente a la convicción de que no podrían avanzar si mantenían su dependencia de los recursos gubernamentales.

A la fecha, a seis años de iniciados los trabajos, los productores que han persistido en su empeño están obteniendo las primeras cosechas, con un valor que excede la inversión realizada en sus parcelas y supera las transferencias que recibieron de parte del gobierno. Han

ampliado su red de relaciones y fundaron ocho pequeñas cooperativas y una caja de ahorro, idea que obtuvieron de un intercambio de experiencias de campesino a campesino con productores zapotecas de San Juan Tabá, Oaxaca.

A partir de estas experiencias y otras similares llegamos a la convicción de que sí es posible establecer un proceso de mejoramiento de los acervos de los hogares y de las comunidades, fortalecer sus capacidades de adaptación, lograr un cambio de actitud —de una reactiva y dependiente a una propositiva e independiente. Al fortalecer los medios de vida de los productores se ha desarrollado su capacidad para enfrentarse a factores de riesgo, tales como la variabilidad de los precios de mercado, el cambio climático y la deforestación.

ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES RURALES EN CONDICIONES DE RIESGO

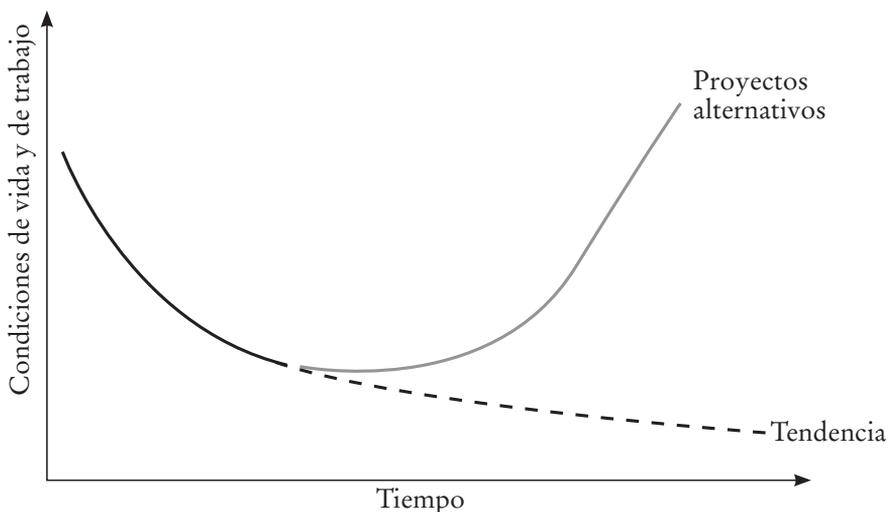
Es evidente que debido a las tendencias de un sistema complejo de variables estructurales, las comunidades rurales sufren un acentuado proceso de deterioro, con una tendencia al agravamiento. El gobierno ha atendido los problemas y las peticiones inmediatas de la población, pero con las políticas macroeconómicas ha propiciado un mayor deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población.

Sara Scherr¹⁷ muestra que esta tendencia mundial ha sido revertida en varias experiencias locales, y se pregunta ¿qué podemos hacer para revertir esta situación?

Ángel Palerm, influyente antropólogo, sostenía que los campesinos podrían adaptarse a un mundo cambiante si se cumplieran tres condiciones: *a*) que el campesino mantuviera el acceso a la tierra, su

¹⁷ Sara Scherr, “A Downward Spiral? Research Evidence on the Relationship between Poverty and Natural Resource Degradation”, en *Food Policy*, vol. 25, núm. 4, 2000, pp. 479-498.

FIGURA 4
TENDENCIA AL DETERIORO Y POSIBILIDADES DE CAMBIO



FUENTE: modificado de Scherr (2000).

principal medio de producción; *b*) que el campesino conservara el control sobre su propia fuerza de trabajo, y *c*) que sus formas de producción mantuvieran algunas ventajas comparativas con las formas capitalistas de producción.¹⁸ Ahora coincidimos con McDowell y Hess¹⁹ cuando dicen que sólo podremos reducir la vulnerabilidad cuando aseguremos que los hogares tengan acceso sostenido a los recursos clave, para que tengan la capacidad y la flexibilidad para responder a los múltiples factores de riesgo.

La posibilidad de atender los problemas de fondo se basa en el contacto directo de la población, lo cual sólo puede ocurrir si se da una descentralización efectiva que transfiera las capacidades y los recursos a los diferentes niveles de gobierno. En la experiencia del

¹⁸ Ángel Palerm, “Antropólogos y campesinos: los límites del capitalismo”, en Ángel Palerm, *Antropología y marxismo*, México, Nueva Imagen, 1980.

¹⁹ Julia Z. McDowell y Jeremy J. Hess, “Accessing Adaptation: Multiple Stressors on Livelihoods in the Bolivian Highlands under a Changing Climate”, en *Global Environmental Change*, vol. 22, núm. 2, mayo de 2012, pp. 342-352.

Consejo de la Región II Altos, los consejeros tomaron en serio su papel sólo en el momento en que supieron que existía un techo financiero que podría ser operado por ellos mediante la aplicación de reglas claras. Esta posible descentralización nos lleva a pensar en las diferentes alternativas para conducir un gobierno descentralizado.

El desarrollo local ha sido la respuesta conceptual para superar el “síndrome de inmunodeficiencia social” auspiciado por gobiernos centralizados,²⁰ pero el consenso alcanzado en el nivel conceptual no ha logrado consolidarse a nivel instrumental y metodológico; es decir, en cómo llevar a cabo el desarrollo de los territorios. En un primer momento se promovió el desarrollo local desde los gobiernos centrales (desde arriba); pero persistió la rigidez e inflexibilidad, lo que dio lugar a una limitada capacidad de participación para que la gente pudiera tomar sus propias decisiones. Por otro lado, esta estrategia no fomentó las capacidades empresariales, además de no dar solución a los problemas locales como el desempleo y el desarrollo de capacidades de innovación.²¹ Posteriormente se impulsó la propuesta de desarrollo local empresarial, que se fundamentó en la innovación y la capacidad empresarial individual pero, según Farrel *et al.*,²² fue insuficiente al requerirse también el desarrollo de la empresarialidad social, también denominada competitividad territorial.

También cobró fuerza la propuesta de desarrollo local endógeno (desde abajo) que se centró en la movilización de las capacidades de

²⁰ Walter Stöhr, “Estrategias de desarrollo local para hacer frente a la crisis local”, en revista *EURE*, vol. XVIII, núm. 55, noviembre de 1992, pp. 5-11.

²¹ *Idem*; Antonio Vázquez, “Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Agencia de Cooperación Alemana, Santiago de Chile, 2000, p. 50; Francisco Alburquerque, 2004, “Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”, *Revista de la CEPAL*, vol. 82, abril de 2004, pp. 158-171.

²² Gilda Farrell, Samuel Thirion y Paul Soto, “La competitividad territorial, construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la experiencia de LEADER”, en *Observatorio Europeo de Innovación y Desarrollo Rural*, núm. 6, fascículo 1, diciembre de 1999.

la población y en un eficiente aprovechamiento de los recursos del territorio. El desarrollo endógeno fue ampliamente aceptado por organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, diferentes autores²³ señalan que habría que sumarle las oportunidades externas y la negociación con agentes de diferentes niveles para tener mejores resultados. Según Herrera, Díaz y Parra,²⁴ estos enfoques no son excluyentes, sino complementarios entre sí para dar origen a lo que hoy se denomina desarrollo local en red, fórmula de acción que fomenta la colaboración de las dependencias gubernamentales con los distintos actores presentes en el territorio. La experiencia del proyecto de diversificación productiva de Oxchuc nos muestra que sí es posible establecer redes de colaboración que involucren a actores comunitarios, municipales y federales, mediante mecanismos que aseguren la respuesta oportuna a los problemas planteados por las comunidades.

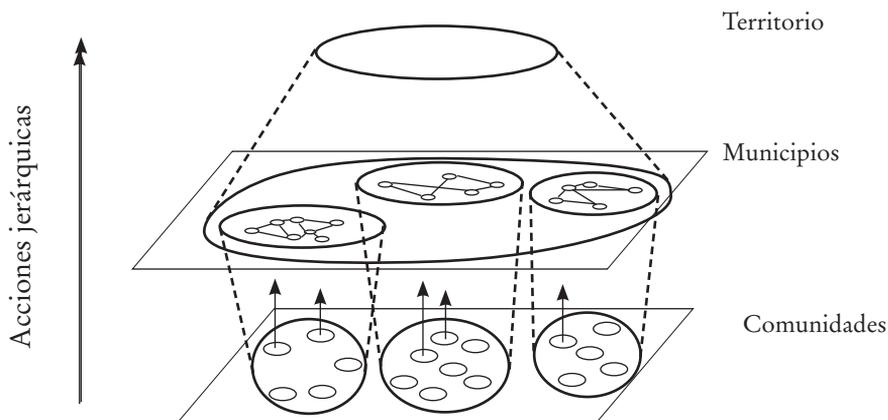
Una primera propuesta para la renovación de las políticas gubernamentales se orienta al reconocimiento de que es necesaria una estructura jerárquica que recoja las demandas de la gente en un sistema jerárquico y le dé a la población la posibilidad de participar de manera efectiva; es decir, con capacidad de tomar decisiones, en organismos colegiados de diferentes escalas. Para esto se puede recurrir a las leyes y estructuras ya establecidas, como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, como lo muestra la experiencia del Consejo de la Región II Altos. También hay que considerar la existencia de un posible cuarto orden de gobierno, como ocurre con la comunidad oaxaqueña (véase la figura 5).

La posibilidad de alcanzar el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los hogares y las comunidades sólo puede darse me-

²³ Christopher Ray, "Territory, Structures and Interpretation: Two Cases Studies of the European Union's LEADER I Programme", en *Journal of Rural Studies*, vol. 14, núm. 1, enero de 1998, pp. 79-87; Michael Barke y Michael Newton, "The EU LEADER Initiative and Endogenous Rural Development: The Application of the Programme in Two Rural Areas of Andalusia, Southern Spain", en *Journal of Rural Studies*, vol. 13, núm. 3, julio de 1997, pp. 319-341.

²⁴ Herrera, Díaz y Parra, *op. cit.*

FIGURA 5
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL



FUENTE: modificado de Geels (2004).

diante un cambio en la lógica de conducción de los procesos de desarrollo (véase la tabla 3). A la fecha priva la lógica de la *gestión*, misma que es operada por agencias de desarrollo preocupadas por conseguir un grupo peticionista, elaborar en su nombre un expediente que es sometido a la consideración de una dependencia financiadora, para obtener los recursos y distribuirlos entre los participantes. Este modelo ha generado un sinnúmero de obras civiles inoperantes.

Para operar con eficiencia y eficacia, y conseguir la verdadera participación de la gente, es mejor conducir los procesos locales mediante la lógica de *animación*, la cual busca fortalecer los acervos y capacidades de los participantes mediante la dinamización de acciones colectivas y el impulso a innovaciones socioambientales, acciones que deben acordarse en espacio de diálogo y consenso, enfocadas a tomar decisiones colegiadas acerca de la solución de los problemas fundamentales del territorio, tales como la protección ambiental, la conformación de hogares sustentables, el mejoramiento del capital físico, la capacitación de las personas y la conformación de cooperativas, cajas de ahorro y empresas sociales. Ninguna de estas

ideas es nueva, pero las experiencias conducidas de manera vertical y autoritaria han fracasado, en tanto que las experiencias conducidas participativamente han prevalecido.

TABLA 3
LÓGICAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO

<i>Crterios</i>	<i>Gestión</i>	<i>Animación</i>
Lógicas	Presentar un expediente elegible	Ampliar la base del desarrollo
Resultados esperados	Ejecutar un programa	Innovar y dinamizar
Participación	Cooperación cerrada entre varios actores	Apertura razonada en torno a ideas y temas
Fines	Obtener, repartir y gastar una asignación financiera	Identificar y movilizar a los agentes locales

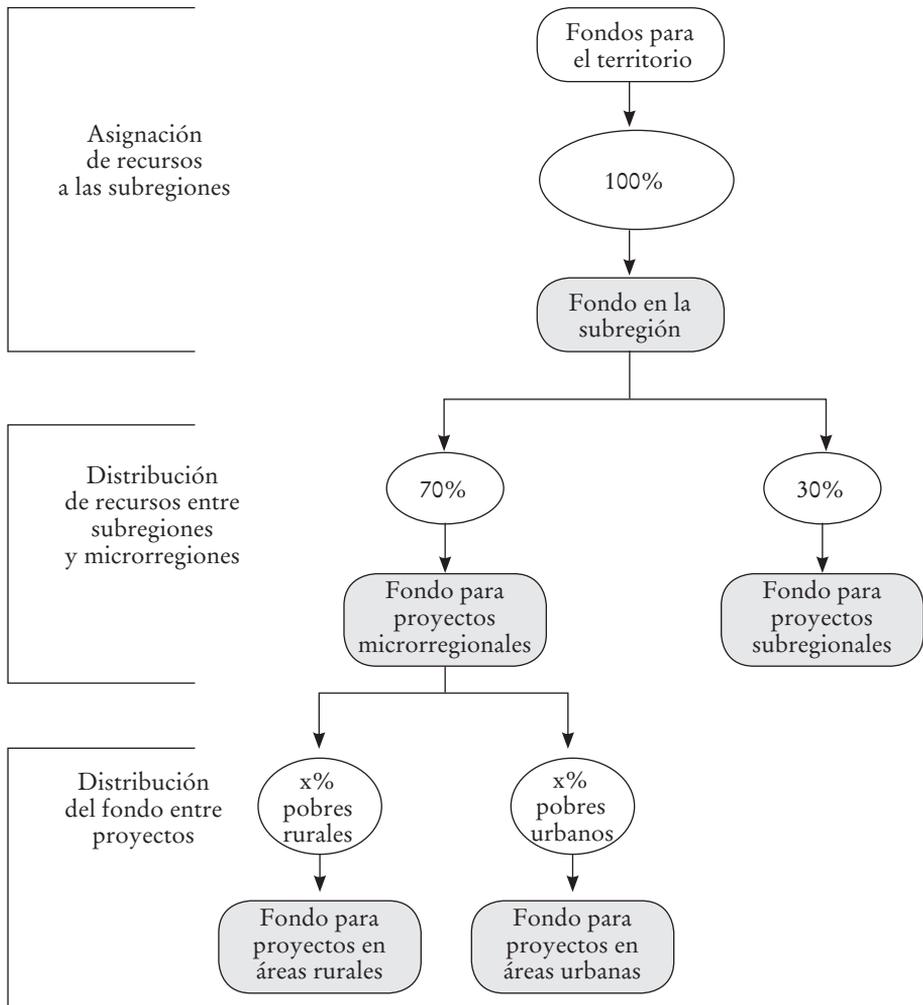
FUENTE: modificado de Caspar, Farrell y Thirion (1997).

El impulso a estos procesos locales puede ser conducido mediante una organización flexible, impulsada y cuidada por los grupos de acción local. Estos equipos de actores locales, funcionando mediante una estructura de red, tienen capacidad de convocatoria a nivel local y son capaces de establecer redes de colaboración con actores externos.

Las poblaciones vulnerables presentan múltiples carencias, todas las cuales requieren de una atención inmediata. Pero esta integralidad con la que funcionan las familias rurales es incompatible con el sistema sectorial con el que trabajan las agencias gubernamentales. Cada sector de la administración pública es regido por sus reglas de operación, las cuales son inamovibles porque han sido “sugeridas” por organismos financieros internacionales al gobierno nacional. De manera que para gestionar sus necesidades un hogar tiene ante sí al menos a cuarenta dependencias gubernamentales, por lo que cuando se proponen “bajar” algunos recursos tienen costos de transacción muy altos.

Una estructura organizativa que anime la participación social sólo puede funcionar si cuenta con los recursos necesarios para trabajar. Los fondos destinados a los territorios sólo operarán eficientemente si se establecen reglas claras para la distribución y ejercicio de los recursos (véase la figura 6).

FIGURA 6
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TERRITORIALES



Esta manera de organizar la distribución de los fondos también ha existido en el pasado, pero la forma burocrática, poco transparente y discrecional de ejercerlos, ha cancelado sus posibilidades de éxito. La experiencia nos muestra que la construcción colectiva de criterios para la asignación de los recursos y la participación colectiva en la realización de la ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos genera confianza, respeto y un proceso mediante el cual la gente se apropia de los proyectos.

El fundamento de todos estos procesos se encuentra en la innovación socioambiental y en la construcción de capacidades de las personas, los hogares y las comunidades. Para lograr el cambio se requieren ideas frescas, las cuales pueden venir de las propias comunidades o de experiencias exitosas realizadas por campesinos, ganaderos, pescadores o artesanos de otras regiones. También pueden venir de los centros académicos o de organismos nacionales o internacionales interesados en el fortalecimiento de las capacidades locales.

La participación horizontal de estos diferentes actores permite una apropiación del conocimiento socialmente distribuida. La incorporación de los múltiples actores al proceso de innovación socioambiental genera un aprendizaje social mediante el cual a lo largo de cada ciclo de planeación todos los participantes van aprendiendo algo, mejorando de manera continua su desempeño.

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y LA POLÍTICA PÚBLICA¹

Héctor Manuel Robles Berlanga

INTRODUCCIÓN

La presente nota identifica los programas de gobierno que tienen como sujeto de atención a los pequeños productores agrícolas y campesinos con la finalidad de conocer los tipos de apoyos, la concordancia o duplicidad de acciones, la concurrencia y los problemas que se quieren atender con la oferta programática institucional; así como aportar elementos para una propuesta de acción gubernamental que atienda a los pequeños productores.

El texto se divide en tres apartados. En el primero se presentan datos sobre la importancia de la pequeña agricultura en nuestro país, como forma predominante respecto al número de productores, como la principal generadora de empleos familiares y contratados, con un aporte significativo a la producción nacional de alimentos y como abastecedora de materias primas para la agroindustria. Todos estos aportes se realizan en 16 por ciento de la superficie agrícola y con muy pocos subsidios de la vertiente productiva.

El segundo apartado presenta algunos rasgos que distinguen el ejercicio del presupuesto en México, especialmente el que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Se habla de la concentración de los subsidios productivos en algunas entidades del país; a quiénes benefician los subsidios productivos, las bajas coberturas de los programas, en detrimento de los pequeños productores; la falta de

¹ Documento elaborado para RIMISP en el marco del proyecto “Asistencia técnica para elaborar una propuesta de estrategia y programa para mejorar la calidad del gasto público dirigido a aumentar la productividad, la producción y el ingreso de pequeños productores agrícolas y campesinos”, México, 2013.

fomento de las actividades productivas en los estados pobres del país; que el presupuesto no favorece a los pueblos indígenas; la duplicidad y falta de claridad en la oferta programática institucional, y lo limitado de las acciones que tienen que ver con desarrollo de capacidades.

El tercer apartado identifica los programas que tienen que ver con los pequeños productores, a partir del fin y propósito de cada programa, de su población objetivo (PO), las figuras asociativas que deben conformar para acceder a los recursos; las entidades ejecutoras del gasto, la población atendida en 2012 y el presupuesto asignado 2013. El ejercicio permitió identificar 20 programas. Además, se anexó un punto que tiene que ver con los programas de medio ambiente para tratar de buscar la complementariedad con un programa en apoyo a los pequeños productores.

IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA

La pequeña unidad es predominante en el campo mexicano. De acuerdo con distintos organismos multinacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Mundial (BM) e investigadores del sector agropecuario, la pequeña agricultura tiene una enorme importancia en la economía agropecuaria de los países. Como lo reporta el Censo Agrícola y Ganadero 2007, que levantó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es especialmente importante en México; de las 4 millones 69 mil 938 unidades de producción (UP) con actividad agropecuaria o forestal, 67.8 por ciento son menores o iguales a cinco hectáreas.

Es la unidad de producción que más ha crecido en el país. Las UP menores a cinco hectáreas, en lugar de disminuir en el transcurso del tiempo como se pretendió con muchas políticas agrarias, se han multiplicado su crecimiento: en 80 años fue de 708.7 por ciento, al pasar

CUADRO I
UNIDADES DE PRODUCCIÓN TOTALES Y CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Y FORESTAL POR TAMAÑO DE PREDIO

<i>Tamaño de predio</i>	<i>UP</i>	<i>Hectáreas</i>	<i>Con actividad agropecuaria y forestal</i>		
			<i>UP</i>	<i>%</i>	<i>Hectáreas</i>
Hasta 1 ha.	1 533 327	992 890	1 125 020	27.64	765 865
Más de 1 hasta 2 ha.	882 389	1 539 236	674 831	16.58	1 210 004
Más de 2 hasta 5 ha.	1 270 515	4 511 651	961 931	23.64	3 457 323
Más de 5 hasta 10 ha.	807 668	6 093 711	595 064	14.62	4 513 579
Más de 10 hasta 20 ha.	490 310	7 279 716	348 666	8.57	5 226 142
Más de 20 hasta 50 ha.	319 627	10 077 746	217 310	5.34	6 865 140
Más de 50 hasta 100 ha.	120 722	8 702 408	77 963	1.92	5 623 535
Más de 100 hasta 1 000 ha.	111 776	29 291 866	62 524	1.54	16 157 343
Más de 1 000 hasta 2 500 ha.	7 364	11 620 392	3 772	0.09	5 967 642
Más de 2 500 ha.	5 147	32 239 493	2 857	0.07	18 649 030
Total	5 548 845	112 349 110	4 069 938	100.00	68 435 603
					100.00
					27.25
					1.12
					1.77
					5.05
					6.60
					7.64
					10.03
					8.22
					23.61
					8.72
					27.25

FUENTE: INEGI, Censo Agrícola Ganadero 2007.

de 332 mil que existían en 1930, a 2.6 millones de unidades en 2007, lo que la convierte en la característica que distingue a los productores de nuestro país.

CUADRO 2
COMPARATIVO UNIDADES DE PRODUCCIÓN
CON MENOS DE 5 HECTÁREAS
1930-2007

<i>Año</i>	<i>UP</i>	<i>Menos de 5 ha</i>	<i>%</i>
1930	614 101	332 439	54.1
1940	858 209	567 874	66.1
1950	1 383 212	1 004 839	72.6
1960	1 220 324	928 757	76.1
1970	846 994	567 129	67.0
1980	3 062 950	1 792 654	58.5
1990	3 504 510	2 114 622	60.3
2007	4 069 938	2 688 611	67.8

FUENTE: INEGI, I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII Censo Agrícola Ganadero.

Produce una parte muy significativa de nuestros alimentos y tiene una fuerte presencia en la producción de maíz y frijol. A pesar de sus condiciones precarias para producir y a la falta de apoyos económicos gubernamentales, la pequeña agricultura tiene una enorme importancia en la economía agropecuaria de México, pues representa 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional.² Además, siete de cada diez productores de maíz (blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol tienen menos de cinco hectáreas. Los pequeños productores son mayoría en la producción de maíz y frijol, principales cultivos en nuestra dieta, los encontramos prácticamente en todo

² *Aportes del IICA a la gestión del conocimiento de la agricultura en México*, México, IICA, 2012, p. 75.

el país, en los distintos climas, en condiciones orográficas contrastantes y con sistemas de producción muy diversos entre sí.

CUADRO 3
PRODUCTORES DE MAÍZ AMARILLO Y BLANCO Y FRIJOL
POR TAMAÑO DE PREDIO

<i>Cultivo</i>	<i>Predio</i>	<i>UP</i>	<i>%</i>
Maíz amarillo	Total	510 311	100.00
	Hasta 5 ha	374 372	73.4
	Más de 5 hasta 10 ha	66 152	13.0
	Más de 10 ha	69 787	13.7
Maíz blanco	Total	2 283 629	100.00
	Hasta 5 ha	1 610 275	70.5
	Más de 5 hasta 10 ha	336 272	14.7
	Más de 10 ha	337 082	14.8
Frijol	Total	622 264	100.00
	Hasta 5 ha	377 227	60.62
	Más de 5 hasta 10 ha	121 394	19.51
	Más de 10 ha	123 643	19.87

FUENTE: INEGI, Censo Agrícola Ganadero 2007.

Generan la mayor parte del empleo agropecuario. Las UP menores a cinco hectáreas generan 56.8 por ciento de los empleos del sector, tanto familiares como contratados. Si les sumamos las UP de hasta diez hectáreas llegan a 74.1 por ciento. Es decir, tres de cada cuatro empleos se localizan en la pequeña y mediana agricultura mientras que en las UP mayores o iguales a 100 ha sólo contratan a 7.9 por ciento de los trabajadores agrícolas.

Es la UP predominante en los 400 municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). De acuerdo con el decreto, la Cruzada contra el Hambre y la Pobreza Extrema es una estrategia de

CUADRO 4
EMPLEO FAMILIAR Y CONTRATADO POR TAMAÑO DE PREDIO

<i>Tamaño de predio</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Trabajo familiar</i>	<i>%</i>	<i>Contratado</i>	<i>%</i>
Hasta 2 ha	3 371 142	39.0	1 786 586	50.9	1 584 556	30.8
Más de 2 hasta 5 ha	2 113 675	24.4	779 256	22.2	1 334 419	26.0
Más de 5 hasta 20 ha	2 127 215	24.6	692 538	19.7	1 434 677	27.9
Más de 20 hasta 50 ha	534 059	6.2	153 517	4.4	380 542	7.4
Más de 50 hasta 100 ha	229 432	2.7	54 801	1.6	174 631	3.4
Más de 100 hasta 1 000 ha	248 697	2.9	41 319	1.2	207 378	4.0
Más de 1 000 hasta 2 500 ha	15 097	0.2	1 715	0.0	13 382	0.3
Más de 2 500 ha	11 022	0.1	820	0.0	10 202	0.2
Total	8 650 339	100.0	3 510 552	100.0	5 139 787	100.0

FUENTE: INEGI, Censo Agrícola Ganadero 2007.

inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales.

En los 400 municipios donde se iniciará la CNCH, la UP predominante es la de los pequeños productores: del millón 313 mil UP que registró el Censo Agrícola Ganadero 2007, 961 mil tienen menos de cinco hectáreas, lo que representa 73.2 por ciento del total de productores, de ahí que cualquier acción de gobierno en estos municipios debe considerar como prioritarias a las pequeñas unidades de producción.

Importantes abastecedores de la agroindustria. Robles (2012), en la revisión documental que realizó para el estudio “Dinámica del mercado de tierras en América Latina y el Caribe”, encontró:

CUADRO 5
UP CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL
EN LOS 400 MUNICIPIOS DE LA CNCH

<i>Tamaño de predio</i>	<i>UP</i>		<i>Superficie</i>	
	<i>Número</i>	<i>%</i>	<i>Ha</i>	<i>%</i>
Hasta 1 ha	411 043	31.3	288 384	2.2
Más de 1 hasta 2 ha	239 494	18.2	435 965	3.3
Más de 2 hasta 5 ha	311 327	23.7	1 124 612	8.5
Más de 5 hasta 10 ha	169 723	12.9	1 308 508	9.9
Más de 10 hasta 20 ha	100 466	7.6	1 545 755	11.7
Más de 20 hasta 50 ha	55 307	4.2	1 747 047	13.3
Más de 50 hasta 100 ha	16 757	1.3	1 258 519	9.6
Más de 100 hasta 1 000 ha	8 867	0.7	2 568 683	19.5
Más de 1 000 hasta 2 500 ha	367	0.0	829 445	6.3
Más de 2 500 ha	275	0.0	2 065 790	15.7
Total	1 313 626	100.0	13 172 707	100.0

FUENTE: INEGI, Censo Agrícola Ganadero 2007.

[...] distintos tipos de agroindustria que se relacionan de diversas maneras con los productores: a) agroindustrias donde sus socios no son propietarios de tierra y sólo compran materias primas; b) grandes y medianos productores tecnificados que son parte de la empresa y operan como empresarios y productores; c) empresas que establecen, con los productores primarios, convenios de abastecimiento de materias primas, y d) productores de pequeña escala, que venden a intermediarios su producción para abastecer a la agroindustria [...] Uno de los resultados que resaltan del estudio es que la mayoría de los productores ligados a la agroindustria son minifundistas. Los maiceros tienen 2.7 hectáreas en promedio por productor; caña de azúcar, cinco hectáreas; hortalizas, seis hectáreas; frutas cinco hectáreas o menos; café, 1.9 hectáreas; cebada, seis hectáreas, y tabaco dos hectáreas.³

Propietarios grandes: principales beneficiarios de los subsidios. El ejercicio del gasto por parte de Sagarpa tiende a favorecer a productores de mayor escala productiva. Existe una relación directa entre ambas variables: a mayor tamaño de predio una mayor asignación presupuestal para las actividades productivas. A las entidades del norte del país, donde el productor es dueño de predios más grandes, se asignó mayor presupuesto mientras que a las entidades del centro del país y Oaxaca, donde los productores son de pequeña escala, les correspondió menos presupuesto.

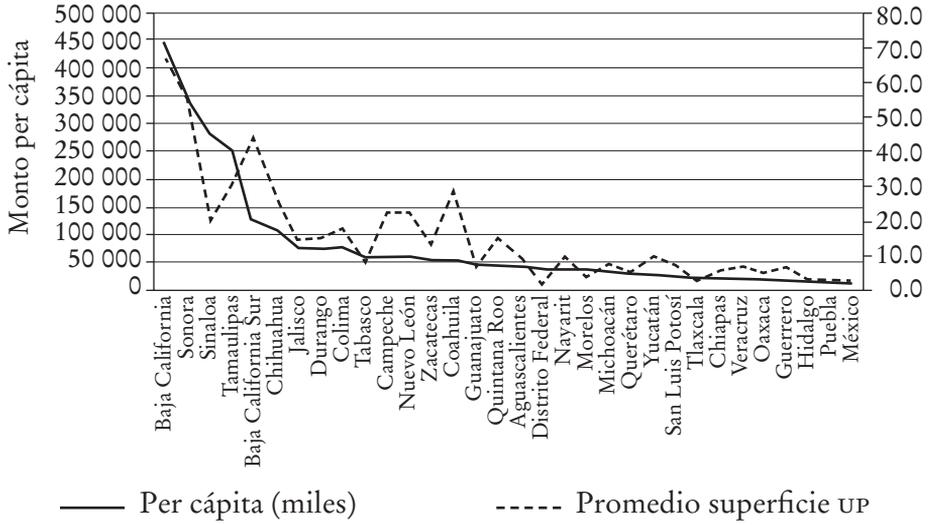
PROBLEMAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO⁴

Concentración de los subsidios productivos en entidades del norte del país. Como se puede ver en la gráfica 2, cinco de las 32 entidades

³ Héctor Robles, “El caso de México”, en *Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*, México, FAO, 2012, p. 337.

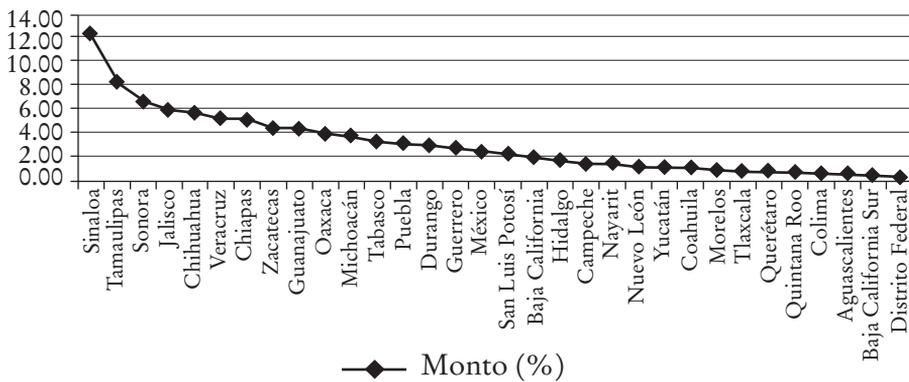
⁴ Los datos de este apartado vienen de dos textos de Héctor Robles, “Ejercicio del presupuesto de Sagarpa por programa y entidad federativa” y “Presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural y su comportamiento histórico 2003-2013”, elaborados para la página web <www.subsidiosalcampo.org.mx>.

GRÁFICA 1
PRESUPUESTO PER CÁPITA POR UP *VERSUS*
SUPERFICIE PROMEDIO POR UP



FUENTE: Héctor Robles, “Ejercicio del presupuesto de Sagarpa por programa y entidad federativa”, en <www.subsidiosalcampo.org.mx>, 2013.

GRÁFICA 2
MONTO EJERCIDO POR SAGARPA 2007-2010



FUENTE: Héctor Robles, “Ejercicio del presupuesto de Sagarpa por programa y entidad federativa”, en <www.subsidiosalcampo.org.mx>.

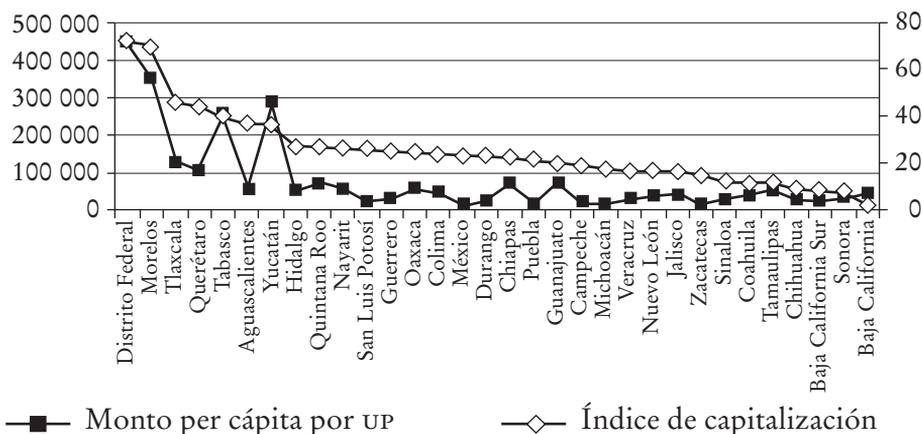
del país ejercieron casi 40 por ciento del presupuesto: Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua, mientras que el resto ejercieron el 60 por ciento. Se puede hablar de una concentración de los recursos productivos en muy pocas entidades que favorece el desarrollo de sus actividades agropecuarias, mientras que otras regiones del país cuentan con muy pocos estímulos para el impulso de su sector primario.

Productores capitalizados: los más beneficiados por Sagarpa. Esta Secretaría tiene como fin contribuir a mejorar el ingreso de los productores agrícolas mediante la transferencia de recursos en apoyo de su economía. Además, con la expedición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), se buscó que los programas de gobierno coadyuvaran a resolver alguna limitante productiva y mejorar las condiciones de vida de los productores rurales, especialmente de los más pobres. Al analizar el ejercicio del presupuesto ejercido por Sagarpa en el periodo 2007-2010 se encontró que a los productores que más se apoyó fue a aquellos con predios más grandes y capitalizados, como se puede ver en la gráfica 3.

En el mismo sentido, John Scott (2010)⁵ concluye que los datos revelan concentraciones extremas de los beneficios para todos los programas, con excepción de Procampo, en el ordenamiento ajustado por calidad de la tierra. El decil de los productores más pobres (en ambos ordenamientos) recibe una décima de punto porcentual de Ingreso Objetivo, fracción igualmente insignificante de subsidios de energía/irrigación, y sólo entre dos y tres por ciento de Procampo. En otro extremo, los productores en el decil superior reciben una tajada de transferencias equivalente a: *a)* 42 por ciento de Procampo (33 por ciento ajustado), *b)* 55 por ciento de Alianza, *c)* 60 por ciento de los recursos de energía e hídricos, y *d)* 85 por ciento (90 por ciento) de Ingreso Objetivo.

⁵ John Scott, "Subsidios agrícolas en México: ¿quién gana, y cuánto?", en J. Fox y L. Haight (coords.), *Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio*, Santa Cruz/México, Woodrow Wilson International Center for Scholars/Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2010.

GRÁFICA 3
SAGARPA, ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN *VERSUS*
MONTO PRESUPUESTO PER CÁPITA POR UP



FUENTE: Héctor Robles, “Ejercicio del presupuesto de Sagarpa por programa y entidad federativa”, en <www.subsidiosalcampo.org.mx>.

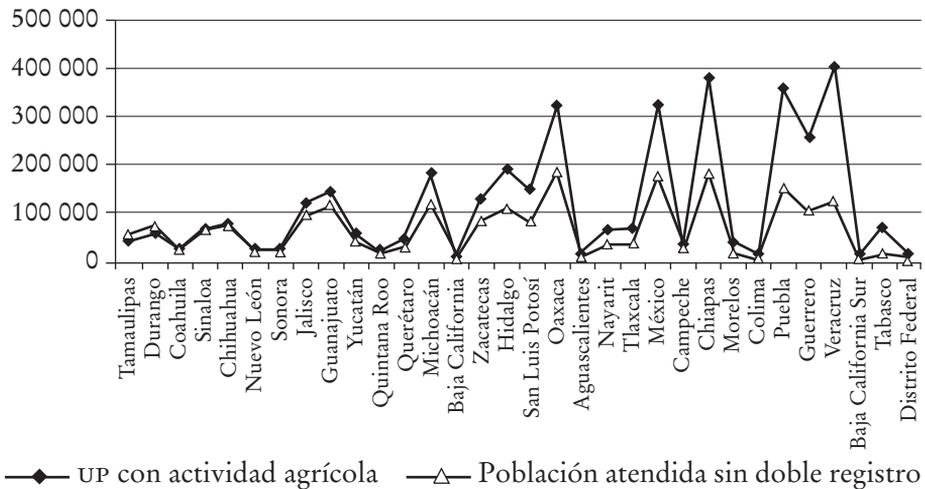
Un análisis económico reciente del Banco Mundial⁶ señala que “el gasto en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural [...] porque más de la mitad se concentra en el decil más rico”. Así que la aguda concentración de los subsidios agrícolas (excepción hecha de Procampo) en unas cuantas manos, ya privilegiadas, está agudizando la desigualdad.

Bajas coberturas de los programas y en detrimento de los pequeños productores. Al retomar los datos del Censo Agrícola Ganadero 2007, referente al total de las UP con actividad agrícola (tres millones 755 mil) que pudieran beneficiarse del programa y cruzarlo con los beneficiarios sin registro repetido de Procampo (dos millones 140 mil en el mismo año), considerando la cobertura sin repetición (57 por ciento) se observa que en siete entidades (Tamaulipas, Durango, Coa-

⁶ Jonathan Fox y Libby Haight, “Síntesis de hallazgos: tendencias en la política de subsidios agrícolas”, en Fox y Haight, *Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio*, op. cit.

huila, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco), los beneficiarios son casi la totalidad de los productores existentes en la entidad; en las entidades donde el programa no alcanzó a cubrir a la mitad de las UP, en algunos casos corresponden a regiones con alta marginación en zonas rurales, con presencia de población indígena o pequeños productores (Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos y Guerrero), y si bien Procampo es de los programa de esta secretaría con la mejor cobertura, igual se caracteriza por la regresividad en la distribución de los apoyos.

GRÁFICA 4
COMPARATIVO BENEFICIARIOS
PROCAMPO *VERSUS* UP CON ACTIVIDAD AGRÍCOLA

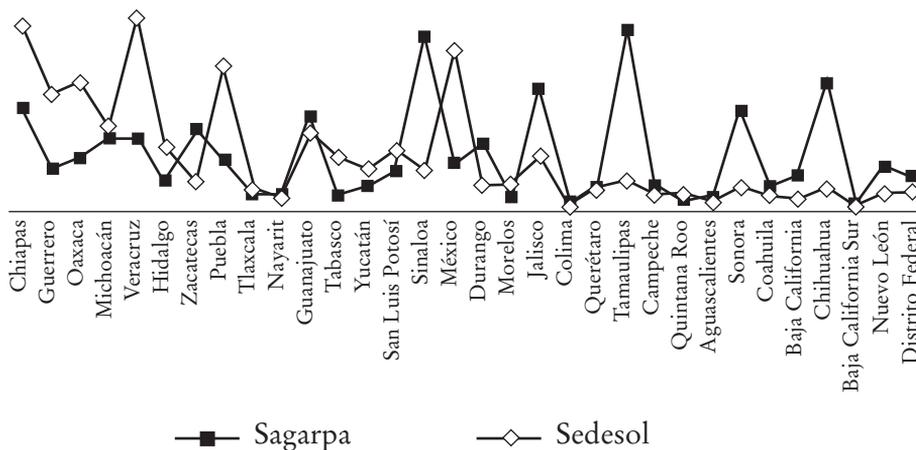


FUENTE: Héctor Robles, “Ejercicio del presupuesto de Sagarpa por programa y entidad federativa”, en <www.subsidiosalcampo.org.mx>.

No se fomentan las actividades productivas en los estados pobres del país. A las entidades más pobres se les distribuyen pocos recursos de la vertiente de competitividad y predominan los apoyos de combate a la pobreza. Es decir, la política pública pretende superar la pobreza sobre la base de apoyos asistenciales y no fomentando las actividades productivas, lo que se observa al cruzar la información

del presupuesto ejercido por Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y ordenando a las entidades federativas con base en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

GRÁFICA 5
COMPARATIVO EJERCICIO PRESUPUESTO Sagarpa-SEDESOL
ORDENADO POR IDH



FUENTE: Héctor Robles, “Presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural y su comportamiento histórico 2003-2013”, en <www.subsidiosalcampo.org.mx>.

El presupuesto no favorece a los pueblos indígenas. La mayoría de los programas que componen el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) se encuentran ausentes de los municipios indígenas, la mayor parte de lo que sí les llega es gasto para asistencia social e infraestructura local, pero no gasto para la agricultura. Por ejemplo, Oportunidades y las tiendas comunitarias de alimentos Diconsa tienen una amplia cobertura en los municipios indígenas. En contraste, el gasto agrícola se queda corto. Aunque Procampo se diseñó para llegar a los productores más pequeños, se informó que solamente 12.4 por ciento del gasto en agricultura llegaba a los “municipios indígenas”.

CUADRO 6
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO PRINCIPALES VERTIENTES 2007
(PORCENTAJE)

<i>Tipos de municipio</i>	<i>Indígena</i>	<i>Con presencia indígena</i>	<i>Población indígena dispersa</i>	<i>Sin población indígena</i>	<i>Total</i>
Social	53.1	39.0	37.8	29.9	41.4
Infraestructura	27.3	28.7	22.4	14.2	24.9
Medio ambiente	6.2	9.5	12.0	18.0	10.2
Financiera	0.1	1.3	0.3	3.9	0.6
Competitividad	12.4	21.1	26.8	32.0	22.4
Laboral	0.9	0.4	0.7	2.0	0.6
PEC	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Héctor Robles, “Apuntes sobre el ejercicio del presupuesto 2007”, CEDRSSA/CESANR/INV/009/09, núm. 7, abril de 2009.

Duplicidad y falta de claridad en la oferta programática institucional. Las evaluaciones de consistencia y resultados que coordina el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) incluyeron la pregunta 13 ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? Rangel retoma la pregunta y elabora el siguiente cuadro que permite ver la duplicidad de los programas.⁷

A las mismas conclusiones se llegó en un estudio de la FAO-Sagarpa,⁸ identificando programas con propósitos similares en dos grandes rubros: bajos niveles de productividad y acceso limitado al mercado de los productos agropecuarios y pesqueros. De acuerdo con este documento el rubro

⁷ Gabriela Rangel, ponencia Duplicidades en el Programa Especial Concurrente. Seminario Políticas Públicas en el Ámbito Rural, México, 22 de noviembre de 2012.

⁸ FAO-Sagarpa, “Análisis de correspondencia entre las intervenciones de la política pública y la problemática sectorial identificada”, vol. XIV, México, FAO-Sagarpa, 2011.

[...] bajos niveles de productividad de las Unidades Económicas Rurales (UER) [...] es atendido por 16 programas de seis secretarías distintas. Sobresale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con nueve programas que atienden esta causa, aquí se incluye a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).⁹

El acceso limitado al mercado de productos agropecuarios y pesqueros es atendido por 13 programas de cinco secretarías distintas. Una buena parte de estos programas busca incidir en la organización de los productores y en mejorar la comercialización de los productos agropecuarios y pesqueros.

Aunado al problema de duplicidad, se tiene que no hay correspondencia entre las salidas programáticas de varias instituciones y el anexo del PEC que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se publica año con año. Lo anterior es muy evidente en lo reportado por Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en sus portales o en sus informes a la SHCP, donde informan de una manera distinta a lo registrado en el PEC.

Falta de un programa de desarrollo de capacidades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico¹⁰ y el Centro de Investigación en Estudios Antropológicos y Sociales¹¹ concluyeron en sus respectivas evaluaciones que en México no hay un servicio de extensión agrícola. Lo que existe es que los productores cuentan con asistencia técnica al acceder a distintos programas de la Sagarpa. Además, el programa no otorga servicios sino recursos para que los productores contraten servicios de transferencia de tecnología, capacitación en procesos organizativos y gerenciales, realicen gestiones, por citar algunos.

⁹ En el presupuesto los programas de la CDI se agrupan en la SHCP; por eso en el estudio de la FAO-Sagarpa aparece esta secretaría con nueve programas.

¹⁰ OCDE, "Análisis del extensionismo agrícola en México", París, 2011.

¹¹ Guadalupe Rodríguez (coord.), *Evaluación de Consistencia y Resultados. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 2011*, México, CIESAS, 2012.

CUADRO 7
DUPLICIDAD PROGRAMAS DEL PEC

<i>Programas</i>	<i>Sustentabilidad Recursos Naturales</i>	<i>Procampo</i>	<i>PMR</i>	<i>AIEI</i>	<i>DCITER</i>	<i>PROMUSAG</i>	<i>FAPPA</i>	<i>JEYFR</i>	<i>Fommur</i>	<i>Fondo Pyme</i>	<i>FONAES</i>	<i>POPMI</i>	<i>Procapa</i>	<i>PTAZI</i>	<i>FRI</i>	<i>Fonart</i>	<i>POP</i>
Sustentabilidad de Recursos Naturales		1		1	1												1
Apoyo al Ingreso Agropecuario: Procampo para Vivir Mejor	1			1		1	1	1			1	1	1				1
Prevención y Manejo de Riesgos (PMR)				1													
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (AIEI)	1	1	1			1	1	1			1	1	1				1
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensismo Rural (DCITER)	1					1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Promusag		1		1	1						1						
FAPPA		1		1	1			1			1		1				1
JEYFR		1		1	1						1	1	1				1
Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur)					1						1	1					1

CUADRO 7 (CONTINUACIÓN)

<i>Programas</i>	<i>Sustentabilidad Recursos Naturales</i>	<i>Procampo</i>	<i>PMR</i>	<i>AMEI</i>	<i>DCITER</i>	<i>PROMUSAG</i>	<i>FAPPA</i>	<i>JEYFR</i>	<i>Fommu</i>	<i>Fondo Pyme</i>	<i>FONAES</i>	<i>POPMI</i>	<i>Procapi</i>	<i>PTAZI</i>	<i>FRI</i>	<i>Fonart</i>	<i>POP</i>
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme)											1				1		1
FONAES		1		1	1	1	1	1	1	1	1						1
Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)		1		1	1			1	1						1		
Coordinación para el Apoyo a la Productividad Indígena (Procapi)		1		1	1		1	1							1		1
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)					1												
Fondos Regionales Indígenas (FRI)					1					1		1	1				
FONART					1												1
Opciones Productivas (POP)		1		1	1		1	1	1	1	1		1			1	
Total	3	9	1	10	12	4	7	8	4	3	10	6	7	1	4	2	10

FUENTE: Gabriela Rangel, elaborado con información de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados, 2012.

Algunos datos que refuerzan lo anterior:

- a) Los servicios de asistencia técnica y capacitación siguen desligados de los resultados. Algunos ejemplos que apuntan en esta dirección: 70 por ciento de los invernaderos impulsados por la Sagarpa no se encuentran operando actualmente. Tampoco se logró incorporar a los productores a la cadena de valor, pues de acuerdo con el Censo Agrícola Ganadero 2007, 97.4 por ciento no transforman la producción y 58.9 por ciento de los que venden su producción lo hacen local o regionalmente a intermediarios o mayoristas y sólo 0.8 por ciento exporta su producción. Esta falta de resultados se encuentra asociada en parte a la insuficiencia de mecanismos de seguimiento y supervisión por parte de las instituciones de gobierno.
- b) Las coberturas siguen siendo muy bajas, incluso menores a las que se otorgaban en 1991. Como señalábamos anteriormente, la cobertura en ese año fue de 8.7 por ciento mientras que la cobertura actual es de 3.2 por ciento de las UP. Considerando a los productores con servicios Prodesca-Sagarpa 2007 (comparable al censo), se atendieron 255 923 personas, lo que representaría una cobertura de 6.8 por ciento, es decir, menor a la registrada en 1991.¹² En 2010 se alcanzó la cobertura de los noventa, a través del programa Soporte que atendió a 350 mil productores (este dato debe ser ajustado a la baja pues varios de los productores aparecen como beneficiarios del servicio más de una vez).
- c) Apoyos a la producción, servicios técnicos y financiamiento se encuentran desacoplados. Por un lado, los apoyos de Fomento Productivo: Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Ingreso Agropecuario; Prevención y Manejo de Riesgos, Fondos Regionales (FRI); Programa de la Mujer del Sector Agrario

¹² Rafael Zavala, “Análisis general sobre asistencia técnica en el sector rural: comparativo entre el VIII Censo Agropecuario y Forestal y los resultados de Sagarpa”, documento para los foros de análisis y discusión Banco Mundial-CEPAL-FAO-IICA, 2009.

(Promusag) y Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos de Núcleos Agrarios (FAPPA), por mencionar sólo algunos, se otorgan sin que sea necesario u obligatorio dar capacitación o asistencia técnica. Por el otro, la mayoría de los productores no recibe financiamiento (la cobertura crediticia es de cuatro por ciento).¹³

d) Año con año, con recursos coejercidos entre Sagarpa y los gobiernos de los estados, se contrata a 10 223 profesionales. Con este dato se tiene el indicador de profesionistas por unidad de superficie de 1:398, similar al registrado en países desarrollados (1:400), ligeramente menor al de Estados Unidos (1:330), superior al de Europa (1:435) y muy superior al registrado en Asia y África (1:1 800 a 1 300).¹⁴ Sin embargo, en el caso mexicano sólo 6.8 por ciento de las UP reconocieron recibir servicios de capacitación.

Entre las explicaciones que se han dado respecto de los bajos resultados obtenidos con los servicios de asistencia técnica se tienen las siguientes: los técnicos visitan muy pocas veces a los productores y no le dan seguimiento continuo a los proyectos; la inestabilidad laboral de los Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) no permite planear a largo plazo (se les contrata por siete meses o se les paga por proyecto); la movilidad de los técnicos, independientemente de su capacidad técnica, por cambios administrativos en gobiernos estatales y municipales; la conversión de técnicos y despachos en elaboradores de proyectos para bajar recursos públicos, sin importar la viabilidad técnica del proyecto; el favoritismo de representantes institucionales con determinados profesionistas para que sean ellos los que presten los servicios técnicos, y el nuevo “neocorporativismo”: empresas que promueven, mediante los técnicos, la compra de insumos (herramientas, fertilizantes). En lugar de promover proyectos

¹³ Héctor Robles, “Qué pasó con la asistencia técnica y la capacitación en México”, en *La Jornada del Campo*, núm. 46, 16 de julio de 2011.

¹⁴ Zavala, *op. cit.*

de largo plazo orientados a la inversión en infraestructura y la generación de tecnologías adecuadas y organizaciones de productores que formen sus cuerpos técnicos que funjan como intermediarios ante los productores, los comprometen políticamente a que realicen eventos de capacitación.

Dentro del Programa de Desarrollo de Capacidades de Sagarpa es importante señalar que la mayoría de los pequeños productores de zonas marginadas está excluida para recibir este servicio pues las reglas de operación (ROP) establecen que:

[...] la población objetivo son las personas físicas, morales, grupos con actividades productivas en el medio rural, e instituciones especializadas en la capacitación e investigación entre las cuales se consideran: [...] *a*) Productores con potencial productivo. Personas físicas, grupos de trabajo para un propósito común, y personas morales que se dediquen a oficios y actividades de producción agropecuarias, acuícolas y pesqueras; de transformación y de servicios [...] *b*) Instituciones de Investigación, de Educación Superior y Media Superior del Sector, de cobertura local y nacional; así como otras instituciones del sector especializadas en investigación y capacitación [...].

PROGRAMAS EN APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA

En este apartado se pretende identificar la oferta institucional para atender a los pequeños productores agrícolas y campesinos, diferenciando los siguientes elementos: apoyos directos para las actividades agropecuarias y pesqueras *versus* apoyos para proyectos productivos que solicitan figuras asociativas y que pueden ser para cualquier actividad económica; fin y propósito de cada programa o componente; población potencial, objetivo y atendida; entidad ejecutora del gasto; presupuesto por programa, y los programas dirigidos al sector forestal.

Fin y propósito. Cada institución debe definir el “fin” de cada uno de sus programas el cual indica la forma en que el programa contri-

buye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado. Son muy disímolos los objetivos que persiguen estos 20 programas o componentes pues van desde apoyos para equipamiento e infraestructura, mejoramiento del ingreso, hasta apoyos en caso de desastres naturales. Los objetivos se sintetizan en los siguientes puntos:

- Ejecución de proyectos territoriales que inviertan en obras de infraestructura de alto impacto, maquinaria y equipamiento.
- Incrementar la capitalización e inversión.
- Apoyo al ingreso a los productores.
- Mejorar ingreso de los productores mediante la reconversión y/o apoyo a proyectos productivos.
- Inducir el financiamiento para la inversión en equipamiento.
- Apoyos ante desastres naturales.
- Contribuir al logro de la seguridad alimentaria de productores de maíz y frijol.
- Incrementar la producción pecuaria.
- Contribuir al desarrollo de capacidades.
- Promover el desarrollo de las actividades económicas.
- Contribuir a mejorar las condiciones de vida.

El “propósito” indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. De la matriz elaborada se identifican los siguientes propósitos: [que]

- Unidades económicas incrementan su capitalización.
- Productores, indígenas, mujeres y jóvenes cuentan con ingresos mejorados.
- Productores y otros agentes utilizan esquemas de prevención y manejo de riesgos.
- Recursos naturales utilizados manejados sustentablemente.
- El sector rural cuenta con apoyos ante afectaciones por desastres naturales perturbadores y relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y pesquera.

- Indígenas, mujeres y jóvenes, población del decil seis o menos, y personas, familias y grupos sociales desarrollen proyectos, agroempresas sustentables y/o cuentan con alternativas de ingresos.

Población objetivo. De acuerdo con la matriz de marco lógico la dependencia o entidad deberá describir la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al programa; es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria del mismo. Con base en esta definición y utilizando las reglas de operación y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas se identificaron 20 programas de cinco instituciones considerando cuatro criterios:

- a) Tienen como sujeto de atención a los pequeños productores: activos productivos tradicional y agricultura hasta de tres hectáreas;
- b) Dentro de su padrón, un número muy importante de beneficiarios son productores con menos de cinco hectáreas o con hatos ganaderos con menos de 35 unidades animales: Procampo, Fomento Café y Progan;
- c) En su definición de objetivos definen que apoyan a sectores marginales: Fondo para la Inducción de la Inversión en Localidades de media, alta y muy alta marginación; Reconversión Productiva; Atención a Desastres Naturales; Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA); Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf); Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI); Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (Procap); Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI); Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes); Promusag; FAPPA; Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT) y Programa de Opciones Productivas (POP);
- d) Programas que pueden llegar a pequeños productores agropecuarios aunque no se tiene información de si los atienden:

Trópico Húmedo y Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas (Prodeza).

Figuras asociativas. Las distintas dependencias de gobierno establecen en las reglas de operación las disposiciones para poder acceder a los apoyos públicos; entre las normas destaca la que tiene que ver con la individualización de los apoyos (padrones) o el requerimiento de conformar una figura asociativa, sea ésta formal o de carácter informal. A continuación se presentan las formas asociativas que se distinguen:

- Persona física o moral y estar inscrito en el padrón.
- Personas físicas y morales.
- Grupos de trabajo.
- Fondos Regionales Indígenas.
- Organizaciones indígenas con personalidad jurídica.
- Ejidos y comunidades.
- Personas físicas, integrantes de grupos sociales y socios de empresas sociales.
- Grupos de trabajo sin personalidad jurídica.
- Jóvenes organizados de núcleos agrarios de 18 a 39 años.
- Agencias de Desarrollo Local, Proyectos Integradores, Fondo de Cofinanciamiento y Asistencia Técnica y Acompañamiento.

Entidades ejecutoras del gasto. De acuerdo con la normatividad vigente, en las Reglas de Operación se debe establecer quién es la Entidad Responsable (ER) de operar el programa y quién la Entidad Ejecutora (EE). Por esta última se entiende a aquellas dependencias y/o entidades federales y estatales, gobiernos municipales que se encarguen de ejecutar los diferentes tipos de apoyo del Programa. La EE se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables; identificar el trámite por su número de folio; emitir dictamen, evaluando bajo los parámetros aplicables; generar resolución a la solicitud; publicar el listado de beneficiarios autorizados y el de los

CUADRO 8
POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMAS Y COMPONENTES EN APOYO
A PEQUEÑOS PRODUCTORES O GRUPOS VULNERABLES

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población objetivo</i>
Sagarpa	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. Componente activos productivos tradicionales	Productores de pequeña y mediana escala con potencial productivo, organizados en personas morales legalmente constituidas y debidamente registradas, que se dediquen a actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras.
Sagarpa	Agricultura hasta 3.0 ha	
Sagarpa	Procampo	Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el Procampo, a los que se les haya integrado en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) que les corresponda su Expediente Único Completo (véase numeral 7) que mantengan el predio en explotación y cumplan la normatividad de este Programa.
Sagarpa	Fomento Café	Personas físicas o morales legalmente constituidas, registradas en el Padrón Nacional Cafetalero (PNC), productores que realicen actividades de comercialización directa, registrados y/o validados en el Sistema Informático de la Cafecultura Nacional (SICN), ubicados en las 12 entidades federativas con mayor actividad económica cafetalera, que son: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

CUADRO 8 (CONTINUACIÓN)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población objetivo</i>
Sagarpa	Progan	Personas físicas o morales (ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, y sociedades civiles o mercantiles establecidas conforme a la legislación mexicana, propietarios o con derecho de uso de tierras dedicadas a la cría de ganado bovino de carne y doble propósito en forma extensiva; de ovinos; de caprinos, pequeña lechería familiar y la apicultura), inscritas en el padrón vigente del Progan. Así como, nuevos productores preferentemente de cinco y hasta 35 unidades animal, sujeto a disponibilidad presupuestal.
Sagarpa	Fondo para la Inducción de la Inversión en Localidades de media, alta y muy alta marginación	Personas físicas o morales que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto en las localidades de media, alta y muy alta marginación de conformidad con Conapo, que requieran garantías para obtener el financiamiento para proyectos de inversión en equipamiento e infraestructura, así como las garantías complementarias para obtener financiamiento del capital de trabajo necesario para asegurar la operación del mismo.
Sagarpa	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Componente Reversión Productiva	Personas físicas o morales que se dediquen a actividades agrícolas, cuyos predios estén ubicados en zonas de muy bajo y bajo potencial productivo, de alta siniestralidad, en zonas con producción excedentaria o en zonas en donde se promueva el ordenamiento de mercados.

CUADRO 8 (CONTINUACIÓN)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población objetivo</i>
Sagarpa	Programa Prevención y Manejo de Riesgos. Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero	Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por los siguientes fenómenos naturales perturbadores relevantes, según anexo XL para la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
Sagarpa	PESA	Personas físicas, grupos de trabajo para un propósito común o personas morales, que se ubiquen en localidades rurales de alta y muy alta marginación de las entidades federativas con mayor grado de marginación y pobreza del país conforme a la clasificación que determinen las propias entidades federativas, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas y/o agroindustriales.
Sagarpa	Promaf	<p>Personas físicas o morales integradas por:</p> <p>I.- Productores de maíz y/o frijol de autoconsumo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación,</p> <p>II.- Productores de regiones definidas por la Delegación Estatal de la Secretaría.</p> <p>III.- Productores con especialidad de variedades criollas de maíz que por sus características se destinen a atender nichos de mercado específicos (maíz pozolero, maíces morados y rojos, entre otros).</p>

CUADRO 8 (CONTINUACIÓN)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población objetivo</i>
		<p>Productores en Transición. Personas morales integradas por productores de maíz y/o frijol, con superficies ubicadas en las zonas definidas en el anexo XX y/o las que incorpore la unidad responsable de común acuerdo con las instancias ejecutoras.</p> <p>Productores de Alto Rendimiento. Personas morales integradas por productores de maíz y/o frijol, que cuenten con acceso al financiamiento para la aplicación del paquete tecnológico.</p>
CDI	Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)	Las acciones y los beneficios están dirigidos a la población indígena que está bajo la cobertura del Programa y que pertenezca a alguna organización integrada a algún fondo regional.
CDI	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (Procapi)	Productores indígenas organizados en grupos de trabajo, organizaciones indígenas con personalidad jurídica, ejidos y comunidades integradas por población indígena originaria o migrante, que estén en condiciones de realizar o realicen actividades productivas elegibles por el Programa, que cuenten con el apoyo económico institucional y el aval de la instancia ejecutora correspondiente para la realización de sus actividades.
CDI	Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas POPMI	Mujeres indígenas, mayores de edad que conformen grupos de diez mujeres como mínimo, o de ocho mujeres en localidades con menos de 50 habitantes. Asimismo, podrán ser beneficiarias mujeres indígenas menores de edad que al contraer matrimonio, vivir en pareja o ser madres solteras adquieran responsabilidades

CUADRO 8 (CONTINUACIÓN)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población objetivo</i>
		<p>en la manutención del hogar. En los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, entidades con mayor dispersión poblacional, se aceptarán grupos de ocho integrantes y un máximo de cinco mujeres de una sola familia.</p>
Sedatu	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)	Mujeres con edad mínima de 18 años al momento del registro, que habiten en “Núcleos agrarios” y que no hayan sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por el propio Promusag o por el FAPPA.
Sedatu	Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)	Hombres y mujeres con 18 años o más al momento del registro, que habiten en “Núcleos Agrarios”, que no sean ejidatarios ni comuneros y que no hayan sido apoyados en los últimos cinco ejercicios fiscales por el Programa y por el Promusag.
Sedatu	Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT)	Sujeto agrario” habitante del “Núcleo agrario”, con un mínimo de 18 años y hasta 39 años de edad al momento de presentar la solicitud de ingreso al “Programa”, que tenga interés de emprender una “Agroempresa” y, que habite alguno de los “Núcleos agrarios” que cumplan los criterios de cobertura, que presentan alta marginación y potencial productivo.
INAES	Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes)	La población objetivo del programa del FONAES está conformada por la cantidad de individuos que cumplen con los criterios de

CUADRO 8 (CONTINUACIÓN)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población objetivo</i>
Sedesol	Programa de Opciones Productivas	elegibilidad, organizados en torno a proyectos productivos, y que conforme a la disponibilidad presupuestal anual se programa apoyar durante un ejercicio determinado. Personas en condiciones de pobreza, en lo individual o integradas en familias, grupos sociales y organizaciones de productores que habitan en las zonas de cobertura.
Sagarpa	Trópico Húmedo	a) Beneficiarios con crédito y/o con financiamiento propio. La población objetivo son las personas físicas o morales, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuicultas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, o aquellas que pretendan invertir en cualquiera de las mismas. b) Beneficiarios de apoyo directo. La población objetivo son las personas físicas en condiciones de pobreza extrema con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo que se dediquen o que pretendan desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuicultas.
Sagarpa	Desarrollo de las Zonas Áridas (Prodeza)	Personas físicas o morales que se ubican en los municipios de la cobertura potencial del proyecto estratégico (anexo L) de las presentes reglas de operación, organizados en grupos, la cual podrá ser modificada por la Unidad Responsable de la Secretaría previo análisis de los casos que se presenten por la instancia ejecutora y a la cual se transferirán los recursos del proyecto para su ejecución.

solicitantes rechazados en las ventanillas correspondientes y en la página electrónica de la Secretaría, y, en su caso, en las páginas electrónicas de la Instancia Ejecutora o de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA); e instruir al área encargada de ejecutar la entrega de apoyos o subsidios. En los 20 programas se identificaron las siguientes entidades ejecutoras:

- Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), CDI, INAES, Sedesol y sus áreas o delegaciones.
- Gobiernos de las entidades federativas.
- Financiera Rural.
- Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA).
- Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).
- Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza).

Población atendida (PA). Revisando la PA que reportan cada uno de los programas o componentes resultan tres millones 865 mil beneficiarios, de donde sólo 3.3 por ciento es resultado de programas que tienen como población objetivo a los pequeños productores; 77.3 por ciento son productores beneficiados vía padrones de programas (Procampo, Café y Progan); 18.4 por ciento de apoyo a sectores marginales y uno por ciento de programas que pueden llegar a pequeños productores.

Presupuesto asignado 2013. En el Decreto de Presupuesto de Egresos 2013 se asignaron partidas a los 20 programas y componentes por un monto de 33 mil 542 millones de pesos. Si hacemos el ajuste en los programas de padrones y consideramos sólo aquellos productores de hasta 20 ha o 35 unidades animal de ganado bovino resulta un presupuesto de 21 mil 854 millones de pesos. Siguiendo el criterio de agrupación resulta que 4.1 por ciento del presupuesto es asignado directamente a pequeños productores, 32.1 por ciento vía padrones; 60.3 por ciento vía grupos vulnerables, y 3.5 por ciento a programas que pueden atenderlos aunque no los tienen como su población prioritaria.

CUADRO 9
POBLACIÓN ATENDIDA POR PROGRAMA Y COMPONENTE

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Población atendida*</i>
Sagarpa	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. Componente Activos productivos tradicionales	4 355
Sagarpa	Agricultura hasta 3.0 ha	121 872
Subtotal		126 227
Sagarpa	Procampo hasta 20 ha (dos ciclos agrícolas)	2 554 062
Sagarpa	Fomento Café hasta 20 ha	152 089
Sagarpa	Progan hasta 35 UA ganado bovino	280 828
Subtotal		2 986 979
Sagarpa	Fondo para la Inducción de la Inversión en Localidades de media, alta y muy alta marginación	441
Sagarpa	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Componente Reconversión Productiva	102 772
Sagarpa	Programa Prevención y Manejo de Riesgos. Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero	153 543
Sagarpa	PESA	146 841
Sagarpa	Promaf	129 372
CDI	PFRI	15 186
CDI	Procapi	9 647
CDI	POPMI	31 164
INAES	INAES	49 688
Sedatu	Promusag	29 787
Sedatu	FAPPA	23 742
Sedatu	JERFT	4 056
Sedesol	POP	16 590
Subtotal		712 829
Sagarpa	Trópico Húmedo	21 269
Sagarpa	Prodeza	18 354
Subtotal		39 623
Gran Total		3 865 658

FUENTE: elaboración propia con información de Sagarpa, CDI, Sedatu, INAES y Sedesol.

CUADRO 10
PRESUPUESTO 2013 ASIGNADO A LOS PROGRAMAS Y COMPONENTES
(MILLONES DE PESOS)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Presupuesto total</i>	<i>Presupuesto agricultura 5 ha*</i>
Sagarpa	Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. Componente Activos productivos tradicionales	400.00	
Sagarpa	Agricultura hasta 3.0 ha	500.00	
Subtotal		900.00	
Sagarpa	Procampo	14 000.00	4 956.00
Sagarpa	Fomento Café	350.00	316.00
Sagarpa	Progan	4 350.00	1 740.00
Subtotal		18 700.00	7 012.00
Sagarpa	Fondo para la Inducción de la Inversión en Localidades de media, alta y muy alta marginación	200.00	
Sagarpa	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Componente Reconversión Productiva	455.00	
Sagarpa	Programa Prevención y Manejo de Riesgos. Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero	3 950.00	
Sagarpa	PESA	3 000.00	
Sagarpa	Promaf	770.00	
CDI	PRFRI	365.59	
CDI	Procapí	227.20	
CDI	POMPI	443.88	
INAES	INAES	2 571.70	
Sedatu	Promusag	221.27	

CUADRO 10 (CONTINUACIÓN)

<i>Dependencia</i>	<i>Programa</i>	<i>Presupuesto total</i>	<i>Presupuesto agricultura 5 ha*</i>
Sedatu	FAPPA	340.97	
Sedatu	JERFT	498.30	
Sedesol	POP	138.53	
Subtotal		13 182.42	
Sagarpa	Trópico Húmedo	500.00	
Sagarpa	Prodeza	260.00	
Subtotal		760.00	
Gran Total		33 542.42	21 854.42

* Estimación de presupuesto de acuerdo con los rangos de superficie hasta cinco hectáreas y ganaderos con menos de 35 unidades animal.

FUENTE: elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

Programas de medio ambiente. Son tres las razones que se identifican para considerar la posibilidad de acoplar o complementar la propuesta con programas que tienen que ver con los recursos naturales:

- a) La propiedad de ejidos y comunidades como dueños de recursos forestales es entre 50.4 por ciento y 65 por ciento del total. La investigación *Atlas de la propiedad social y servicios ambientales en México* especifica que la propiedad de núcleos agrarios con recursos forestales con el criterio de tener cuando menos 200 hectáreas con bosques, selvas y matorrales, es de 62 millones 629 mil hectáreas.¹⁵

¹⁵ SRA, RAN e IICA 2012. *Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México*, SRA, RAN-IICA, México.

CUADRO 11
NÚCLEOS AGRARIOS CON RECURSOS FORESTALES
(CRITERIO 200 HECTÁREAS)

<i>Región</i>	<i>Núcleos agrarios (número)</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Proporción de la región (%)</i>
Noroeste (NO)	1 795	17 378 593	42
Norte (N)	3 653	22 444 880	34
Noreste (NE)	1 115	2 712 965	19
Centro Occidente (CO)	2 409	3 434 670	19
Centro Sur (CS)	1 731	1 654 497	17
Pacífico Sur (PS)	2 867	7 976 228	35
Golfo de México (GM)	790	561 721	6
Península de Yucatán (PY)	1 224	6 466 165	46
Total	15 584	62 629 719	32

FUENTE: SRA-RAN-IICA, 2012.

- b) En las regiones con población indígena se encuentran los más importantes recursos naturales con los que dispone el país. Los núcleos agrarios con población indígena se localizan en municipios templados o cálidos y con buenas precipitaciones, por lo que se consideran regiones captadoras de agua. Además, del total de núcleos agrarios con bosques y selvas que existen, 28 por ciento y 50 por ciento respectivamente se localiza en los ejidos y comunidades con población indígena.¹⁶
- c) La Comisión Nacional Forestal (Conafor) estableció en sus Reglas de Operación 2013 un orden de prelación para atender las solicitudes. En la sección IV *Del procedimiento de selección y criterios generales de prelación*, artículo 14, se establece que recibidas las solicitudes y demás documentación e información, la Conafor realizará un dictamen de factibilidad técnica y ambiental, conforme al marco específico para cada modalidad de apoyo establecido en los Anexos de estas reglas de opera-

¹⁶ Héctor Robles y Luciano Concheiro, *Entre las fábulas y la realidad. Los ejidos y comunidades con población indígena*, México, INI/UAM-Xochimilco, 2004.

ción. Posteriormente, las solicitudes dictaminadas ambiental y técnicamente viables, en su calificación deberán incorporar la siguiente prelación:

CUADRO 12
CRITERIOS SOCIALES PARA ATENDER SOLICITUDES

<i>Criterios sociales</i>	<i>Puntos</i>
1. Ejidos o comunidades que nunca hayan recibido apoyos de la Conafor.	7
2. Solicitudes que se encuentren en las zonas de atención prioritaria rurales definidas por la Secretaría de Desarrollo Social con un índice de marginación alto y muy alto.	5
3. El núcleo agrario solicitante cuenta con población indígena, o la persona solicitante se encuentra en un núcleo agrario con población indígena	4
4. La persona moral solicitante integra en su órgano de representación mujeres, o la persona física solicitante del apoyo es mujer.	4
5. La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de representación o la persona física solicitante es joven. Se considera joven a la persona que se encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años.	4

FUENTE: Reglas de Operación de los programas de Conafor 2013.

Como se puede ver en el cuadro, se establece que los núcleos agrarios y las zonas prioritarias definidas por Sedesol tienen preferencia y es precisamente la población a la que queremos llegar.

En Conafor el Programa Nacional Forestal (Pronaf)¹⁷ es el más importante. Tiene como objetivo impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales y sus asociados, considerando los principios del manejo forestal sustentable y con ello contribuir a mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales, así como mejorar la calidad de vida de los dueños y poseedores de los recursos forestales, mediante el otorgamiento de apoyos para la elaboración

¹⁷ El Pronaf sustituyó en 2013 al programa ProÁrbol.

de estudios para la incorporación de superficie forestal a esquemas de manejo forestal sustentable.

El programa tiene cuatro componentes:

- Desarrollo forestal. Impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales y sus asociados.
- Plantaciones forestales comerciales. Impulsar el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales.
- Conservación y restauración. Apoyar la ejecución de acciones y proyectos para la recuperación de la cobertura forestal, y la conservación y restauración de suelos ubicados en cuencas con terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro.
- Servicios ambientales. Otorgamiento de apoyos a dueños de terrenos forestales, que de manera voluntaria deciden participar en el programa de pago por servicios ambientales, con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo.

De acuerdo con el PEF 2013, en apoyo a las actividades forestales, donde se incluye el Pronaf, se cuenta con un presupuesto original por un monto de 4 654 millones de pesos.

CONCLUSIONES

Los pequeños productores de México tienen un papel central en la agricultura mexicana: son la gran mayoría de los productores, ocupan a la mayoría de los trabajadores empleados en el sector primario, son importantes productores de maíz y frijol y surten de materias primas a la agroindustria. Todo lo anterior lo realizan en sólo 16.9 por ciento de la superficie laborable de nuestro país, muchos de ellos bajo condiciones de temporal, en terrenos con pendientes y sin los apoyos productivos que se concentran en los grandes productores.

Los subsidios de la vertiente de competitividad que están orientados para apoyar las actividades agropecuarias y forestales se encuentran concentrados en muy pocas entidades del norte del país, y favorecen a los agricultores de predios grandes y capitalizados. Los subsidios productivos en lugar de disminuir las asimetrías han generado mayor desigualdad en el sector rural.

En lugar de fomentar las actividades productivas de pequeños productores e indígenas se les han otorgado fundamentalmente apoyos de la vertiente social. La baja cobertura de los apoyos productivos a pequeños productores limita sus posibilidades de superar sus rezagos sociales.

Se identificaron 20 programas (sin incluir los programas forestales) que, dentro del total de sus beneficiarios, la mayoría son pequeños productores o que tienen como fin el apoyo a grupos marginados. En 2012 estos programas otorgaron distintos apoyos: subsidios directos, apoyos en infraestructura y equipamiento, promoción de proyectos productivos, capacitación y atención a desastres naturales, entre otros, y que beneficiaron a tres millones 865 mil personas. El presupuesto asignado en el PEF 2013 es de 21 854 millones de pesos.

Por último, al revisar la información presupuestal de 2013 se encontró que Conafor contó con 4 654 millones de pesos en apoyo a ejidos y comunidades que son dueños de recursos naturales y a pequeños productores. Considerarlos dentro de la propuesta de atención a los pequeños productores rompería con dos inercias de la política pública implementada en los últimos años: el desacoplamiento entre los programas productivos y medio ambientales y cambiar la visión conservacionista de protección de los recursos naturales por otra de su aprovechamiento de manera sustentable, que está demostrado que ayuda a preservar mejor estos recursos y a su vez le genera ingresos a sus dueños e interés por preservarlos.

SEGUNDA PARTE

SUR PROFUNDO

Armando Bartra

*Sólo yo entiendo lo lejos que
está el cielo de nosotros; pero
conozco cómo acortar veredas.
Todo consiste en morir.*

Juan Rulfo, *Pedro Páramo*

Guerrero: erial arisco y extremo; ocasión de impúdicos dispendios que erizan la abstinencia de los más. Una bahía con treinta mil tazas de baño — níveas y asépticas como nalgas de turistas — en una entidad de letrinas y fecalismo al aire libre.

Guerrero: penuria y hartazgo desmedidos. Alegoría nacional.

Reservación de añejos cacicazgos y paradigma de inestabilidad política la entidad es también territorio fuera de ley donde se gobierna a punta de fregadazos.

Los quebrantos al orden legal definen al país, no sólo a Guerrero. Pero los usos de la entidad sureña se pasan de toscos y alevosos. En el fin del milenio los caciques lugareños, que ya en el siglo XIX mangoneaban la región, son aún los nudos decisivos del poder.

La preeminencia de los más torpes intereses locales remite a la histórica insularidad de Guerrero: ámbito de intrincada topografía que la red ferroviaria porfirista apenas rasguñó y tuvo que esperar hasta 1927 para que una carretera enlazara Acapulco con la capital del país. Las grandes comerciales del puerto, que medraban de la incomunicación, auspiciaron el aislamiento de la costa guerrerense hasta bien entrado el siglo, pero lo inconcebible es que en plena década de los setenta del siglo XX el gobernador Rubén Figueroa Figueroa haya impedido la construcción del tren-bala Distrito Federal-Acapulco, que hubiera afectado sus mezquinos intereses personales en el autotransporte de carga y pasajeros.

Hoy, la Autopista del Sol cruza rauda —y de perfil— los raídos eriales guerrerenses rumbo al mar de Acapulco, pero el sur profundo sigue careciendo de plausibles vías de comunicación. Saldos del aislamiento son el escaso desarrollo productivo —la entidad es una de las menos industrializadas—, el predominio de la población rural sobre la urbana —la mayoría de los guerrerenses vive en pueblos de menos de cinco mil habitantes—, la carencia de servicios adecuados —Guerrero ocupa los últimos lugares de electrificación, agua potable, drenaje, etc.— y los altos niveles de marginalidad —el estado acapara los primeros sitios en analfabetismo, desocupación y migración económica.

Y es que la del sur es una economía frágil: cultivos precarios a merced de huracanes, crecientes y sequías; inciertas cosechas que siempre han cebado a los “coyotes” lugareños y hoy también se apuestan al “mercado de futuros”, un albur donde los campesinos se juegan el porvenir con cartas marcadas.

Carne de nota roja, el Guerrero rural vive al borde del desastre, al filo de la hambruna. Sismos inclementes; airones iracundos que deschongan palmas, revuelcan milpas y socavan hasta la sombra los cafetales; avenidas donde naufragan pueblos de tierra firme; súbitos diluvios que llueven sobre mojado. Pero también créditos esquivos, costos desmesurados, volubles políticas públicas y abismales derrumbes de los precios.

La combinación de naturaleza arisca, economía torpe, sociedad inocua y gobierno obsceno ha hecho de Guerrero un pueblo de damnificados crónicos, diezmado por enfermedades de boticario y siniestros prevenibles. Las del sur son vidas a la intemperie, vidas en vilo.

LOS MATADOS

Demasiados guerrerenses mueren de pie. Demasiadas muertes airadas en un estado donde muerte por punta, filo o bala es muerte

natural. Si es verdad que los matados no descansan, Guerrero es una inmensa congregación de muertos insomnes.

A la mala muere el pobre y muere el rico, el magnate de ocho columnas y el anónimo labrador. Influencias y millones no salvaron al maderero Melchor Ortega de caer emboscado en Costa Grande hace 25 años; su inmensa fortuna no impidió que en 1966 Melchor Perrusquía fuera torturado y asesinado por el rumbo de Tres Palos, cerca de Acapulco; el dinero y el poder no protegieron de las balas al ex gobernador Francisco Ruiz Massieu. Pero la mala muerte se encarniza con los guerrerenses rasos. Y más si son insumisos y alebrestados.

En Guerrero quien alza la voz no llega a viejo, organizarse es dañino para la salud y la de líder honesto es profesión de alto riesgo.

Los rebeldes mueren a manos del ejército, de la policía o de los pistoleros. Los matan de frente o a traición, en montón o solos, en fulminantes emboscadas o en lentas sesiones de tortura. Los afortunados mueren de un solo golpe y en combate.

En el sur las matanzas memorables son mojoneras que sirven para fijar tiempos históricos. Aquí algunas recientes: los quince muertos de 1960 en Chilpancingo a manos de la tropa remiten a la caída del gobernador Caballero Aburto; las siete víctimas mortales que causó el ejército de Iguala en 1962 fechan el inicio de la radicalización política de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG); los siete cadáveres del 18 de mayo de 1965 en Atoyac a resultas de una agresión de los judiciales acompañaban a Lucio Cabañas en su peregrinar por la sierra; la matanza de copreros del 20 de agosto de 1967 es una desmesurada carnicería que remite a sí misma y a la definitiva descomposición del gremio —esta “fiesta de las balas” guerrerense ocurrió en el local de la Unión Regional de Productores de Copra cuando pistoleros costeños como Constantino Hernández, *el Zanatón*, los cuatro hermanos Gallardo, *la Yegua*, *el Niño* y *el Animal* asesinaron a más de 30, aunque algunos contaron 80 muertos—; la batalla de Cruz Grande a resultas del asalto policiaco al palacio municipal ocupado por simpatizantes del PRD deja cinco ca-

dáveres y señala el fin de los cabildos populares de 1990; el cuatro de Aguas Blancas, cometido por las policías motorizada y judicial el 25 de junio de 1995 con saldo de 17 campesinos muertos, preludia la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y el nacimiento al año siguiente del Ejército Popular Revolucionario (EPR); la ejecución de once personas, entre civiles y presuntos guerrilleros, en Los Charcos el 7 de junio de 1998, es la masacre que inaugura la formación del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Y así, de matazón en matazón, marcha la historia guerrerense.

Y, abajo del campo de batalla, un interminable purgatorio de muertos políticos; ánimas insurrectas que penan su postergado afán. En las plenarias de los insomnes activistas sociales muertos a la mala después de la revolución, los matados hablan de sus cosas.

El vate, decidor y agrarista Valente de la Cruz, pasado por las armas en 1926, y su valedor Flores Reynada, que enfrentó el pelotón en 1934, sostienen que primero se siente el golpe de las balas y después el tronido de la pólvora. Salvo mejor opinión de los tres canales Escudero, fusilados al unísono en 1923. Felipe y Francisco murieron a la primera y no atendieron a detalles. Juan, en cambio, es ducho en fusilamientos y aprovecha para contar, por enésima vez, el atentado de 1922 que lo dejó manco, paralítico y mudo, y el pelotón definitivo, un año después, al que sobrevivió unas horas.

—El chiste es que el tiro de gracia te entre en sedal. Ahí está el truco.

En otro corrillo de finados el agrarista y diputado Feliciano Radilla conversa con los hermanos Vidales. Baldomero, caído en la Laguna de Coyuca en 1926 tras luchar por el Plan de Veladero, se pavonea por su muerte en combate. Su hermano Amadeo, en cambio, fue asesinado en 1932, en frío y a traición, igual que el diputado Radilla.

—A ti siquiera te dieron cuerda en tu tierra, Feliciano. No que a mí el cabresto de Asunción me pasó a perjudicar allá en la ciudad de México.

El mayor de los Vidales se enfrasca en los sabrosos detalles de la puñalada trapera.

—Me entró por el sexto espacio intercostal, a la derecha de la línea escapular. Fue por la espalda. Que si no...

Los Ramos, de Tecpan, celebran una reunión familiar. En la década de los setenta, seis parientes murieron en cuatro diferentes atentados. El Ramos restante, Anacleto, les cuenta que salió por piernas de Guerrero decidido a preservar la cepa.

—En los tiempo de Cervantes Delgado semblantié que la cosa estaría calmada y me vine a Tierra Caliente a organizar campesinos.

¡No, hombre! Al rato también a mí me torcieron.

Como de costumbre los finados Lucio y Genaro andan a la greña.

Y no son discrepancias tácticas o de filiación política, sino que el de Costa Grande siempre presume su muerte en combate y el de Costa Chica no se perdona haber terminado en un pinche carreterazo.

Pero los más son muertos anónimos. Como los que tiraban al mar los helicópteros durante la guerra sucia de los setenta y se reúnen para buscarse en la lista de los desaparecidos que hizo el Comité de Familiares. O los siete costeños que murieron con los huaraches puestos en 1959. Haber muerto de pie enorgullece a todos los matados políticos, pero es un decir; en cambio, estos siete costeños murieron literalmente parados en una mazmorra de cuatro por cinco metros; donde los olvidaron por seis días con otros cuarenta y tres detenidos.

Odio compartido a los zopilotes; “negros paraguas carroñeros”, dice Valente. Acorraladas discusiones sobre calibres, balas expansivas, trayectorias en sedal. Defensores del machete contra apolo-gistas del cuchillo. Fraternidad de los que compartieron matazones y desolación de los que cayeron solos y en despoblado. El coraje de los sacrificados a traición. La sorpresa de los venadeados. El íntimo pudor de los muertos en tortura...

El Tabaco, líder cafetalero de El Ticuú y participante en el movimiento cívico de los sesenta, nunca habla de su muerte. Los soldados al mando del coronel Olvera le cortaron la lengua, le arrancaron los testículos y los abrieron en canal.

Hay también muertos nuevos como Gorgonio Flores Cortés, dirigente de la comunidad mixteca de Acalmani y fundador de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica. Goño anda descalzo como le gustaba hacerlo cuando recorría la sierra. Hasta que el 14 de octubre de 1992 le volaron la cabeza de un escopetazo.

Marcial Salvador Arriaga y Heriberto Moreno Romano llegaron hace poco tiempo del inframundo del liderazgo social y aún traen sangre en el pelo y tierra en los dientes. Los dos maestros nahuas, asesinados el 3 de marzo de 1997 por el rumbo de Olinalá, cuentan al músico guerrillero José Fernando Guadalupe Nicasio, mixteco de Ocote Amarillo, ejecutado por el ejército de Los Charcos el 7 de junio de 1998.

—Lo que siento no es el “fierro” que se avanzaron los sardos cuando me tuvieron muerto, sino mi trombón que se quedó en el pueblo...

Alejandro Martínez está formando un Comité de Defensa de los Finados. Y es que el 19 de noviembre de 1998, dieciocho erizados judiciales fueron a desenterrarlo al camposanto de San Andrés de la Cruz. Lo acusaban de ser un guerrillero baleado días antes, pero Alejandro demostró que su muerte había sido natural —lo que por su rumbo es sólo un decir— y a regañadientes lo dejaron volver la tumba.

Isidoro Bahena Maldonado falleció con un pendiente y anda pidiendo cooperación. El 12 de marzo de 1998 el cafetalero de las Polvaredas estaba contento: a los 19 años iba a ser padre y por fin había juntado los dos mil pesos que necesitaba para casarse en forma con su compañera “robada” meses atrás. Pero, en la de malas, se topó con los sardos, quienes lo llenaron de balas porque su ropa se les hizo sospechosa. También se robaron el paliacate con los dos mil

pesos. El padre del difunto reclamó el dinero para la viuda, que no tenía cómo valerse, y ahora también a él lo quieren venadear. Por eso Isidoro mejor anda juntando una feria con los otros finados.

—Es para el huerfanito — dice.

Los años de la posrevolución no han sido en Guerrero tiempos de paz. La lucha por la libertad y justicia ha dejado una roja cauda de muerte. Quizá en otros lugares y en otros momentos la violencia ha sido comadrona de la historia; pero por estos rumbos ha sido más bien la abortera de la democracia. Y eso cala. Va remachando en los guerrerenses una cultura airada que exalta la violencia como forma de vida y muerte, como suprema herramienta social. Si el cacique persigue, hiere y mata para conservar privilegios, los sobajados concluyen, en reciprocidad, que sólo con sangre podrá defenderse o liberarse. En este siglo, al encono de la represión social y política ha seguido siempre el alzamiento guerrillero.

De ser consustancial a las relaciones verticales de opresión y resistencia, la violencia deviene también vínculo horizontal. En el sur la intolerancia religiosa es fanática y persecutoria, los conflictos entre pueblos vecinos hacen viudas y alimentan camposantos, en demasiadas comunidades se “mata en caliente” a los presuntos delincuentes, las rencillas familiares se dirimen a filo o a bala, la traición —personal o política— se paga con la muerte, el honor se lava con sangre...

Vallecitos de Zaragoza, en el municipio costeño de José Azueta, podría ser emblema de muerte gratuita. Ahí los Coria matan a sus vecinos y se tirotean entre sí por “cuestiones”. Y las “cuestiones” no tienen que ver con dinero o poder —que escasean por esos rumbos— ni tampoco con el afamado mezcal y la esquiva amapola, algo más abundantes. Son más bien asuntos de “honor”, “cosas de hombres” a las que en Vallecitos se ingresa entre los ocho y los diez años, al adquirir la primera pistola.

Para dilucidar la absurda violencia doméstica y comunitaria, que en el sur deja un cotidiano reguero de sangre, sirve recordar que la cultura machista demanda de todo guerrerense varón que se mues-

tre poderoso dominante, que sea un chingón, cuando en verdad los sueños rasos viven sobajados y oprimidos. De ahí que los amedrentados por la milicia, los bocabajados por el cacique, los ninguneados por el acaparador, los impotentes y sumisos ante el sistema, se desquiten con la señora y los niños, se la saquen con el compadre, se crezcan en pleito de cantina. En el sur los perdedores natos se la rifan por pendejadas. En Guerrero la violencia es una enfermedad crónica, degenerativa y mortal.

No sólo la violencia política —represiva o emancipadora—; también la muerte a diestra y siniestra, la agresión suicida entre pares, la mordida del mezcal y del machete, mala suerte. Una arraigada cultura de la sangre, tan inadmisibile y obscena como el orden social que la alimenta.

UNIONES POR CONSIGNA

En Guerrero, el reformismo agrario de Echeverría se topa con la guerra civil y al principio su prioridad es erradicar a los rebeldes armados a como dé lugar. Sin embargo, en contraste con la política de Díaz Ordaz, el nuevo gobierno federal combina las campañas militares de cerco y aniquilamiento con el diseño y la ejecución de proyectos de fomento rural. En 1972 se da a conocer un Plan de Desarrollo Integral del Estado de Guerrero que incluye programas de riego, electrificación, crédito, caminos, agua potable, etc. En la Costa Grande se intensifica la presencia del Inmecafé y en 1972 se crean la Impulsora Guerrerense del Cocotero y la Forestal Vicente Guerrero; en los años siguientes la acción de estas paraestatales modifica sensiblemente el entramado productivo y social de importantes cultivos comerciales como el café y la copra, así como la explotación silvícola.

Pero las agencias del Estado necesitan contrapartes sociales, que si al comienzo son rudimentarios grupos de trabajo, a fines de la década tienden a transformarse en uniones de ejidos.

Rubén Figueroa Figueroa —el Tigre de Huitzuco—, heredero del cacicazgo regional del norte del estado que gobernará intermitentemente la entidad en los turbulentos años de la revolución, es un político mañoso y golpeador que toma posesión del gobierno de Guerrero sobre el cadáver de Lucio Cabañas y pisoteando la tumba política de Nogueda Otero, su predecesor defenestrado a última hora.

Figueroa se impone a sangre y fuego sobre todas las otras fuerzas regionales de la entidad y recurre al terror para mantener en orden a los guerrerenses, lo que no le impide esgrimir también la política “desarrollista” de Echeverría. Como dice Lucio Cabañas en una reunión de la sierra celebrada el 23 de mayo de 1974:

Al mismo tiempo que ha aplicado un castigo, una represión al pueblo de Guerrero [...] trata de aplicar [...] una política [...] reformista; manda Luis Echeverría hacer curaciones, regalar frijolitos, hacer carreteritas, dar dinerito, a ofrecer vaquitas, a ofrecer conejos, para contentar a la gente. Y promete muchas cosas: libertad de voto, libertad de expresión y muchas cosas de éstas (y) va a poner a uno de los suyos, a Rubén Figueroa [...] quien ya viene repartiendo tierritas, peleándose con ciertos ricos, viene hablando bien de Genaro y viene pidiendo entrevista conmigo en lo personal [...].

En los años de Figueroa cientos de sospechosos de simpatizar con la guerrilla son secuestrados, torturados, asesinados y lanzados al mar. Pero, al mismo tiempo, el Inmecafé se transforma en el principal comprador del grano aromático, desplazando a los acaparadores caciques y despertando expectativas en los pequeños productores costeros; la Impulsora Guerrerense del Cocotero establece cinco centros receptores y diez fábricas procesadoras que le permiten acopiar y transformar la mayor parte de la producción guerrerense de copra, restaurando de paso la organización campesina, así sea con un perfil oficialista y sumiso; la Forestal Vicente Guerrero, creada para absorber a las cuatro compañías madereras que explotan los bosques de la sierra, pronto rebaja sus miras y coexiste con ellas,

pero su trato a las comunidades es menos tosco que el de los privados y favorece la organización de los pueblos silvícolas.

El Tigre de Huitzucó combina chicote y mazorca: encarcela a los opositores pero expide una Ley de Amnistía por la que algunos guerrilleros presos salen de la cárcel; manda matar a los indoblegables y emplea en el gobierno a los arrepentidos. En el campo, Figueroa estorba la formación de agrupamientos independientes, pero aplica la línea federal en lo tocante a la organización. El modelo colectivo es para zonas de riego o de muy buen potencial y la pobreza agropecuaria del estado le permite escapar de la colectivización forzosa, no así de la proliferación de uniones de ejidos, confeccionadas en serie por funcionarios públicos federales. Los campesinos se dejan “organizar” sin meter las manos a favor o en contra; el resultado son uniones sin proyecto ni militancia, registradas al vapor por la Secretaría de la Reforma Agraria.

Figueroa gobierna Guerrero de 1975 a 1981 y las uniones de ejidos y otras organizaciones campesinas paraestatales se forman al final de su sexenio y en los primeros años del siguiente.

En la Costa Grande, ámbito de intensa tradición organizativa donde los copreros, cafetaleros y comunidades silvícolas habían participado tanto en agrupamientos gremiales como políticos, impulsando movimientos pacíficos pero también alzamientos armados, se constituye por iniciativa cenecista la Unión de Ejidos Agropecuarios Alfredo V. Bonfil, registrada en 1979 con la formal anuencia de dieciocho comunidades agrarias. El agrupamiento cosecha la labor organizativa del Inmecafé y trata de representar a los huerteros ubicados en las faldas de la sierra. Los que tienen palmas en las llanuras costeras son la contraparte social de la Impulsora Guerrerense del Cocotero, que los induce a formar la Empresa Rural Copreros de Guerrero, constituida a fines de los setenta.

En la Costa Chica, tierra de Genaro Vázquez, nace la Unión Regional de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria que opera en cinco municipios de la zona colindante con el estado de Oaxaca. La Unión, registrada en 1981, resulta de la producción

del Instituto Nacional Indigenista que opera un sistema regional de acopio y venta de miel.

Cuna del gobernador, la Zona Norte del estado dispone de algunas tierras de riego y otras de buen temporal donde proliferan las organizaciones de segundo nivel. En 1978 se constituye la Unión de Ejidos Valerio Trujano, que agrupa productores de maíz, cacahuate y ajonjolí de los municipios de Huitzuco, Tepecoacuilco, Atenango e Iguala. A fines de la década de los setenta y principios de los ochenta aparecen, también, la Unión de Ejidos Adrián Castrejón, asentada en Teloloapan; la Unión de Ejidos Encarnación Díaz, de Atenango del Río; la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, que aglutina a productores de maíz y cacahuate de diez comunidades agrarias en los municipios de Cocula y Tepecuacuilco, y la Unión de Ejidos 24 de Abril.

En Tierra Caliente, algunas uniones se forman por decreto, pero otras resultan de intensas luchas campesinas. Tal es el caso de los pequeños agricultores, desplazados de la zona de riego, que cultivan maíz, ajonjolí y sorgo en tierras temporales. Movilizados desde principios de los setenta, para 1977 los campesinos de la región emprenden una fuerte lucha por los precios del ajonjolí, desafiando a los robustos acaparadores de una oleaginosa de la que entonces Guerrero era el principal abastecedor. Marchas, plantones, toma de oficinas. La Unión de Ejidos Vicente Guerrero, establecida en Ciudad Altamirano en los ochenta agrupa a productores de ajonjolí, maíz y barbasco de más de 12 ejidos ubicados en los municipios de Pungarabato, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán. En la misma región se establecen la Unión de Ejidos de Benito Juárez, con productores de maíz, ajonjolí, sorgo, arroz y melón del municipio de Cutzamala; la Unión de Ejidos Valle Escondido, que opera en Arcelia y Ajuchitlán; la Unión de Ejidos de Zirándaro, que agrupa productores de maíz y ajonjolí, y la Unión de Ejidos de Tlapehuala.

En la deprimida zona de la Montaña, que concentra a la mayor parte de la población indígena de la entidad, tiene notable influencia la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos

(CIOAC), animadora de una organización de jornaleros con alrededor de diez mil participantes. Pero la Montaña expulsa a sus hijos precisamente por falta de opciones productivas y hay pocos cultivos en que sustentar organizaciones económicas de segundo nivel. Con todo, a principio de los ochenta se establece la Unión de Ejidos Vicente Guerrero de Tlapa, que agrupa a productores de maíz, recolectores de palma y artesanos.

Salvo los ajonjolineros de Tierra Caliente, las organizaciones campesinas surgidas durante el gobierno de Figueroa resultan de iniciativas burocráticas, quizá porque la militarización de extensas regiones rurales inhibe la lucha de los labriegos. En cambio, el sexenio es pródigo en movilizaciones de otros sectores.

De 1979 a 1981 los maestros de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protagonizan intensos combates por los salarios y ponen en crisis uno de los agrupamientos más poderosos del corporativismo mexicano. El movimiento se enfrenta al gobernador y desemboca en la formación del primer Consejo Central de Lucha Magisterial del país.

El movimiento universitario guerrerense arranca con la fundación de la máxima casa de estudios en los años sesenta. La Federación Estudiantil Universitaria y posteriormente los sindicatos luchan por el proyecto académico, pero se involucran también en los movimientos populares. Desde 1972 y durante todo el periodo gubernamental de Figueroa, las corrientes de izquierda dominan en el Consejo Universitario y controlan la Rectoría, encaminando a la máxima casa de estudios hacia un proyecto de vinculación con las comunidades urbanas y rurales al que llaman Universidad-Pueblo.

Otro movimiento importante en el sexenio es el de los colonos del puerto. Con antecedentes combativos desde los cuarenta, los vecinos organizados en el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco se enfrentan a la pretensión de abrirle paso a nuevos “desarrollos turísticos”.

Hay también luchas obreras, como las que emprende la sección 17 del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la Repú-

blica Mexicana, en demanda de mayores salarios y mejores condiciones de trabajo y contra el liderazgo charro de Napoleón Gómez Sada. Los choferes de Líneas Unidas del Sur (Flecha Roja), que luchan por mantener el pago de la comisión, se enfrentan a represión y despidos generalizados. No en balde Rubén Figueroa era el zar del autotransporte público.

REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA

El peculiar traslape de las elecciones guerrerenses y las federales propicia que durante la mayor parte del sexenio desregulador y privatizante de Miguel de la Madrid ocupe el ejecutivo de Guerrero un promotor del intervencionismo estatal.

Populista extemporáneo, Cervantes Delgado impulsa un Plan de Desarrollo Socioeconómico para el Estado de Guerrero —luego Plan Guerrero— por el que la paz impuesta y persecutoria de Figueroa deviene participación social y “concertación”. El presupuesto es la medida de la capacidad negociadora del Estado, y en la primera mitad del sexenio la federación, a través del Convenio Único de Desarrollo, financia con cierta holgura el Plan Guerrero, permitiéndole al gobernador impulsar un Sistema Estatal de Planeación Democrática que recoge demandas de las organizaciones sociales.

A partir de 1985 los recortes nacionales al gasto público repercuten en una reducción a la mitad de la asignación federal, que por esos años representa unas tres cuartas partes del presupuesto de la entidad. El resultado es un desplome de más de 40 por ciento en el gasto público estatal, que constriñe drásticamente los alcances del Plan Guerrero.

Sin liquidez, la “concertación” languidece. Pero la merma en la capacidad de negociación del gobierno no inhibe el intenso trajín social, alentado por la apertura democrática. Así, el sexenio de Cer-

vantes Delgado se caracteriza por el estatismo: creación de 28 nuevas empresas paraestatales y expansión de más de 60 por ciento de la burocracia; pero también por el fortalecimiento de la organización popular: saldo del Programa Único de Organización y Capacitación son 24 uniones de ejidos, 118 asociaciones agrícolas locales, 211 unidades agropecuarias de impulso a la mujer y 37 sociedades cooperativas.

Los balances estadísticos de la acción gubernamental son engañosos; pero lo cierto es que más allá de la multiplicación de los mimbres, de 1981 a 1987 se fortalecen en Guerrero las organizaciones de base. Pues lo que en lógica burocrática es un intento de remontar la guerra sucia de los setenta y legitimar el gobierno, en perspectiva social resulta una favorable coyuntura de participación.

Excepcional es el impulso que reciben los agrupamientos rurales autónomos, alentados por un movimiento campesino que, dejando atrás el temor, retoma la rica tradición gremial guerrerense. Algunos protagonistas del auge de lucha popular de los ochenta son nuevos, pero también se incorporan muchas de las uniones de ejidos fabricadas en serie en tiempo de Figueroa, que ya sin el cacique encima revitalizan y pasan de cascarones inertes núcleos combativos. Y no sólo son luchones; también autogestionarios, pues durante los ochenta, al tiempo que se despliega un fuerte movimiento reivindicativo que reclama al Estado la solución de sus problemas, va cobrando fuerza el concepto de “corresponsabilidad” y están madurando los proyectos productivos de carácter social.

La Costa Grande, escenario de la cruenta guerra sucia contra el Partido de los Pobres, es ejemplo privilegiado de cómo, al término del gobierno de Figueroa, remiten los temores y se reanima la lucha gremial independiente. La refundación democrática de la Unión de Ejidos Agropecuarios Alfredo V. Bonfil transforma el mimbres registrado en 1979 en la organización cafetalera más representativa del estado, que para 1983 agrupa productores de 45 ejidos, principalmente de Atoyac, Tecpan y Coyuca en la Costa Grande, pero

también de Malinaltepec y San Luis Acatlán en la Costa Chica. El crecimiento orgánico es a la vez palanca y resultado de amplias movilizaciones por el precio del grano aromático y por el pago de los adeudos del Inmecafé a los productores.

La calentura organizativa se extiende, y en la primera mitad de los ochenta aparecen la Sociedad Cooperativa La Pintada, que opera con cafetaleros de El Paraíso, en Atoyac, y de Tepetixtla, en Coyuca, y también grupos caciquiles de repuesto como la Sociedad Semicolectiva de Crédito Ejidal, de El Paraíso, y la Sociedad de Crédito de San Vicente, ambas sustentadas en el control de los permisos de exportación.

Pero la Bonfil no es sólo una organización de cafetaleros; desde 1983 incorpora a los consumidores agrupados en el Consejo Comunitario de Abasto que supervisa la operación del sistema regional de Distribuidora Conasupo, S.A. (Diconsu). Y al mismo tiempo comienzan a formarse grupos de maiceros, a semejanza de los grupos cafetaleros de trabajo colectivo, y en 1985 impulsan un banco de maíz, destinado a racionalizar el acopio y el abasto del grano. Poco después se integran grupos femeninos en torno a las unidades agrícolas industriales de la mujer.

Si la combativa organización cafetalera de los ochenta proviene del renacimiento democrático de una unión de ejidos preexistente, la convergencia de las comunidades silvícolas de la Costa Grande arranca con movilizaciones. En 1980 los ejidos de Las Compuertas, Bajos de Balsamar, El Balcón y Cordón Grande se agrupan para demandar mayor precio de la madera y cumplimiento de las promesas de la paraestatal Forestal Vicente Guerrero. Para 1985 el movimiento se ha extendido a El Molote, Toro Muerto, Puerto del Gallo, Vallejos de Zaragoza, Pitos, Pitales y Letrados, Corrales del Río Chiquito, entre otros pueblos. Se funda entonces la Coordinadora de Ejidos Forestales de la Costa Grande de Guerrero que agrupa a 14 comunidades silvícolas. La lucha es, principalmente, por el control de los fondos comunales generados por la madera, por que los permisos de corte se expidan con oportunidad, y contra el alto costo de

los servicios técnicos. En 1988 la Coordinadora se transforma en Unión de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria General Hermenegildo Galeana.

También los plataneros de la Costa Grande comienzan a organizarse desde mediados de la década a partir de los de Tenexpa. En cambio, el importante sector de los productores de copra es incapaz de reanimar la Empresa Rural Copreros de Guerrero, constituida en tiempos de Figueroa.

La Unión Regional de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria de la Costa Chica nace por iniciativa del INI y a partir del acopio y venta de miel operado por el instituto, pero a partir de 1981 es resucitada por las bases y en los años siguientes extiende su acción a los ámbitos del consumo popular a través del Consejo Comunitario de Abasto de Ometepec— y de la producción y comercialización de granos básicos— por medio de un banco de maíz. A mediados de la década la unión agrupa alrededor de veinticinco ejidos en los municipios de Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Igualapa y Xochistlahuaca.

Como en el caso de los cafetaleros, copreros y silvicultores, la organización de los productores de flor de jamaica de la Costa Chica comienza a despuntar con la intervención de las agencias económicas del estado, que a principios de los setenta remueven el añoso sistema de acaparamiento y subordinación social. Aquí la ruptura corre por cuenta de Banrural, que desde 1975 se presenta como alternativa para los tradicionales créditos usuarios garantizados por la cosecha. Como siempre, la institución gubernamental pasa de salvador a victimario cuando comienza a regatear sus préstamos, argumentando la inestabilidad de los precios pero también que se trata de un cultivo asociado, maíz-jamaica, y el banco puede habilitar uno u otro producto pero no ambos y entreverados. La movilización por el financiamiento encuentra una salida estatal en el Crédito a la Palabra, que desde 1981 ejerce el gobierno de Cervantes Delgado, cuyos promotores de desarrollo rural inducen también la organización de los productores. Así, en 1983 se funda la Unión de Ejidos Plan de

Ayutla, que representa alrededor de dos mil jamaíqueros de la región y que tiene poca vida interna, quizá porque su fundación resulta de iniciativas verticales y burocráticas. Otro es el caso de los Campesinos Jamaíqueros Organizados, agrupamiento autónomo de productores de Tecuanapa y Juan R. Escudero que desde 1980 se movilizan por cuenta propia y crean la Unión de Pueblos de Costa Chica. En 1985 esta organización se registra como Unión de Ejidos Pueblos de Costa Chica y comienza a operar créditos estatales para el acopio y la comercialización de la flor.

En la Zona Norte del estado, las fantasmales organizaciones fundadas en los setenta se reaniman en la década siguiente y, con la iniciativa de la Unión de Ejidos de Emiliano Zapata, conforman una Coordinadora Campesina a la que se incorporan, además de los promotores, la Unión de Ejidos Valerio Trujano, la Unión de Ejidos Adrián Castrejón y la Unión de Ejidos Encarnación Díaz. El alma de la coordinadora son los productores de cacahuete que, como los cafetaleros, maiceros y jamaíqueros, buscan mejores opciones de comercialización. Los campesinos movilizados de la Zona Norte se vinculan con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), convergencia de organizaciones de una docena de estados de la República, animadas principalmente por la demanda de tierra.

El ajonjolí es para las organizaciones campesinas calentanas lo que el cacahuete para las de la Zona Sur. En los ochenta la Unión de Ejidos Vicente Guerrero y otras se movilizan conjuntamente en pos de mejores condiciones de mercadeo para ese producto. Convergencia de corta duración, pues los precios se mantienen bajos y a partir de 1987 se generaliza la sustitución del cultivo de la oleaginosa por el del maíz.

En la Montaña, la Unión de Ejidos Vicente Guerrero tiene cierta presencia en Tlapa durante los primeros años ochenta, reforzada por la operación del Consejo Comunitario de Abasto, de gran importancia en una región como ésta, de mercadeo extenuante y costoso. Por su parte, cerca de mil productores de café de nueve comunidades de Malinaltepec y los altos de San Luis Acatlán, inicialmente incorpo-

rados a la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, con sede en el distante Atoyac, deciden darse una organización propia de carácter local, y en 1985 constituyen la Unión de Ejidos Luz de la Montaña, que se ocupa de los problemas de mercadeo de las muy pequeñas huertas del municipio, pero también del abasto de básicos, vital en una zona mal comunicada y donde casi no se produce maíz.

El municipio de Chilapa, en la Zona Centro del estado, es escenario de una experiencia bastante difundida en los ochenta: el embarcamiento de un Consejo Comunitario de Abasto, que diversifica sus actividades a la compra y distribución de fertilizante y al mercadeo de artesanías, hasta transformarse en una organización multiactiva. La Zanzekan Tinemi, cuyo antecedente es la Unión de Pueblos de Chilapa, es una Sociedad Social y no una unión de ejidos, pues cuando se constituye, esta última figura ya no tiene el favor gubernamental, pero el movimiento del que surge es análogo al que animan las uniones en otras zonas de Guerrero.

Pese a que comparten formas de lucha, demandas económicas e interlocutores institucionales, salvo la Coordinadora Campesina de la Zona Norte, las demás organizaciones autónomas del agro guerrerense movilizadas desde principios de los ochenta operan cada una por su lado. La constitución y reactivación de uniones de ejidos se había sustentado en la disposición campesina de echarle montón a sus problemas más urgentes catalizada por un liderazgo natural heredera de la tradición regional de lucha, y encaminada por la visión e iniciativa de un puñado de jóvenes activistas, generalmente de origen guerrerense, con alguna formación política y profesional adquirida fuera de la entidad.

Muchos de los cuadros, que desparramados por el estado operan como fermento organizativo, provienen de la Universidad Autónoma Chapingo, y algunos militan en agrupamientos de izquierda con vocación nacional. Pero aunque comparten ciertas concepciones —proverbialmente la idea de que la organización popular debe construirse desde las bases— no se aglutinan en torno a un proyecto político unitario. Tampoco las coordinadoras campesinas naciona-

les, que se forman a fines de los setenta y principios de los ochenta, ayudan a la convergencia, pues mientras que las uniones de la Zona Norte se vinculan a la CNPA, las de la Costa, entre otras, se acercan a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

Como es habitual en un país donde históricamente el Estado ha inducido la organización social, mucho de lo que comparten las uniones campesinas guerrerenses se origina en su común interlocución con las agencias gubernamentales, de las que provienen tanto el modelo organizativo como las líneas programáticas del llamado “desarrollo rural”. Es, pues, paradójico, pero no sorprendente, que uno de los primeros acercamientos entre las uniones de ejidos autónomas de Guerrero haya tenido lugar en un encuentro nacional de organizaciones campesinas de segundo nivel del sur y sureste del país, organizado en Taxco, Guerrero, por la Secretaría de la Reforma Agraria en noviembre de 1984. Esta reunión, a la que asisten delegados de Yucatán, Chiapas y Guerrero, entre otros, propicia el encuentro de los representantes de 12 uniones de ejidos de esta última entidad, quienes en pláticas paralelas a los trabajos formales acuerdan encontrarse posteriormente en un espacio propio y sin la presencia del gobierno.

El primer diálogo independiente se realiza el 22 de diciembre de ese mismo año en la sede de la Unión de Ejidos Valerio Trujano, en Tonalapa. Ahí se intercambian experiencias, se definen demandas comunes y se esbozan las vías de la convergencia. Entre 1985 y 1986 la Coordinadora de Uniones de Ejidos de Guerrero se reúne en siete ocasiones, ubicando en el acceso al fertilizante y en la comercialización de las cosechas los ejes comunes de la lucha campesina. Se identifican también demandas particulares de cada región y se acuerdan mecanismos solidarios para avanzar conjuntamente.

A la última sesión del cuarto encuentro de la coordinadora, realizado el mes de abril en Río Santiago, municipio de Atoyac, se convoca a las instituciones gubernamentales del sector agrario para presentarles un pliego petitorio común de cien puntos.

La razón de ser de la convergencia es la gestión de las demandas campesinas con las agencias del Estado, y en torno a esto surgen también las primeras tensiones. Ya en el quinto encuentro, realizado en Chilpancingo, los delegados se recriminan mutuamente que cada unión va a lo suyo y antepone sus propios logros a la solidaridad. Actitud favorecida por los funcionarios públicos, quienes rehúyen las negociaciones colectivas en abono del cabildeo bilateral.

Contra lo que cabría esperar, a la hora de la verdad los agentes gubernamentales ponen la política al comando, subordinando su cometido institucional a los objetivos de legitimación y control social. En cambio las uniones de ejidos, que debieran guiarse por objetivos políticos e intereses de clase, anteponen los módicos logros inmediatos y particulares a su consolidación como fuerza social con proyecto estratégico.

Las actitudes pichicateras, acicateadas por la política clientelar institucional y agudizadas por la reducción del gasto público, que empuja a las organizaciones a competir por migajas, desgastan y fracturan a la coordinadora. Pero al término del sexenio de Cervantes Delgado se cierne sobre los campesinos guerrerenses organizados la sombra del nuevo gobernador: un destacado miembro de la “generación del cambio” que, a contrapelo de su imagen ilustrada y moderna, desde la campaña ha dado ominosas muestras de intemperancia.

Tardecito pero sin clemencia llegan a Guerrero las políticas de ajuste, y Ruiz Massieu es el encargado de “reconvertir” el Estado social del “nacionalismo revolucionario” mexicano en un neoliberal Estado crupié al servicio del mercado y sus grandes apostadores.

En diciembre de 1986, cuando se realiza el séptimo encuentro de la coordinadora, es inminente la clausura de los espacios de concertación prevalecientes, y ante una amenaza de la que no se escapa ningún agrupamiento autónomo, convergen algunas uniones que se habían dispersado. Pero la diáspora ha desgastado el esquema organizativo nacido en 1984; se requiere un reagrupamiento de nuevo tipo.

El 10 de abril de 1987, la tradicional movilización por el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata culmina con un multitudinario encuentro en el que cinco mil campesinos, provenientes de 27 organizaciones ubicadas en las diferentes regiones del estado, constituyen la Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero. El acto es el punto más alto del proceso de organización rural iniciado diez años antes y la exitosa culminación de un gobierno que, sin descobijar a las centrales corporativas, supo negociar con los agrupamientos independientes. La Alianza es heredera de las movilizaciones campesinas autónomas, pero también es hija de la “concertación” con el gobierno del estado, y en el momento de su fundación a la administración de Cervantes Delgado le quedan diez días de vida. El interminable sexenio de Ruiz Massieu será su prueba de fuego.

NEOLIBERALISMO BRONCO: DEL ESTADO EMPRESARIO AL ESTADO CRUPIÉ

Miembro destacado de la pandilla que escaló el poder en la sórdida década de los ochenta, Ruiz Massieu es a Guerrero lo que Carlos Salinas al país.

Falto de antecedentes en cargos de elección y con una carrera burocrática y administrativa transcurrida en el Distrito Federal, el nuevo gobernador llega a Guerrero sin más experiencia en el estado que un año como secretario de Gobierno de Rubén Figueroa. Pero el conocimiento directo de la entidad poco hace falta cuando se tienen claras las “oportunidades”; es decir, las “ventajas comparativas” que pueden seducir al gran dinero foráneo. Y éstas se plasman en el Plan Sexenal presentado en 1988.

El documento tiene como prioridad los “desarrollos” turísticos y la producción maquiladora, y se estructura en torno a cuatro proyectos multimillonarios: urbanización y comercialización de

Punta Diamante y Marina de Ixtapa; Autopista del Sol, al servicio del turismo acapulqueño; carretera al Filo Mayor, incentivo a las inversiones forestales extranjeras, y reconstrucción del sistema de riego de Tierra Caliente, de gran interés para las transnacionales del melón. Lo que no es más que la inversión guerrerense del modelo nacional salinista: un plan de desarrollo que lo apuesta todo al crecimiento económico palanqueado en los recursos externos.

Con ortodoxia neoliberal, Ruiz Massieu se la juega con el sector terciario de la economía —el turismo que mete divisas. Y le vuelve la espalda al primario —la agricultura que genera empleo. El tecnócrata sureño sigue la implacable lógica del 70 por ciento que en verdad cuenta: se esmera en Acapulco, donde se generan siete de cada diez pesos del producto interno bruto, y se ausenta del campo, donde trabajan siete de cada diez guerrerenses ocupados. La meta es crecer a toda costa, que el bienestar de los trabajadores vendrá más tarde y por añadidura. Y si no viene, no le hace, pues en el mediano plazo todos estarán muertos.

El “ahorro externo” es la palanca privilegiada del crecimiento, y para atraerlo no se necesita mucho Estado, basta un puñado de buenos mercaderes. Así, el “recogimiento del sector público” de Ruiz Massieu es una degollina de burócratas que sólo deja con vida a cuatro de cada diez empleados de gobierno y que desincorpora a 19 de las 39 empresas paraestatales heredadas del sexenio anterior. Adelgazamiento que hasta sería plausible si no acompañara un drástico recorte del gasto público para el desarrollo y el desmantelamiento de los programas sociales.

Finalmente, el sistema estatal de planeación económica del sexenio anterior es sustituido por una centralista Ley Orgánica de la Administración Pública, que concede amplias facultades discrecionales al jefe del ejecutivo. Y la concertación deja lugar al orden y mando.

La rectificación neoliberal es particularmente severa en el campo, marcado desde los setenta por una desmesurada presencia del Estado, que Cervantes profundiza cuando en el resto del país ya soplan

vientos desincorporadores. En nuestro sistema presidencialista, muchas instituciones y políticas públicas, en vez de ser estables y consagradas por la ley, responden a decisiones incondicionales del jefe del ejecutivo. De suerte que, con la misma discrecionalidad con que habían llegado, desaparecen del agro guerrerense las agencias gubernamentales y los programas de fomento y desarrollo.

La “reconversión” agraria es nacional. Con los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, el Estado proveedor deja paso a las “sabias” decisiones del mercado, y junto con la reforma al artículo 27 constitucional —que restituye a la tierra su condición de mercancía, conculcada por la revolución “populista” de 1910— se desmantela todo el sistema burocrático de fomento, subsidio y regulación que gravitaba sobre el sufrido campo mexicano. La banca de desarrollo adopta criterios comerciales y descobija a la enorme mayoría de sus acreditados; los subsidios agrícolas a la operación de la infraestructura hidráulica, a los energéticos y a insumos básicos, como semillas y fertilizantes, dejan paso a las cuotas y precios “realistas”; paraestatales como Inmecafé, Tabamex, Proquivemex, Profortara, Cordemex, y la mayor parte de los ingenios azucareros, que con su intervención normativa, agroindustrial y comercial regulaban el mercado de importantes productos agrícolas, son desbaratadas; los precios de garantía de los cultivos básicos desaparecen y con ellos gran parte del sistema de acopio, almacenamiento y redistribución al que daban sentido. A cambio de la vieja, intrincada e ineficiente “economía ficción” se ofrece la “libertad de mercado”; una libre cotización de las cosechas que deberá corregir el crónico “sesgo antiagrícola” de nuestra economía, obligando a que la ciudad pague al campo lo debido. Pero el parco y transitorio mejoramiento de los precios agrícolas relativos no compensa, ni con mucho, el brutal encarecimiento “realista” de los costos y, por si esto fuera poco, la apertura a las importaciones, consustancial a la “globalización”, desploma de nueva cuenta las cotizaciones agrícolas internas.

Buen ejemplo del “realismo económico” que inspira la política rural de Carlos Salinas y Ruiz Massieu es el curso de la banca de desa-

rrollo en Guerrero. La superficie habilitada por Banrural había aumentado de manera sostenida durante casi todos los ochenta y en 1988 rebasaba las 300 mil hectáreas. Pero ésta es la cúspide; de ahí en adelante, y durante todo el sexenio de Ruiz Massieu, se desploma hasta ubicarse en poco más de diez mil a principios de los noventa. El monto del dinero ejercido disminuye en menor proporción: de 1 800 a 550 millones, pero de la clientela se recorta en alrededor de 98 por ciento, pues los descubijados son agricultores más pequeños y numerosos. Incluso sumando al Banrural el Crédito a la Palabra del gobierno del estado, los apoyos del Pronasol y las habilitaciones del Fondo de Interés en Relación a la Agricultura (FIRA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firc), el financiamiento total de 1992 cubre apenas 82 209 hectáreas, menos de la tercera parte de lo que abarcaba cuatro años antes. A esto hay que agregar el desmantelamiento del Inmecafé y la desaparición de Fertilizantes de Guerrero (Fertigro), entre otras desincorporaciones.

LO QUE CALA EL FILO MAYOR

Otro saldo de la adopción de políticas neoliberales por los rumbos del sur es el vertiginoso auge de la “goma”.

Negocio viejo del cacicazgo serrano tradicional, en tiempos de “reconversión” el narco-*business* también se moderniza. Durante el gobierno de Ruiz Massieu, tan proclive a guiarse por las señales del mercado, Guerrero descubre en los sicotrópicos sofisticados una de sus mayores “ventajas comparativas”, y en unos cuantos años la sierra del sur cambia su patrón de cultivos. Mientras se estancan las cosechas de una cannabinácea —la entrañable marihuana—, se expande incontenible una papaverácea de importación, la exótica amapola.

Con el desplazamiento de la suave y tradicional marijuanita por el duro *black sugar*, la entidad se sitúa en la vanguardia de un cul-

tivo agroindustrial de mercado externo con harto valor agregado y a tono con las tendencias dominantes en la demanda mundial de psicotrópicos.

Y es que mientras la exportación de marihuana se ha mantenido en torno a las 3 500 toneladas anuales, la de goma de opio se ha incrementado aceleradamente durante los noventa hasta llegar a las 5.4 toneladas anuales. El mercado manda.

El sistema de los enervantes es semejante al de otros ramos agrícolas guerrerenses. En caso de la mota —una siembra esforzada y ancestral— el campesino productor se encarga de regar, fertilizar y “desmachar”, mientras que por lo general el narco-coyote se limita a habilitar y acopiar el producto. La amapola en cambio es un cultivo menos exigente pero de cosecha laboriosa, pues en abril y mayo, cuando florea, es necesario “rayar” la planta y recolectar las pequeñas gotas de goma. La marihuana se siembra en julio, se cosecha en los últimos meses del año y a fines de los noventa los coyotes la pagaban entre 500 y 800 pesos el kilo. La amapola, que se establece en noviembre y se cosecha entre junio y agosto, se cotiza entre 10 y 20 pesos el gramo.

Arriesgándose a sembrar “yesca” o “chutama” el campesino no gana mucho, pero sin duda obtiene más que si cultivara maíz.

Como en los casos de la copra o del café, a los trabajadores del campo sólo les tocan las migajas del auge amapolero. Las migajas y el sórdido costo social.

Frustrados por una crisis agraria que llegó para quedarse y atosigados por la filosofía del “éxito personal” que pregonan los medios de comunicación de masas, los jóvenes costeños y calentanos no encuentran ejemplo en el remoto Carlos Slim, de *Forbes*, pero sí en el entrañable Caro Quintero, de *Alarma*, y de los Tigres del Norte. Y muchos remontan la sierra en pos de un espejismo. No van tras de utopías de redención colectiva, como los guerrilleros, sino en pos de un sueño de salvación personal. Pero unos y otros pertenecen a una generación desencantada; son jóvenes sin nada que perder que emprenden, cada quien a su modo, el alucinado asalto al cielo.

Cumbres de la Tentación se llama un paraje emblemático; otros llevan nombres sonoros como Toro Muerto, Campo Morado o La Soledad de los Enanos. En todos se siembra sicotrópicos, corre el dinero fácil y abundan las armas de alto poder. Los más de los remontados no pasan de mariguaneros habilitados o de “rayadores” a jornal. Pero los emprendedores pueden iniciar una carrera en el tráfico de los enervantes y, ya impuestos a la vida airada, extender el negocio a los secuestros o jugársela en los asaltos carreteros. Algunas carreras criminales son espectaculares, legendarias, discurren a ritmo de redova. Todas son cortas.

Y es que la tajada de león del negocio de las drogas no es para los campesinos, ni siquiera para las infanterías del narco. Los verdaderos ganones son los intermediarios, con frecuencia grandes comerciantes, que se mantienen en lo oscuro y emplean como fachada su mercadeo honesto.

Como todos los “patrones lugareños”, los barones de la droga protegen su seguridad y su verdadero negocio tras una disuasoria capacidad de fuego. Sólo que aquí están en riesgo muchos millones de dólares y los matones tradicionales no bastan. Los narcopistoleros de hoy ya no llevan nombres con sabor a corrido, como *Los Cuatro Gallardos*, *La Onza* o *El Zanatón*, sino con resonancias de *thriller* posmoderno, como Frank Miller; no vienen de la afamada tierra caliente, sino de la fronteriza Tijuana, y no trabajan de capataces o guardaespaldas locales: de menos son primeros comandantes de la Policía Judicial Federal.

Lo que cambia es la habitual simbiosis entre el poder económico, el control político y la fuerza pública. Casi todos los gobernadores guerrerenses han cobijado al cacicazgo y sus negocios. Y se dice con insistencia que los que ocuparon el puesto durante el reciente auge de las drogas solaparon al narcotráfico.

Quién sabe. A lo mejor es cierto que las fortunas multimillonarias depositadas en dólares en Estados Unidos se amasaron ahorrando cumplidamente los aguinaldos y “bonos de productividad”. Lo que no está en duda es que en los últimos años la Policía Judicial Federal

ha servido al narcopoder. El ya mencionado Frank Miller Luna, que ocupó el puesto al inicio del sexenio de Carlos Salinas, fue detenido en 1990 en el centro nocturno acapulqueño *Éxtasis*, de su propiedad, donde con frecuencia se reunía con *el Güero* Palma, cuando era más esbelto y menos famoso, y con Armando Carrillo Fuentes, antes de que se ganara el apodo de *El Señor de los Cielos*. Por los mismos días cayó su socio y contacto con los narcotraficantes, Ranulfo *El Negro* Ríos Vargas, ex colaborador del general Acosta Chaparro en la Dirección Federal de Seguridad, presunto ejecutor de Carmelo Cortés —líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— y destacado participante en la guerra sucia contra la guerrilla en los años setenta y ochenta.

Y no se trata de colados circunstanciales, sino de un orden establecido: Mario Alberto González Treviño, sucesor de Frank Miller al frente de la Policía Federal de Guerrero, es aprehendido en 1991 como responsable de cuando menos seis asesinatos cometidos en Sinaloa, entre ellos el de un comandante de la policía judicial, el del hijo del ex gobernador Sánchez Celis y el de la abogada Norma Corona. Toda una ficha.

DE CAPA CAÍDA

El nuevo Estado, dicen los fanáticos de la libre concurrencia, debe abandonar la regulación y el fomento para concentrarse en lo asistencial. De modo que, en Guerrero, se invierten las prioridades del gasto público: con Cervantes 56 por ciento era productivo y 26 por ciento social; con Ruiz Massieu 57 por ciento del ejercicio tiene un destino social y sólo 23 por ciento es productivo. Pero el monto de la inversión se reduce sustancialmente, de modo que en términos absolutos el gasto social no aumenta, pero en cambio sí se cancela el fomento productivo, condenando a los más débiles a vivir de una caridad mezquina y, por si fuera poco, menguante.

En cuanto a la organización rural, queda atrás la moda de las Uniones de Ejidos y ahora la rifan las Sociedades de Solidaridad Social.

Las “triple ese” son más fáciles de registrar, tienen menos atribuciones y, sobre todo, dan cabida tanto a los ejidatarios como a los “privados”, sujetos privilegiados del nuevo desarrollo rural empresarial. Durante el gobierno de Ruiz Massieu se crean 65 asociaciones de este tipo, principalmente en las dos costas.

A este desolador panorama agrícola se enfrenta la Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero. Su bronca con Ruiz Massieu no es por nostalgias populistas, pues durante los ochenta muchas uniones pasaron de las demandas puntuales a las propuestas autogestivas y algunas cuentan con aparatos económicos propios.

Pero una cosa es asumir la corresponsabilidad en el desarrollo, y otra garantizar la eficiencia y rentabilidad empresariales, al tiempo que se cumplen funciones redistributivas en beneficio de los más pobres. Y todo en plena crisis económica y mientras el Estado se lava las manos y se limpia las uñas, pues debe ponerle la mesa al puntilloso capital transnacional.

Al “cambiar de terreno” los agrupamientos de inicio puramente contestatarios devienen más o menos autogestivos. Pero sus bases no son sus empresas, y si preservar éstas supone buena administración, conservar aquéllas demanda compromiso social y beligerancia política. Ruiz Massieu no sólo evade su corresponsabilidad en el desarrollo rural; también es insensible a las reivindicaciones puntuales y hostil a las organizaciones independientes, de modo que la anunciada “mayoría de edad” de los campesinos no culmina en fiesta de quince años, sino en pleito familiar.

En plan adulto y constructivo, las uniones de ejidos coordinadas en la alianza crean una empresa colectiva enfocada al mercadeo de las cosechas, problema principal y común a todos los productores.

La comercializadora Agropecuaria de Guerrero, S.A de C.V., de la que forman parte catorce empresas mercantiles regionales establecidas en Ayutla, Tecoanapa, Atoyac, Benito Juárez, Coyuca de Catalán, San Luis Acatlán, Chilpancingo, Tlacoachistlahuaca, Ajuchitlán y Tecpan se funda en 1988 impulsada inicialmente por la Sociedad

Cooperativa Trigo Limpio, la Unión de Ejidos Pueblos Costa Chica, la Sociedad de Cafeticultores de Costa Grande, la Sociedad de Solidaridad Social José Luna Ramírez, el Consejo Comunitario de Abasto de Ometepe, el Consejo Comunitario de Abasto de San Luis Acatlán, el Consejo Comunitario de Abasto de Alcholoa y la Unión de Ejidos Vicente Guerrero. Al principio la Comercializadora opera recursos “a fondo perdido” y con un enfoque más social que empresarial, de modo que en lo económico su gestión no es exitosa. En 1992 la empresa entra en receso reestructurador, y a partir de 1993 reanuda labores, pero ahora centrada en la introducción de insumos agrícolas y más preocupada que antes por recuperar inversiones. Las organizaciones miembros se vinculan también con el Corredor Comercial y de Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V., distribuidora de fertilizantes y otros insumos con base en el estado de Morelos y planes de ramificarse hacia el Estado de México, Puebla y Guerrero.

Creer que desplazando a unos cuantos “coyotes” y vendiendo por cuenta propia se “retendrá el excedente” y como por arte de magia mejorarán de manera sostenida los ingresos del productor es un espejismo, una ilusión particularmente quebradiza cuando las condiciones del mercado son erráticas y hostiles. Así, la comercializadora difícilmente hubiera podido satisfacer las expectativas de sus socios. Pero lo cierto es que la empresa y las organizaciones regionales se enfrentan tanto al acoso de tasas y precios como a la hostilidad de un gobernador prepotente, ajeno a la entidad y urgido por ganarse a los cacicazgos tradicionales. Un tecnócrata “modernizador” que se apoya en las más anacrónicas, herrumbradas y corporativas estructuras del sistema.

La Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, adalid de los autogestionarios guerrerenses, es el blanco seleccionado para aplacar veleidades autonomistas. La mano del gobernador está detrás de los caciquillos locales que en 1987 se adueñan de la directiva formal de la unión costeña, como diversos intentos usurpadores en otras organizaciones independientes. Y cuando el ninguneo y los agandalles

no bastan, Ruiz Massieu recurre a la cruda represión. “En plan de pleito va a haber sangre, problemas, porque el gobierno de Guerrero es fuerte y tiene los pantalones bien puestos”, declara al diario *La Jornada* el ex catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM el 31 de julio de 1988.

Y efectivamente, durante su mandato la única burocracia que embarnece es la fuerza pública, cuyos sueldos y percepciones aumentan un 300 por ciento entre 1987 y 1990. No por ello mengua la criminalidad, pero en cambio menudean las golpizas a colonos “paracaidistas”, campesinos respondones y opositores políticos.

LOS LÍMITES DE LA EMANCIPACIÓN LIBRECAMBISTA

Atosigadas por el gobierno estatal, las organizaciones campesinas autónomas trastabillan. Algunas de plano desaparecen, otras se enconchan esperando tiempos mejores y unas cuantas persisten y hasta prosperan, pues gracias al patrocinio de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y sus padrinos federales, logran evadir el cerco de Ruiz Massieu.

Los mayores avances relativos se dan en la coordinación por sectores, que junto con la organización regional es uno de los ejes aglutinantes de los campesinos.

A mediados de 1991 se constituye una Red Estatal de Productores de Maíz, en la que, además de quince fantasmales Comités Regionales de Organización, Producción y Comercialización Rural (CROPOR), participan alrededor de diez organizaciones de segundo nivel, entre Uniones de Ejidos y Sociedades de Solidaridad Social.

La convergencia se incorpora a la Red Nacional de Productores de Maíz, que se conforma ese mismo año y sobrevive hasta 1993.

La fundación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOCA), en 1989, propicia la convergencia de los pequeños cafeticultores de Guerrero, separados desde la diáspora de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, y en 1994, a partir de un congre-

so realizado en San Luis Acatlán, se forma la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Guerrero, en la que participan productores de las dos costas y de la Montaña.

Por estos mismos años se logra una cierta confluencia estatal de los Consejos Comunitarios de Abasto y hay acercamiento entre los diversos núcleos de productores de flor de jamaica. Sin embargo, estas convergencias no bastan para contrarrestar el reflujo de las organizaciones regionales, acosadas por el nuevo gobernador.

Ruiz Massieu pertenece al círculo íntimo de Carlos Salinas, pero la “generación del cambio” no es monopólica y el gobernador tiene adversarios en la propia administración central. Enemigos políticos y competidores en la multimillonaria “piñata” guerrerense, que si en ese momento aún no lo mandan matar, sí le juegan la contra desde las agencias federales. Y así, aprovechando la pugna entre los “señores de la guerra”, consustancial al peculiar “federalismo” mexicano, algunos agrupamientos campesinos capotean el vendaval.

Pero no todos los problemas vienen de afuera; la crisis organizativa también tiene sus raíces internas. Las uniones son hijas de un sistema discrecional donde el ciudadano no ejerce derechos respaldados por la ley, sino que se beneficia —o perjudica— por decisiones personalizadas de los poderosos. La fortuna de las organizaciones, aun las autónomas y autogestionarias, fluctúa al ritmo sexenal de los servidores públicos. Y es que también ellas han interiorizado la lógica del padrinazgo, por la que unos pocos cuadros o asesores ejercen el derecho de picaporte con los funcionarios. Estos representantes con patente devienen líderes crónicos, no tanto porque las bases los reelijan, como porque han privatizado las relaciones institucionales. Así, los funcionarios “modernos” y las organizaciones de “nuevo tipo” reproducen el añoso sistema de fidelidades clientelar-corporativo, aunque ahora lo practiquen caciques burocráticos de cuello blanco y caudillos gremiales de módem y computadora.

Cuando los factores decisivos en la vida de una organización comienzan a venir de arriba y de fuera, las formas democráticas degeneran en simple legitimación formal de las decisiones del liderazgo

gestor. Pero esto, que es cierto para todo agrupamiento colgado de los “favores” institucionales, es aún más dramático en organizaciones de productores que han desarrollado aparatos económicos. Cuando las organizaciones devienen empresas — que a su vez funcionan como organizaciones — se desata una dinámica perversa por la que el interés comercial sustituye a la convicción, los dirigentes se transforman en gerentes y los militantes acaban en simples socios o clientes. De esta manera, las empresas sociales, que deberían propiciar y darles una base material estable a las organizaciones coyunturales y reivindicativas, se transforman en ídolos, aparatos inertes por los que el proyecto democrático se sacrificará a una rentabilidad tan imperiosa como esquiva.

Muchas de las organizaciones campesinas autónomas, nacidas o resucitadas a principios de los ochenta, no lograron transitar de la lucha más o menos exitosa por demandas puntuales a la gestión de proyectos productivos estables. Así, cuando la administración de Ruiz Massieu les enfrió el agua, se inmovilizaron. Otras, las afortunadas, emprendieron con éxito el “cambio de terreno”, pero sólo para enfrentar la dinámica alienante de los aparatos económicos, tanto más perversa cuanto más ariscas son las condiciones de rentabilidad.

Pero el trajín campesino no se agota en el desigual combate con el mercado. Eficiencia y rentabilidad no son las únicas voces de orden en el ámbito rural; también se aspira a la equidad, el bienestar, la libertad política, la democracia. Y, paradójicamente, es la aptitud de la agenda campesina lo que permite romper el círculo vicioso de la vía puramente librecambista de emancipación.

TICUILES CONTRA MEGAWATTS

Los adalides campesinos de la modernidad con sentido social no pudieron con el neoliberalismo bronco de Ruiz Massieu, pero el salinista del sur encontró en el Guerrero profundo la horma de sus zapatos.

Como el país, Guerrero tiene un 15 por ciento de población indígena, y también ahí son ellos, los más oscuros y olvidados, quienes arruinan el debut primermundista de nuestros neoliberales. Pero los de Guerrero son madrugadores y al canto del gallo 1994, cuando se levantan los tzeltzales, tzotziles y tojolabales de Las Cañadas, los nahuas del Alto Balsas ya acaban cuatro años de rebelde trajín, acompañados, desde 1991, por mixtecos, amuzgos y tlapanecos de la Montaña.

Al alba de los noventa, los agoreros indios interpretan las grandes cruces que han comenzado a aparecer en las laderas de los cerros y profetizan a las veintidós comunidades del Alto Balsas el mismo destino de los mazatecos oaxaqueños, desarraigados de sus tierras ancestrales por la presa Cerro de Oro. Y es que las cruces marcan el nivel que alcanzará el agua cuando se realice el gran proyecto hidroeléctrico de San Juan Tetelcingo.

En lo que se corre la voz, 40 mil nahuas se ponen de pie. Y es que están en vilo agujajes y panteones vivos y muertos; los que se han ido y los que vendrán. Corren peligro el venado de cola blanca y el pájaro chechetl, el mole de gallina y los tamales de nejo, las iglesias cristianas y los restos olmecas de Teopantecuanitlán. Se avecina una batalla por la lengua y la cultura; una guerra de tlicuiles (fogones) contra *megawatts*.

Los representantes de las veintidós comunidades se reúnen primero en Xalitla y el 21 de octubre de 1990 se juntan de nuevo en San Agustín Oapán para fundar el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas.

Una primera marcha a Chilpancingo les revela que el problema no tiene solución en la entidad, y entre 1992 y 1995 el Consejo emprende tres marchas al Distrito Federal. También envía comisionados al Encuentro Continental de Organizaciones Indígenas, realizado en Quetzaltenango, Guatemala; a la Cumbre de la Tierra, celebrada en París, y a cabildear en las oficinas del Banco Mundial en Washington, donde argumentan que la institución financiera multilateral no debe financiar un proyecto etnocida y ecofágico.

Desde la primera caminata logran descarrilar el proyecto hidroeléctrico. Pero, ya encarrilados, deciden pasar de la defensa a la propuesta y en 1991 elaboran un Plan Alternativo para el Desarrollo del Alto Balsas, que tras sucesivas enmiendas y precisiones, en 1994 se transforma en Plan Alto Balsas, el proyecto constructivo de los nahuas guerrerenses.

En 1991 la organización es cofundadora, con los mixtecos, tlapanecos y amuzgos de la Montaña, del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, y en 1992 participa en la conmemoración luctuosa combativa del genocidio que nos dio identidad.

En 1994 el consejo es de los primeros en respaldar al EZLN, organizando una marcha al D.F. con el lema “No Están Solos”, y el mismo año participa en la magna reunión realizada en el primer Aguascalientes chiapaneco y en la Convención Nacional Indígena, más tarde transformada en Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía. Finalmente, cuando se inician en San Andrés de los Pobres las negociaciones entre el EZLN y el gobierno en torno a los derechos de los pueblos indios, el consejo, que lleva seis años de luchas por ellos, tiene un protagonismo más que justificado.

En su proceso organizativo establecen diversas alianzas con organizaciones campesinas de Guerrero y con el movimiento indígena nacional. Pero además tienen de su parte a los ancestros olmecas y cuentan con el auxilio de San Agustín, del Señor San Juan y del aguerrido San Miguel Arcángel, patronos de los pueblos amenazados, que a esas alturas ya se han comprometido con su lucha. El arcángel estaba incluso dispuesto a prestar su capa para que hicieran camisas antibalas a los dirigentes.

Los indios son minoría en el país y también en Guerrero. Pero en la última década del milenio sus luchas tienen mayor peso que las de sus hermanos mestizos más numerosos.

En la entidad sureña los años de reflujo de las organizaciones campesinas de base económica son ascendentes para la lucha indígena, y mientras que unas se daban de frentazos con la política neoli-

beral, las otras eran capaces de ponerle un hasta aquí, cuando menos en sus territorios más entrañables.

COMICIOS EN EL DESIERTO

En un estado donde la acumulación de riqueza se apoya en la violencia y donde el poder económico y la hegemonía social se funden en la figura del cacique, las luchas por la emancipación de los productores son inseparables del combate por las libertades políticas.

En la historia de Guerrero se entreveran los movimientos justicieros y los democráticos, y en este siglo junto a las organizaciones gremiales aparecen siempre los partidos. No ha sido, sin embargo, una relación armoniosa; los intereses económicos y los afanes políticos de los sectores populares pueden ser complementarios, pero en los hechos su convergencia resulta conflictiva.

Si el crónico desencuentro entre lo gremial y lo ciudadano explica la importancia popular ante el persistente sistema caciquil y es una de las claves mayores del bien llamado “Guerrero bronco”, los reiterados esfuerzos por articular las vertientes socioeconómicas y cívicas del movimiento democrático son la herencia más valiosa del movimiento popular de la entidad.

GUERRERO-AIRADO ERIAL

Las organizaciones gremiales comprometidas con la equidad económica y la justicia social encuentran, no sin frentazos y titubeos, el camino de la política. Vacunados de antiguo contra el “charrismo” uncido al partido del Estado, escamados también de una supuesta “autonomía” que en nombre de la “concertación” termina en el más descarado gobiernismo, y remisos a la manipulación electorera propia del “corporativismo de izquierda”, los sectores populares organizados para la defensa de intereses gremiales asumen finalmente que sin democracia política y libertades civiles no habría de-

sarrollo social. Pero la apertura a este nuevo desafío no fue fácil ni lineal.

A principios de 1988, el apoliticismo pragmático estaba en su apogeo entre los gremios, y los agrupamientos sociales “autónomos” preferían negociar recursos con el gobierno a corear el estentóreo pero vacío discurso opositor. Así, cuando se constituye en Guerrero la alianza de Organizaciones Campesinas, la corriente hegemónica es la de la UNORCA, coordinadora que también en el plano nacional se encuentra en la cresta de su representatividad y en la inminencia de asaltar importantes posiciones políticas en el gobierno de Carlos Salinas.

El segundo encuentro nacional de la UNORCA —sintómicamente celebrado en Atoyac, sede de la Coalición de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande— es un acto multitudinario y triunfalista al que asisten, además de los representantes del gobernador, el inminente director del Instituto Nacional Indigenista, el próximo subsecretario de Política y Planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el futuro secretario general de la Confederación Nacional Campesina. Destacados intelectuales y líderes rurales, quienes en su calidad de asesores y dirigentes de la coordinadora ponen a consideración de los delegados el esbozo de una ley agraria alternativa orientada a erradicar del campo controles excesivos e indeseables paternalismos del Estado. En su vertiente desreguladora, la propuesta prefigura las reformas que impulsará el gobierno poco después. Pero, curiosamente, el documento que discuten los campesinos unorquistas no toca a la Carta Magna y sólo se refiere a la ley reglamentaria, con el contundente argumento de que el artículo 27 constitucional vigente es el mejor posible y que, en tiempos neoliberales, poner a debate la Constitución es abrir paso a una reforma antiagraria. Clarividente estimación, que se confirma tres años después cuando Salinas amputa los principios justicieros del 27... con la entusiasta colaboración de los mencionados intelectuales y líderes —ya en sus respectivos puestos de la SARH, el INI y la CNC— y con la anuencia más o menos bocabajeada de la propia UNORCA.

El eufórico encuentro de Atoyac es la cúspide de la trayectoria ascendente de la coordinadora, pero también el principio de su decadencia política. Síntoma claro de este quiebre es la plenaria final, donde se confrontan una cúpula que disfraza con “neutralidad” sus fuertes compromisos con el salinismo y la mayor parte de los delegados que simpatiza de plano con el neocardenismo.

El de 1988 es un año de encrucijada. Ante los mexicanos comprometidos con el cambio se abren dos caminos: la reconversión neoliberal que promete Carlos Salinas y la reforma democrática que impulsa el neocardenismo. Los salinistas anuncian el fin del “México bronco” y la instauración de la modernidad por obra de sus posgrados en Yale. Los cardenistas quieren una patria libre y justa fincada en la mejor herencia del nacionalismo revolucionario y de la izquierda socialista. En la perspectiva que da el presente es claro que, pese a las torpezas y lastres de sus impulsores, el camino de la democracia social era y es mucho más promisorio que el de la pretendida modernidad tecnocrática. Pero, en su momento, las dos vías tenían sus asegunes.

Creo, sin embargo, que en la bifurcación de biografías personales y trayectorias políticas de esos años cruciales privaron los medios sobre los fines. Sospecho que el juicio sobre el contenido programático de los proyectos en juego influyó menos en las decisiones que la evaluación de los procedimientos y compromisos que suponía cada camino.

Mientras que unos —en la mejor postura presidencialista que dicen repudiar— apostaron a los cambios desde arriba y decidieron creer en las posdatadas promesas democráticas de la camarilla que había asaltado el poder, los otros se la jugaron a los cambios desde abajo confiando en la voluntad libertaria y justiciera de los mexicanos de a pie. Predilección por el príncipe en unos, vocación plebeya en otros. Lo demás son justificaciones y coartadas.

Así, al tiempo en que un nutrido grupo de dirigentes sociales e intelectuales de izquierda, entre ellos parte de la directiva de la UNORCA, se prepara para ocupar espacios de poder tanto en la administración

pública como en las organizaciones sociales, la cultura y los medios de comunicación —todo esto gracias al patrocinio de la camarilla encabezada por Carlos Salinas—, entre el estrujado pueblo llano cunde la insurgencia cívica; una rebeldía entre añorante y utópica que encuentra en Cuauhtémoc Cárdenas un símbolo y su emblema.

En 1988 las bases de las organizaciones rurales autónomas de Guerrero votan por el “hijo del General” y un año después participan en la lucha del neonato PRD por la democratización de los municipios.

Pero cuando se quitan la casucha cívica y se ponen la gremial, los campesinos organizados siguen apostando a la “concertación” y confiando en sus “buenos amigos” de la administración pública. Opuestos sin remedio al sistema corporativo y caciquil del partido de Estado, aceptan sin embargo jugar con sus reglas, porque son las únicas que conocen, porque los partidos de oposición y la insurgencia cívica no sirven para negociar precios, créditos o programas de fomento, y, sobre todo, por cuanto calculan que, por una vez, su organización está bien parada con el nuevo gobierno federal y la tradicional discrecionalidad de los funcionarios, que siempre benefició a los charros y caciques, hoy será favorable a los “autónomos”.

Vana ilusión. El gobierno en que los unorquistas habían cifrado sus esperanzas impulsa la más feroz contrarreforma agraria de nuestra historia: una “reconversión” neoliberal que abarca desde el marco jurídico hasta las instituciones y las políticas, y cuyo impacto profundiza aún más la persistente crisis de producción agropecuaria y pone a los correosos campesinos mexicanos, ahora sí, en la inminencia de su definitiva aniquilación. Promueve, también, un neocorporativismo galopante, palanqueado en el Programa Nacional de Solidaridad, del que resulta la paradoja de que la retirada económica del Estado coincida con el incremento de su presencia clientelar. El “ogro filantrópico” se desafana de responsabilidades de fomento y regulación pero redobla sus incursiones políticas autolegitimadoras. Y es que el libre mercado sirve, quizá, para “encauzar” la economía, no para acarrearle votos al PRI.

La necesidad de legitimación de un gobierno electo por el fraude lleva a los tecnócratas a desempolvar la demagogia. La política desincorporada —cuyo destinatario es sin duda el capital privado— es presentada, en el campo, como oportunidad y reto para el sector social de la producción. Pero para beneficiarse de la privatización de empresas, recursos y funciones públicas —siempre marginales, pues los activos importantes son para las grandes corporaciones nacionales e internacionales—, los pequeños productores asociados deben dar muestras de eficiencia gerencial.

El único campesino bueno es el campesino rentable, sostienen los fanáticos del mercado. Lástima que en los noventa la viabilidad de la economía rural se haya estrechado a tal grado que para la mayor parte de los pequeños productores —que opera en las peores tierras y aquejadas de todas las “desventajas comparativas”— el certificado de la mayoría de edad resulte una posdatada acta de defunción. Y el neoliberalismo no asume ni siquiera la responsabilidad. En su versión, los culpables de la agonía no son el sistema ni las políticas públicas, sino la innata torpeza empresarial de los propios productores.

Alegar las aportaciones decisivas de la economía campesina al empleo y la soberanía laboral, así como al ingreso popular, la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, la sociabilidad y la cultura, es impropio cuando lo único que importa son los saldos contables.

De esta forma antiagraria son corresponsables algunos de los más preclaros fundadores y asesores de la UNORCA. Quienes se dejaron seducir por el espejismo de la “reconversión” neoliberal no eran chaqueteros del montón sino hombres de primera. Saber agrario de excelencia y compromisos de toda la vida con el mundo campesino se fueron por el caño del salinismo.

Durante el gobierno de Salinas a todos los campesinos les va como en feria y los unorquistas no son la excepción. Con todo, las organizaciones “autónomas” se benefician de recursos institucionales con los que el gobierno retribuye su fidelidad o trata de comprarla.

Sólo que la camarilla salinista no es homogénea y a los de Guerrero les toca bailar con la más fea. Ruiz Massieu es un destacado miembro de la “generación del cambio” que prefiere apoyarse en el cacicazgo tradicional a concertar con las organizaciones campesinas autogestionarias, y ni siquiera los buenos oficios de los compadres de la UNORCA en el gobierno federal aplacan su hostilidad.

Los que vendieron su alma al salinismo hicieron un mal negocio. Y en Guerrero fue ruinoso: con Ruiz Massieu la Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas naufraga, lo mismo que algunas uniones de ejidos regionales; el resto arría velas y capotea el vendaval.

Al incumplirse las expectativas generadas por el asalto al poder de los prohombres de la UNORCA, la coordinadora pierde credibilidad y las organizaciones regionales prefieren rascarse con sus propias uñas. El regreso de los Figueroa a la gubernatura en 1993 termina con las últimas esperanzas en la “concertación”, y del naufragio de las organizaciones campesinas económicas emergen con fuerza los movimientos reivindicativos y contestatarios. Uno de estos airados contingentes es la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), conformada en 1994 por unos trescientos costeños de Coyuca y Atoyac.

Hilario Mesino Acosta, fundador y dirigente paradigmático de la OCSS, es raíz y razón de una cólera organizada. Nacido en El Escorpión, anexo de Agua Fría, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Layo — como le dicen sus amigos — es un hombre de paz marcado por la violencia.

En 1974 irrumpió en El Escorpión el ejército que perseguía a Lucio Cabañas. Los soldados golpearon al padre de Layo y se llevaron a su hermano Alberto de 19 años. Alberto nunca regresó y su padre murió a los pocos meses.

En el arranque de los ochenta Layo se suma a la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, convencido de que liberando el café de los acaparadores se libera también al campesino. En 1988, con el resto de los cafetaleros organizados, participa en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia. Al año siguiente vota por los candi-

datos del PRD a la alcaldía de Atoyac y después sostiene la Comuna Popular de 1990.

A punta de AK-47 y al grito de “¡Tengan su democracia, cabrones!”, la policía del gobernador Ruiz Massieu restaura el orden. Layo, como muchos otros, comienza a pensar que ha extraviado el camino.

“Hijo de tigre, pintito” dice el refrán, y cuando Rubén Figueroa Alcocer, hijo del Tigre de Huitzucu, toma a Guerrero por las riendas se agotan las últimas esperanzas.

En la debacle de la oposición cívica y de las organizaciones gremiales concertadoras, Layo, Benigno Guzmán, Reyna Avelino Huizache y otros deciden abrirle paso a la justicia con modos más expeditos, y un airado 18 de enero fundan la OCSS, de discurso filosófico y prácticas abruptas.

La OCSS sale a la calle, bloquea carreteras y toma las alcaldías en pos de láminas acanaladas y módicos bultos de fertilizante. No es poco, significa techo y comida, pero el riesgo y el esfuerzo invertidos en obtener tan pocos bienes se antojan descomunales.

Figueroa corrompe y amenaza. Los costeños se encrespan. El 28 de junio de 1995 el gobernador ordena a la policía impedir “a como dé lugar” un mitin en la cabecera de Atoyac. Cuarenta campesinos son alcanzados por la balas, diecisiete mueren. A la larga el gobernador tiene que renunciar, pero hasta la fecha sigue yendo a los toros.

Un año después de la carnicería, los encapuchados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se apersonan en el acto conmemorativo y anuncian una guerra por la democracia y la justicia. Layo está ahí, y como otros tres mil costeños aplaude a los guerrilleros.

A los pocos días Hilario Mesino Acosta es detenido en la ciudad de México y trasladado al penal de Acapulco. Se le acusa de que en 1995, más de un año antes, participó en la toma masiva del palacio municipal de Atoyac. Entre torturas se le interroga sobre el EPR. Meses después son apresados Benigno Guzmán y Reyna Avelino Huizache.

Con toda la directiva de la OCSS en la cárcel, Rocío Mesino, hija de Layo, toma el mando de la organización. Rocío tiene 19 años y ha empezado temprano a sumar órdenes de aprehensión.

De Aguas Blancas para acá la OCSS ha velado nueve muertos nuevos. El último que puede registrar este texto se llamó Gerardo Hurtado Arias y cuando lo asesinaron tenía diecinueve años.

Y mientras las guardias blancas ejecutan inconformes, el ejército incursiona en las comunidades. La de los Mesino, El Escorpión, ya recibió visita de los sardos. Agua Fría también, y hoy es un pueblo fantasma pues sus habitantes lo abandonaron.

Pero la OCSS no está sola en el trance; junto a ella embarnecen movimientos reivindicativos y contestatarios como el que encabeza el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Aparecen, también, agrupamientos airados como la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, que opera en la Zona Centro del estado, y el Movimiento Indígena por la Autonomía (MIA), que agrupa mixtecos, amuzgos y nahuas de setenta comunidades de la Montaña baja; además se reaniman grupos ubicados de antiguo en la porción izquierda del espectro político, como la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y la Unión de Obros y Campesinos Emiliano Zapata. Finalmente, la corriente dura de las organizaciones sociales en la entidad converge en la Unión de Organizaciones Campesinas de la Sierra del Sur (UOCSS), que encabeza Bertoldo Martínez Cruz, secretario de Derechos Humanos del PRD guerrerense y después preso político. En lo nacional se vincula al Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), convergencia formada a partir de un llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el mismo lapso cobra fuerza la defensa organizada de los derechos humanos, a través de agrupamientos civiles de nuevo cuño que en Guerrero tienen una ingente materia de trabajo. Tal es el caso de los núcleos de derechos humanos que desde 1989, cuando se fundó el de Acapulco, han proliferado por diversos municipios; entre ellos destaca el Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Tlachinollan, A.C., cobijado por la Diócesis de Tlapa. El mes de abril de 1997 los defensores de los ciudadanos organizan la jornada “Por nuestras voces hablará Zapata”, donde denuncian que los municipios más aquejados por la violencia son Acapulco, Coyuca de Benítez, Chilpancingo, Chinapa, Olinalá, Ayutla, Heliodoro Castillo, Tlacoachistlahuaca, Malinaltepec, Acatepec y Copalillo.

Pero ni la represión ni el encono subsecuente han cancelado el trajín rural. El 10 de abril de 1997 la conmemoración del asesinato del general Zapata patentizó que, pese a la guerra sucia contra los “presuntos” eperristas, y a contrapelo de la bancarrota que agobia a muchas organizaciones de productores, el movimiento campesino guerrerense anda suelto y desbalagado pero goza de cabal salud.

Ese día, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular concluyó su tercer congreso con la participación de unos cuatrocientos representantes entre nahuas, amuzgos, tlapanecos y mixtecos. En Chilpancingo las huestes del FAC-MLN realizaron un mitin frente al palacio de gobierno. En la zona mixteca y amuzga los enhiestos ciudadanos del ayuntamiento popular en rebeldía del Rancho Nuevo de la Democracia marcharon por la carretera de la Montaña acompañados por campesinos de Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca. Los manifestantes, agrupados en el MIA, ocuparon las instalaciones del INI en Ometepec. Finalmente, en el puerto de Acapulco, labradores de ese municipio y de Azoyú, San Marcos, Tecoaapa y Cruz Grande se reunieron en el Parque Papagayo. Todos rememoraron a tata Emiliano exigiendo retiro de la tropa, cese de la represión, libertad para los presos políticos y presentación de los desaparecidos, pero también respeto a la libre determinación de comunidades, pueblos y organizaciones.

Con el descreimiento en el derecho de picaporte como forma de lucha, remite también la esquizofrenia de ser opositores de corazón y gobiernistas por convivencia. Así, en la última década, la calentura cívica que despertó el Frente Democrático Nacional (FDN) en las bases de muchas organizaciones sociales se fue decantando en una

cultura de participación política no corporativa. Prácticas inéditas, sin duda rudimentarias, pero ya alentadoras; nuevos modos en el camino de construir una civilidad incluyente donde adscripción gremial y militancia política confluyeran sin pervertirse mutuamente.

Muchos y diversos fueron los cursos regionales de esta renovadora politización. En algunos casos los triunfos cívicos propician el renacimiento gremial. En la zona norte del estado, para fines de la década de los ochenta, la Unión de Ejidos Adrián Castrejón se había desintegrado. Sin embargo, pese al vacío de organización social, en 1988 el FDN encuentra una respuesta entusiasta en el municipio de Teloloapan. Animado por los activistas provenientes de la ACNR, del PCM, incluso del PRI, el neocardenismo arrasa en la elección municipal de 1989. Es al calor de la insurgencia cívica exitosa que renace la organización gremial, y en 1991 se conforma la Unión Campesina Jesús H. Salgado, afín al PRD, pues sus principales animadores son militantes de ese partido.

En Atoyac de Álvarez, sede de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil y después de la Coalición de Ejidos Cafetaleros, la organización gremial exitosa procede y alimenta a la emergencia ciudadana. En 1988 el neocardenismo encuentra en los cafetaleros organizados su más sólida base de apoyo, y la coalición tiene un papel protagónico en los comicios de 1989 y la columna popular en que desembocan. Curiosamente, el triunfo municipal opositor en 1993 se funda en la alianza del PRD y los animadores de la Sociedad Cooperativa La Pintada, una organización de productores, también independiente pero distinta de la coalición. En 1996, las candidaturas del PRD a la presidencia municipal y a la diputación de Costa Grande provienen de acuerdos entre el partido y corrientes gremiales, tanto de la coalición como de la cooperativa. Ganaron la diputación y perdieron la alcaldía por unos 400 votos, con saldo de enconados conflictos y ajustes de cuentas poselectorales. Pero en Atoyac algo estaba fuera de discusión: la democracia municipal no era sólo asunto de partidos políticos; incumbía igualmente a las organizaciones de productores.

En Ometepepec, el neocardenismo también cuenta con la simpatía de los campesinos organizados en la unión regional de ejidos, que en 1989 apoyan al candidato de ese partido a la presidencia municipal. El intento democrático se frustra cuando el gobierno estatal rescata violentamente la alcaldía ocupada por los opositores. Pero, además, la convergencia entre la Unión de Ejidos y el PRD resulta conflictiva, y en las elecciones poselectorales la organización social prefiere la alianza con el Partido del Trabajo. La unión le presta bases y candidatos al PT, pues el nuevo instituto político no tiene más presencia en la costa que su contacto con otra organización gremial, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, de carácter nacional y con pocos militantes en Guerrero. La convergencia no rinde mayores frutos, y para 1996 los campesinos organizados se aproximan de nueva cuenta al PRD.

En algunas regiones las organizaciones sociales prefirieron mantenerse a “sana distancia” de los partidos políticos. Tal es el caso de la Zanzekan Tinemi, que tiene su sede en Chilapa y se extiende sobre municipios de la Zona Centro y la Montaña. Esta organización, adscrita a la UNORCA y en la que participan militantes de diversos partidos (PRI, PARM y PRD), optó por la neutralidad en las justas comiciales. Sin embargo, la experiencia les ha demostrado que su falta de diálogo con las alcaldías limitaba el avance de los proyectos, sobre todo desde que una parte creciente de los recursos presupuestales destinados al desarrollo social se estaba canalizando a través de los cabildeos. Así, en los comicios de 1996 definieron una pragmática estrategia electoral para los municipios en que tenían influencia (Chilapa, Zitlala, Mártir de Cuilapan, Tixtla, Ahuecuotzingo y Quechultenango), consistente en negociar regidurías con el partido con mayores posibilidades en cada localidad. La línea electoral de la Zanzekan coincide con la difundida por la UNORCA a principios de 1997.

En los esfuerzos de las organizaciones gremiales por involucrarse en la renovación municipal, sin incurrir de plano en el tradicional corporativismo, hay de todo. Caso paradójico es el de la Unión de

Ejidos Juan R. Escudero, de la Tierra Colorada, que pese a su origen cenecista participa en diversas convergencias con los agrupamientos autónomos. En los comicios de 1996 la Unión decidió irse sobre seguro y le apostó al PRI. Para su sorpresa el PRD ganó la alcaldía.

Distinto es el proceso de Tlacoachistlahuaca, municipio de la Costa Chica, donde un movimiento de mixtecos y amuzgos en demanda de programas de desarrollo integral para la zona indígena se harta de la altanera indiferencia de la alcaldía mestiza, y reencauza su lucha hacia la conformación de un nuevo municipio pluriétnico con cabecera en Rancho Nuevo de la Democracia. La misma estrategia, orientada a esquivar las alcaldías crónicamente caciquiles mediante la remuneración, se presenta en Marquelia.

La crisis del “charrismo” — variante mexicana del corporativismo y pilar del sistema de partido de Estado — desemboca por un tiempo en la satanización de toda la política y el intento de construir un gremialismo indiferente a la oferta partidista; organización social de vocación anticorporativa, pero cuya “neutralidad” la hace presa fácil de quienes manejan el Estado.

El civismo desmecatado de la última década cuestiona la abstención y reclama un intercambio constructivo entre las organizaciones sociales e institutos cívicos; una relación que, respetando la libertad de afiliación política de las bases, propicie el diálogo y los acuerdos — tanto programáticos como electorales — entre los gremios y los partidos.

Son premisas de esta nueva articulación el que la política no sea patrimonio exclusivo de la esfera estatal-partidista de la sociedad y que la “cosa pública” también incumba a las comunidades y a los gremios. Pero, para ejercer su derecho a hacer política, los gremios y comunidades tienen que colocarse en la perspectiva del “interés general”. Sin renunciar a la defensa de los intereses particulares — de los que son legítimos portadores — han de incorporarlos a proyectos incluyentes. Mientras que el reto de los partidos es escuchar y asumir las propuestas de los actores sociales, el desafío de éstos radica en

trascender los particularismos estrechos incorporando sus intereses gremiales a proyectos comprensivos de carácter nacional.

En el Guerrero campirano esto se expresa en la difícil pero imprescindible confluencia de los campesinos —comprometidos con la justicia social— y los ciudadanos —enrolados con la democracia— en la construcción de un desarrollo cada vez más equitativo y libertario. La comunidad agraria, el municipio y la región son los espacios privilegiados de este desarrollo. Ámbitos donde gremios y partidos están asumiendo al alimón el renuevo democrático incluyendo el gobierno participativo de algunos municipios.

Por el momento, el liderazgo de las organizaciones sociales todavía recela de las dirigencias partidistas —aun de las opositoras— y las cúpulas partidistas desconfían de la dirigencia gremial —hasta de la democrática. Pero es un hecho insoslayable que sin actores políticos maduros y protagonistas sociales consistentes no hay futuro para la justicia y la libertad. Y es que debajo de las distintas cachuchas están los mismos asoleados guerrerenses; un solo pueblo rural que a veces ejerce de campesino, otras de ciudadano y —si lo buscan— también de guerrillero.

El 16 de septiembre de 1996, cerca del vado de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez, Benjamín Ávila Blanco, miembro del EPR, cayó acribillado por la tropa en un asalto al campamento militar de la localidad. El guerrillero muerto tenía 21 años, era padre de dos niños y una niña y cultivaba una pequeña milpa en Yerba Santita. Además de formar parte del EPR, Benjamín militaba en la Organización Campesina de la Sierra del Sur y participaba en la red estatal de maiceros de filiación unorquista. En su bolsillo se encontró una credencial de elector con la que votaba por el PRD.

Sin duda un muerto elocuente, trizado espejo de los tiempos.

EL PROYECTO CAFETALERO DE LA COALICIÓN DE EJIDOS DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO*

*Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo***

La Coalición de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero nace a principios de la década de los ochenta, y en el curso de diez años evoluciona rápidamente hasta transformarse en una agrupación multiactiva con estrategias de desarrollo regional que abarcan un vasto universo de la vida campesina. En el combate por la apropiación del proceso de producción, beneficio y comercialización del café, la Coalición llegó a desarrollar múltiples experiencias, y contó con instancias económicas propias y estrategias regionales bien definidas.

Pero en un temprano momento de su desarrollo, la organización enfrentó retos difíciles y en condiciones poco propicias. Por un lado, el retiro del Inmecafé desató una pugna entre organizaciones autónomas y cenecistas por el control de la infraestructura del Instituto, lo que se tradujo también en una lucha por el control de una porción del mercado cafetalero regional. Por otro lado, la Coalición debió sortear las dificultades de la comercialización directa del grano, en un contexto de brutal desplome de los precios internacionales, a raíz del rompimiento de los acuerdos económicos de la Organización Internacional del Café (OIC) ocurrido en 1989. Por lo demás, dado que la Coalición se propuso ocupar los espacios que dejó la paraestatal en beneficio de los pequeños productores, se vio obligada a asumir el reto de remontar la crisis estructural de la cafecultura serrana de Atoyac, y el problema que representaba el

* Una primera versión de este ensayo fue publicada en *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández Navarro (coords.), México, Siglo XXI, 1992.

** Investigadoras asociadas del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya” A.C.

monocultivo de café para la economía regional. Todo ello, bajo la hostilidad del gobierno estatal, comprometido con la CNC y empeñado en golpear a las organizaciones autónomas.

Aquí se recupera parte importante de esta historia. El camino recorrido por la Coalición es ejemplar no sólo por su capacidad para transformarse en el sujeto social y político más activo del desarrollo regional, sino porque logró convertirse en la fuerza motriz de una red campesina estatal —la Alianza de Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero— y en pilar de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).

LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA COSTA GRANDE

En aproximadamente 30 mil hectáreas distribuidas en la Costa Grande de Guerrero, en los municipios de Atoyac, Coyuca y Tecpan (86.5 por ciento de la superficie cultivada con cafetos en el estado), se obtiene 80 por ciento de la producción guerrerense de café. Aunque el estado es el quinto productor a nivel nacional, la cafecultura de la Costa Grande es atrasada y de bajos rendimientos; y a pesar de las campañas de rehabilitación y renovación de cafetales impulsadas en los ochenta la producción es decreciente y las huertas se encuentran en decadencia. Cerca de 60 por ciento de los cafetos tienen más de 40 años de vida y el manejo técnico-agronómico es deficiente. La decadencia cafetalera guerrerense se manifiesta en un estancamiento de la producción. Mientras que entre 1980 y 1985 se cosechó un promedio anual de 220 mil quintales, en el segundo quinquenio la producción se situó en un promedio de 230 mil. Esto representa un crecimiento de sólo un cuatro por ciento.¹

A las deficiencias de la fase agrícola (huertas en decadencia, prácticas culturales incompletas y atrasadas, escasez de mano de obra y malas vías de comunicación) se suma un inadecuado sistema de pro-

¹ Cerca de la mitad del promedio nacional que es 12 qq/ha.

cesamiento.² A principios de los ochenta el café lavado representaba poco más de 15 por ciento de la producción regional, la zona era abrumadoramente capulínera y el producto final se destinaba al mercado nacional. Entonces las plantas agroindustriales para el beneficio húmedo se concentraban en la zona cafetalera del centro-norte de Atoyac, y procesaban una porción mínima del “café de altura” cosechado en el área. La mayoría de estos beneficios eran administrados por el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé).

A partir de 1981 la situación empezó a modificarse con la introducción de despulpadoras manuales que permitieron el lavado de café a escala doméstica. En los años siguientes su uso se generalizó y en poco tiempo casi todos los ejidos contaban con una o dos despulpadoras. Aunque la capacidad del equipo era pequeña y no podía procesar la totalidad de la producción, tenía la ventaja de que su distribución era más o menos equitativa, de manera que la posibilidad de lavar el grano comenzó a extenderse más allá del corazón cafetalero de Atoyac, donde se concentraban los beneficios húmedos a escala industrial. En 1984, gracias a que la organización campesina impulsó un programa de construcción de beneficios húmedos prácticos de mayor capacidad que las despulpadoras, esta tendencia se fortaleció. Para 1989 operaban 10 beneficios de este tipo, que sumados a las despulpadoras y a los beneficios húmedos del Inmecafé permitieron que aumentara notablemente la proporción de cafés lavados.

Así, mientras en el ciclo 1983-1984 el 60 por ciento del acopio del Inmecafé fue café capulín y sólo 7 por ciento pergamino, en el lustro siguiente el 20 por ciento de la captación fue de pergamino y ya para el ciclo 1987-1988 fue de 52 por ciento, mientras que el capulín descendió a 45 por ciento en promedio.³

² El fruto recién cortado puede seguir dos tipos de procesamiento: por la vía húmeda se obtiene café “pergamino”, base del prima lavado de exportación; por la vía seca se obtiene café “capulín”, base del oro natural para el mercado nacional.

³ La captación del instituto era un indicador parcial, pues intervenía como variable importante en la situación del mercado, la demanda de cierto tipo de café, los precios y los descensos de la producción provocados por siniestros.

No obstante, la tendencia al cambio de una cafecultura capulí a una pergaminera no tuvo el impulso necesario para remendar algunas significativas deficiencias.

Teóricamente, el manejo adecuado de las huertas requiere de un proceso de trabajo complejo: dos limpiezas —una en junio o julio y otra en octubre o noviembre—, dos aplicaciones de fertilizante —en abril y en agosto—, además de abono foliar, labores de regulación de sombra y poda de los cafetos. Pero la mayoría de los agricultores realizaba una sola limpieza en octubre y cuando mucho fertilizaba una vez. El corte empezaba en noviembre y terminaba en febrero o marzo, fechas que variaban dependiendo de la altura de cada huerta. Esta actividad demandaba una gran cantidad de trabajo.

En general, los cafecultores de la Costa Grande no parecían interesados en emprender esfuerzos adicionales a la recolección anual del grano y, para aumentar su ingreso, se habían conformado esforzándose en el beneficio del grano e incidiendo en la comercialización sin hacer inversiones de capital o trabajo en la fase agrícola. Elevar los rendimientos técnicos requiere cuantiosas inversiones en dinero y trabajo cuyos resultados económicos se ven sólo en el mediano plazo, y es por ello que habían preferido seguir con las prácticas corrientes aun a costa de hipotecar el futuro.

Para las labores anteriores a la cosecha el trabajo familiar era suficiente; en cambio, el corte superaba con mucho la disponibilidad de mano de obra regional. Entre noviembre y febrero llegaban a la zona alrededor de 20 mil cortadores provenientes de la Costa Chica, la Montaña y Chilapa.

Con la cosecha acababa la fase agrícola y empezaba la de procesamiento. Las opciones de beneficio dependían de una combinación de factores dentro de los que destacaba la distancia de las huertas a los beneficios húmedos. Si el productor no estaba en condiciones de transportar su café cereza en menos de 12 horas a la planta industrial o semindustrial, éste se fermentaba, se manchaba y perdía calidad.

Los sistemas de beneficio húmedo pueden ser manuales, semindustriales o industriales, y su control puede estar en manos del produc-

tor o del comprador. En los años que referimos se fue ampliando la participación de los productores en la fase agroindustrial. Aunque hasta el ciclo 1989/1990 su control se reducía a los sistemas rústicos —despulpadoras manuales y beneficios húmedos prácticos—, la transferencia de las plantas de mayor escala del Inmecafé a las organizaciones de productores como la Coalición de Ejidos abrió una nueva posibilidad.

Los esfuerzos de los pequeños y medianos cafeticultores por beneficiar su café y obtener un grano de mayor calidad y precio no redundan en una mejoría económica, si el proceso de comercialización escapa a su control. Si en el nivel productivo pueden distinguirse dos tipos de cafeticultores (un reducido número con huertas extensas, manejo agronómico adecuado y sistemas de beneficio integrado; y los pequeños y medianos productores, con huertas chicas y viejas, y rústicos sistemas de beneficio), desde la perspectiva de la comercialización las diferencias se ahondan y las lógicas económicas empresarial y campesina se profundizan, pues los primeros, además de procesos productivos modernos e integrados, tienen acceso al crédito en condiciones privilegiadas y controlan la comercialización; y no solamente la producción propia sino también la de muchos pequeños cafeticultores, pues el acaparamiento comercial es pieza clave tanto de la acumulación cafetalera como de la explotación campesina. La polaridad entre los grandes y los medianos y pequeños productores se explica no tanto por las diferencias de escala y eficiencia, sino porque los primeros son acaparadores a la vez que productores, mientras que los campesinos además de ser ineficientes tienen que vender su grano en condiciones riesgosas.

Esta polaridad presidió las relaciones económicas y sociales desde el reparto agrario hasta los años sesenta. A principios de los setenta, la presencia del Inmecafé vino a modificar el equilibrio regional. Desde 1972 se estableció en Atoyac una delegación del Instituto y empezó a otorgar financiamiento, asistencia técnica y a comprar café. Dos años más tarde comenzó a operar seis beneficios húmedos y en 1975 estableció un centro de secado. Aunque el Inmecafé no aca-

bó con el acaparamiento, rompió el monopolio comercial de intermediarios y caciques cafetaleros de la zona. Pero en su proceso de desincorporación su participación en el mercado empezó a reducirse. Con lo que se revitalizaron viejas prácticas caciquiles y de intermediación.

Al principio, el Inmecafé se presentó como una opción ventajosa. Los pequeños productores descubrieron en esa primera fase que su relación con el Instituto era relativamente satisfactoria. En cuanto al financiamiento, el Inmecafé no tenía un programa de habilitación semejante al bancario, pero los “anticipos a cuenta de cosecha” constituían una suerte de crédito. Se otorgaban a colectivos de cafeticultores o Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC), las que comprometían su cosecha y pagaban en especie. Los “anticipos” a las UEPC tenían la ventaja de que no generaban intereses y el número de beneficiarios era mayor que la clientela del Banrural.

Pero no todo era miel sobre hojuelas. La desventaja y principal limitación del referido sistema de financiamiento estaba en el monto, pues en el mejor de los casos representaba apenas 25 por ciento del costo de producción y, por supuesto, ningún cafetalero podía sostenerse en la actividad exclusivamente de esta fuente crediticia. Por otro lado, el Inmecafé fijaba los precios oficiales para no proteger al consumidor, lo que representaba una suerte de subsidio indirecto a las grandes compañías torrefactoras y de cafés solubles. También controlaba las cuotas de exportación. A partir de julio de 1988 se cancelaron los acuerdos económicos de la OTC, lo que provocó el más drástico descenso de precios en los últimos trece años, verdadera catástrofe para la cafeticultura nacional.

Durante muchos años, los caciques y acaparadores controlaron la producción y el mercado del café por la vía de la habilitación y las ventas comprometidas o “al tiempo”. A partir de los setenta, la opción financiera de los “anticipos”, aunque menos gravosa, apenas logró acreditar una cuarta parte de la producción del cafetalero. El Banrural, en cambio, otorgó créditos de avío para el cultivo, refac-

cionarios para rehabilitación y renovación de huertas y compra de maquinaria y pignorativos para la exportación. A pesar de los retrasos en las ministraciones, estos créditos eran más favorables que los de los caciques y usureros. Sin embargo, el número de acreditados siempre fue pequeño y cada vez más selectivo. En 1982 el Banrural habilitó a 3 600 cafeticultores de Atoyac; en 1983 fueron 1 400, y en 1988 ya eran sólo mil los “agricultores solventes”. Esto significó que para la mayor parte de los pequeños productores esta opción quedara prácticamente cancelada.

Las limitaciones del financiamiento y las ruinosas condiciones de venta, tanto por los precios oficiales como por deficiencias del Inmecafé, empujaron a los campesinos a recurrir cada vez más al acaparador.

La exploración de otras opciones de desarrollo regional fue obra de los propios campesinos y abarcó esfuerzos muy diversos. Una constante fue la formación de pequeños grupos ejidales para la exportación de grano. Muchos fracasaron, entre otras razones porque los mecanismos para la comercialización directa en el mercado mundial favorecían principalmente a las grandes empresas, que contaban con infraestructura para obtener café de calidad y sobre todo con capital y una enorme capacidad de acopio. Antes del rompimiento de los convenios de la OIC en 1989, las cuotas asignadas a los grupos oscilaban entre 10 y 15 por ciento del total de las existencias en bodega, de modo que el volumen final exportado era una porción mínima de la producción total del grupo. Con la suspensión de las cuotas aparentemente la situación se modificó en favor del pequeño cafeticultor, pero muy pronto la libre oferta de grano saturó el mercado: devino un *crack* cafetalero y un brutal descenso de los precios internacionales.

Parte de estos grupos eran núcleos de esforzados productores, que veían en la exportación la puerta mágica para salir de la pobreza. Y como efectivamente durante varios años los cafés lavados se cotizaban a precios muy superiores a los de consumo nacional, se reforzó este espejismo. En realidad, los ingresos de la exportación no com-

pensaban el esfuerzo de los campesinos. Además, los grupos más débiles terminaban sumando su producción a la de las agrupaciones caciquiles, las que, por cierto, contaban con infraestructura, financiamiento, contactos y apoyo de la CNC para conseguir cuotas y trato especial de las instituciones oficiales.

El surgimiento de un proyecto campesino que consideró la problemática de los cafetaleros pobres desde una perspectiva distinta y más integral, fue obra primero de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, y desde 1987 de la Coalición de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande. En las estrategias de esta organización la exportación no fue nunca el objetivo central y único: se trató de mejorar las condiciones de vida de la población rural, de fortalecer su capacidad de negociación y de autogestión en frentes de lucha como el abasto, la salud, la producción de maíz, etcétera.

LA ORGANIZACIÓN CAFETALERA EN LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

En sus primeros años, la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil —que llegó a agrupar a cafetaleros de 45 ejidos de la Costa Grande y la Montaña— orientó la lucha contra las deficiencias del Inmecafé y protagonizó los principales movimientos por el aumento oficial a los precios del grano. Gracias a múltiples movilizaciones y presiones, la organización consiguió que en 1982, por primera vez en la historia de Guerrero, el Instituto pagara, con efecto retroactivo, reversiones al grano de exportación y aumentara el precio del café capulín y oro. Además, la Unión logró el mejoramiento de las condiciones de financiamiento al llevar al Banrural a que aumentara las cuotas de crédito y flexibilizara su política con los campesinos deudores.

Simultáneamente, desde principios de la década de los ochenta empezaron a gestarse mecanismos de coordinación entre organi-

zaciones cafetaleras de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que luchaban por una demanda común: el incremento a los precios oficiales del café. En muy poco tiempo, y ante dificultades diversas, la referida convergencia cafetalera transitó hacia lo que en un momento determinado se denominó un *cambio de terreno*, tendiente a fortalecer la apropiación campesina de los procesos de producción, beneficio y comercialización del café.

Para los cafetaleros de la Costa Grande el *cambio de terreno* consistió en impulsar la creación de una base económica propia. En 1984, y aprovechando que el gobierno estatal de Cervantes Delgado (1981-1987) concertó programas de desarrollo con organizaciones rurales autónomas, la Unión promovió la instalación de beneficios húmedos prácticos, la distribución de despulpadoras manuales y de insumos para la producción de café, canalizó créditos de diversas fuentes a los cafeticultores y organizó la comercialización directa del grano.

En el ciclo 1986/1987 el acopio y la venta de café desarrollados por la Unión presionó el alza de los precios regionales, con lo que se beneficiaron incluso los productores no organizados. De este modo, la Unión abrió una opción nueva de comercialización para los pequeños y medianos cafeticultores. El uso colectivo de beneficios húmedos semiindustriales posibilitó el incremento de cafés lavados, y permitió que los campesinos pobres de la región accedieran a la producción de café pergamino, con lo que se ampliaron las oportunidades de exportación y de mejores precios.

De 1984 a 1987 los logros económicos y organizativos de la Unión fueron espectaculares: en el ciclo 1984/1985 comercializó 5 346 quintales de cafés naturales y de exportación, de alrededor de 500 productores; en 1986 la captación llegó a los 10 228 quintales beneficiando a 1 650 cafeticultores; y en 1987 alcanzó la cifra de 13 mil quintales. Además, la organización logró pagar al productor los precios regionales más altos, y forzó con ello el incremento de los oficiales y de los que pagaban acaparadores e intermediarios.

La cafecultura era la actividad económica central de la zona, pero la Unión se planteaba una perspectiva más integral, lo que la llevó a impulsar proyectos de desarrollo regional que incluyeron: el mejoramiento de los servicios, el abasto de productos básicos, la organización en torno a la producción de maíz, de la miel y el plátano, así como proyectos de salud comunitaria. Destacó en particular la red de abasto Diconsa⁴ que, por presiones de la Unión, se estableció en 1982 en la Costa Grande. En 1988 la organización logró que el almacén redistribuidor se entregara a los campesinos, creándose el Sistema Integral Rural de Abasto y Comercialización (SIRAC). Este organismo tenía un carácter autónomo y era gestionado por los propios consumidores. Se trataba de la primera y única transferencia de un almacén de Diconsa a una organización rural. Otra experiencia novedosa fue la creación de un Banco de Maíz, orientado a redistribuir el grano regional entre comunidades excedentarias y deficitarias.

Con el desarrollo organizativo y en el espíritu del *cambio de terreno* también se modifica su estructura. La nueva estrategia de apropiación del proceso productivo demandaba tareas y responsabilidades más complejas y especializadas, y capacidades que en el pasado no habían sido necesarias, como la formulación de proyectos, la administración de créditos, la operación de beneficios y el complicado manejo de la exportación de café. En las comunidades, el establecimiento de beneficios húmedos de manejo colectivo y el acopio y la comercialización del café exigieron la formación de grupos campesinos estables. Los Grupos de Trabajo Colectivo (GTC), que además de operar los beneficios administraban su propio fondo revolvente para el acopio del grano, se convirtieron en un modelo organizativo que con el tiempo se extendió a otras áreas de la organización. Así, además de los colectivos cafetaleros, se formaron GTC de maíz, de

⁴ La distribuidora CONASUPO, S.A. de C.V. se constituyó en 1972 para regular el mercado de productos básicos a través de tiendas propias y concesionadas y almacenes en el medio urbano y rural, garantizando la oferta de básicos a los precios fijados por el Estado.

miel, de mujeres, de salud, aparte de los comités rurales de las tiendas campesinas del SIRAC.

En la misma época en que se desarrollaba la Unión de Ejidos, en otras regiones de Guerrero surgían y se consolidaban organizaciones campesinas de segundo nivel.⁵ A mediados de la década de los ochenta las agrupaciones autónomas se extendieron por casi todas las zonas del estado, y gracias a su propia fuerza, pero favorecidas también por la apertura al diálogo y a la concertación del gobierno estatal de Cervantes Delgado, se fortalecieron. Ello les permitió confluir en la formación de la Alianza de Organizaciones Autónomas de Guerrero, constituida el 10 de abril de 1987. Dicho esfuerzo parecía ser un resultado natural del desarrollo progresivo de los procesos organizativos regionales, pero fue también una respuesta coyuntural al posible cierre de espacios estatales de concertación que se anunciaba desde la campaña electoral de Ruiz Massieu como gobernador del estado.

El primer golpe del gobernador entrante contra las organizaciones autónomas se asestó a la Unión de Ejidos de la Costa Grande. El 10 de agosto de 1987, la CNC, con pleno apoyo del gobierno estatal, se apoderó de la mesa directiva de la Bonfil, mediante una intensa campaña de sobornos, chantajes y presiones sobre los delegados. De acuerdo con su lógica, acabando con la Unión las demás serían presa fácil. Carente de una estrategia propia y de capacidad autogestiva, la nueva dirección transformó a la Unión de Ejidos en un simple membrete, en un cascarón que sobrevivió gracias al apoyo del gobierno estatal. Pero el golpe no acabó con la organización independiente. A pesar de la pérdida de la figura legal, en la práctica la mayoría de los cafetaleros se mantuvo fiel a la corriente democrática.

La usurpación cenecista de la Unión fue también un duro golpe económico: la organización perdió la bodega y las oficinas, y sin la

⁵ La Unión de Ejidos y Comunidades de Costa Chica de Ometepec; las uniones de Ejidos Jamaíqueros de Ayutla y Tecoanapa; la Unión de Ejidos Vicente Guerrero; la Unión de Ejidos Forestales Gral. Hermenegildo Galeana de Tecpan, y varias uniones de Tierra Caliente, de la zona norte, de la Montaña y del centro del estado.

figura legal se bloqueó la tramitación del crédito para acopiar café en el ciclo 1987/1988, lo que puso en peligro la comercialización del grano de cientos de campesinos. En ese trance difícil, los productores no hubieran podido reconstruir su organización sin el apoyo del Consejo Comunitario de Abasto, que facilitó transporte y bodega para afrontar las actividades de la cosecha.

A menos de tres meses del golpe cenecista, el 9 de noviembre de 1987 más de mil campesinos se concentraron en Atoyac para crear la Coalición de Ejidos Cafetaleros de Costa Grande. Ese mismo día, la reciente organización tomó las oficinas del Inmecafé en Atoyac, y logró negociar precios del grano, apoyos a la comercialización y recursos para capacitación. Más allá de estos logros, la acción fue una demostración de fuerza de la resucitada agrupación autónoma.

RENACE LA ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA DE LOS CAFETALEROS

La primera tarea de la Coalición después del golpe cenecista fue la constitución de una figura legal que permitiera la obtención de créditos y la firma de contratos comerciales. Así, el 27 de noviembre de 1987 nació la “Sociedad Civil Cafetaleros Unidos de Costa Grande”, cuyos socios fundadores fueron GTC de 17 ejidos. Pronto los ejes de lucha se multiplicaron y se formaron áreas de trabajo: planificación, administración, financiamiento, producción, comercialización, abasto, bienestar, mujer campesina, comunicación y asesoría jurídica. A pesar de ello, la organización mantuvo su carácter unitario, que se expresó en la toma de decisiones sobre cuestiones globales, políticas y estratégicas, en el manejo centralizado de la infraestructura y los recursos económicos, y en la búsqueda de complementariedad entre las áreas. Tres años después de su formación la Coalición agrupaba a 38 GTC de cafetaleros, 32 GTC de maiceros, siete GTC apícolas, diez GTC de mujeres, cinco GTC de copreros, un GTC de plataneros, además del Consejo Comunitario y los 50 comités rurales de SIRAC, y de numerosos grupos de salud.

El área de financiamiento de la Coalición pronto logró extender su cobertura a varias de estas actividades. En 1988 la organización puso en marcha una Unión de Crédito Agropecuario Forestal e Industrial, con un capital de dos mil millones de pesos, para financiar proyectos de café, maíz, copra, plátano y madera. En 1991 este organismo auxiliar de crédito habilitaba a 92 GTC, y a productores de la vecina Unión de Ejidos Forestales Gral. Hermenegildo Galeana, del municipio de Tecpan.

EL PROYECTO CAFETALERO DE LA COALICIÓN DE EJIDOS

Mantener una empresa económica de producción, beneficio y comercialización del grano con el esfuerzo de cerca de dos mil campesinos no fue nada fácil, pues después de la usurpación de la Bonfil las condiciones políticas, financieras y hasta climáticas se volvieron adversas. Así, por ejemplo, en el ciclo 1987/1988 la joven organización no disponía de oficinas ni de bodegas, y sin personalidad jurídica la tramitación del crédito para el acopio quedó truncada.

Un año después hubo graves siniestros en la zona que provocaron pérdidas de cerca de 50 por ciento de la cosecha de café; a las dificultades financieras habituales se agregó un dramático desplome de la producción. Más tarde la cafecultura mundial entró en crisis por el brutal descenso de precios internacionales derivado del rompimiento de los acuerdos económicos de la OIC. En ese mismo año el Inmecafé anunció su retiro de funciones esenciales, y en el ciclo 1990/1991 la delegación de Atoyac dejó de operar por completo: no se abrieron centros receptores y las plantas beneficiadoras permanecieron cerradas, desamparando a miles de pequeños productores.

En síntesis, la falta de recursos financieros para el acopio, una producción mermada de café, bajos precios, bloqueos para exportar directamente, hostilidad de las agencias del gobierno del estado y retiro precipitado del Inmecafé, fueron las principales dificultades que la Coalición enfrentó para sostener su proyecto cafetalero.

Pero en su primer ciclo, siete años de experiencia cobijada bajo la figura de la Unión de Ejidos, una extensa red de relaciones y contactos con organizaciones sociales del sector (agrupadas en la CNOC) y con compradores nacionales e internacionales, permitieron que la Coalición pudiera salir adelante.

A sólo cuatro meses de su nacimiento, la Coalición operó ocho beneficios húmedos prácticos, captó 6 356 quintales provenientes de 23 Grupos de Trabajo Colectivo (GTC), vendió café directamente tanto en el mercado nacional como en el internacional, logró liquidar el grano a precios superiores a los oficiales y, sobre todo, consolidó el apoyo de los campesinos a la nueva organización. La habilidad para combinar mercados y compradores diversos permitió obtener anticipos para sortear la falta de liquidez, iniciar el acopio y crear un fondo revolvente. Además, el Consejo Comunitario de Abasto apoyó la operación mediante un crédito en especie que se ejerció bajo la forma de despensas, como anticipo a cuentas de cosecha.

El principal comprador de la Coalición fue la ARIC-Nacional⁶ y, aunque pagó precios muy bajos, permitió poner en marcha un pequeño fondo revolvente para iniciar el acopio y otorgar anticipos. Con ello fue posible abrir la exportación con las compañías Max Havelaar de Holanda y Twin Trading de Inglaterra.⁷ A pesar de que el sobreprecio acordado con la compañía holandesa era atractivo y compensaba lo reducido del volumen comprometido, el trámite de exportación tuvo que realizarse también por mediación de la ARIC, la que, aduciendo gastos administrativos, retuvo buena parte de las utilidades. Éste fue el principal motivo del rompimiento de relaciones de la Coalición con la ARIC-Nacional de la CNC.

Una de las principales dificultades de la cafecultura guerrerense durante el ciclo 1988/1989 fue la variación climatológica. Las lluvias

⁶ Asociación Rural de Interés Colectivo.

⁷ Ambas compañías están impulsando el consumo de café orgánico o ecológico (cultivado sin agroquímicos) en Europa, y a pesar de que ofrecen un sobreprecio atractivo a las agrupaciones de pequeños caficultores del Tercer Mundo, dispuestos a emprender un proceso de transición al cultivo ecológico, los volúmenes que compran son pequeños, de modo que se trata de un mercado marginal.

se retrasaron cerca de un mes y fueron seguidas de fuertes temporales, provocando graves siniestros en la zona y pérdidas hasta de 50 por ciento en las huertas. Además, lo irregular de las lluvias se tradujo en mala calidad del café cosechado, la maduración dispareja del grano obstaculizó el proceso de lavado y, en contra de la tendencia, provocó que en ese ciclo se incrementara la producción de café capulín.

La Coalición había programado comercializar 25 mil quintales y sólo pudo acopiar cerca de 30 por ciento de esta cantidad. En general, todos los compradores resistieron la situación y su captación de grano disminuyó sensiblemente. Así, el Inmecafé captó apenas 65 mil quintales, que fue el volumen más bajo de la década.

Además del desplome de la producción, la Coalición redujo sus metas por falta de créditos para la cosecha. A pesar de ello logró acopiar 6 734 quintales de 28 GTC. El volumen no fue mucho mayor al del ciclo anterior, pero el número de grupos creció con cinco nuevas comunidades.

En estas condiciones la Coalición inició su primera experiencia de comercialización directa de todo el café acopiado. Sin la cobertura de la Unión de Ejidos y rotas las relaciones con la ARIC-Nacional, la organización asumió la tarea de buscar compradores directamente y de conseguir los recursos para el fondo revolvente; además de sortear por primera vez las dificultades para obtener cuotas propias de exportación.

Tratando de salvar la falta de liquidez —problema que se venía presentando desde el ciclo anterior—, los responsables del área iniciaron las gestiones para obtener crédito de avío para la producción, así como agroindustrial y prendario destinado a financiar el acopio.

Para coadyuvar a este propósito, y en general para crear un organismo financiero propio, desde principios de 1988 se iniciaron los trámites para formar una Unión de Crédito. Sin embargo, el registro definitivo se obtuvo hasta el mes de septiembre, lo que impidió que operara en este ciclo. Con muchas dificultades, la organización con-

siguió financiamiento de la banca comercial y del Inmecafé y logró manejar un total de 739 millones de pesos para habilitar la producción.

Sin embargo, el desplome de la producción se tradujo en la incapacidad de los cafeticultores para responder a los compromisos de entrega de café por los avíos recibidos; pero, además, la organización había avanzado en convenios de venta en el mercado internacional y necesitaba disponer de volúmenes suficientes de grano. Si en condiciones normales gran parte del café se acopia a través del pago en especie de los anticipos y las habilitaciones, con la cosecha mermada casi la única forma de conseguir café es mediante compras en efectivo. La organización no podría sustraerse a la lógica de los productores en condiciones de crisis; la de por sí raquítica producción sería canalizada a los compradores que pagaran en efectivo, dejando para mejores tiempos el pago de las deudas, aun las que se tenían con la propia organización. La contradicción implícita entre las necesidades del núcleo familiar y los intereses de la organización obligó a la Coalición a centrar todos sus esfuerzos en acopiar a partir del fondo revolvente y durante la cosecha. Sin embargo, la banca comercial no cumplió los convenios y la organización se enfrentó a una imprevista falta de liquidez que puso en peligro el proyecto de comercialización y con ello su propia existencia.

Estas condiciones, e innumerables dificultades de todo tipo, caracterizaron el curso del desarrollo de la Coalición en esos primeros tiempos. Frente a un sin número de problemas, mientras campesinos y asesores de la organización buscaban salidas prácticas para salir adelante, sobrevino el rompimiento de los acuerdos de la OIC. El 3 de julio de 1989 el mercado internacional quedó libre de cuotas y sin más regulación que la oferta y la demanda, dando como resultado inmediato un desplome brutal del precio internacional. Mas en el ciclo correspondiente, a pesar de los nuevos retos planteados por la circunstancia internacional señalada, la Coalición logró vender a buenos precios en el mercado internacional y en el interno.

Grave era el hecho, sin embargo, de que en ese impulso emergente la Coalición tuviera frente a sí un futuro brumoso: “el retiro” es-

tatal favorecía en muchos sentidos su desarrollo autónomo, pero implicaba una caída sostenida de los sustantivos apoyos gubernamentales.

Dentro del marco de las dificultades proyectadas, se encontró el incremento de la deuda campesina (en el entendido de que en ese tiempo y en esas condiciones el endeudamiento era un problema crónico). Año tras año, el cafeticultor arrastraba deudas con usuarios y con distintas agencias oficiales, y lo peor era que también empezaba a tener “cartera vencida” con su propia organización. En este momento y en tales condiciones, uno de los mayores desafíos de la Coalición fue cómo resolver la contradicción entre los intereses, necesidades y limitaciones del núcleo familiar cafetalero y la sanidad financiera de la organización, pues aunque ambas eran caras de la misma moneda, eran también terreno fértil de agudas tensiones.

Por otro lado, los campesinos organizados empezaron a cuestionar la validez de apostar todos los recursos económicos y humanos a la actividad cafetalera —particularmente a los proyectos de exportación—, arriesgando el trabajo y el desarrollo de otras áreas de la Coalición. Ciertamente la comercialización del café era el origen y el eje económico de la organización, pero la cuestión era cómo consolidar su desarrollo integral sin que la crisis del área del café tuviera efectos de arrastre poniendo en peligro el conjunto del trabajo.

Desde fines de 1989 la cafeticultura entró en una profunda crisis. La dramática caída del precio internacional del café —debida al rompimiento de los acuerdos económicos de la OIC en julio de 1989— golpeó severamente la economía de los pequeños productores y cimbró al sector en su conjunto. Sin embargo, la supresión del sistema de cuotas permitió la libre exportación y México duplicó sus ventas en el mercado mundial. Aunque aparentemente esta situación era benéfica para todo el sector, quienes finalmente capitalizaron las ventas del aromático en el mercado externo no fueron los pequeños productores sino las grandes compañías exportadoras.

Un segundo componente de la crisis fue la política de reprivatización de la economía y de adelgazamiento del Estado. En 1989 se

anunció la “desincorporación” del Inmecafé y su completo retiro de las funciones de financiamiento, acopio y comercialización. Al principio el gobierno planteó un repliegue paulatino, que debía concluir en 1992 con el objeto de “no desamparar bruscamente a los productores más marginados”, y se comprometió a seguir apoyando así fuera de manera restringida y selectiva a este subsector de los cafeticultores.

Aunque el proyecto de reestructuración y transferencia planteó fortalecer la “autogestión de las organizaciones del sector social”, parte de la infraestructura que fuera del Instituto estuvo en la mira de compradores privados. A esta situación de total desventaja para el pequeño cafeticultor se sumaron siniestros catastróficos. En diciembre de 1989 fuertes heladas dañaron la producción de café en varios estados productores y, poco antes, una sequía arruinó la producción en la costa de Coatepec y Jalapa.

Dramático desplome de los precios internacionales y nacionales, siniestros devastadores, desincorporación y retiro del Inmecafé de funciones sustantivas, endurecimiento de la política crediticia de la banca de desarrollo y liberalización completa del mercado del grano, fueron, a grandes rasgos, los principales elementos que configuraron entonces el adverso marco coyuntural de la cafecultura mexicana.

Con todo y ello la Coalición mantuvo su esfuerzo organizativo por un buen tiempo, y no con malos resultados. Por un lado, porque los siniestros cafetaleros en las principales regiones productoras aumentaron la demanda de café guerrerense. Además, gracias a la competencia entre compañías exportadoras que habían comprometido enormes volúmenes, los precios del café se dispararon en Atoyac.

LA DESINCORPORACIÓN DEL INMECAFÉ

El retiro del Inmecafé en el ciclo 1990/1991 desató una pugna entre empresas privadas y organizaciones sociales por el control de la in-

fraestructura del Instituto. La Coalición trató de transformar esta situación en un estímulo para avanzar en la apropiación del proceso productivo. Para ese ciclo la organización solicitó al Instituto la transferencia de sus seis beneficios húmedos y de la planta de secado. Las autoridades sólo autorizaron la operación de tres, poniendo en peligro la producción de los pequeños cafetaleros, que, al no poder lavar su grano, se veían obligados a malbaratarlo con los acaparadores.

Para la cosecha de 1990/1991 las negociaciones para la transferencia no avanzaron porque la CNC —apoyada por el gobierno del estado— se empeñó en bloquear las iniciativas de la Coalición, interponiendo sus propias solicitudes y empantanando las pláticas. Los cafetaleros no podían esperar, y el 22 de diciembre varias GTC tomaron los beneficios de El Paraíso y de Río Santiago y empezaron a operarlos por su cuenta.

Entre tanto, se siguieron negociando los términos definitivos de la transferencia, y en diciembre de 1990 se concluyó el proceso de concertación para el cambio de propiedad del beneficio seco que tenía el Instituto en Atoyac. El acuerdo fue integrar una sociedad de accionistas, quedando 67 por ciento de las acciones en manos de los Consejos de Administración de los seis beneficios húmedos, y el resto distribuido de la siguiente forma: 12 por ciento para la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, representada por la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil; 11 por ciento para la Coalición y 10 por ciento para el gobierno del estado. En esta distribución aparentemente la organización autónoma estaba en desventaja frente a la unión cenecista, pero contaba en realidad con la mayoría pues los consejos de los beneficios húmedos estarían integrados básicamente por GTC con apoyo del ejido.

La historia de lo que siguió en este complejo proceso de desincorporación rebasa los objetivos de este espacio. Lo que cabe destacar aquí es que el retiro del Inmecafé abrió un proceso de cambio drástico en la correlación de fuerzas, asignando un nuevo papel a la Coalición.

Mientras que en el pasado, aun con el Inmecafé, la compraventa organizada de café presionaba al alza de los precios regionales, con la liberación del mercado y sin mediación de la agencia estatal la competencia frontal entre la organización y el capital privado se planteó en toda su crudeza. En esta batalla no bastaba ya con empujar los precios al alza; era decisivo captar cada vez mayores volúmenes de grano.

Pero el reto estratégico al que se enfrentaba la organización no se reducía a alcanzar metas puramente competitivas. Consolidar una empresa comercializadora eficaz y rentable era necesario pero no suficiente. En el mediano y largo plazos lo más importante era asumir que existían graves problemas en la base misma de la producción cafetalera regional, y que parte de éstos radicaban en las prácticas de los pequeños productores.

Así, en medio de esa crisis la Coalición diseñó una nueva estrategia que reconocía la existencia de una cafeticultura atrasada, formada por huertas en decadencia y de bajos rendimientos; y asumía el hecho de que, para los pequeños productores, los cafetales, más que un reto productivo, eran un patrimonio heredado del que esperan obtener una especie de renta, con la menor inversión posible de trabajo. Modificar de raíz el problema estructural de la cafeticultura campesina costeña implicaba cambiar la cultura agrícola de la región y, por tanto, la mentalidad de los productores. La Coalición empezó a abordar este problema mediante el estímulo y el ejemplo.

Fue en el mes de marzo de 1991 cuando se inició un programa de rehabilitación y renovación de cafetales en mil hectáreas de potencial productivo. Este programa demandó una mayor participación del campesinado en las labores culturales, y un empleo más intensivo de la fuerza del trabajo familiar. La meta fue duplicar y hasta triplicar los rendimientos del área rehabilitada, de manera que los resultados estimularan a otros productores a seguir el ejemplo. Para contrarrestar viejos vicios en el uso de los créditos, el programa contempló también que el financiamiento se otorgara por labor realizada y bajo la vigilancia de Comités Técnicos de Supervisión, elegidos por los propios GTC.

Pero el problema de la cafeticultura era además la tendencia al monocultivo. En tales condiciones, de creciente apertura comercial, no era posible mantener esa situación, y mucho menos en zonas sin vocación cafetalera y de bajos rendimientos. Por todo ello, la Coalición impulsó proyectos de diversificación — agrícolas, hortícolas, ganaderos y forestales — a partir de los intereses y de los recursos naturales de las comunidades.

Por otra parte, la Coalición, junto con otros núcleos cafetaleros agrupados en la CNOC, empezó a buscar alternativas de venta en el mercado nacional e internacional, impulsando la creación de una industria torrefactora que permitiría acceder al mercado final de café tostado y molido. La Coalición también se propuso ampliar y consolidar relaciones con compradores europeos y estadounidenses, solidarios y alternativos, que ofrecieran precios atractivos.

Los campesinos de las montañas tropicales de Atoyac iniciaron entonces una verdadera revolución productiva. Sus esfuerzos quedarán como ejemplo para las generaciones del presente y del futuro. Sobre todo ahora que Guerrero inicia, con los efectos desastrosos de *Manuel e Ingrid*, un nuevo proceso global de reconstrucción.

MUJERES INDÍGENAS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIAS EN LA COSTA CHICA DE GUERRERO

*Gisela Espinosa Damián**

INTRODUCCIÓN

Al comenzar el nuevo siglo, en la Costa Chica-Montaña de Guerrero no existía ninguna organización social que focalizara los problemas de las mujeres indígenas. Hoy, dos proyectos autónomos que se cruzan y retroalimentan evidencian que las cosas empiezan a cambiar. La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI), que agrupa a líderes amuzgas, mixtecas, tlapanecas y nahuas de las cuatro regiones indígenas de Guerrero, y la Casa de la Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas (Manos Unidas), proyecto que opera en la Costa Chica-Montaña, lo confirman.

Los objetivos centrales de Manos Unidas: prevenir y disminuir la mortalidad materna, prevenir y atender la violencia de género, y promover la salud sexual y los derechos reproductivos entre jóvenes indígenas, muestran la emergencia de nuevas sujetas sociales, de nuevos ejes de movilización en regiones rurales indígenas y de novedosos imaginarios sociales-indígenas marcados por el género.

Del amplio universo de trabajo de Manos Unidas, focalizamos la violencia que viven las mujeres indígenas y las acciones que emprenden para librarse de ella y abrir paso a una cultura de buen trato y equidad de género. Nos basamos en datos oficiales, testimonios recogidos en diversos eventos, entrevistas a médicos de la jurisdicción Costa Chica de la Secretaría de Salud (SSA) y en documentos de Manos Unidas; pero, sobre todo, recuperamos el análisis colectivo que hicieron parteras y promotoras de la Casa de la Salud en

* Académica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Agradezco la colaboración de Ana Carmen Luna Muñoz, socióloga egresada de la UAM-Xochimilco.

torno al tema, mismos que vertieron en dos talleres realizados a fines de 2011.

El texto se presenta en tres apartados: el primero expone el contexto social y los antecedentes organizativos de la Casa; el segundo presenta un diagnóstico sobre la violencia que viven las mujeres indígenas y afromexicanas de la Costa Chica. Al final se exponen y analizan las acciones contra la violencia, tanto de las instituciones públicas como de las mujeres indígenas.

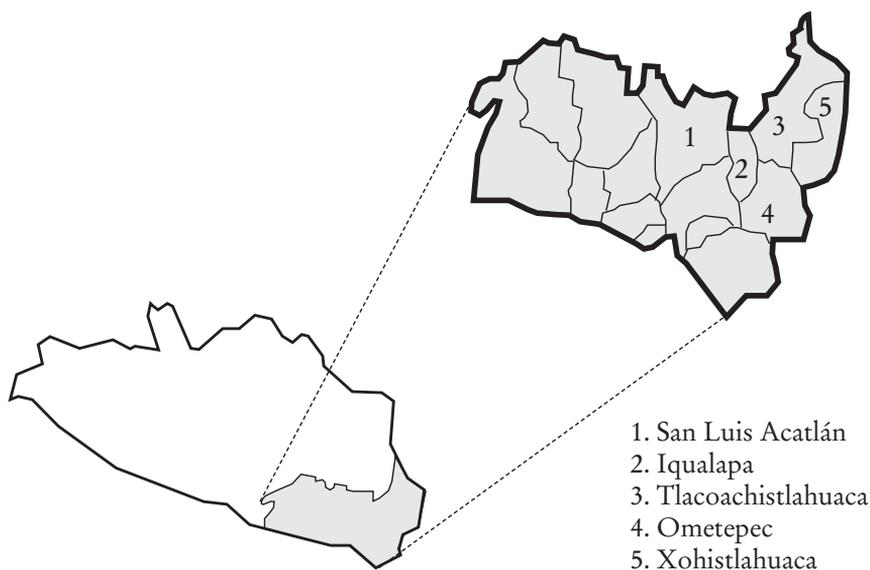
LA COSTA CHICA: UNA REGIÓN MULTIÉTNICA Y MARGINADA

Guerrero ha ocupado uno de los primeros sitios en el país en marginación social: de sus 76 municipios, 96 por ciento se ubica en los niveles de muy alta y alta marginación social; entre los 365 municipios de muy alta marginación que hay en México, el 1°, 5°, 6°, 16° y 23° lugares son ocupados por tres municipios de la Montaña (Cochoapa el Grande, Acatepec y Metlatónoc) y dos de la Costa Chica (Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca). Todos ellos ubicados en el primer decil de la pobreza mexicana.¹

La Costa Chica y la pequeña área de la Montaña donde actúa Manos Unidas se ubican al sureste de Guerrero, entre Acapulco y el estado de Oaxaca; colinda al norte con la zona Centro y al sur con el océano Pacífico. Ésta es la región más rural del estado: 96 por ciento de sus localidades (733 de 765) tienen 2 500 habitantes o menos, aunque 48 por ciento de su población habita en las 32 localidades urbanas de la región (mayores de 2 500 habitantes). La dispersión y atomización de los núcleos de población es uno de sus rasgos característicos, lo cual también se asocia a largos tiempos y dificultades de acceso y comunicación. De su población económicamen-

¹ Poder Ejecutivo, *Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el Año 2011*, Poder Ejecutivo, Secretaría de Desarrollo Social, 7 de diciembre de 2010.

te activa 58 por ciento se dedica a actividades primarias (en Guerrero es 24 por ciento), lo cual representa el porcentaje más alto de las siete regiones de la entidad. La pobreza de la población rural se trata de paliar con migración laboral, tanto internacional como interna.



La Casa de la Salud se ubica en la cabecera municipal de Ometepec, pero su área de influencia abarca los cinco municipios de la Costa Chica señalados en el mapa, y una pequeña parte de Malinaltepec, municipio que se halla en la región Montaña.

En los seis municipios donde trabajan las parteras y promotoras de la Casa de la Salud hay 586 823 habitantes, 51.4 por ciento mujeres y 48.5 por ciento hombres.² El área está habitada por población amuzga, mixteca, tlapaneca, afromexicana y mestiza. Se hablan tres lenguas indígenas y español. La población indígena es mayoritaria: 62.2 por ciento (en el estado es 15.2 por ciento), pero en algunos

² Inmujeres, *Sistema de indicadores de género*, Gobierno federal, tarjetas estatales y municipales, en <www.inmujeres.gob.mx>, consultado el 20 de noviembre de 2011.

municipios es casi la totalidad: Xochistlahuaca (93 por ciento de la población es amuzga), Malinaltepec (93 por ciento es tlapaneca o mixteca), Tlacoachistlahuaca (81 por ciento es mixteca o amuzga) y San Luis Acatlán (57 por ciento es tlapaneca o mixteca).³ Tan sólo estos datos dan una idea del carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de la región.

Los indicadores educativos en esos seis municipios son bajos y para las mujeres son peores: por ejemplo, la escolaridad promedio de las mujeres es de 5.2 años (la nacional es de 8.5), la de los varones es de 5.7 (la nacional es de 8.8). La tasa de alfabetismo que en el país es de 93 por ciento, en el área aludida es de 72 por ciento y en las mujeres de 68.5 por ciento. Pero en municipios como Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca el rezago es mayor: las mujeres alfabetizadas son apenas 47.2 por ciento del total (los varones 55.1 por ciento).⁴ Las bajas tasas de alfabetización no sólo muestran rezagos sociales sino que plantean la necesidad de programas educativos específicos y de otras estrategias culturales, lingüísticas y socioeconómicas que consideren diferencias étnicas y de género.

También otras desigualdades sociales repercuten más en las mujeres: la falta de servicios intensifica sus jornadas domésticas, pues si bien afecta la calidad de vida de toda la familia a ellas les toca suplir estas carencias con su trabajo. Así por ejemplo, mientras en México sólo 8.6 por ciento de los hogares carece de agua entubada, en las viviendas indígenas de Guerrero este dato se eleva a 62 por ciento;⁵ en México sólo en 1.7 por ciento de las viviendas falta energía eléctrica, pero en los seis municipios donde trabaja Manos Unidas es 12 por ciento.⁶

³ Inmujeres, *op. cit.*; Jurisdicción Sanitaria 06, “Diagnóstico de salud 2011”, SSA, Jurisdicción Sanitaria 06, Costa Chica, 2011.

⁴ Inmujeres, *op. cit.*

⁵ INEGI, *Mujeres y hombres en México, 2006* (décima edición), México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006.

⁶ Conapo, *Índice de marginación por entidad federativa y municipio, 2010*, en <www.conapo.gob.mx>, consultado el 12 de noviembre de 2011.

Más desventajas femeninas: en 63 por ciento de las cocinas indígenas del país se usa leña como combustible (en el 82 por ciento de hogares en México se usa gas),⁷ situación que exige más tiempo y trabajo de mujeres para elaborar los alimentos y que tiene serios efectos en la salud, pues la aspiración constante de humo deja sus vías respiratorias como si fueran fumadoras empedernidas. Estas cifras no sólo son alarmantes signos de marginación social, sino de las dificultades que enfrentan las indígenas para cumplir su papel reproductivo. Ser mujer indígena en Guerrero significa mucho trabajo, desgaste personal y riesgos de salud.

Otros datos duros plantean nuevos retos para las mujeres: en el medio rural de México los hogares con jefatura femenina son 19 por ciento, en el área de trabajo de Manos Unidas es 22 por ciento, pero en Ometepec y Malinaltepec la cifra sube a 25 por ciento y 26 por ciento respectivamente,⁸ lo cual evidencia la creciente responsabilidad familiar y social que están asumiendo las mujeres.

La tasa de fecundidad en los seis municipios es de 3.2 hijos por mujer, mientras que en el estado es de 2.3 y en el país de dos.⁹ La diferencia no necesariamente se asocia a un ideal reproductivo más alto de las mujeres indígenas, sino a la falta de información o de acceso a métodos anticonceptivos, como muestran otros estudios.¹⁰

En cuanto a muerte materna, se sabe que hay subregistro e inconsistencia de los datos, pero la información oficial es un referente:

⁷ INEGI, 2006, *op. cit.*

⁸ Inmujeres, *op. cit.*

⁹ *Idem.*

¹⁰ Véanse los artículos de Rosa María Camarena y Susana Lerner, “Necesidades insatisfechas en salud reproductiva: mitos y realidades en el México rural”, y de Gisela Espinosa Damián, “Maternidad indígena: los deseos, los derechos, las costumbres”, en los tomos I y II de Susana Lerner e Iyonne Szasz (coords.), *Salud reproductiva y condiciones de vida en México*, México, El Colegio de México, 2008. Para darse una idea del problema: 42 por ciento de las usuarias de algún método anticonceptivo no recibió información sobre otras opciones o sobre las molestias que podría tener, ni se le aclararon las dudas sobre el método que utiliza; nueve por ciento de las mujeres guerrerenses usa un método pero no lo había solicitado, 5.7 por ciento usa un método que no solicitó; a 49 por ciento de usuarias se les hizo la “operación femenina” (salpingoclasia), pero sólo 26 por ciento declaró haber oído hablar de ese método.

en 1999 se reportaba que en las zonas indígenas de Guerrero la tasa de mortalidad materna era 28.3/10 mil nacidos vivos (NV), mientras el promedio nacional era de 5.1 y el estatal de 7.0; por ello, las indígenas guerrerenses tenían un riesgo de muerte materna 5.5 veces mayor que las mujeres del resto del país.¹¹ Si bien de entonces para acá las cifras se han reducido, Guerrero no ha logrado quitarse del primero o segundo lugar nacional en este tipo de decesos.

En cuanto al acceso a servicios de salud hay problemas graves: en el año 2000, 95 por ciento de la población indígena de Guerrero no tenía ningún tipo de seguridad social;¹² en 2010, el Seguro Popular incluía 21 por ciento,¹³ apenas la quinta parte del total de la población indígena, cifra que dista de garantizar acceso universal a la salud pues los servicios que presta el Seguro Popular son mínimos y deficientes. En la Costa Chica, la propia SSA reporta que sólo 7.4 por ciento de sus habitantes cuenta con seguridad social.¹⁴ De las violaciones a los derechos humanos a indígenas documentadas y denunciadas por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, 17 por ciento afectan el derecho a la salud, entre ellas destacan la negación del servicio de salud, la negligencia médica y la esterilización forzada. Los bajos indicadores de bienestar social, la escasa cobertura y las deficiencias de los servicios de salud son factores que apuntan a explicar por qué en Guerrero la esperanza de vida de las mujeres es 1.7 años menos que el promedio nacional.

La pluriculturalidad de la región, la dispersión y atomización de los núcleos de población, los rezagos educativos y en materia de sa-

¹¹ SSA, *Programa Nacional de Salud 2001-2006*, México, Secretaría de Salud, 2001; Gisela Espinosa, *op. cit.*

¹² INEGI, 2006, *op. cit.*

¹³ Gobierno Federal, *Sistema de Protección Social en Salud. Informe de Resultados 2010, 2011*, en <i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Informe_resultados_SPSS_2010.pdf>, consultado el 18 de noviembre de 2011.

¹⁴ Antonino Herrera Figueroa y Alejandro Chávez Aguirre, “Programa de trabajo 2011. Arranque Parejo en la Vida”, Gobierno del estado de Guerrero, SSA, Jurisdicción Sanitaria 06 Costa Chica, Departamento de Servicios de Salud, Arranque Parejo en la Vida, Ometepec, 2011.

lud, los índices de marginación social, siempre peores para las mujeres indígenas, indican la necesidad de crear programas y estrategias oficiales adecuadas para contrarrestar las desigualdades asociadas al lugar de residencia, a las condiciones socioeconómicas y a las pertenencias étnicas y de género.

Mujeres indígenas por la vida

Cuentan las iniciadoras de la Casa de la Salud, que ésta tiene su origen en un proyecto impulsado por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami)¹⁵ y Kinal Antzetik A.C.¹⁶ El proyecto incluía un diagnóstico sobre mortalidad materna¹⁷ y la generación de un modelo piloto para disminuir ese problema en zonas indígenas.

El diagnóstico arrojó sin lugar a dudas la necesidad de fortalecer el trabajo de las parteras, de fortalecer el intercambio de experiencias entre ellas, de repensar su relación con las instituciones. El diagnóstico también mostró que las muertes maternas muchas veces se dan por violencia, no sólo la física sino la violencia laboral —porque las mujeres trabajan demasiado, no tienen descanso—, la violencia económica y la discriminación —porque no había recursos para una atención adecuada, los servicios de salud estaban lejos, no había doctores suficientes en los hospitales, no había acceso a una información sobre

¹⁵ La Conami agrupaba alrededor de 30 organizaciones de 10 entidades. Su trabajo privilegió la capacitación y formación en derechos humanos e indígenas, derechos de las mujeres y derechos reproductivos.

¹⁶ Organismo civil que desde 1991 ofrece asesoría a mujeres indígenas de Chiapas. A raíz del levantamiento zapatista de 1994, apoyó los procesos de discusión y organización previos a la constitución de la Conami y también apoyó el proceso organizativo de Manos Unidas. Algunas diferencias en torno a éste llevaron a la división: una parte de las mujeres indígenas se quedó en la Casa de la Salud y otras constituyeron Kinal Antzetik-Guerrero. Ambos proyectos persiguen objetivos semejantes.

¹⁷ Véase Gisela Espinosa Damián, “Doscintas trece voces contra la muerte. Mortalidad materna en zonas indígenas”, en Martha Castañeda, Daniela Díaz, Gisela Espinosa y Graciela Freyermuth, *La mortalidad materna en México. Cuatro visiones críticas*, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, KinalAntzetik, Conami, Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, UAM-X, 2004.

mortalidad materna, no había medicamentos—, violencia y desigualdad de género —no había autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, para decidir atenderse si estaban embarazadas, o para usar métodos anticonceptivos (había doctores que pedían que su marido firmara si estaba de acuerdo en que ella usara un método anticonceptivo); también había la parte de violencia institucional: las mujeres que sí tenían acceso a un servicio de salud no querían ir porque había maltrato, no había respeto, no había calidez en los servicios, no había gratuidad. Las mujeres no conocían sus derechos, no tenían información en sus lenguas.¹⁸

En 2002, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Secretaría de Salud (SSA), algunas activistas realizaron las primeras tareas organizativas y de capacitación para promotoras de salud y parteras. A fines de 2003, con un pequeño financiamiento de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), parteras y promotoras de salud anunciaron formalmente la existencia de Manos Unidas y el propósito de prevenir y disminuir la mortalidad materna.

Desde un inicio se vislumbró que el proyecto implicaba trabajar en varios niveles: el comunitario, el que se podía realizar en las instalaciones de la Casa y el que se haría en el Hospital Regional de Ometepec de la SSA. También desde un inicio fue claro que los pilares de la Casa eran las parteras y las promotoras de salud, que la organización y capacitación eran tareas prioritarias, que la concertación con el sector público era indispensable y que se requería una coordinación que tomara en sus manos los complejos hilos del proyecto.

La historia de Manos Unidas está marcada por la escasez y el gran derrame de energía y trabajo gratuito de sus integrantes.¹⁹ Falta

¹⁸ Martha Sánchez Néstor, líder amuzga y asesora permanente de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas. Entrevista realizada por Ana Carmen Luna Muñoz, 17 de noviembre de 2011.

¹⁹ Entre 2007 y 2010, la Secretaría de la Mujer (Semujer) del gobierno estatal otorgó becas de 320 pesos bimestrales para parteras y promotoras. Recurso simbólico que

mucho para que la Casa en la que operan tenga las condiciones idóneas para proporcionar o recibir atención, pero Manos Unidas la considera como una fortaleza del proyecto, espacio de autonomía y de trabajo colectivo que les ha permitido crecer y desarrollar su proyecto social.

La reflexión colectiva, el intercambio de experiencias y la capacitación han sido actividades clave del proyecto.²⁰ Sin duda, otra de las fortalezas de Manos Unidas es la apropiación y resignificación de discursos elaborados en otros contextos, lo cual apunta a la construcción de un discurso situado, analítico y fundamentado sobre los problemas que abordan, sus alternativas y los derechos que las amparan para promover cambios o exigir el cumplimiento o ampliación de programas públicos.

Vale la pena señalar que aun cuando parteras y promotoras son las participantes más constantes en los procesos de capacitación, han promovido la apertura de espacios donde otros actores y actrices sociales conozcan la información y compartan reflexiones sobre cómo resolver sus problemas y exigir sus derechos; entre estos actores se hallan mujeres embarazadas, mujeres unidas en pareja, hombres adultos, mujeres y varones jóvenes, infantes, autoridades comunitarias, docentes de escuelas primarias y secundarias y médicos de la Jurisdicción Sanitaria de la SSA de la Costa Chica.

no retribuye su trabajo. Desde 2011 este pequeño monto no fue garantizado. Con recursos de CDI, de dos municipios del País Vasco y del ayuntamiento de Ometepec se logró adquirir un terreno y avanzar la construcción de la Casa donde ahora operan.

²⁰ Entre los temas de su capacitación destacan embarazo, parto y puerperio; menstruación, planificación familiar y métodos anticonceptivos (condón femenino y masculino, DIU, pastillas, inyecciones); alimentación sana, cuidado de la salud y consulta prenatal; síntomas de alarma y riesgo durante el embarazo; parto saludable, prevención de la muerte materna y de la violencia; prevención del cáncer de mama y cérvico uterino, prueba papanicolau; sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencia, derechos indígenas, masculinidad, violencia intrafamiliar y hacia las mujeres, derechos humanos y políticos de las mujeres; marco normativo y jurídico (nacional e internacional) de los derechos de las mujeres; argumentos jurídicos para despenalizar el aborto; interculturalidad y salud, autoestima, identidad, empoderamiento, liderazgo de las mujeres indígenas, entre otros (Casa de la Salud, *Informes de actividades*, 2003 a 2009).

La importancia vital y el interés que despiertan los temas abordados por Manos Unidas: salud materna, sexualidad, reproducción, violencia, autoestima, masculinidad, etc., así como el hecho de que las parteras y promotoras hablen lenguas indígenas, promuevan una cultura del buen trato y asuman un enfoque de género, étnico y de derechos, hace de la Casa de la Salud un espacio único y novedoso, pertinente y muy apreciado por las mujeres de la Costa Chica-Montaña, e incluso de algunos municipios de Oaxaca desde donde viajan para recibir atención.

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA COSTA CHICA

En un inicio, la violencia de género apareció como un factor que puede propiciar muertes maternas (primer eje de trabajo de Manos Unidas), pero muy pronto desbordó ese marco y se presentó como un problema complejo y amplio que requería de un tratamiento específico. La violencia deja una herida difícil de sanar — dicen las parteras y promotoras— y tiende a ser reproducida por quienes la vivieron. Se sabe que son las parejas masculinas quienes más ejercen violencia contra las mujeres indígenas (también en las sociedades no indígenas son las parejas masculinas los principales agresores de las mujeres) y esa circunstancia remite al ámbito de las relaciones familiares y al espacio privado de la vida social, pero la violencia intrafamiliar e intradoméstica se ubica en un marco más amplio de violencias y en un tiempo dilatado que rebasa el ciclo de vida de las mujeres que hoy luchan contra este mal, tal como ellas fueron percibiendo en los talleres de análisis de 2011.

En Guerrero, las huellas profundas de una violencia secular que no ha cesado se expresan en los grados de marginación de sus pueblos indígenas y en la naturalidad con que se acepta la discriminación, la desigualdad social, la explotación extrema, la exclusión y el

incumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. A las injusticias sociales se suma el caciquismo, la represión y la violencia política que obstaculiza los procesos democráticos. Ahora, la delincuencia organizada que azota a la entidad agrava el problema. Violencia estructural, social, histórica... acentuada por diferencias étnicas y de género, deja huella en la vida y la memoria de los pueblos y de las mujeres indígenas.

En este marco, la violencia de género es una faceta más de un problema multifacético y ancestral. Se inserta en una cultura donde las diferencias de género, étnicas y socioeconómicas se expresan en un arraigado sexismo, racismo y clasismo que naturaliza la violencia hacia las mujeres indígenas al grado de que muchas ignoran ser víctimas de violencia o sus agresores ignoran que no tienen derecho a violentarlas. Violencia simbólica hondamente enquistada.

Las integrantes de la Casa de la Salud se toparon con la violencia desde que buscaban los *por qué*s de la mortalidad materna, pues “las mujeres también morían por violencia o arriesgaban su salud porque sus maridos no las dejaban ir a su cita médica o las obligaban a tener relaciones sexuales en el puerperio. Eran violaciones”.²¹ Muy pronto, a la Casa empezaron a llegar mujeres que no necesariamente estaban embarazadas pero que vivían situaciones de violencia. Por ello, en 2007, el equipo de Manos Unidas definió *la prevención y atención de la violencia* como un área específica de su trabajo: “Era una necesidad que se fue imponiendo. Al principio no todas las promotoras o parteras querían entrar al tema porque acompañar a mujeres violentadas también puede poner en riesgo a la que acompaña”.²²

El equipo se ha adentrado en reflexiones sobre las relaciones de poder y de violencia que pesan sobre las mujeres indígenas, conoce ya la legislación internacional y nacional, el marco jurídico y las ins-

²¹ Apolinaria Santana Oropeza, coordinadora de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas”. Entrevista realizada por Gisela Espinosa, 30 de diciembre, Ometepec, Guerrero, 2011b.

²² *Idem.*

tancias que atienden el problema, así como los programas institucionales orientados a prevenirlo o atenderlos.

Recibimos asesoría jurídica, sabemos a quién debe acudir una mujer que quiere denunciar o que está lastimada, ahora sabemos que puede tener un abogado de oficio y que no tiene por qué pagarle, tenemos una idea de qué hacer en la Agencia de Delitos Sexuales y en Derechos Humanos, conocemos la ley para una vida libre de violencia [...].²³

También han tenido que tocar y tratar de sanar sus propias historias de violencia, pues se han dado cuenta de que es indispensable para actuar adecuadamente frente a otras mujeres que la padecen.

El haber sufrido violencia me lleva a buscar que otras mujeres no pasen por ahí, las comprendo y me da fuerza [...] Hemos tenido ayuda psicológica, una psicóloga nos enseña cómo olvidar los casos y no llevarlos a la casa. Hay mujeres que lloran. Al principio yo también quería llorar con ellas, me contagiaba, pero no sirve de nada, tiene uno que aprender a calmarse, no podemos llorar con ellas [...] nos decían cómo no tener efectos. La autoayuda y la sanación de nuestra violencia por dentro es importante para acompañar a las mujeres.²⁴

Comprender qué es la *violencia* y sus distintos tipos, relacionarla con la vida personal y con la de otras mujeres de sus familias y comunidades, caer en la cuenta de que ese maltrato que han considerado natural no tiene por qué aceptarse, que está penalizado, que hay una ley que las protege, ha significado un salto cualitativo, un descubrimiento valioso para su vida y su proyecto social.

²³ *Idem.*

²⁴ *Idem.*, y Apolinaria Santana Oropeza, coordinadora de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas”, entrevista realizada por Gisela Espinosa y Ana Carmen Luna, 8 de agosto, Ometepec, Guerrero, 2011a.

El concepto violencia y las vivencias

Dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), aprobada en 2007, que por violencia se entiende cualquier acción u omisión basada en el género femenino, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de la mujer, puede ocurrir en el ámbito privado o en el público.²⁵ Las promotoras de la Casa de la Salud tomaron este concepto como referencia y punto de partida. También asumieron la tipología contenida en la Ley:²⁶

Violencia psicológica: es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, incluye negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Ha habido situaciones en las que el esposo no permite que la cheque el médico si es hombre, sí, pero que sea una enfermera o una doctora, un hombre no porque cómo va a andar manoseando a su mujer y por eso se da la muerte materna, porque tienen amenazadas a sus esposas.²⁷

Violencia física: es cualquier acto que causa daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

²⁵ <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf>>.

²⁶ La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (En-direh, 2006) reconoce cuatro tipos de violencia como los más comunes: física, sexual, psicológica o emocional y económica, todos ellos incluidos en la LGAMVLV. En su mayoría, estos tipos de violencia se dan dentro del hogar y las principales víctimas son las mujeres.

²⁷ Testimonios recogidos en “Talleres de sistematización”: Primero y Segundo Taller de Sistematización de la Estrategia para Prevenir y Disminuir la Mortalidad Materna y la Violencia en cinco municipios de la Costa Chica, 10 y 11 de septiembre; 20 y 21 de octubre, coordinados por Gisela Espinosa con la colaboración de Ana Carmen Luna Muñoz, Ometpec, Guerrero, 2011.

Una señora llegó en la Casa pidiendo apoyo para quedarse unos días porque su esposo la había golpeado terriblemente con el machete, cuando llegó tenía su cuerpo todo morado y su espalda cortada con el machete y su ropa con sangre y su bebé también estaba moreteado porque el señor lo había tirado.²⁸

Violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Cuando se adquiere un bien va a nombre del hombre a pesar de que las mujeres aporten, por eso ellas no pueden disponer de ese bien.²⁹

Violencia económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Hay mujeres que trabajan pero el marido maneja el dinero. A veces en el programa Oportunidades, el esposo le quita el dinero y se lo da a otras mujeres. Por eso sufre la mujer, eso es muy común.³⁰

Violencia sexual: es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física; es una expresión de abuso de

²⁸ Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas” A.C., “Casos de violencia que canalizaron las promotoras en sus diferentes comunidades de los cinco municipios Xochistlahuaca, Igualpa, San Luis Acatlan, Tlacuachistlahuaca y Ometepec”, documento inédito, 2009.

²⁹ Talleres de sistematización, *op. cit.*

³⁰ *Idem.*

poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Una muchacha de 16 años llegó pidiendo apoyo en la Casa de la Salud porque ella fue violada una noche cuando estaba durmiendo en su cuarto donde renta, entraron varios hombres a robar y después abusaron de ella, no reconoció a ninguno. Tiempo después se dio cuenta que quedó embarazada de uno de ellos, ahí fue cuando ella tomó la decisión de no tener al bebé porque es un producto de violación, además no tiene apoyo de sus papás. La corrieron de su casa y ella no podrá mantener el bebé sola.³¹

La *violencia obstétrica*³² es una dimensión no incluida en la Ley que ha ido incorporando Manos Unidas. Se refiere a la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud; al trato deshumanizador, al abuso de medicamentos y la patologización de procesos naturales, lo que trae consigo pérdida de autonomía y de capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad. También incluye el omitir atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, el obligar a la mujer a parir en posición horizontal y con las piernas levantadas

³¹ Casa de la Salud de la Mujer, *op. cit.* El concepto *violencia de género* al que se remiten las promotoras de la Casa, se empezó a utilizar en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos realizada en 1993 y se refiere a una gama de costumbres y conductas misóginas en contra de niñas y mujeres, abarca comportamientos físicos, emocionales, sexuales y económicos. Generalmente deriva de normas culturales y sociales que le otorgan poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres e incluye actos de maltrato en el hogar, en la familia, en el trabajo, en espacios públicos y en la comunidad (Señal, Gobierno del Estado de Guerrero, 2011).

³² El concepto *violencia obstétrica* aparece en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de Veracruz de Ignacio de la Llave, en <http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/pdfs/ambito_estatal/leyes_violencia/leyveracruz.pdf>. En las múltiples reuniones sobre el tema a las que han asistido las parteras y promotoras de Manos Unidas empezaron a familiarizarse con el concepto.

existiendo los medios para un parto vertical; el obstaculizar el apego precoz de un niño o niña con su madre sin causa médica justificada, el negarle la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante técnicas de aceleración y practicar cesárea existiendo condiciones para el parto natural sin tener consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Las tareas que Manos Unidas realiza en torno a la salud dan a este concepto una gran relevancia.

No se respeta la decisión de parir como uno quiera, porque a veces está uno con dolor y ellos (los médicos) lo primero que hacen es acostarte y decirte que pujes, pero no se puede, quiere parir uno diferente y ellos no aceptan.³³

Marina era mixteca, tenía 43 años y estaba en su noveno mes de embarazo. El 18 de mayo de 2005, al iniciar los dolores de parto es trasladada por su esposo al hospital básico de Cuanacaxtitlán, allí no la atendieron porque no había médico en ese momento y la canalizaron al hospital regional de Ometepec. Después de tres días internada se dieron cuenta que el producto ya había fallecido. Dos meses después regresó al hospital por fuertes dolores abdominales y fiebres. Su esposo la llevó al Hospital General de Acapulco. Cuando le practicaron la intervención quirúrgica los médicos encontraron un pedazo de gasa en su vientre que le habían dejado en el hospital de Ometepec. Un día después, Marina falleció a causa de la infección.³⁴

Es dramático el resultado pero también el silencio y el hecho de que estos casos no tengan la mayor resonancia en ningún medio.

La *violencia institucional* constituye otra de las facetas del problema que están integrando las promotoras de la Casa aunque no esté incluida en la ley. Se refiere a actos, omisiones o abuso de poder de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen

³³ Talleres de sistematización, *op. cit.*

³⁴ Kinal Antzetik, *Foro Mortalidad Materna en Comunidades Indígenas*, 2009, en <<http://kinal.org.mx/>>.

o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima y pueden dañar la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima o impedir su desarrollo y atentar contra la igualdad.³⁵

En todos los pueblos indígenas sufrimos lo mismo, tlapanecos, mixtecos, amuzgos, nahuas. Las instituciones se paran el cuello, dicen: “estamos haciendo esfuerzos”, pero no, no es cierto, en nuestros pueblos no hay medicamentos, no hay ambulancias, no hay doctor. En Buenavista hay un centro de salud con un solo médico que sale a descansar quince días, hasta un mes. Le pagan para que esté allí, pero a las parteras y parteros no nos dan ni un quinto. Yo lo hago gratis por salvar la vida de las mujeres. Antes atendíamos a nuestro modo, sin material, orita ya tenemos un maletín y un curso que tomamos en la Casa de la Salud.³⁶

En conjunto, son éstas las facetas de la violencia que se articulan en la noción de violencia que maneja el equipo de la Casa de la Salud.

Aquí se viven todas las formas aunque no las reconocíamos desde el principio. Eran normales los gritos y las humillaciones a las mujeres, las hacen sentir menos, no sabíamos que la ley nos protege contra eso. La violencia económica se da mucho, hay maridos que llegan borrachos y todavía les quitan el dinero a las mujeres. La violencia institucional es muy grave, conocemos la de los hospitales que también es violencia obstétrica. La violencia física es más grave cuando se usan objetos, por ejemplo cuando la mujer es macheteada, hay más lesiones

³⁵ Semujer, Gobierno del Estado de Guerrero, *Equidad de género: logros y desafíos, Experiencia de la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero*, México, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de la Mujer, 2011.

³⁶ Foro, 2008. Testimonios recogidos por Gisela Espinosa, en el Foro Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Vida de las Mujeres de Guerrero, 18 y 19 de septiembre, Chilpancingo, Guerrero, 2008.

cuando se usa arma —cuchillo o machete— o quemaduras. Y bueno, la violencia sexual es más difícil porque muchas mujeres consideran que por estar casadas deben aceptar relaciones sexuales aunque no quieran; violaciones también ha habido varias.³⁷

La naturalización de la violencia

Las promotoras de Manos Unidas perciben que la mayoría de las mujeres vive una o varias situaciones de violencia, pero la posición de las mujeres en el contexto social y familiar dificulta una salida:

Hay muchas que no se atreven a denunciar o a quejarse contra su pareja porque no tienen dónde vivir ¿qué van a comer sus niños? ¿cómo se van a mantener? No tienen cómo cultivar, ni casa, ni tierra. Otras cosas que las detienen: el qué dirán y el sentir que no son capaces de trabajar. Es también un problema cultural, una inseguridad, sienten que no van a poder educar a sus hijos. Piensan que deben aguantarse porque Dios las unió con sus maridos en las buenas y en las malas.³⁸

La Jurisdicción Sanitaria de la Costa Chica percibe ese problema:

Nuestro contexto violento es muy pronunciado a nivel familiar y en lo social ni se diga; sin embargo, desde que se implementó el Programa de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual contra la Mujer, no ha habido registros de la violencia física, sexual y psicológica; esta última es muy frecuente y no se ve. Hay muchos factores que influyen para que la mujer guarde silencio, muchas dificultades para que las mujeres se atrevan a poner una denuncia.³⁹

³⁷ Entrevista a Apolinaria Santana, 2011b, *op. cit.*

³⁸ Entrevista a Apolinaria Santana, 2011a, *op. cit.*

³⁹ Entrevista a la doctora Leticia Javier María, responsable del Programa de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual contra la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria 06, Costa Chica), entrevista realizada por Gisela Espinosa y Ana Carmen Luna, 8 y 9 de agosto, 2011.

La dificultad de las mujeres violentadas para hablar del asunto responde a distintos factores: temor y vulnerabilidad ante el agresor, inseguridad en ellas mismas para sostener a la familia, vergüenza o aceptación del maltrato como cosa natural o merecida. Sea cual fuere la razón, el silencio es uno de los primeros y más fuertes obstáculos que enfrentan las promotoras de la Casa para trabajar el problema.

La magnitud de la violencia es un misterio, pues si bien las promotoras de Manos Unidas perciben que es muy común, las mujeres que buscan ayuda o que deciden presentar una denuncia son muy pocas; las encuestas oficiales también se enfrentan al silencio, sólo en un marco confidencial y privado se habla de la experiencia, a ello se añade que al sector salud tampoco le es fácil visibilizar la violencia:

Aunque detecten casos, hay resistencia en el personal médico para remitirlos al Ministerio Público pues significa más trabajo o siente que puede meterse en problemas legales o sufrir represalias por parte de los violentos. Entonces ocultan el problema, invisibilizan la violencia y hay un subregistro muy importante; en lugar de un 60 por ciento se detecta quizá un 30 por ciento y se da seguimiento a un porcentaje insignificante pues si la mujer decide no poner denuncia, el médico no puede actuar y además no cuenta con asesoría legal ni protección.⁴⁰

Todas las dificultades indican que hay un subregistro de los casos de violencia. Los estudios y estadísticas que focalizan la violencia hacia mujeres indígenas son escasos y en la Costa Chica prácticamente nulos. Pese a la escasez de datos presentamos una aproximación al problema.

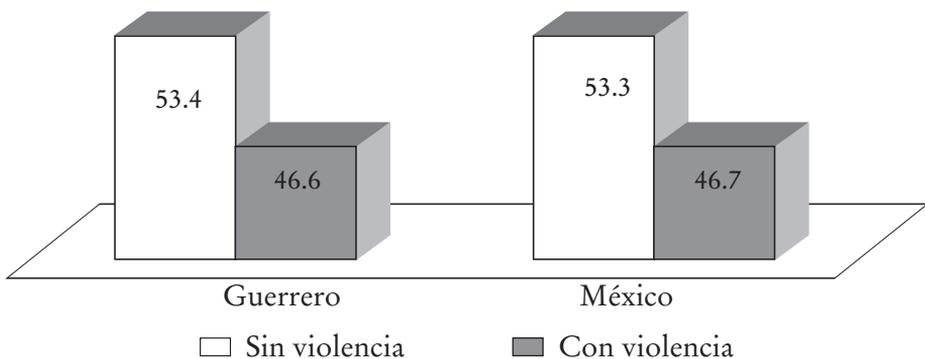
Maltrato a mujeres guerrerenses

Durante 2010, en Guerrero murieron 128 mujeres a consecuencia de hechos violentos, lo que coloca al estado en el 4° lugar nacional

⁴⁰ *Idem.*

en feminicidios.⁴¹ Para julio de 2011 estas muertes habían aumentado 40 por ciento con respecto a la misma fecha del año anterior.⁴² La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh),⁴³ revela que en la entidad, de las 620 955 guerrerenses casadas o unidas de 15 años y más, 46.53 por ciento ha sido violentada a lo largo de su relación de pareja,⁴⁴ porcentaje similar al del país.⁴⁵

MUJERES CASADAS O UNIDAS, SEGÚN CONDICIÓN DE VIOLENCIA
POR PARTE DE SU PAREJA A LO LARGO DE SU RELACIÓN



FUENTE: elaboración propia con base en datos de la Endireh, 2006.

⁴¹ Adriana Covarrubias, “Guerrero ocupa cuarto lugar en feminicidios”, en *El Universal*, 25 de junio de 2010. El dato se apoya en informes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado que fueron retomados por la titular de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, Rosario Herrera Ascencio.

⁴² Cindy Pacheco, “Ojeda Rivera: Suben feminicidios a pesar de ser delito grave en Guerrero; van 85”, en *La Jornada*, 12 de julio de 2011. Datos del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt, proporcionados por su coordinadora, Rosa Icela Ojeda Rivera.

⁴³ Endireh, *Guerrero. Panorama de violencia contra las mujeres*, México, Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006.

⁴⁴ Otros estudios afirman que el 61 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha vivido al menos un incidente violento por parte de su pareja (Guillé y Vallejo, 2008).

⁴⁵ Es útil precisar que la Endireh 2006 también capta información de mujeres alguna vez unidas que suman 98 652 y solteras que ascienden a 188 570.

De las guerrerenses unidas y violentadas por su pareja, 27.8 por ciento ha sufrido *agresiones extremas* que requieren apoyo médico o intervención quirúrgica, que producen una lesión grave, que atentan contra la vida de la mujer, que limitan la libertad de las mujeres y agregan un factor de vulnerabilidad al despojarlas de su patrimonio, o que utilizan la violencia física para un abuso sexual.⁴⁶ El hogar y la pareja son el lugar y la relación más peligrosa para las guerrerenses. Del total de casadas o unidas que han sido violentadas por su pareja a lo largo de su relación, 85.1 por ciento ha sufrido violencia emocional, 62.8 por ciento violencia económica, 50.7 por ciento violencia física y 20.7 por ciento violencia sexual. Cada mujer maltratada puede haber sufrido varios tipos de violencia.⁴⁷

En resumen, en Guerrero, la violencia de género es muy acentuada: la entidad tiene el “honor” de estar entre los primeros lugares del país en feminicidios; la violencia emocional es la más frecuente —probablemente también es la más naturalizada por el sexismo del sentido común—, seguida por las agresiones económicas, físicas y sexuales. La violencia intradoméstica e intrafamiliar, especialmente de pareja, resulta la más riesgosa para las guerrerenses; es en ese marco donde más se atenta contra sus derechos y su integridad.

*Mujeres indígenas:
cifras y voces de la violencia*

La Endireh 2006 informa que, en Guerrero, 44.1 por ciento de las mujeres indígenas casadas o unidas ha sido violentadas por su pa-

⁴⁶ Endireh, *op. cit.* Otra fuente estima que Guerrero se ubica en el 11° lugar nacional en casos de mujeres que han sido maltratadas en una relación de pareja: 48.5 por ciento ha sido pateada; 46.1 por ciento ha requerido atención médica o se ha tenido que operar para superar los daños ocasionados por la agresión; a 28.6 por ciento su pareja la ha amarrado, tratado de ahorcar o asfixiar, atacado con cuchillo o navaja o le ha disparado con un arma; 28 por ciento fue obligada a tener relaciones sexuales mediante fuerza física; a 11.5 por ciento su pareja le ha quitado dinero o se ha adueñado de bienes como terrenos, joyas, etc. (Guillé y Vallejo, 2008).

⁴⁷ Endireh, *op. cit.*

reja, dato ligeramente inferior al del estado y al del país (46.6 por ciento y 45.7 por ciento respectivamente).

Si bien la violencia conyugal está presente en todos los niveles sociales, las encuestas han demostrado que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel socioeconómico al que pertenecen las mujeres y el riesgo que tienen de sufrir violencia conyugal. Así, el análisis de la Endireh revela que los estratos bajo y muy bajo tienen los porcentajes más elevados de las cuatro formas de violencia (física, sexual, emocional y económica).⁴⁸

La información cualitativa de la Casa de la Salud indica que las indígenas guerrerenses sufren frecuentemente violencia de pareja.

Llegó a la Casa de Salud una joven amuzga pidiendo apoyo de hospedarse porque ha sido golpeada por parte de su esposo. La muchacha tomó la decisión de demandar a su esposo porque ella siempre ha vivido violencia desde que se casó con él, nunca fue feliz con él porque no lo quería. Sus padres la dieron en contra de su voluntad, nomás porque el señor fue a pedir su mano y luego estuvieron de acuerdo que ella se casara desde los 13 años; ahora ella ya tiene dieciséis.⁴⁹

La Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (Ensademi, 2008),⁵⁰ cruza las categorías etnia y género para elegir una

⁴⁸ Soledad González Montes y Mariana Mojarro Íñiguez, “De la victimización a la agencia: denuncia de la violencia conyugal por mujeres en ocho regiones indígenas de México”, en Ana María Tepichin Valle, *Género en contextos de pobreza*, México, Colmex, 2011.

⁴⁹ Casa de la Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas, “Registro de casos atendidos en la Casa de Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas”, inédito, 2010.

⁵⁰ Ensademi, Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, México, Instituto Nacional de Salud Pública-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008. La Ensademi, 2008, se levantó en ocho regiones con 40 por ciento o más de población hablante de alguna lengua indígena. La Ensademi explora la violencia en la infancia y la vida adulta de las mujeres indígenas, la primera, relevante por su carácter formativo y sus implicaciones en el desarrollo físico, mental y emocional de las mujeres; la segunda, porque focaliza los años de desarrollo potencial de capacidades huma-

muestra representativa de las mujeres indígenas de México. En los 12 meses previos a la encuesta, 25.55 por ciento de ellas había sufrido violencia psicológica, física, económica, sexual y/o negligencia por parte de su pareja, dato que se eleva a 28.43 por ciento cuando se trata de mujeres monolingües.⁵¹ La misma encuesta estima que 21.1 por ciento de las indígenas ha sufrido violencia física, 25.55 por ciento violencia psicológica, 9.8 por ciento violencia económica, 6.75 por ciento violencia sexual y 6.1 por ciento negligencia.⁵² En la Costa Chica, la doctora responsable del programa de prevención a la violencia de la Jurisdicción de la SSA, considera que el problema no sólo es el cuánto sino el cómo se percibe y se da la violencia:

Lo étnico influye en el tipo de violencia, por ejemplo la violencia sexual está consentida por toda la comunidad y la estructura social, es difícil reconocerla y pedir auxilio. Hay usos y costumbres que chocan con los derechos sexuales y reproductivos. Hay mujeres que no tienen derecho a elegir pareja, que a los 12 años están negociadas por una reja de refrescos o por 80 mil pesos. Esto ocurre sobre todo en comunidades más lejanas y aisladas [...] Lo cual impide el acceso institucional, Semujer no va jamás allá, no se abre el tema de los derechos sexuales y reproductivos.⁵³

Sin duda hay formas particulares de violencia que se asocian a prácticas culturales indígenas, como dice la doctora Javier; sin embargo, la idea de que la violencia sexual está consentida por toda la comunidad indígena es poco afortunada pues dentro de esas comunidades hay núcleos que no apoyan estas prácticas, y en población

nas que tienen un efecto no sólo en la vida personal, sino también en la vida social, pues de los 20 a los 59 años, la mayoría de las mujeres ejercen roles sociales como estudiantes, parejas, trabajadoras, líderes sociales y madres; como madres son transmisoras de patrones culturales y familiares de vital importancia en cualquier grupo social (Ensamble, 2008).

⁵¹ *Idem.*

⁵² González y Mojarro, 2011, *op. cit.*, p. 209.

⁵³ Entrevista a Javier, *op. cit.*

no indígena también hay violencia sexual y no por ello se generaliza. El matiz es relevante pues de otro modo se corre el riesgo de estigmatizar a las culturas indígenas como violentas y sexistas, argumento que se ha utilizado para no reconocer constitucionalmente los derechos indígenas.

La Ensademi 2008 también arroja luz sobre la violencia en la infancia indígena, periodo de la vida que poco se explora en los análisis y en otras encuestas sobre violencia: 34 por ciento de las indígenas reportó golpes y/o humillaciones cuando era niña. En 48.5 por ciento de las humillaciones el padre fue el principal agresor, seguido muy de cerca por la madre con 45.2 por ciento; pero la madre es la agresora principal cuando se trata de violencia física (en 54.2 por ciento de los casos).⁵⁴

Quando yo era niña y mi padre me agredía, escapaba con mi abuela, sólo regresaba a mi casa por mis hermanos y mi mamá, luego mi papá culpaba a mi mamá de que me escapara. Mi padre quería que yo fuera hombre y yo siempre sentí que era mi responsabilidad no haberlo sido, oía de niña que se abusaba de las niñas y siempre me prometí irme cuando fuera mayor, sin embargo me sentía también con responsabilidad por mis hermanos.⁵⁵

También en la Casa de la Salud saben de casos que conjugan violencia de la madre y de algún hombre, o violencia del padre y defensa de la niña por parte de la madre:

El caso de Acalmani donde un padre intentó violar a su niña, el señor traía preservativos y se supo que desde antes, como seis u ocho meses antes, el señor la había estado tocando, lo denunció la mamá.⁵⁶

Datos que indican la complejidad del problema, pues la edad de las mujeres y la posición de poder o autoridad que guardan con

⁵⁴ Ensademi, 2008, *op. cit.*

⁵⁵ Talleres de sistematización, 2011, *op. cit.*

⁵⁶ Entrevista a Santana, 2011a.

otros/as también se expresa en su cambiante posición de víctima o victimaria en las relaciones violentas: muchas niñas maltratadas quizá se conviertan en madres violentas al tiempo en que siguen siendo mujeres violentadas por sus parejas, algunas logran oponerse al abuso de sus niñas a pesar de su posición subordinada.

Romper el círculo vicioso de la violencia es uno de los retos que enfrenta Manos Unidas al realizar su labor. Y a veces lo logra:

Hay casos exitosos como el de dos niñas: a una niña de 12 años la casaron con un hombre de 45, su mamá la casó. El señor era violento y celoso, casi la mataba a golpes a ella y a su hermana porque la defendió. Llegaron las dos niñas inconscientes y llenas de moretones al hospital. Las niñas estaban inconscientes y la abuela todavía lo defendía. Ya después fueron a Manos Unidas, se demandó y encarcelaron al señor. Luego regresaron las niñas a Xochistlahuaca y su abuela estaba enojada, no las quería recibir. Chica (una promotora de la Casa) tuvo que hablar con ella y convencerla de que las aceptara porque ese señor las había tratado mal y eso no era normal. La abuela comprendió y las aceptó, la hermana grande entró a trabajar y la pequeña entró a estudiar.⁵⁷

El abuso sexual en la infancia incluye “cualquier tocamiento o coacción para hacer algo sexual antes de los 15 años” y se estima que afecta a siete por ciento de las niñas indígenas, poco más de la mitad de ellas fueron violentadas por un familiar.⁵⁸ Problema de primer orden que reportan verbalmente tanto las promotoras de la Casa como investigadoras que frecuentemente se topan con casos de este tipo aunque no sea su tema de estudio.

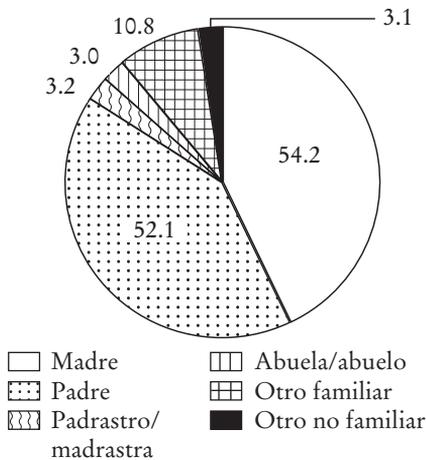
Año 2009: una niña de seis años fue violada por su abuelo, primero le introducía los dedos por la vagina pero después la violó. Llegó la niña al hospital desflorada y con el perineo desgarrado, toda el área desgarrada [...] la niña decía que se cayó en un pastito, luego dijo que

⁵⁷ *Idem.*

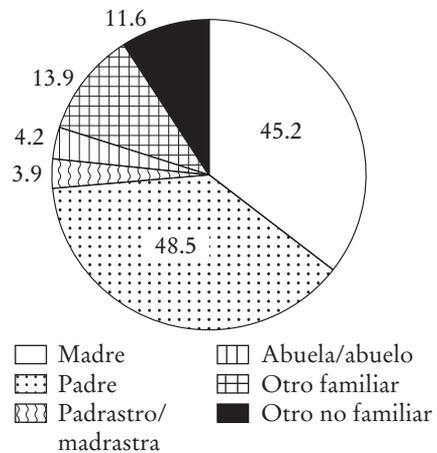
⁵⁸ INSP-CDI, 2008.

se pegó con un palo. El abuelo no se despegaba de ella cuando la niña declaró, la tenía bien aleccionada y atemorizada, el personal médico no tuvo el cuidado de sacar al señor. Finalmente, con recursos médicos se le acusó de tentativa de violación. Intervino la Procuraduría de Justicia (la agencia de delitos sexuales...) y la Defensoría de Derechos Humanos, pero no se pudo hacer nada. El señor salió sobornando a los jueces. Este sistema de justicia ineficaz y sobornable limita la posibilidad de las mujeres de alcanzar armonía en sus vidas y respeto para ellas.⁵⁹

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIPO DE AGRESOR, POR GOLPES EN LA INFANCIA



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIPO DE AGRESOR, POR HUMILLACIONES EN LA INFANCIA



FUENTE: Ensademi, 2008.

Indudablemente, la corrupción e ineficacia, el sexismo y el racismo del sistema de justicia se convierten en un problema adicional en casos de violencia.

El consumo de alcohol y drogas muestra una relación directa con la violencia: de las mujeres indígenas cuya pareja consumía alcohol

⁵⁹ Entrevista a Javier, 2011.

ocasionalmente, 21.2 por ciento fue maltratada; cuando la pareja toma todos o casi todos los días el porcentaje subió a 58.7 por ciento. De las agresiones reportadas 42.7 por ciento ocurrieron cuando el novio, esposo o compañero estaba bajo los efectos del alcohol y 1.7 por ciento cuando estaba bajo los efectos de alguna droga.⁶⁰ En la Costa Chica este problema también se vive:

Se presentó el caso de una señora, su esposo era maestro, alcohólico y diabético, y la trataba mal, siempre desvalorizaba el trabajo de su esposa en casa, la insultaba y humillaba, le pegaba y le decía que no sirve para nada. No tenía libertad, la encerraba o dejaba fuera de la casa “por llegar tarde”, aunque él llegara a la una de la mañana. A la señora se le acompañó con la abogada y la abogada citó al esposo y le dijo que la casa era de ambos, que ella también valía y se llegó a un acuerdo verbal y escrito. Él se comprometió a cambiar. Al citatorio el señor llegó con su abogado, cuando el abogado escuchó las declaraciones de la esposa también le dijo al señor que estaba mal, que qué pena. Lo regañaron más porque era maestro. Se le ha dado seguimiento al caso, porque de nada sirve apoyar un caso sin darle después seguimiento.⁶¹

Se percibe que el alcoholismo puede ser un factor que acentúa o detona eventos de violencia, pero también se percibe que la violencia de género y las humillaciones marcaban la vida cotidiana de la pareja, lo cual induce a pensar en relaciones de poder y subordinación que se cruzan o pueden cobrar mayor intensidad con el alcoholismo, pero que preceden a éste y muchas veces están legitimadas por el sentido común.

Se visitó a la señora María para informarla sobre el derecho de las mujeres, porque durante más de 20 años cada que su marido ingiere alcohol la golpea físicamente y la maltrata psicológicamente y está amenazada por parte de él. Aunque él ya tiene otra pareja llega a molestarla por el problema de una casa y un solar que ya había heredado a sus hi-

⁶⁰ Ensademi, 2008, *op. cit.*

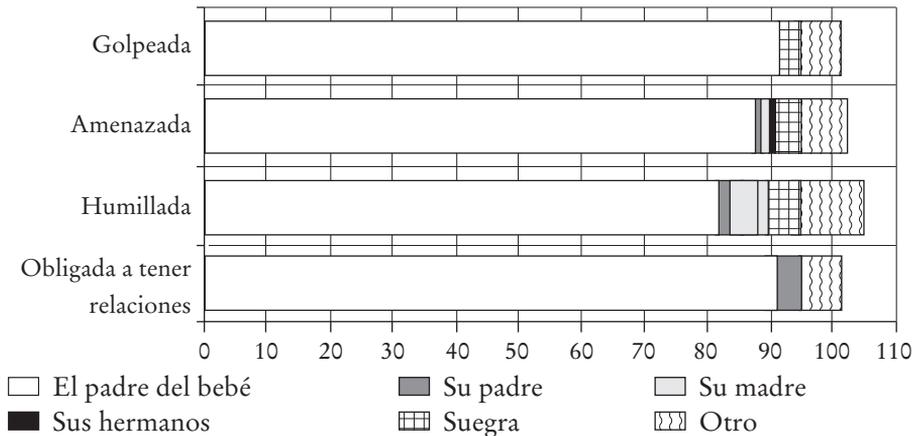
⁶¹ Entrevista a Santana 2011a, *op. cit.*

jos mayores, ahora él quiere desheredarlos para poder vivir con otra mujer.⁶²

En este caso el consumo de alcohol se vincula a varios tipos de violencia: física, psicológica y patrimonial.

En cuanto a la violencia en el embarazo: 17 por ciento de las indígenas reportó haber sido maltratada en alguno de sus embarazos: humillaciones (13 por ciento), amenazas (nueve por ciento), golpes (nueve por ciento) y relaciones sexuales obligadas (ocho por ciento). El principal agresor fue el padre del bebé, tanto en humillaciones y amenazas como en golpes y violencia sexual que vivieron las mujeres indígenas embarazadas. Las suegras fueron responsables de cinco por ciento de las humillaciones y de cuatro por ciento de las amenazas; entre las mujeres que fueron obligadas a tener relaciones sexuales, cuatro por ciento reportó a su propio padre como el agresor.⁶³

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIPO DE AGRESOR Y MALTRATO EN ALGUNO DE SUS EMBARAZOS



FUENTE: Ensademi, 2008.

⁶² Casa de la Salud de la Mujer Indígena, 2009.

⁶³ Ensademi, *op. cit.*, 2008.

De las 753 mujeres que estaban embarazadas al aplicarles la encuesta, 5 por ciento fue golpeada o pateada durante su embarazo; 44 por ciento había sido golpeada en más de una ocasión en el último mes; y de las mujeres pateadas en el último mes, todas lo fueron en más de una ocasión. La mayoría (76 por ciento) no comenta este maltrato a nadie, una minoría lo menciona a un familiar. Las consecuencias que tuvieron los golpes y/o patadas en el abdomen fueron principalmente dolores (39 por ciento); 30 por ciento no declaró alguna consecuencia, y 31 por ciento no respondió.⁶⁴ Esta situación no es ajena a las vivencias de las indígenas de la Costa Chica-Montaña, sólo que aquí el aislamiento empeora la situación.

En 2009 murió una chica amuzga de 19 años. Fue huérfana de papá desde los seis años, su mamá es alcohólica. Cuando la niña tenía 11 años la señora no tenía dinero y la vendió o cambió por dos botecitos de alcohol: “Ahí te dejo a ésta [...]” (como pago por el alcohol). El tendero la hizo su mujer y tuvo dos hijas con ella, a los 19 años estaba embarazada de su tercer hijo. El hombre era alcohólico y una mañana, en la resaca ella le sirvió un café. No sabemos qué pasó, si al hombre no le agradó el café o qué, pero le vació la olla del café con agua hirviendo. Vivían en medio del campo, ella gritaba pero nadie la escuchó, sus hijitos tenían dos y cuatro años. Estaban en el desamparo total. Nadie la auxilió. Luego de 20 días la llevaron inconsciente al hospital, sólo llegó a morir. El especialista dijo que era una tromboflebitis, pero no, se hizo la investigación y era una quemadura provocada por agua hirviendo. No pudo hacerse la denuncia porque los médicos no notificaron y tuvieron una valoración errónea (tromboflebitis), el padre anda prófugo y las niñas se quedaron a cargo de la abuela.⁶⁵

La violencia en el puerperio tiene implicaciones mortales.

Una señora parió en el hospital regional, era un caso complicado y le hicieron cesárea sin su consentimiento ni el de su marido, vino a los

⁶⁴ *Idem.*

⁶⁵ Entrevista a Javier, *op. cit.*

siete días a que le quitaran los puntos, se tardó en el hospital, su marido se enojó por la tardanza y la golpeó, por los golpes le salió una bola, se infectó por dentro, la mujer vino a la Casa de la Salud y le pregunté si quería demandar, decidió que no y regresó con el médico. Los médicos decían que era normal ¿cómo va a ser normal que llegue una mujer hinchada y moreteada? Exigí que se le hiciera una revisión y en ese momento la mujer confesó que su marido ya la había golpeado antes, en la panza, cuando estaba embarazada. El papá de la señora quería que lo castigarán, yo le dije que era su decisión poner una demanda. La señora se decidió a demandar y fueron a la agencia, al segundo citatorio el señor se presentó. Había un acta del hospital certificando que había habido violencia, la señora ganó la demanda y se llegó al acuerdo de una pensión que tenía que darle su marido, pero finalmente la mujer le otorgó el perdón. El señor me amenazó: “te vas a arrepentir”. La abogada se molestó conmigo. El papá se encabronó. Yo me sentí muy mal. Para evitar esta situación se pregunta varias veces a las mujeres si están seguras de demandar y se les explica lo que puede suceder con la demanda.⁶⁶

El caso también muestra la dificultad para que las mujeres hablen del problema y en todo caso, para que se sostengan en una demanda contra su pareja y perciban la violencia doméstica e institucional.

La violencia obstétrica es vivida con mucha frecuencia, hay impunidad pese a la gravedad de los hechos:

Mi nuera Verónica González llegó a la clínica con mucha dilatación. Llevábamos cien pesos y nos dijeron: aquí no se puede presentar si no trae suficiente. Quiero una ayuda por mientras, les dije, pero no, no la atendieron y mi nuera se alivió en la sala de espera. Oí llorar a la niña, nació con el lomito pelado y se murió. Mi nuera también se murió, la pusieron en una ambulancia pero falleció antes de llegar a Acapulco. Bueno, ni modo — dije yo — todo es porque no sé leer. Le dije al doctor: “si yo supiera leer tomaría su nombre, pero hay un buen Dios,

⁶⁶ Entrevista a Santana, 2011a

algún día tendrá que dar cuentas”. El doctor dijo: “ay señora, no me eche la sal”. Y le dije: “que no ocurra más, ya me pasó a mí”.⁶⁷

Como muestra el caso, hay mujeres que viven simultáneamente diversos tipos de violencia, por parte de su pareja, violencia física y seguramente emocional, en el hospital violencia obstétrica e institucional.

El personal más sensible de la SSA también reconoce la violencia institucional.

Sobre la discriminación institucional: pues sí, en los centros de salud hay preferencia por personas bien vestidas o elegantes sobre mujeres con otros hábitos y vestidos. Sí hay discriminación y maltrato ¡Que se espere! Cuando se trata de indígenas, parece una cosa natural el rechazo a estas mujeres, en todos lados, también en derechos humanos y en el ministerio público.⁶⁸

Efectos y percepciones de la violencia

Un tercio (32 por ciento) de las mujeres indígenas que dijeron haber vivido violencia de pareja sufrieron alguna lesión o daño como consecuencia de ésta.⁶⁹

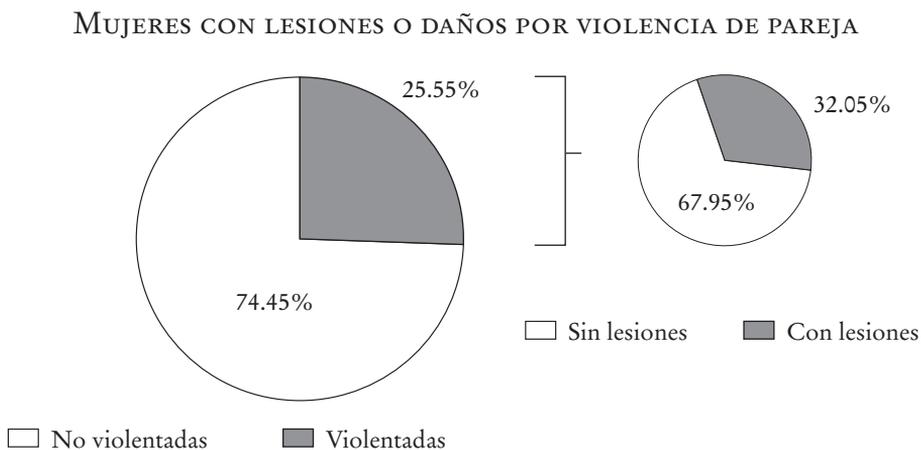
Las implicaciones económicas y laborales de la violencia han sido poco estudiadas, menos aún en mujeres indígenas, veamos algunos datos: además del gasto que implica atender las lesiones provocadas

⁶⁷ Foro, 2008.

⁶⁸ Entrevista a Javier, *op. cit.*

⁶⁹ De las lesiones clasificadas como severas, 7.9 por ciento de las mujeres indígenas maltratadas sufrió sangrado vaginal o anal como consecuencia de la violencia sexual; 4.6 por ciento mencionó alguna cortada que requirió sutura; 3.9 por ciento tuvo alguna fractura; y 2.2 por ciento reportó quemaduras. De las mujeres que sufrieron este tipo de lesiones 2.5 por ciento señaló haber requerido hospitalización, 31 por ciento ($n=6\ 550$) reportó haber tenido una lesión, 41.8 por ciento ($n=8\ 821$) dos lesiones, 15.2 por ciento ($n=3\ 207$) tres lesiones, y el resto cuatro o más lesiones. El promedio de lesiones por víctima en el último año fue de dos (Ensademi, 2008).

por la violencia de pareja, 4.3 por ciento de las mujeres indígenas maltratadas dijo haber perdido su trabajo como consecuencia de la situación y 15 por ciento faltó a su trabajo (6.9 días promedio) por la situación.⁷⁰



FUENTE: Ensademi, 2008.

El Sistema de Indicadores de Género apoyado en datos de la Endi-reh 2006, permite identificar huellas y posiciones ante la violencia en hablantes de lengua indígena casadas o unidas y usuarias de servicios de salud.

- 31.7 por ciento recuerda que había golpes entre las personas con las que vivía en su infancia.
- 38.8 por ciento recuerda que le pegaban cuando era niña.
- 25.2 por ciento recuerda que la insultaban u ofendían cuando era niña.
- 11.8 por ciento considera que cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho a pegarle.
- 7.8 por ciento no está de acuerdo en que las mujeres tengan el derecho a vivir una vida libre de violencia.

⁷⁰ Ensademi, 2008, *op. cit.*

- 74.2 por ciento considera que una buena esposa debe obedecer en todo lo que su esposo ordene.
- 85.7 por ciento considera que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia.
- 55.5 por ciento considera que una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero.
- 19.8 por ciento considera que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera.
- 32.4 por ciento no está de acuerdo en que las mujeres y los hombres tengan la misma libertad.
- 19.1 por ciento no está de acuerdo en que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos para tomar sus decisiones.
- 4.7 por ciento ha padecido violencia patrimonial.
- 14.1 por ciento ha sufrido violencia familiar (no de pareja).⁷¹

Destaca el alto porcentaje de mujeres indígenas que considera la obediencia ciega a su pareja como atributo de una buena esposa y otro tanto que considera al hombre como único proveedor; ambas creencias refuerzan una posición subordinada y dependiente para la mujer. Campo idóneo para que la mujer indígena crea que vale menos y la violencia pueda ser admitida, cuestión acentuada por recuerdos primarios de agresiones familiares o personales y por un ideal de género inequitativo: un tercio de las mujeres no admite igualdad de libertades para mujeres y varones; casi una quinta parte acepta como deber ser la violencia sexual y no está de acuerdo en la igualdad de derechos. Ideologías femeninas de género que se compensan débilmente con el hecho de que poco más de la mitad de las entrevistadas indígenas cree que mujeres y varones tienen la misma capacidad para ganar dinero.

⁷¹ La violencia familiar se refiere a los casos en que la mujer ha sido agredida o maltratada por algún familiar consanguíneo o algún otro pariente (suegros(as), cuñados(as), padrinos o madrinas, etc.), excluye el maltrato por parte del esposo.

También en la Costa Chica se comparten estas ideas:

Si se pregunta a una mujer quién es más importante en la pareja, ella dirá: mi esposo porque él trabaja.⁷²

Se recibió a una señora mixteca ama de casa pidiendo apoyo a la Casa de la Salud. Su esposo le había pegado porque ella pidió dinero para darle de comer a sus hijos, los niños son muchos y siempre que ella le pide dinero al esposo él la golpea. Ella quería que viniera la policía para que se lleve a su esposo y estaba dispuesta a demandarlo, pero el señor se fue y no lo encontraron y así que le dijeron que la iban acompañar a poner la demanda, ya después ella dijo que no porque sus hijos ya no tendrían un papá.⁷³

Las cifras y la información cualitativa que conocen las promotoras y parteras de la Casa de la Salud muestran modos femeninos de pensar que reproducen las desigualdades de género, rasgos culturales comunitarios que no son exclusivos de los hombres. Sin duda, el arduo trabajo que implica cuestionar un sentido común que justifica la desigualdad de género y crea condiciones para el autoritarismo y la violencia representa un reto enorme para las instituciones públicas y civiles que intentan prevenir y atender el problema, pues no basta la aprobación de leyes protectoras si las ideas de mujeres y varones sostienen las raíces de la violencia.

RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y SOCIALES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

*Palabras no faltan:
marco legal e institucional contra la violencia*

Durante mucho tiempo la violencia hacia la mujer se consideró como un problema individual y privado ante el cual las instituciones pú-

⁷² Entrevista a Javier, *op. cit.*

⁷³ Casa de la Salud de la Mujer Indígena, 2011.

blicas no tenían nada que decir o hacer. El trabajo de Manos Unidas en torno a la prevención de la violencia y el acompañamiento a mujeres que deciden denunciar o buscar apoyo ante el problema, se da en un periodo en el que, tanto en el plano nacional como internacional, la violencia hacia las mujeres se ha reconocido como un asunto de interés público. Hoy, la violencia contra las mujeres está saliendo de los muros domésticos y del silencio para convertirse en un problema social y de prioridad en las agendas políticas, hecho que se expresa en el desarrollo de un marco legal y la creación de programas e instituciones que empiezan a asumir la prevención y atención de la violencia.⁷⁴

En México, la *Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres*, aprobada en 2007, concreta una larga lucha de las mujeres contra este problema; ahí se marcan las bases jurídicas y administrativas que la federación, los estados y los municipios deben ejecutar para que las mujeres vivan libres de violencia. Guerrero ha sido pionero en la institucionalización de la perspectiva de género al crear en 1987 una Secretaría de la Mujer, precursora de los institutos de las mujeres. En 1997 creó la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer y le otorgó atribuciones para prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres. En 2008, se publicó la *Ley Número 533 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero*, y en 2010 la *Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero*. Además, se elaboró el *Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*, que busca el respeto y difusión de los derechos humanos de las mujeres

⁷⁴ El año 1980 fue punto de arranque en el debate internacional sobre el tema, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que la violencia contra las mujeres en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. En 1993, la ONU consideró la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos al tiempo en que diversas organizaciones de mujeres presionaron para contar con una legislación acorde. En 1994, en Belem do Pará, Brasil, la OEA adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Endireh, 2006).

y su desarrollo humano libre de violencia en los ámbitos educativo, de salud, trabajo y justicia.⁷⁵

También en estos años se aprobó un paquete de reformas al Código Civil de la entidad para ampliar la protección de los derechos humanos de las mujeres; algunas inciden directamente en las relaciones de género en los pueblos indígenas:

- Se establece la mayoría de edad como la mínima requerida para contraer matrimonio (lo cual impediría los matrimonios de niñas/os y adolescentes, frecuentes entre la población indígena).
- Se deroga lo relativo al rapto en los requisitos para contraer matrimonio (también impediría que esta práctica, de suyo violatoria de los derechos de las mujeres, se legitime mediante el matrimonio, como ocurre frecuentemente en comunidades indígenas).
- En el divorcio por mutuo consentimiento la mujer tendrá derecho a recibir pensión alimenticia al igual que las hijas e hijos nacidos en matrimonio (apoyaría la decisión de mujeres indígenas violentadas que desean separarse pero temen la falta de protección económica).
- En la demanda de divorcio se podrá solicitar una indemnización hasta del 50 por ciento del valor de los bienes que se hubieren adquirido cuando se estuvieron casados por separación de bienes, cuando el demandante se hubiere dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos e hijas, cuando no haya adquirido bienes propios o sean notoriamente menores a los de la contraparte (reconocer el aporte económico de las tareas reproductivas, casi exclusivas de mujeres, es una ventaja para las mujeres indígenas que realizan este tipo de tareas).

⁷⁵ Semujer-Gobierno del Estado de Guerrero, 2011.

- Se define la cópula como la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima y se considera la violación entre cónyuges (medida que apunta a desnaturalizar la violencia sexual aceptada como obligación por muchas mujeres indígenas).

Un esfuerzo conjunto de organismos multilaterales, instituciones públicas y organismos civiles enfocado a mujeres indígenas de Guerrero, ha sido el modelo de atención integral a mujeres indígenas con enfoque intercultural y de género fundamentado en el fortalecimiento de sus capacidades básicas en educación, salud y erradicación de la violencia de género.⁷⁶ Sus objetivos son desarrollar capacidades institucionales y sociales para la atención de la violencia de género, la mortalidad materna y el analfabetismo de mujeres indígenas. El proyecto se ha desarrollado desde 2009 en 15 municipios del Centro, Montaña y Costa Chica.⁷⁷ Pese a que una de sus áreas de trabajo coincide con la de Manos Unidas, las parteras y promotoras no conocen las acciones de este proyecto.

Otra iniciativa relevante, en este caso de la academia guerrerense, es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hannah Arendt, dependiente del Instituto de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero. El Observatorio ha visibilizado los feminicidios en la entidad y ha aportado elementos para definir acciones públicas en la materia. A partir de 2005 y hasta 2010, la Semujer firmó convenio de colaboración con el Observatorio para conocer y sistematizar la violencia que sufren las guerrerenses, y capacitar a autoridades municipales que pusieron

⁷⁶ En este programa, coordinado por la Semujer y la Secretaría de Asuntos Indígenas, colabora el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM, hoy ONU Mujeres), la Secretaría de Desarrollo Social Federal, la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), la Procuraduría de Justicia del Estado, 15 ayuntamientos y cinco organizaciones de la sociedad civil: Kinal Antzetik, la Casa de la Salud Manos Unidas, Savi Yoko, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, la Noche Zihuame Zan Ze Tajome y la Unión Regional de Mujeres de la Montaña Francisca Reyes Castellanos.

⁷⁷ Semujer-Gobierno del Estado de Guerrero, *op. cit.*, 2011.

en marcha las Unidades para la Atención de la Violencia Contra las Mujeres.⁷⁸

Como se ve, en el último lustro la legislación y generación de iniciativas en torno al problema han sido intensas. Si las disposiciones legales y los programas se conocieran y se cumplieran, sería otra la situación de las guerrerenses y de las indígenas guerrerenses en particular. No obstante, el marco legal, jurídico, programático e institucional para atender el problema abre la posibilidad de avanzar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La prevención oficial de la violencia en la Costa Chica

La Jurisdicción Sanitaria de la SSA de la Costa Chica instrumenta el Programa de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual contra la Mujer, que se propone dar orientación, consejería y prevención de la violencia a 15 por ciento de la población femenina de la jurisdicción. Además de talleres de sensibilización en diversos espacios y con el personal de salud, tiene herramientas para detectar en la consulta (mediante un cuestionario) casos de violencia física, sexual y psicológica. El personal del programa es reducido: una médica (la responsable del programa), una trabajadora social y dos psicólogos, pequeño equipo muy comprometido con su tarea y sensible ante el problema social y de género, pero insuficiente ante las necesidades y retos que ofrece éste:

La violencia es un asunto de índole sociocultural, las mujeres han aprendido a tener maltrato desde que son niñas, lo llegan a ver normal. La violencia institucional se da de manera recurrente. A la Secretaría de Salud le corresponde abanderar el programa, no atropellar derechos. Estamos sensibilizando al personal para que no re-victimice a las mujeres que viven violencia. En gran porcentaje (los prestadores/as de servicios de salud) no hemos trabajado nuestros problemas persona-

⁷⁸ *Idem.*

les. Entonces la institución se convierte en una barrera que impide que las mujeres abran sus experiencias y vivencias de violencia. Si comprendemos que la violencia es multifactorial entonces la atención debiera ser interinstitucional y con un tratamiento multidisciplinario, pero la red interinstitucional va muy lenta, no sólo requiere de programas o acuerdos de los titulares de las dependencias sino de personas concretas que garanticen una atención integral, cálida y respetuosa a las mujeres que sufren violencia. Es un proceso lento que requiere mucho esfuerzo institucional. Intervienen los psicólogos, pero el resultado no es inmediato. No sólo hay que tratar a la mujer, aunque ella sea la primera por haber sido golpeada, acuchillada o violada. Tenemos muchos problemas para rescatar la parte humana de todos los servidores públicos, hay que tomar conciencia de que por tener un título no eres superior.⁷⁹

La responsable del programa revela el papel de la red interinstitucional para atender adecuadamente la violencia, pues “[...] hay muchas intervenciones valiosas pero aisladas. No existe camino claro para que una mujer que sufre violencia reciba atención y justicia y un trato cálido y respetuoso”.⁸⁰ Esa red debiera incluir a la SSA en todos los niveles de atención; a ella le correspondería detectar casos de violencia en las consultas médicas, dar atención médica y, si hay lesión física, remitir el caso a otras dependencias cuando la mujer decide denunciar. La Semujer debiera acoger a mujeres violentadas en sus refugios, darles apoyo y consejería. Al Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar (de la Procuraduría de Justicia) le corresponde levantar la denuncia y seguir el caso para lograr convenios entre las partes —de que no volverá a golpear a la mujer— o sancionar al violador o violento. A Derechos Humanos le toca emitir recomendaciones a la SSA y a todas las dependencias que atienden algún delito sexual o caso de violencia. Y a organismos civiles como Manos Unidas le correspondería vigilar

⁷⁹ Entrevista a Javier, *op. cit.*

⁸⁰ *Idem.*

que la red institucional funcione, difundir el derecho a una vida libre de violencia, así como acompañar a mujeres indígenas que decidan denunciar y apoyarlas para que se respete su derecho.⁸¹

En la SSA damos apoyo psicológico, rescate del amor propio de las personas (autoestima) para que tomen decisiones, pero no lo hacen con facilidad. Es un proceso que requiere mucho esfuerzo institucional. Intervienen los psicólogos, pero el resultado no es inmediato, no sólo hay que tratar a la mujer, aunque ella sea la golpeada, acuchillada o violada. Por ejemplo, hay tres casos recientes de niñas violadas de entre 12 y 15 años, lo más asombroso es que dos de las tres tienen retraso mental y me pregunto ¿qué ocurre con la especie humana? Amerita un trabajo con los caballeros, que un hombre les diga: “yo soy hombre pero nací de una mujer [...]”. Cuando el discurso lo dice un hombre tiene otro peso sobre ellos.⁸²

No sólo hay un problema en las comunidades, sino dificultades institucionales para asumirlo. Habla la responsable del programa en la Jurisdicción de la SSA:

No estamos preparados para reconocer la voz del psicólogo, los médicos se resisten a aceptar sus recomendaciones. El líder en la Jurisdicción es la figura médica. Es importante que se empodere el psicólogo. No puedo dejar el cargo en manos de un psicólogo, se desvanecería el trabajo y se perdería lo logrado. Se necesita que haya recursos financieros anuales para reforzar la capacitación del personal institucional. Tampoco es fácil la colaboración entre instituciones: estamos atorados en la construcción de una red interinstitucional en la que se identifique claramente a personas que garanticen una atención integral, cálida y respetuosa a las mujeres que sufren violencia. Tenemos muchos problemas para rescatar la parte humana de todos los servidores públicos. Todos somos personas diferentes y nos cuesta mucho trabajo aceptar criterios de igualdad en medio de las diferencias. Tenemos

⁸¹ *Idem.*

⁸² *Idem.*

ubicados a los titulares y las dependencias, pero no tenemos un camino que nos permita dar pasos firmes.⁸³

Los rasgos negativos de la cultura institucional son tan difíciles de cambiar como los rasgos negativos de la cultura indígena, con el agravante de que las instituciones tienen una responsabilidad pública y un marco legislativo y programático que deben cumplir ante la sociedad.

Manos Unidas contra la violencia

La experiencia de Manos Unidas en torno a la violencia se apoya en el Modelo Autogestivo de Atención a la Violencia y la Salud Reproductiva en Zonas Indígenas.⁸⁴ Pero a la vez, el diseño de este modelo retoma la experiencia de Manos Unidas.⁸⁵ Las líneas de acción de las promotoras de la Casa de la Salud son básicamente cuatro: *a*) capacitación del equipo de promotoras (incluye la elaboración y sanación de sus propias experiencias de violencia); *b*) tareas de información, sensibilización, prevención y difusión del derecho a una vida libre de violencia en comunidades y escuelas; *c*) apoyo psicológico, acompañamiento y traducción — cuando se necesita — a mujeres violentadas que requieren atención médica o psicológica (en el hospital regional y/o la Jurisdicción), que deciden denunciar el hecho ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; *d*) coordinación y colaboración con las personas que trabajan el tema y con las instituciones públicas mencionadas.

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ CDI-Kinal Antzetik, *op. cit.*, 2007.

⁸⁵ El modelo se inscribe en un marco de políticas públicas de participación con enfoque de género y con perspectiva de multiculturalidad; está orientado al desarrollo de capacidades a nivel local; busca impulsar procesos de las propias mujeres indígenas para combatir la violencia de género y contribuir a resolver las necesidades en salud reproductiva; promueve la intervención institucional coordinada entre dependencias de los tres niveles de gobierno (CDI-Kinal Antzetik, 2007).

Desde 2006 han llevado a cabo foros y talleres en diferentes municipios y comunidades, en los que se cuestionan las relaciones y las prácticas de violencia al tiempo en que dan a conocer a mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, docentes de escuelas primarias y secundarias, los derechos de las mujeres y el derecho a vivir una vida sin violencia, creando así la posibilidad de reconocerla y desnaturalizarla, de imaginar una vida diferente, de conocer las instancias adecuadas para exigir el cumplimiento de ese derecho y de romper el silencio y el aislamiento en casos de violencia. En esta área —como en salud materna— se trabaja en las cuatro lenguas que existen en la región: mixteco, amuzgo, tlapaneco y español.

Buscamos las palabras para que la mujer logre entender lo que está pasando y si no nos entendemos bien buscamos otras palabras. Lo que importa es comprendernos, entender lo que ella dice y que ella nos entienda. Con los talleres que damos en las comunidades sobre derechos, la mujer sabe a dónde acudir y toma como primera instancia la Casa de la Salud, sabe que alguien la respalda y va a apoyarla. Si ellas lo saben van a exigir.⁸⁶

Cabe destacar que han realizado talleres especialmente dirigidos a sensibilizar a hombres y a servidores públicos, algunas de estas acciones han sido acompañadas por ONG como Kinal Antzetik y Semillas, o por la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, con la que Manos Unidas realiza un trabajo conjunto y coordinado porque comparten objetivos, pero también porque varias de sus integrantes participan en ambos proyectos. Las promotoras de la Casa también han trabajado con la CDI, con la Secretaría de Salud, especialmente con la doctora Leticia Javier María, responsable del programa de violencia de la Jurisdicción Sanitaria de la Costa Chica.

Algunas formas de sensibilización contra la violencia las han llevado a ocupar espacios públicos, como las marchas que realizan en

⁸⁶ Talleres de sistematización, *op. cit.*, 2011.

Ometepec el 25 de noviembre (Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres) y el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). El hecho de que mujeres indígenas marchen para exigir que se elimine todo tipo de violencia, y en especial la violencia contra las mujeres indígenas, es un hecho sin precedentes en la región y es a la vez muestra de que el tema empieza a ser asunto público.

Antes de Manos Unidas no existía ninguna institución en la Costa Chica que se encargara del problema. Manos Unidas abre camino a una interculturalidad que apunta a deconstruir relaciones injustas en su contexto gracias a que sus promotoras conocen los problema desde dentro, las formas de pensar, justificar o actuar con violencia, los elementos culturales para prevenirla o erradicarla; gracias a que hablan lenguas indígenas y crean espacios de comunicación, confianza y cercanía con las mujeres indígenas.

Anteriormente los médicos no querían atender a los indígenas por la marginación que todavía existe y porque antes en los hospitales no había intérpretes ni se hablaba de eso. El intérprete va más allá, no sólo intercambia información sino que es un puente entre culturas diferentes.⁸⁷

Las promotoras de Manos Unidas saben que no basta la información sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que se requiere la apropiación de ese derecho, su reelaboración o resignificación, el cuestionar las prácticas y “razones” que se aceptaban estoicamente. Darse cuenta de que la legislación y los derechos pueden ser útiles para cambiar positivamente, para defenderse de maltratos que pensaban imposibles de detener es un salto cualitativo. La lucha contra la violencia permite irse reconociendo como personas merecedoras de un buen trato, rechazar la idea de que como son indígenas y son mujeres tienen que aguantar, empezar a sentirse como sujetas con derechos, como ciudadanas y como mu-

⁸⁷ *Idem.*

jeros solidarias que se apoyan entre sí. El proceso entonces tiene varias facetas.

En la comunidad donde vivo, me dicen las mujeres, me dicen cuando pueden hablar conmigo, que los hombres van a llegar a su casa, que dicen que le meto el chisme a su esposa, las regañan, no pueden decir lo que pasa en su familia. Les digo que no tengan miedo. He recibido talleres de violencia. Puedo decir si él me está golpeando y maltratando aunque me golpee cuando llegue a mi casa, ahora estoy aprendiendo más y ya no temo, tengo derecho de hablar. Estoy apoyando a las mujeres aunque el Comisario me dice que “porque tú eres mujer no puedes decir a las mujeres”. ¡Sí puedo! Me ayuda mucho el taller, siguen abriendo los ojos para ver qué está pasando en las comunidades.⁸⁸

También crea la posibilidad de defenderse legalmente:

La Ensademi revela que a pesar de la fuerte carga de violencia estructural (caracterizada por la pobreza y la marginación) y de género que sufren las mujeres, cerca de un tercio de las que declararon alguna forma de violencia conyugal en los últimos 12 meses y cerca de 40 por ciento de las que sufrieron violencia física y/o sexual, específicamente, recurrieron a las autoridades para poner una denuncia. Esto es casi el doble del porcentaje nacional consignado por la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres. Una posible explicación de la diferencia es que las comunidades indígenas tienen una larga trayectoria histórica de ventilar los problemas interpersonales ante las autoridades locales, y las mujeres entrevistadas participan de esta práctica, a pesar de todos los obstáculos que deben enfrentar para acceder a las instituciones de impartición de justicia.⁸⁹

Al igual que las acciones para disminuir la mortalidad materna, el trabajo de Manos Unidas en torno a la violencia se realiza prácticamente sin remuneración, con enormes dificultades económicas,

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ Soledad González Montes, “Violencia contra las mujeres, derechos y ciudadanía en contextos rurales e indígenas de México”, en *Convergencia*, revista de Ciencias Sociales, núm. 50, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009.

gracias a la convicción y generosidad, gracias al sueño de las promotoras de que todas las mujeres puedan liberarse de la violencia. En regiones indígenas, el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia exige algo más que una ley.

REFLEXIONES FINALES Y DESAFÍOS

En la región también al hombre se le sensibiliza; también trabajamos con los niños, porque desde ahí los niños van aprendiendo otra cosa y a lo mejor no cambian totalmente, ni van a dejar de ser machistas, pero van aprendiendo esa responsabilidad, que también deben ellos de respetar, de ayudar, de los derechos de las mujeres.⁹⁰

- La violencia de género está presente en todos los grupos sociales, los pueblos indígenas no escapan a esta situación. No se trata de estigmatizarlos sino de reconocer que por desgracia comparten la costumbre nacional —o mundial— de maltratar a las mujeres. Pero esto no significa que la violencia de género —mayoritariamente de varones contra mujeres— pueda analizarse o resolverse aisladamente, como un asunto de relaciones entre hombres y mujeres, pues la violencia de género también es institucional, estructural y social. En contraste, el clasismo y el racismo que padecen los pueblos indígenas no puede justificar, explicar o encubrir el hecho de que en su interior hay una violencia específica y naturalizada contra las mujeres, es decir, una violencia de género que al intersectarse con otros tipos de violencia, da como resultado una violencia potenciada por todos los mecanismos de inferiorización, desigualdad y discriminación contra las mujeres.
- Para las mujeres indígenas, remontar la violencia de género requiere actuar en múltiples direcciones y planos y echar mano de diversos recursos para redefinir los términos de la relación y de trato

⁹⁰ Talleres de sistematización, 2011, *op. cit.*

con diversos actores: la sociedad nacional, el Estado y sus instituciones, sus comunidades y sus propias parejas y familias.

- El marco legal, programático e institucional en torno a la prevención y atención de la violencia de género crea la posibilidad de reconocer, desnaturalizar, prevenir, atender y actuar legalmente frente a un problema doloroso; sin embargo, es insuficiente para modificarlo, pues las formas específicas en que se vive, se naturaliza y se habla la violencia están atravesadas por la diversidad cultural y lingüística, la desigualdad social, la discriminación étnica y las inequidades de género, factores que pueden operar como barreras infranqueables para romper el silencio y para impulsar cambios positivos; o para oponerse, buscar ayuda, defenderse y actuar legalmente contra la violencia. Todos estos factores están presentes en los pueblos indígenas de la Costa Chica, lo cual muestra los límites del avance formal y los retos de la vida real para hacer efectiva la idea de que las mujeres pueden vivir sin violencia.
- Las leyes sobre violencia tipifican el maltrato (físico, psicológico, sexual, etc.), pero no toman en cuenta la diversidad que adopta, las formas en que se articula o interseca a otros mecanismos de desigualdad y de violencia, ni las dificultades para ejercer el derecho a una vida libre de violencia. Pese a ello, las promotoras de Manos Unidas se han ido apropiando del marco legal y son mediadoras culturales tanto para sensibilizar y abrir la posibilidad de la vida sin violencia expresada en las leyes — muchas veces inimaginable para las mujeres indígenas —, como para comprender las formas específicas en que se vive, los obstáculos culturales, lingüísticos, socioeconómicos y logísticos que enfrentan las mujeres indígenas para lograr respeto y buen trato a sus personas, obstáculos como la naturalización de la violencia de género, la desinformación sobre el problema y sus derechos, el aislamiento o la distancia de sus comunidades, las carencias económicas para moverse, la dependencia económica con respecto al agresor, la costumbre de acordar matrimonios sin consentimiento de las y los jóvenes, el temor a represalias del agresor o de sus familiares y la imposibilidad de

subsistir y/o protegerse en sus comunidades; la escasa confianza en los órganos de procuración de justicia, el sexismo, colusión y corrupción de servidores públicos ante casos de violencia de género, entre otros factores. Con la intención de que las cosas cambien, ellas descubren lo que la Ley pasa por alto y experimentan formas para sensibilizar, prevenir y atender la violencia, lo que algunos programas o modelos sólo enuncian como buenas intenciones.

- En una región tan diversa en el plano cultural y lingüístico, el uso de lenguas indígenas es crucial para cualquier programa social. Tal como las promotoras de Manos Unidas expresan, su tarea no es simplemente traducir sino interpretar y convertirse en un puente cultural. Su labor no sólo va hacia las mujeres indígenas sino hacia el otro lado, pues el conocimiento situado y contextualizado de la violencia de género que ellas tienen y van ampliando, representa un diagnóstico informal del que hacen uso las instituciones dedicadas a prevenir o atender el problema.
- La procuración de justicia, tanto en la comunidad como en las instituciones oficiales, desalienta y frena la denuncia y el apoyo a las mujeres que deciden quejarse y remediar legalmente el problema. Impedir que un soborno defina la sentencia o liberación de un agresor, es un reto que Manos Unidas no puede resolver; otro desafío radica en no sólo pensar en castigos y promesas de buen comportamiento que de algo sirven a veces, pero que no modifican de raíz el problema; diseñar programas que no sólo atiendan a las mujeres sino focalicen la salud emocional y los resortes psicológicos que mueven a los agresores son retos relevantes. Apuntar hacia un cambio cultural que revele y cuestione las actitudes racistas y sexistas que inferiorizan a las mujeres indígenas en todos los espacios, permitiría ir sanando las heridas desde dentro. De algún modo, aunque insuficientemente, Manos Unidas asume estos desafíos, pero es responsabilidad principal de las instituciones públicas.
- En la Costa Chica, la violencia institucional exige un trabajo muy profundo y amplio de sensibilización, reflexión y autocrítica, pues

sin él son difíciles de modificar las inercias y las prácticas sexistas y racistas presentes en las instituciones. La supuesta igualdad jurídica se topa con mecanismos muy arraigados de exclusión y maltrato hacia las mujeres indígenas. La Casa de la Salud no puede asumir este reto pero sí operar como contralora social, vigilante del comportamiento institucional, instancia que tiene la capacidad de exigir o denunciar cuando haya lugar.

- Una de las preocupaciones de las promotoras de la Casa es que aun cuando tienen noción de que la violencia de género es muy común son pocas las mujeres que se animan a buscar apoyo o a denunciar varias son las razones: la dependencia económica de las mujeres con respecto al agresor, sobre todo cuando se tienen hijos o hijas pequeñas; el temor de sufrir más violencia luego de hablar, el no contar con una red familiar o social que las apoye si salen del espacio donde ocurre la violencia, el desconocimiento y la lejanía del refugio más cercano para mujeres maltratadas (está en Acapulco), la ineficacia o corrupción de autoridades y de los órganos de procuración de justicia... es evidente que la Casa no puede resolver tantos problemas, y que el compromiso y coordinación interinstitucional son clave, pues el sector público no sólo tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de atender el problema, sino que cuenta con recursos económicos, materiales, de infraestructura y de personal infinitamente mayores que Manos Unidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2007, *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*.
Camarena, Rosa María y Susana Lerner, “Necesidades insatisfechas en salud reproductiva: mitos y realidades en el México rural”, en Susana Lerner e Ivonne Szasz (coords.), *Salud reproductiva y*

- condiciones de vida en México*, tomo I, México, El Colegio de México, 2008.
- Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas” A.C., “Casos de violencia que canalizaron las promotoras en sus diferentes comunidades de los cinco municipios Xochistlahuaca, Igualpa, San Luis Acatlan, Tlacuachistlahuaca y Ometepec”, documento inédito, 2009.
- , Registro de casos atendidos en la Casa de Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas, inédito, 2010.
- , Informes mensuales y anuales de actividades, inéditos, 2003 a 2009.
- , Informe anual de actividades, inédito, 2011.
- CDI-Kinal Antzetik DE, *Modelo autogestivo de atención a la violencia y la salud reproductiva en zonas indígenas. Casas de la Mujer. Resumen*, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Kinal Antzetik Distrito Federal A.C., 2007.
- Coespo, *Situación demográfica del estado de Guerrero*, México, Consejo Estatal de Población de Guerrero, 2008, en <coespo.guerrero.gob.mx/images/stories/pdf/panorama por ciento20de por ciento20Guerrero_municipios.pdf>, consultado el 23 de noviembre de 2011.
- Conapo, *Índice de marginación por entidad federativa y municipio*, 2010, en <www.conapo.gob.mx>, consultado el 2 de noviembre de 2011.
- Covarrubias, Adriana, “Guerrero ocupa cuarto lugar en feminicidios”, en *El Universal*, 25 de junio de 2010.
- Endireh, *Guerrero. Panorama de violencia contra las mujeres*, México, Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero/Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006.
- Ensademi, *Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas*, México, Instituto Nacional de Salud Pública/Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.

- Espinosa Damián, Gisela, “Doscientas trece voces contra la muerte. Mortalidad materna en zonas indígenas”, en Martha Castañeda, Daniela Díaz, Gisela Espinosa y Graciela Freyermuth, *La mortalidad materna en México. Cuatro visiones críticas*, México, Fundar Centro de Análisis/Kinal Antzetik/Conami/Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población/UAM-X, 2004.
- , “Maternidad indígena: los deseos, los derechos, las costumbres”, en Susana Lerner e Ivonne Szasz (coords.), *Salud reproductiva y condiciones de vida en México*, tomo II, México, El Colegio de México, 2008.
- Gobierno Federal, *Sistema de Protección Social en Salud. Informe de Resultados 2010, 2011*, en <i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Informe_resultados_SPSS_2010.pdf>, consultado el 18 de noviembre de 2011.
- González Montes, Soledad, “Violencia contra las mujeres, derechos y ciudadanía en contextos rurales e indígenas de México”, en *Convergencia*, Revista de Ciencias Sociales, núm. 50, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009.
- y Mojarro Íñiguez, Mariana, “De la victimización a la agencia: denuncia de la violencia conyugal por mujeres en ocho regiones indígenas de México”, en Ana María Tepichin Valle, *Género en contextos de pobreza*, México, Colmex, 2011.
- Guillé, Margarita y Vallejo, María del Pilar, *Modelo de referencia de casos de violencia de género en Guerrero*, México, Gobierno del Estado de Guerrero, Red Nacional de Refugios, 2008.
- Herrera Figueroa, Antonino y Chávez Aguirre, Alejandro, “Programa de trabajo 2011. Arranque Parejo en la Vida”, Gobierno del Estado de Guerrero/SSA, Jurisdicción Sanitaria 06 Costa Chica, Depto. de Servicios de Salud, Arranque Parejo en la Vida, Ometepec, 2011.
- INEGI, *Mujeres y hombres en México, 2006* (décima edición), México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006.
- , *Perspectiva estadística, Guerrero*, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2007.

- _____/UNIFEM, *Las mujeres en Guerrero. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres*, México, Cámara de Diputados/Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2008.
- Inmujeres, *Sistema de indicadores de género*, Gobierno federal, tarjetas estatales y municipales, 2011, en <www.inmujeres.gob.mx>, consultado el 20 de noviembre de 2011.
- Jurisdicción Sanitaria 06, “Diagnóstico de salud 2011”, SSA, Jurisdicción Sanitaria 06, Costa Chica, 2011.
- Kinal Antzetik, *Foro Mortalidad Materna en Comunidades Indígenas*, 2009, en <<http://kinal.org.mx/>>.
- Pacheco, Cindy, “Ojeda Rivera: Suben feminicidios a pesar de ser delito grave en Guerrero; van 85”, en *La Jornada*, 12 de julio de 2011.
- Poder Ejecutivo, *Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el Año 2011*, Poder Ejecutivo, Secretaría de Desarrollo Social, 7 de diciembre de 2010.
- Semujer, Gobierno del Estado de Guerrero, *Equidad de género: logros y desafíos, Experiencia de la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero*, México, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de la Mujer, 2011.
- SSA, *Programa Nacional de Salud 2001-2006*, México, Secretaría de Salud, 2001.
- _____, *Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003. Guerrero. Tabuladores básicos*, México, Secretaría de Salud, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 2006, disponible en <www.generoysaludreproductiva.gob.mx/IMG/pdf/ENSAR2003_Gro_TB.pdf>, consultado el 27 de noviembre de 2011.
- _____-CNEG/SR, *Recomendaciones a directores de las unidades de salud para la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005*, México, Secretaría de Salud/Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2009.

PÁGINAS WEB

<<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf>>.
 <<http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/maternal.shtml>>.
 <http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/pdfs/ambito_estatal/leyes_violencia/leyveracruz.pdf>.
 <www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=12>.

ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS

Foro, testimonios recogidos por Gisela Espinosa Damián, en el Foro Nacional por los derechos sexuales y reproductivos y la vida de las mujeres de Guerrero, 18 y 19 de septiembre, Chilpancingo, Guerrero, 2008.

Javier María, Leticia, responsable del Programa de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual contra la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria 06 (Costa Chica). Entrevista realizada por Gisela Espinosa y Ana Carmen Luna, 8 y 9 de agosto de 2011.

Sánchez Néstor, Martha, asesora permanente de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas, entrevista realizada por Ana Carmen Luna Muñoz, 17 de noviembre de 2011.

Santana Oropeza, Apolinaria, coordinadora de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas”. Entrevista realizada por Gisela Espinosa y Ana Carmen Luna, 8 de agosto, Ometepec, Guerrero, 2011a.

_____, coordinadora de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena “Manos Unidas”. Entrevista realizada por Gisela Espinosa, 30 de diciembre, Ometepec, Guerrero, 2011b.

Talleres de sistematización, *Primero y segundo taller de sistematización de la estrategia para prevenir y disminuir la mortalidad materna y la violencia en cinco municipios de la Costa Chica*, 10 y 11 de septiembre; 20 y 21 de octubre, coordinados por Gisela Espinosa con la colaboración de Ana Carmen Luna Muñoz, Ometepec, Guerrero, 2011.

El sur-sureste mexicano: crisis y retos
se terminó en noviembre de 2013
en Imprenta de Juan Pablos, S.A.,
2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19,
Col. del Carmen, Del. Coyoacán,
México 04100, D.F.
<juanpabloseditor@gmail.com>

1 600 ejemplares



Pasan los años —las décadas— y el sur-sureste de México sigue en un estado de depresión económica incomparable. Campeón de todas las pobrezas y de todas las marginalidades, respira, sin embargo, para ofrecer, con una vitalidad extraordinaria, sus mejores potencias y sus mayores saberes a la reconstrucción de una patria que *la modernidad* neoliberal achica y envilece.

En este libro se presentan textos de autores que se suman al esfuerzo de encontrar o acompañar las claves de lo que no puede concebirse sino como un titánico proceso de Reconstrucción (así, con mayúscula). De: Armando Bartra, Rosario Cobo, Gisela Espinosa, Julio Moguel, Manuel Parra, Lorena Paz Paredes, Héctor Robles Berlanga y Carlos San Juan Victoria. Con materiales que recogen experiencias y propuestas de desarrollo regional de “antes” y de “ahora”, justo para permitir el obligado esfuerzo comparativo.

En el “antes” se revisan experiencias de finales del siglo pasado y de principios del presente; en el “ahora” se presentan ensayos que quieren aportar elementos de análisis para generar propuestas de desarrollo económico y social (reconstructivas) para el futuro.

